

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



AMPARO EN REVISIÓN

NÚMERO: 970/2019

OCTUBRE/30/2019

23:12 (HORAS)

QUEJOSOS: GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y OTRAS

PROMOVENTE DEL RECURSO: PARTE QUEJOSA Y AUTORIDAD RESPONSABLE

CONTRA ACTOS DEL: CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE OTRAS AUTORIDADES.

ACTO RECLAMADO: ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN IV Y 27, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II Y PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2012, ASÍ COMO EL DIVERSO ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 04 DE AGOSTO DE 1994 Y OTROS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 27 DE ABRIL DE 2018

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON APOYO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DE AMPARO: J.A 526/2018-III Y SUS ACUMULADOS J.A 569/2018 Y J.A 571/2018-III (CUADERNO AUXILIAR 82/2019)

FECHA DE RESOLUCIÓN: 28 DE MARZO DE 2019

EL JUZGADO RESOLVIÓ: SOBRESEE

MINISTRO PONENTE: _____ PUERTA _____ EXT. _____

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: _____

EXPEDIENTE QUE CONSTA DE: CINCO CUADERNOS, UN CUADERNO AUXILIAR Y 15 LEGAJOS DE PRUEBAS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2931944

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]

**OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y DE CORRESPONDENCIA
BOLETA DE CONTROL PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES**

TIPO EXPEDIENTE (PROVISIONAL) A. R.

FECHA 30/10/19 FOLIO 037845

FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA RESPECTIVA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE ESTE EXPEDIENTE (LIC. JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES, LIC. G. ROCÍO PÉREZ MAQUEDA, LIC. CARLOS DELGADILLO VILLEGAS, LIC. MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ, LIC. MARCO ANTONIO CRUZ VILLEGAS O LIC. AZHUR TEJADA FLORES)

FIRMA DEL TITULAR DE LA OFICINA – LIC. RODRIGO ROBLES ENRIQUEZ

TURNO AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE
MÓNICA ARLETTE GONZÁLEZ CASTAÑEDA

PARA SER LLENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE: (MIRIAM ÁVILA SALCEDO, MÓNICA ARLETTE GONZÁLEZ CASTAÑEDA, ISIDRO ZUÑIGA SOLORZANO, GUADALUPE A. GARZA GUILLÉN, ERNESTO ALTAMIRANO LAGUNAS, CYNTHIA ROMÁN ARRIAGA O VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA)

NÚMERO ASIGNADO AL EXPEDIENTE 970/2019
ANTECEDENTES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE QUE SE INTEGRA

Recas. Comp. 208/2019

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

TIPO DE EXPEDIENTE (CLASIFICACIÓN DEFINITIVA)

FIRMA DEFINITIVA DEL SUPERVISOR DE LA MESA RESPECTIVA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

FIRMA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA OFICINA

INSTRUCCIONES

1. La presente boleta se utilizará y se agregará como primer foja a todo expediente que se forme en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia (OCJC).
2. En la boleta deberá indicarse la fecha de ingreso y el número de folio, así como el tipo de expediente que corresponda provisionalmente.
3. El supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes y el titular de la OCJC deberán suscribirla indicando la clasificación provisional. Posteriormente el referido supervisor turnará el material relativo al servidor público que formará el expediente respectivo y revisará los antecedentes.
4. El servidor público que forme el expediente deberá estudiar las constancias y en caso de duda sobre el tipo de expediente asignado lo hará del conocimiento del supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes, el cual de inmediato confirmará la clasificación asignada o, en caso de duda, lo consultará con el titular de la OCJC, este último deberá confirmar dicha categoría o, en su caso, consultar al titular de la Secretaría General de Acuerdos.
5. El servidor público responsable de formar el expediente respectivo asignará el número que corresponda, atendiendo a la categoría en que se ubica, revisará los ANTECEDENTES sobre asuntos relacionados con el asunto relativo al expediente que se forma, los indicará en esta boleta y la suscribirá.
6. El servidor público que forme el expediente lo entregará al supervisor de su mesa de formación de expedientes, el cual lo revisará e informará al titular de la OCJC cualquier situación que dé lugar a estimar incorrecta la clasificación de aquél, incluso la relevancia del asunto que justifique informe especial al Secretario General de Acuerdos.
7. Con base en lo anterior el titular de la OCJC suscribirá la presente boleta junto con el supervisor de la respectiva mesa de formación de expedientes y previa asignación del secretario auxiliar al que corresponda su estudio, remitirá el expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos por conducto de la mesa de informes de la OCJC.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2931953

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e00000000000000000000000017fa	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T19:59:34Z / 31/10/2019T13:59:34-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	46 b1 31 6f 39 e6 98 24 93 8b 58 aa d9 de 82 4f 58 af a0 82 35 ae f7 76 b9 19 58 b7 3d 70 32 a2 30 79 7c f8 82 17 09 5a 72 e1 ae 48 10 1b 86 ed 46 6f af bf 03 a0 a5 cc 53 c8 d0 10 0f 2b 48 1d 97 ee 86 ab fd b1 54 b6 38 b2 9d 0a be 96 fe d6 0d 4f 79 58 61 70 68 5e 28 4f 76 6e 0d bb 85 4b a8 37 42 b5 70 5a b4 35 4f 62 91 73 29 77 00 97 ea ae f1 bb 52 c7 47 8a 35 7e ff 7d 29 00 12 3f ee fc 4e 91 f3 ed c0 81 8b 8f 34 09 fa d3 1d c6 50 ab 7a 86 52 a6 54 8b 40 49 83 c2 94 81 0e b5 0a 69 d0 c3 70 4d 40 c2 28 cd ca a7 f6 15 68 ea 75 f8 56 56 b8 af 05 ef 27 db fb 1f df 05 88 ee 94 7a 41 9f 3b 81 c6 7d 91 b2 ab 5e 85 c1 45 4d 88 fc a8 de e0 25 fa b4 a8 7b e5 87 92 dd 5b 18 01 de ec 8b c5 dd 60 bf 20 c2 8a 13 cd cb a3 0a 70 af d6 6b 31 f8 7e 73 16 2c e0 bd 8d 93 29 6b			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T19:59:35Z / 31/10/2019T13:59:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000017fa			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T19:59:34Z / 31/10/2019T13:59:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2935770			
	Datos estampillados:	A323822A0C9DC48C29C8D6C19C0551AB73C5BA2D			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

23.12

[Firma manuscrita]

SE 11 09 00 00 00
OF. N° 0984-C

ASUNTO: SE REMITEN AUTOS DEL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO 526/2018-III Y SUS ACUMULADOS
569/2018 Y 571/2018, ASÍ COMO EL TOCA RA.-200/2019.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

P R E S E N T E.

RA.-200/2019.
JA.-526/2018-III
Y SUS ACUMULADOS 569/2018 Y 571/2018.
QUEJOSOS:
GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y OTRAS.

Por este conducto, y en cumplimiento a la resolución de este Tribunal Colegiado de fecha **diecisiete de octubre de dos mil diecinueve**, remito a usted los autos del toca **RA.-200/2019**, para los efectos legales a que haya lugar.

También remito los autos del juicio de amparo indirecto **526/2018-III** y sus acumulados **569/2018** y **571/2018**, en **560 (Tomo I)**, **392 (Tomo II)** y **348 (Tomo III)**, fojas; así como quince legajos de pruebas.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019.

**EL SECRETARIO DE TRIBUNAL DEL DECIMO PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

[Firma manuscrita]
LIC. LUIS CARLOS VEGA MARGALLI



DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

037845

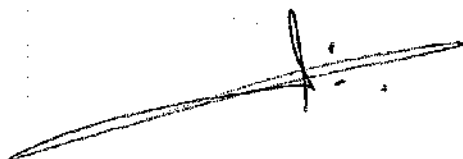
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

970/2019

2019 OCT 30 PM 11 12

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido de un enviado con:
El Juicio de Amparo 526/2018 en 560 folios
y sus acumulados 562/2018 en 342 folios y
571/2018 en 348 folios
Amparo en revision 200/2018 en 351 folios
Segun sus ultimos folios
15 legajos de pruebas en 362, 363,
363, 467, 979, 388, 738, 860, 979,
363, 389, 860, 738, 363 y 362 folios
Segun sus Certificaciones
Testimonio resolutivo en 100 folios
Segun su Certificacion
7 copias de la revision adhesiva en
48 paginas cada una





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**AMPARO EN REVISIÓN RA.-200/2019.
(RA.-3850/2019).**

QUEJOSOS: GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y
OTRAS.

RECURRENTES: LOS MISMOS.

REVISIÓN ADHESIVA: TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE
LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE
PETRÓLEOS MEXICANOS, EN PEMEX
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO.

MAGISTRADO: FERNANDO ANDRÉS ORTIZ
CRUZ

SECRETARIO: LUIS CARLOS VEGA MARGALLI.

Ciudad de México, Acuerdo del Décimo Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, correspondiente al día diecisiete de octubre de dos
mil diecinueve.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de
abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa

en la Ciudad de México, GLEIBER JOSÉ DE FARIA, por propio derecho, promovió juicio de amparo en el que señaló:

"(...)

I.- AUTORIDADES RESPONSABLES.

- A. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.*
- B. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.*
- C. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.*
- D. El Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial (en adelante "Titular del Área de Responsabilidades").*
- E. La Administración Regional de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.*

II.- ACTOS RECLAMADOS.

A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo:

- 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.*
- 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos.*



RA.-200/2019.

B. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reclamo:

1. La discusión, aprobación y expedición del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

2. La discusión, aprobación y expedición del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos.

C. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, reclamo:

1. La discusión, aprobación y expedición del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

2. La discusión, aprobación y expedición del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos.

D. Del Titular del Área de Responsabilidades, reclamo:

1. La resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Gleiber José de Faria bajo el número de expediente PTRI-S-003/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017).

Dicha resolución se controvierte por constituir el primer acto de aplicación, en mi perjuicio, de los artículos

27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

E. De la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, reclamo:

1. La ejecución de la resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Gleiber José de Faria bajo el número de expediente PTRI-S-003/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017), en específico su Resolutivo Cuarto.

Dicho acto resolución (SIC) se controvierte por constituir el primer acto de aplicación, en mi perjuicio, de los artículos 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”.

SEGUNDO.- La parte quejosa estimó violados, en su perjuicio, los derechos fundamentales tutelados en los artículos 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y relató los antecedentes del caso.

TERCERO.- Mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró la demanda de amparo con el número de expediente 526/2018-III y previno a la parte quejosa para que, cumpliera con lo siguiente:



RA.-200/2019.

"(...)

a) Tomando en consideración que del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso **Gleiber José de Faria**, la promueve por su propio derecho; sin embargo, de la resolución reclamada contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018 de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente número PTRI-S-001/2017, Y SUS ACUMULADOS, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, se obtiene que la autoridad responsable lo tuvo en su carácter de representante como Director de Administración y Finanzas de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable, siendo que lo sancionó como persona física al referirse a él como "Gleiber José de Faria", por lo que deberá precisar si promueve la demanda exclusivamente por su propio derecho o en su calidad de representante de dicha persona moral o con ambas personalidades.

b) En el caso de que promueva la demanda de amparo en su carácter de representante legal de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable, deberá exhibir documento idóneo, expedido con anterioridad a la presentación de la demanda, con el que acredite la personalidad con la que actúa, lo anterior para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda.

c) Toda vez que el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción de Contrataciones Pública (sic), publicado el once de junio de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, contiene dos fracciones, requiérase para que indique la fracción que a su interés legal conviene señalar

como acto reclamado o en su caso, la totalidad del precepto legal.

...

CUARTO.- En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite.

QUINTO.- Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo y señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"(...)

I. AUTORIDAD RESPONSABLE:

En adición a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, señalo a la siguiente autoridad:

A. El Secretario de la Función Pública.

II. ACTO RECLAMADO:

En adición de los actos de autoridad señalados en el escrito inicial de demanda, reclamo los siguientes:

A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo:



RA.-200/2019.

(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

B. Del Secretario de la Función Pública reclamo:

1. El artículo PRIMERO del **"ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante **"Acuerdo Delegatorio"**).".

Mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda formulada y se requirieron los informes justificados a las autoridades correspondientes.

SEXTO.- Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** por conducto de su apoderado legal **JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST**, demandó el amparo y

PRIMER TRIBUNAL Colegiado
en Materia Administrativa
del Primer Circuito

protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes:

"(...)

I.- AUTORIDAD RESPONSABLES.

- A. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.*
- B. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.*
- C. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.*
- D. El Secretario de la Función Pública.*
- E. El Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial (en adelante "Titular del Área de Responsabilidades").*
- F. La Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.*

II.- ACTOS RECLAMADOS.

- A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo*
 - 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada");*



RA.-200/2019.

particularmente las porciones normativas que establecen:

(transcribe).

2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como **sistema normativo** para la ejecución de actos administrativos (en adelante el **"Sistema Normativo"**).

B. Del Secretario de la Función Pública reclamo:

1. El artículo PRIMERO del **"ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante **"Acuerdo Delegatorio"**).

C. Del Titular del Área de Responsabilidades, reclamo:

1. La resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., bajo el número de expediente PTRI-S-001/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003-2017 y PTRI-S-004/2017) como **resolución definitiva dictada en un procedimiento**

administrativo seguido en forma de juicio y primer acto de aplicación en perjuicio de mi representada de la Norma Reclamada, del Sistema Normativo y del Acuerdo Delegatorio.

D. De la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, reclamo:

1. Los actos de ejecución de la resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. bajo el número de expediente PTRI-S-001/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017).".

SÉPTIMO.- La parte quejosa estimó violados, en su perjuicio, los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 13, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y relató los antecedentes del caso.

OCTAVO.- Mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró y admitió a trámite



RA.-200/2019.

la demanda de amparo con el número de expediente 569/2018-

I.

NOVENO.- Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por conducto de su apoderado legal **GUILLERMO ANTONIO SUÁREZ SOLIS**, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes:

"(...)

I.- AUTORIDAD RESPONSABLES.

- A. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.**
- B. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.**
- C. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.**
- D. El Secretario de la Función Pública.**
- E. El Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial (en adelante "Titular del Área de Responsabilidades").**



PRIMER JUZGADO DE DISTRICTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

F. La Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.

II.- ACTOS RECLAMADOS.

A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo:

*1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante **"Norma Reclamada"**); particularmente las porciones normativas que establecen:*

(transcribe).

*2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como **sistema normativo** para la ejecución de actos administrativos (en adelante el **"Sistema Normativo"**).*

B. Del Secretario de la Función Pública reclamo:

*1. El artículo PRIMERO del **"ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"**, publicado en el Diario Oficial de la*



RA.-200/2019.

Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante **"Acuerdo Delegatorio"**).

C. Del Titular del Área de Responsabilidades, reclamo:

1. La resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Constructora Norberto Odebrecht, S.A. bajo el número de expediente PTRI-S-004/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003-2017 y PTRI-S-004/2017) como **resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y primer acto de aplicación en perjuicio de mi representada de la Norma Reclamada, del Sistema Normativo y del Acuerdo Delegatorio.**

D. De la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, reclamo:

1. Los actos de ejecución de la resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-147/2018, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Constructora Norberto Odebrecht, S.A. bajo el número de expediente PTRI-S-004/2017 (ahora PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017).".

CONSEJO FEDERAL ELECTORAL
EN MATERIA ADMINISTRATIVA,
DEL PODER JUDICIAL

DÉCIMO.- La parte quejosa estimó violados, en su perjuicio, los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 13, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y relató los antecedentes del caso.

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró y admitió a trámite la demanda de amparo con el número de expediente **571/2018-III**.

DÉCIMO SEGUNDO.- Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 520/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

DÉCIMO TERCERO.- La audiencia constitucional se celebró el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, y en cumplimiento a lo ordenado en el oficio **STCCNO/77/2019**, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por la



RA.-200/2019.

Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, para el dictado de la sentencia.

Registrado el asunto con el número de cuaderno auxiliar 82/2019, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la titular del Juzgado auxiliar en cita, dictó resolución, mediante la cual, sobreseyó en el juicio, con base en las consideraciones que se estimaron pertinentes.

DÉCIMO CUARTO.- Inconforme con la anterior resolución, RODRIGO ANTONIO GONZÁLEZ ALPUCHE HERRERÍAS, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos mencionados, carácter que se le reconoció en autos de dos de mayo de dos mil dieciocho (expediente 526/2018-III) y once de mayo de la misma anualidad (expediente 569/2018-I y 571/2018-III), interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, mismo que por acuerdo de Presidencia de diez de mayo de dos mil diecinueve, se admitió y registró como RA.-200/2019.

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

DÉCIMO QUINTO.- Por oficio recibido por este Tribunal, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso revisión adhesiva, la cual fue admitida por acuerdo de Presidencia de veintidós de mayo del dos mil diecinueve.

Inconforme con el acuerdo anterior, RODRIGO ANTONIO GONZÁLEZ ALPUCHE HERRERÍAS, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos, interpuso recurso de reclamación, mismo que se registró como Reclamación 15/2019, del índice de este Tribunal, el cual por resolución de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, fue desechado.

DÉCIMO SEXTO.- Mediante oficio recibido por este Tribunal el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló opinión ministerial en el sentido de confirmar la resolución recurrida.



RA.-200/2019.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Por escrito recibido por este Tribunal, el cinco de julio de dos mil diecinueve, RODRIGO ANTONIO GONZÁLEZ ALPUCHE HERRERÍAS, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos, solicitó la suspensión del procedimiento, en virtud de que sus mandantes solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reasumiera la competencia originaria para conocer del asunto, sin embargo, mediante proveído de veintidós de agosto siguiente, el Presidente de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó no reasumir la competencia solicitada y ordenó remitir el asunto a este Órgano Colegiado para su resolución.

DÉCIMO OCTAVO.- Por auto de Presidencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Ponente, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 83 y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federación, así como en lo establecido por el Punto Cuarto, fracción I, incisos A) y B) del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que en el juicio se controvierte la constitucionalidad de leyes federales, respecto de las cuales se determinó sobreseer en el resolución recurrida y ello es materia de los agravios y porque se controvierte también un Acuerdo de observancia general.

SEGUNDO.- El recurso es oportuno, en atención a que la resolución recurrida se notificó a los quejosos recurrentes el cinco de abril dos mil diecinueve (fojas ochocientos cuarenta y ochocientos cuarenta y uno del expediente de amparo) y el escrito de expresión de agravios, se presentó el veinticinco siguiente (foja tres del toca), haciéndose notar que los días seis, siete, trece, catorce y diecisiete a veintiuno, de ese mes y año, fueron inhábiles.

De igual manera, la revisión adhesiva es oportuna, ya que el auto de admisión del recurso de revisión se notificó a la autoridad recurrente el catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja ciento siete del toca) y el oficio de expresión de agravios respectivo, se presentó el veinte siguiente, siendo inhábiles los días dieciocho y diecinueve del mismo mes y año.



RA.-200/2019.

TERCERO.- El Magistrado Ponente, por conducto del Secretario, reparte a los integrantes del Pleno de este Tribunal copias del escrito de agravios, de la revisión adhesiva, así como de la resolución recurrida y se integra copia certificada de esta última a los autos.

CUARTO.- Los agravios que se hacen valer son en parte ineficaces y en otra fundados, atento a las siguientes consideraciones.

Refiere la parte recurrente en el agravio cuarto, que es incorrecto que se haya determinado sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, bajo la consideración de que el primer acto de aplicación de ese precepto en su perjuicio se dio en la notificación relativa a la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo de sanción PTRIS-005-2017 cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del diverso juicio de amparo indirecto 1642/2017, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la

Ciudad de México y que, por tanto, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Agrega, que lo anterior es así, en virtud de que:

a).- La determinación que se adopte en el presente asunto no afectará lo resuelto en el diverso juicio de amparo indirecto 250/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

b).- Lo concluido en ese juicio de amparo 250/2018, se basa en consideraciones de un diverso juicio de amparo indirecto "1252/2017" (sic), del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que a la fecha no ha sido resuelto el forma definitiva.

c).- Se pierde de vista el hecho notorio consistente en que si bien en el juicio constitucional 1642/2017, se dictó resolución en la que se determinó sobreseer en esa instancia constitucional en contra del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la fecha, esa determinación se encuentra sub judice en recurso de revisión 116/2019, ante el



RA.-200/2019.

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

d).- No se desconocería la autoridad de la cosa juzgada, ya que la premisa en que se sustenta la sentencia del juicio de garantías 250/2018, es a partir de un acto que actualmente ha quedado sin efectos con motivo de otra ejecutoria de amparo, toda vez que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2018, derivado del juicio de garantías 1252/2017, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017 al ordenar su reposición, por lo que no puede actualizarse la figura de cosa juzgada respecto de actos de autoridad que actualmente son inexistentes.

e).- No es viable estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la fecha no se ha emitido ejecutoria alguna en la que se analice la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

f).- Si bien el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente

cuando se impugnan normas generales o actos que son materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y contra el mismo acto reclamado, existe una regla particular respecto de la impugnación de normas generales, consistente en que únicamente operará esa causa de improcedencia cuando se dicte sentencia firme en un juicio de garantías en la que se analice la constitucionalidad de la disposición de observancia general; que, por lo anterior, no se actualiza la causa de improcedencia determinada por la Juez de Distrito, dado que ni en el juicio de amparo 1642/2017, ni en el diverso 250/2018, se realizó el estudio sobre la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que en ambas instancias se determinó sobreseer en el juicio por lo que hace a dicho precepto legal reclamado.

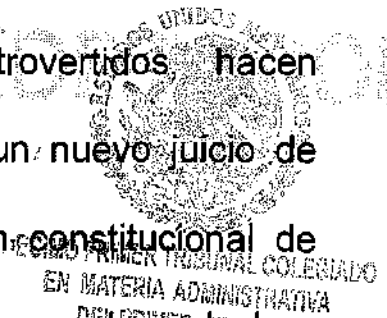
Para resolver sobre lo fundado o infundado de los anteriores argumentos, resulta conveniente tener presente que por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, en el considerando sexto de la sentencia recurrida, la Juez de Distrito del conocimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, determinó sobreseer en el juicio por lo que hace al



RA.-200/2019.

acto reclamado consistente en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Al efecto, señaló la Juez constitucional que la causal de improcedencia que se contempla en ese numeral, se basa en la observancia a la figura de la cosa juzgada que se identifica con el carácter inmutable de la decisión jurídica, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio; que las resoluciones de amparo que sobresean en el juicio, por su propia naturaleza, no analizan el fondo del asunto, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que un fallo de sobreseimiento no constituye cosa juzgada que impida la promoción de un nuevo juicio; que no obstante lo anterior, atendiendo a que la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrevocable o inmodificable de la decisión jurisdiccional, esta regla acepta excepciones, ya que existen determinaciones que, sin entrar al fondo de la violación reclamada, es decir, sin resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos controvertidos, hacen imposible combatir el acto a través de un nuevo juicio de amparo, por resultar inejercible la acción constitucional de modo absoluto, como sucede, por ejemplo, cuando se declara por sentencia ejecutoria que el acto reclamado fue consentido,



toda vez que estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo.

Indicó la Juez A quo, que en autos obra copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1642/2017, del Índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y que tuvo a la vista también, como hecho notorio, la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 250/2018, correspondiente al Juzgado Tercero de Distrito de la misma materia y residencia, de las que advirtió que ambos juicios de garantías fueron promovidos por la mencionada quejosa, en los que señaló como acto reclamado, entre otros, el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Agregó, que el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1642/2017, por lo que hace al numeral en cita, determinó sobreseer en el juicio al considerar que no se estaba reclamando el primer acto de aplicación del mismo, porque dicho precepto se materializó en un acto diverso a la resolución ahí reclamada y que, por tanto, la sola emisión de esa resolución del procedimiento administrativo PTRI-S-005-2017, no actualizaba el supuesto previsto en ese numeral.



RA.-200/2019.

Se señaló en la sentencia recurrida, que en el juicio de amparo 250/2018, por lo que hace al mencionado precepto legal reclamado, se resolvió que su aplicación se surte en el momento en que se notifica la resolución sancionadora y no con el mero dictado de la misma; que, en el caso, el primer acto de aplicación de dicho artículo pudiera considerarse la notificación de siete de febrero de dos mil dieciocho, correspondiente al oficio que contiene la resolución dictada en el procedimiento PTRI-S-006-2017, pero que, sin embargo, el primer acto en el que ese numeral fue aplicado en perjuicio de la referida quejosa, fue en la diversa notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo PTRI-S-005-2017, cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del juicio de amparo 1642/2017; y, se agregó, que constituye hecho notorio que esa resolución del juicio de amparo 250/2018, fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 381/2018.

De lo anterior, se concluyó en la sentencia que ahora se revisa, que por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de

la Ley de Amparo, en virtud de que en resolución de un juicio constitucional previo que causó ejecutoria, se determinó la inejercibilidad de la acción de amparo respecto de la citada quejosa contra el mencionado precepto reclamado, en virtud de que el primer acto de aplicación del mismo se llevó a cabo en actos anteriores, lo que, consideró la Juez de Distrito, no podía volver a ser analizado en el juicio de amparo que ahora nos ocupa.

Al respecto, la Juez de Distrito sustentó su determinación en la tesis 1a. CCLXXVIII/2012, de rubro "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA."

Ahora, como se determinó en la sentencia recurrida, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que si bien es cierto que, por regla general, la figura jurídica de la cosa juzgada se actualiza cuando se emite una sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto, como lo es la que se pronuncia respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por lo que, en



RA.-200/2019.

principio, una resolución de sobreseimiento en el juicio de amparo no puede configurar la cosa juzgada, lo cierto es también que existen supuestos de excepción, en donde, con motivo de la determinación de sobreseimiento, se concluye la inatacabilidad de un acto a través de un diverso juicio de garantías, siempre y cuando los motivos de ese sobreseimiento se basen en razones o circunstancias que hagan inejercitable una nueva acción de amparo de modo absoluto, por no poderse desconocer en un posterior juicio constitucional.

Al respecto, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, materia común, página quinientos veinticuatro, en la que la Juez A quo sustentó su determinación, es del rubro y texto siguientes:

"COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por

consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.”.

Establecido lo anterior, se tiene que los agravios que se estudian son ineficaces, en virtud de que, en primer término, parten de supuestos equivocados, ya que tal y como se advierte de las transcripciones llevadas a cabo en la sentencia recurrida, la resolución del juicio de amparo 250/2018, en la parte tomada en consideración para sobreseer en el presente juicio de garantías por lo que hace al precepto legal



RA.-200/2019.

que nos ocupa, no se basa en consideraciones del diverso juicio de amparo indirecto 1252/2017, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sino que se hace referencia al juicio de garantías 1642/2017, de este último órgano jurisdiccional en cita.

Aunado a lo anterior, las argumentaciones de la recurrente en estudio son contradictorias, ya que por una parte aduce que el juicio de amparo 1252/2017, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a la fecha no ha sido resuelto en forma definitiva y, por otra, señala que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2018, derivado del juicio de garantías 1252/2017, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017 al ordenar su reposición; lo que produce la ineficacia de sus aseveraciones.

Asimismo, como se determinó en la sentencia que ahora se revisa, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por contenerse en el Sistema Integral de Seguimiento de

Expedientes (SISE), la resolución correspondiente al amparo en revisión 381/2018, del Índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 250/2018, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la que se advierte que, como lo consideró la Juez de Distrito, fue confirmado el motivo de sobreseimiento determinado en ese juicio de amparo respecto del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, bajo el supuesto de que el primer acto de aplicación de ese numeral se dio con motivo de la notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento PTRI-S-005-2017.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de dos mil dieciocho, Tomo I, materia común, página diez, del tenor siguiente:

“HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).

Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por



RA.-200/2019.

todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones

que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.”.

En efecto, de la mencionada resolución de recurso de revisión, se advierte que se señala que en los agravios la parte quejosa recurrente argumentó, entre otras cosas, que era inexacto que el primer acto de aplicación del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hubiera materializado en la notificación de la resolución administrativa de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento sancionador PTRI-S-005-2017, que fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo 1642/2017, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; que no se podía negar que el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo sí le fue aplicado en su perjuicio con motivo de la resolución dictada en el Procedimiento Administrativo Sancionador instaurado en su contra, pues aun cuando la responsable no lo invocó expresamente en el acto reclamado, lo cierto es que fue tácitamente aplicado, ya que no obstante que tal determinación no había causado estado, el Titular del Área de Responsabilidades procedió a publicar la *“Circular en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones,*



RA.-200/2019.

Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas."; que contrariamente a lo señalado por el a quo, la aplicación del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se materializó en un acto posterior a la resolución definitiva, pues es evidente que fue esta última la que la vinculó con la sanción impuesta; que, en todo caso, el acta de notificación del acto reclamado, por sí sola, no tiene relevancia para efectos del juicio de amparo, pues no incide de manera alguna en la aplicación del multicitado precepto legal; que no es óbice que el juzgador haya sostenido que el primer acto de aplicación de dicho numeral lo constituyera la notificación personal de la resolución definitiva dictada en un diverso procedimiento administrativo sancionador, el cual se controvertió mediante el diverso juicio de amparo 1642/2017, seguido ante la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues lo cierto es que en la ejecutoria relativa a dicho asunto, se dejó insubsistente tal resolución, incluyendo su notificación, lo que es un hecho notorio; y que, suponiendo sin conceder, que efectivamente la notificación de la diversa resolución definitiva dictada en el Procedimiento Administrativo Sancionador PTRI-S-005/2017, constituyera el primer acto de aplicación del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

debe considerarse que tal diligencia dejó de tener efectos en el mundo jurídico.

Con relación a tales argumentos, se observa también de la mencionada resolución de recurso de revisión, que el Tribunal Colegiado del conocimiento los consideró inoperantes porque no desestiman, en modo alguno, lo aseverado por el Juez de Distrito en torno a que la emisión de la resolución definitiva de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas PTRI-S-006/2017 (*acto reclamado en ese juicio*), no actualiza la hipótesis contenida en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En otras palabras, que la circunstancia de que la diligencia practicada en el diverso procedimiento administrativo (PTRI-S-005-2017), haya quedado insubsistente con motivo del amparo otorgado, no significaba que, por ese solo hecho, se debiera considerar que la resolución reclamada en ese juicio de amparo, es la que actualiza *–por primera ocasión–* el supuesto normativo que prevé el aludido artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues para ello era necesario que la impetrante demostrara *–por ejemplo–* porqué si el aludido precepto se refiere a la práctica de la notificación de los actos administrativos, no debe considerarse dicha



RA.-200/2019.

diligencia para la actualización del supuesto normativo que prevé, contrariamente a lo señalado por el a quo.

Resolvió también el referido Tribunal Colegiado, que aun y cuando la quejosa sostuviera que la hipótesis de mérito no se materializó en un acto posterior y diverso a la resolución definitiva reclamada, y que ésta última fue la que la vinculó con la sanción impuesta, lo cierto es que tal aseveración tampoco alude al contenido de la hipótesis normativa que se analiza y a la necesidad de que se notifique el acto administrativo para que pueda ser eficaz; y que, por ello, lo resuelto al respecto por el Juez de Distrito debía permanecer incólume y rigiendo el sentido de su determinación.

Derivado de lo expuesto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió confirmar la resolución ahí recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

Establecido lo anterior, se tiene que ~~el~~ constituye

determinación firme, al haber sido dejada incólume por el mencionado Tribunal Colegiado, la consideración del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

México, relativa a que el primer acto de aplicación en perjuicio de la referida quejosa del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo constituye la notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo PTRI-S-005-2017, cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del juicio de amparo 1642/2017.

Ahora bien, a pesar de tratarse de una determinación de sobreseimiento, la misma es de naturaleza de aquellas que sí revisten el carácter de cosa juzgada, toda vez que al establecerse que el primer acto de aplicación en perjuicio de la ahora quejosa recurrente del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se dio en la notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, ello hace inejercitable la acción de amparo indirecto contra dicho numeral con motivo de un acto posterior de aplicación, como en el caso lo es la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho dictada en los expedientes PTRI-S-001/2017, y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, así como su respectiva notificación, pues en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se reclama en el juicio de garantías una disposición de observancia general de manera heteroaplicativa, ello debe



RA.-200/2019.

hacerse con motivo del primer acto de aplicación, por lo que, contrario a lo argumentado por la recurrente, de resolverse en sentido contrario sí se afectaría lo establecido en ese anterior juicio de amparo 250/2018.

La ineficacia de los agravios que se estudian, se determina también tomando en cuenta que la quejosa recurrente se limita a referir que conforme a lo que establece el artículo 61, fracción X y XI, para que se surtan los supuestos de improcedencia que contemplan respecto de normas generales, es necesario que exista una resolución que resuelva sobre la constitucionalidad de la disposición de observancia general controvertida y, que en el caso, en ninguno de los diversos juicios de garantías a que hizo referencia la Juez de Distrito en la resolución recurrida, se ha analizado la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Sin embargo, con lo anterior, la parte recurrente en nada controvierte lo determinado en la resolución que se revisa, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, si bien, por regla general una determinación de sobreseimiento no reviste el carácter de cosa juzgada por no existir un pronunciamiento de fondo, existen

supuestos de excepción, como son aquellos en que la determinación de sobreseimiento implica la inejercibilidad de una nueva acción de amparo por no poder variar la causa que llevó al sobreseimiento, y que, en el caso, la quejosa que nos ocupa, se ubica en uno de esos supuestos, lo que produce también la ineficacia de los argumentos en estudio.

Aunado a lo anterior, como se ha visto, en el diverso recurso de revisión a que se hace referencia, se desestimaron agravios similares a los que ahora se hacen valer en el sentido de que la premisa en que se sustenta la resolución del juicio de garantías 250/2018, parte de un acto que actualmente ha quedado sin efectos con motivo de otra ejecutoria de amparo, debido a que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2018, derivado del juicio de garantías 1252/2017, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017, al ordenar su reposición, y que, por tanto, no puede actualizarse la figura de cosa juzgada respecto de actos de autoridad que actualmente son inexistentes.

En las relatadas condiciones, tales planteamientos no pueden ser objeto de nuevo estudio y pronunciamiento por

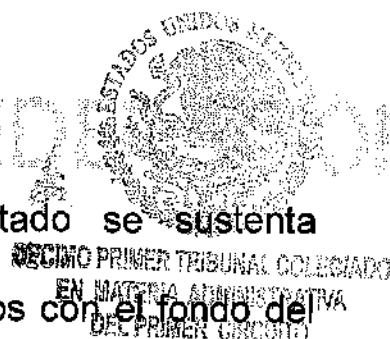


RA.-200/2019.

parte de este Tribunal Colegiado en el presente recurso de revisión, al revestir, como se ha dicho, el carácter de cosa juzgada.

En otro orden de ideas, argumenta la parte quejosa recurrente en los agravios **primero a tercero**, que es incorrecto que en la resolución recurrida se haya determinado el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y numeral Primero del Acuerdo delegatorio controvertido, por estimar que el primer acto de aplicación de dichos numerales se dio en los acuerdos de inicio de los procedimientos que se les instauraron y, que por tanto, el juicio de amparo con relación a tales preceptos se debió de promover cuando se tuvo conocimiento de dichos acuerdos, y al no haberse hecho así, se actualizó el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que:

1.- El sobreseimiento decretado se sustenta indebidamente en argumentos relacionados con el fondo del asunto al hacer referencia al contenido de los conceptos de violación que se hicieron valer en contra de esos numerales.



2.- La simple cita de las disposiciones impugnadas en los acuerdos de inicio de procedimiento no conlleva el primer acto de aplicación en su perjuicio, ya que para estimar que una norma causa afectación al gobernado, es necesario que los supuestos jurídicos contenidos en la misma se concreten con todos sus efectos, es decir, hipótesis y consecuencias, por lo que deben producir una afectación actual y real, y no meramente probable, lo que en la especie no acontece porque el acuerdo de inicio de procedimiento no produce afectación alguna en su esfera jurídica, toda vez que únicamente establece la presunción de la comisión de infracciones.

3.- Se inobserva jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha establecido que para que proceda el juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de una disposición de observancia general emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es necesario que dicho acto tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que transgreda un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, sus efectos no se destruyan por el dictado de una



RA.-200/2019.

resolución favorable, lo que en la especie no sucede porque el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador regulado por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

- Únicamente informa al gobernado los elementos constitutivos del ilícito que se presume se podría actualizar y concede un plazo de quince días para argumentar y aportar las probanzas que estime necesarias.
- En caso de contener vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad, existe la posibilidad de que la resolución del respectivo procedimiento no cause afectación al presunto infractor, por lo que sus efectos son meramente intraprocesales.

4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actos de inicio de procedimiento, como lo es el relativo a infracciones al artículo 50 Bis, de la Ley de Mercado de Valores, constituyen únicamente actos de molestia que no tienen efectos definitivos.

GEORGINA FLORES TORRES
EN NOMBRAMIENTO
DEL PRIMER CIRCUITO

5.- En el acuerdo de inicio no se aplican las consecuencias jurídicas de las normas reclamadas, ya que en

él no queda acreditado que las quejas simularon el cumplimiento de los requisitos o reglas previstas en la cláusula 13 del contrato de obra pública y, por ende, que debían ser sancionadas con multa e inhabilitación para participar en licitaciones de carácter federal, en virtud de que las acusaciones que contiene son meras presunciones, sin que en esos proveídos se decida sobre su responsabilidad.

6.- El primer acto de aplicación de las referidas normas reclamadas se da en la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador, ya que es en ese acto en el que se materializan todas las consecuencias y efectos de las hipótesis normativas contenidas en los preceptos reclamados, en virtud de que ahí se tuvo por acreditada plenamente la conducta irregular que se les imputó, y se individualizó la sanción impuesta.

7.- No obsta para considerar lo anterior, el que la aplicación de las disposiciones reclamadas pueda controvertirse también a través del juicio de amparo directo, combatiendo las normas aplicadas durante los procedimientos administrativos sancionadores, toda vez que el juicio de amparo indirecto y el tramitado en vía uninstancial, tienen



RA.-200/2019.

requisitos de procedibilidad y efectos protectores distintos, siendo que en la especie se optó por la vía indirecta.

8.- El juicio de amparo indirecto tiene como excepción al principio de definitividad, que la parte quejosa controvierta la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general y, por el contrario, en el juicio de amparo directo el quejoso debe resentir los efectos perjudiciales de la norma hasta en tanto concluya el procedimiento y se interpongan todos los recursos o medios legales de defensa para revocar la determinación correspondiente, toda vez que la norma tildada de inconstitucional no constituye acto reclamado destacado, por lo que es ilegal que el Juez A quo resuelva que, en todo caso, se debió promover juicio de amparo directo contra la resolución administrativa sancionadora, ya que optaron por sujetarse al procedimiento del juicio de amparo indirecto.

9.- Por todo lo anterior, no es dable el considerar que hubieran consentido las referidas normas reclamadas.

Para estar en condiciones de resolver respecto de lo fundado o infundado de los anteriores argumentos de la parte quejosa recurrente, es oportuno tener presente el

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA

contenido de los mencionados artículos reclamados, y de las consideraciones de la sentencia recurrida que llevaron a la Juez de Distrito a sobreseer en el juicio con relación a los mismos.

Así, se tiene que los preceptos reclamados en cita, establecen:

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

***“Artículo 8.** Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:*

...

IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos;

...”

***“Artículo 27.** Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:*

...

II. Cuando se trate de personas morales:



a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.

El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario

Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema.

Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicará tratándose de transacciones comerciales internacionales.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aun cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.”

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil quince:

“ARTÍCULO PRIMERO.- *Se delega en el Titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en los titulares de área de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dicha Unidad, en los delegados de esa Unidad en cada una de las empresas productivas subsidiarias y en los titulares de las áreas de quejas,*



denuncias e investigaciones y de responsabilidades de las delegaciones de la citada Unidad; así como en los Titulares de las Unidades de Responsabilidades y titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dichas Unidades de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias, las facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la Secretaría de la Función Pública para recibir las denuncias y tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan los sujetos de la citada Ley; iniciar de oficio o por denuncia y llevar hasta su conclusión la etapa de investigación prevista en el propio ordenamiento, así como para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en el referido ordenamiento e imponer las sanciones administrativas que procedan, incluyendo las facultades de imponer medidas de apremio, salvo la reservada a esta Secretaría en términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafos segundo y tercero, de la citada Ley.

Asimismo, también se delega en los citados servidores públicos la facultad para tramitar y resolver el recurso establecido en dicha Ley.

Los servidores públicos referidos, para el ejercicio de las facultades que se les delegan, se auxiliarán del personal que se encuentre a su cargo.”

Ahora bien, con relación a dichos preceptos reclamados, la Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de garantías, por estimar que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que dichas disposiciones no

fueron impugnadas con motivo de su primer acto de aplicación, sino de uno ulterior y que, por tanto, deben estimarse consentidas.

Se precisó en dicho fallo, que el acto de aplicación de esas normas se dio en el acuerdo de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001-2017, PTRI-S-003-2017 y PTRI-S-004-2017, en virtud de que en esos proveídos el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex transformación Industrial, se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción, con fundamento, entre otros, en los artículos 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y el Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican; y porque en dichos acuerdos se ordenó hacer del conocimiento de los quejosos las conductas irregulares que se les imputaron y que se estimó actualizan la hipótesis de la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal en cita, además de que se les informó que, en caso de no desvirtuar tales imputaciones, se harían acreedores a las sanciones previstas



en el artículo 27, fracción II, incisos a) y b), del mismo ordenamiento.

Se hizo también mención en esta parte de la resolución recurrida, a los aspectos que la parte quejosa controvertía en los conceptos de violación respecto de las mencionadas normas reclamadas, y de ello concluyó la Juez A quo que de lo que en esencia se quejan las impetrantes del amparo es de la inseguridad jurídica que, a su consideración, les generan los preceptos reclamados al facultar al Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial, para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo de sanción, y por sujetarles a un procedimiento por una conducta típica que contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos, cuya consecuencia será indefectiblemente la aplicación de las sanciones de inhabilitación y multa sin ninguna otra posibilidad.

De lo anterior, la Juez de Distrito concluyó que si en dichos acuerdos de inicio la autoridad responsable se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción; formulo las imputaciones de conductas que se estimó actualizan la

infracción prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal en comento, y se les informó que, en caso de no desvirtuar las imputaciones, se harían acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, es claro que esas actuaciones constituyen el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, y no así la resolución definitiva del procedimiento controvertida, la que, en todo caso consideró, constituye un acto ulterior de aplicación, ya que en los autos de inicio conoció cuál era la conducta que se le atribuía; el precepto normativo que la regula y, por ende, la sanción que indefectiblemente se le habría de aplicar; así como la facultad con la que contaba la autoridad para seguir en su contra el procedimiento respectivo hasta el dictado de la resolución definitiva.

Conforme lo anterior, la Juez de Distrito al tomar en cuenta la fecha en la que los quejosos tuvieron conocimiento de los aludidos acuerdos de inicio de procedimiento y aquella en la que presentaron la demanda de amparo, concluyó que el juicio constitucional se promovió de manera extemporánea y que, por tanto, fueron consentidas tácitamente las normas impugnadas.



Agregó la Juez constitucional, que no le pasaba inadvertido el hecho de que los acuerdos de inicio de procedimiento son un acto de naturaleza intraprocesal, sin embargo, señaló, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando una resolución dictada dentro de un procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio de la parte quejosa y se reclama en el juicio de amparo, surge una excepción al principio de definitividad, y que si bien dicho Máximo Tribunal ha sustentado que es procedente el juicio de amparo promovido contra una ley con motivo de su acto de aplicación dentro de un procedimiento, siempre que cause un perjuicio de imposible reparación, lo cierto es que cuando el acto de aplicación no es de los considerados como de imposible reparación, deberá operar la regla contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, es decir, que para que opere el juicio de amparo directo contra la resolución definitiva del procedimiento, es necesario preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad, sin que ello hubiera ocurrido en la especie.

ASISTENTE PRINCIPAL DEL JUEZ
4ª MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Una vez establecido lo anterior, se tiene que son esencialmente fundados los agravios que se estudian, en

virtud de que nuestro Máximo Tribunal ha emitido criterio reiterado en el sentido de que el primer acto de aplicación que permite promover el juicio de amparo en contra de una disposición de observancia general, es aquel en el que se individualizan los supuestos de la norma reclamada, trascendiendo en sentido negativo a la esfera jurídica de la parte quejosa por producir una afectación o menoscabo a su esfera jurídica.

Con relación a lo anterior es aplicable la tesis 2a. CLXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, materia constitucional, página cuatrocientos cuarenta y siete, del tenor siguiente:

"LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir,



RA.-200/2019.

a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas."

De igual manera, tiene aplicación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 12/98, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, materia común, página trescientos veintitrés, que establece:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.

Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia."

Una vez establecido lo anterior, se tiene que, como puede apreciarse de las transcripciones llevadas a cabo



en párrafos previos, el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se ubica en el capítulo segundo de ese ordenamiento legal, denominado "De las Infracciones", en esencia contempla uno de los varios supuestos de responsabilidad que establece con relación a contrataciones públicas de carácter federal, y que consiste en que el sujeto, directa o indirectamente, realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de estos.

Asimismo, el numeral 27, fracción II, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la referida Ley, lo que medularmente establece es las sanciones a aplicar a las personas morales por las infracciones que prevén los artículos 8 y 9 de dicho ordenamiento, las cuales consisten en multa e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal; indica que el plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas federales, cuyos actos deben difundirse en "CompraNet", en cuyo caso dicho plazo se

contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema; que cuando se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva; y que en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aun cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.

Precisado lo anterior, se tiene que, como lo argumenta la parte quejosa recurrente y contrario a lo determinado en la resolución recurrida, no es dable el considerar que el auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador del que derivó la resolución administrativa reclamada, constituya el primer acto en el que los referidos preceptos legales se hubieran aplicado en perjuicio de los impetrantes del amparo.

Lo anterior se considera así, toda vez que como puede advertirse de la transcripción que en la resolución recurrida se hace de los referidos acuerdos de inicio de procedimiento que se dirigieron a cada uno de los impetrantes del amparo, en ellos sustancialmente se les hace de su conocimiento que son considerados como probables



responsables de la comisión de la infracción prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por haber realizado actos con el objeto de simular el cumplimiento de la cláusula trece, apartado A, del contrato al que ahí se hace referencia; que se cuentan con elementos para presumir que se cometió esa infracción; se les concede plazo de quince días para que expongan por escrito o comparecencia ante esa autoridad lo que a su derecho convenga; y se les indica que en caso de no desvirtuar la infracción que se les reprocha, podrían hacerse acreedores a la sanción establecida en el artículo 27, fracción II, inciso a) y b), de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En las relatadas condiciones, es de concluirse que dichos acuerdos de inicio de procedimiento administrativo no individualizan los supuestos de los artículos 8, fracción IV y 27, fracción II, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en esas actuaciones no se determina aún que efectivamente se les considere que hubieran incurrido en la irregularidad o responsabilidad establecida en el primer numeral en cita, ni mucho menos se

les aplican, junto con sus reglas de ejecución, las sanciones que establece el segundo precepto en comento.

A lo anterior, es de agregar que, inclusive, no obstante que en el acuerdo de inicio de procedimiento se atribuya a un gobernado la probable comisión de responsabilidad a que aluden los mencionados preceptos legales, existe la posibilidad de que en el procedimiento administrativo correspondiente desvirtúe dicha imputación y, por ende, tales preceptos no se individualicen en su perjuicio, por lo que, contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito del conocimiento, los acuerdos de inicio de procedimiento a que hace referencia no constituyen el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa de los artículos 8, fracción IV y 27, fracción II, y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Ahora bien, por lo que hace al artículo Primero del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, como lo determinó la Juez A quo, los acuerdos de inicio de procedimiento administrativo sancionador dirigidos a la parte quejosa efectivamente constituyen acto de aplicación en su perjuicio de dicha norma.



RA.-200/2019.

Esto se considera así, ya que el supuesto que en esa disposición se contiene, relativo a la delegación de atribuciones del Secretario de la Función Pública en el Titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en los titulares de área de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dicha Unidad, en los delegados de esa Unidad en cada una de las empresas productivas subsidiarias y en los titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de las delegaciones de la citada Unidad, para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, se individualiza en su perjuicio en esos proveídos iniciales, pues es precisamente el Titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, quien emite los referidos acuerdos de inicio de procedimiento y otorga plazo a la parte quejosa para argumentar lo que a su interés convenga.

Sin embargo, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, no es dable estimar que los quejosos se encontraran en posibilidad de controvertir en el juicio de

amparo indirecto dichos acuerdos de inicio, al tratarse de un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no tiene una ejecución de imposible reparación.

En efecto, conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiera quedado sin defensa la parte quejosa, trascendiendo al sentido de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Ahora, si bien nuestro Máximo Tribunal ha establecido en jurisprudencia que cuando un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio constituye el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que se estima inconstitucional, puede



RA.-200/2019.

promoverse de inmediato en su contra el juicio de amparo indirecto sin necesidad de esperar a que se dicte la resolución del procedimiento del que deriva, también lo es que ello será posible únicamente cuando se trata de actos en el procedimiento que tengan una ejecución de imposible reparación que, como se ha visto, se configura cuando afectan materialmente derechos sustantivos y no meramente procesales, pues de lo contrario se obstruiría la libre continuación de los procedimientos con el sólo hecho de impugnar en el juicio de amparo actos intraprocedimentales argumentando que se sustentan en una disposición considerada inconstitucional, lo que evidentemente atentaría contra el derecho fundamental de administración de justicia pronta tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal.

Con relación a lo anterior es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 215/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, materia administrativa, página doscientos sesenta y siete, del rubro y texto siguientes:

DECISO PRIMER TRIBUNAL Colegiado
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL

**"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE
SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL**

**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA
INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.**

De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo."

No impide llegar a la anterior conclusión, el hecho de que el Juez de Distrito haya sustentado su determinación en la jurisprudencia 1a./J. 35/2000, de la Primera Sala de



RA.-200/2019.

nuestro Máximo Tribunal, que no hace referencia en forma expresa a la condición consistente en ser necesario estar en presencia de un acto intrapocesal de imposible reparación para poder estimar procedente el juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra por constituir el primer acto de aplicación de una norma estimada inconstitucional.

Al efecto, la citada jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, materias constitucional y común, página ciento treinta y tres, a la letra establece:

"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los

recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados.”

En efecto, si bien la jurisprudencia en cita no alude a la condicionante de referencia, lo cierto es que en dos de las ejecutorias que le dieron origen sí se señala expresamente que, para que se surta la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y, por tanto, pueda ser procedente el juicio de garantías en contra de un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo en forma de juicio, es necesario, además de que efectivamente constituya el primer acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, que se trata de un acto que produzca afectación irreparable.



RA.-200/2019.

Lo anterior se reconoce en la resolución de ocho de mayo de dos mil catorce, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 188/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en la jurisprudencia antes transcrita, al estimarse que no es discrepante con la diversa 2a./J. 215/2009, citada también en su integridad en párrafos previos.

En dicha resolución de contradicción de tesis se estableció que la Primera Sala de ese Alto Tribunal, en los amparos directos en revisión 3403/1997 y 378/1998 (antecedentes de la jurisprudencia 1a./J. 35/2000), expresamente consideró que para que se actualice el supuesto de excepción al principio de definitividad y pueda reclamarse un acto emitido en un procedimiento seguido en forma de juicio, sin esperar a que se dicte la resolución final, tal acto debe constituir el primero de aplicación de la ley en perjuicio del promovente y, también, debe reclamarse la norma y el perjuicio causado al quejoso, el cual debe caracterizarse por ser de imposible reparación.

En las relatadas condiciones, **es contrario a** derecho el que el Juez de Distrito hubiera concluido en la resolución que por esta vía se revisa, que la parte quejosa

RECIBO PRIMER SUPLENTE DEL JUEZADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

estuvo en oportunidad de controvertir la constitucionalidad del artículo Primero del Acuerdo delegatorio de facultades reclamado, con motivo de su aplicación en los acuerdos de inicio de procedimiento administrativo sancionador a que se ha hecho referencia, y que, al no haberlo hecho así, consintió dicho numeral, toda vez que tales acuerdos de inicio no ocasionan en su perjuicio un daño de imposible reparación a los impetrantes del amparo, ya que mediante los mismos, en esencia, se les hace de su conocimiento que son considerados como probables responsables de la comisión de la infracción prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por haber realizado actos con el objeto de simular el cumplimiento de la cláusula trece, apartado A, del contrato al que ahí se hace referencia; que se cuentan con elementos para presumir que se cometió esa infracción; se les concede plazo de quince días para que expongan por escrito o comparecencia ante esa autoridad, lo que a su derecho convenga; y se les indica, que en caso de no desvirtuar la infracción que se les reprocha, podrían hacerse acreedores a la sanción establecida en el artículo 27, fracción II, incisos a) y b), de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.



RA.-200/2019.

Vinculado con lo anterior, también son esencialmente fundados los argumentos de la parte quejosa recurrente sintetizados en los numerales 7 y 8 de párrafos anteriores, en donde sustancialmente se refiere que no obsta para estimar procedente el presente juicio de amparo, el que la aplicación de las disposiciones reclamadas pueda controvertirse también a través del juicio de amparo directo, combatiendo las normas aplicadas durante los procedimientos administrativos sancionadores, porque el juicio de amparo indirecto y el tramitado en vía uninstancial, tienen requisitos de procedibilidad y efectos protectores distintos, y que el juicio de amparo indirecto tiene como excepción al principio de definitividad, que la parte quejosa controvierta la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general y, por el contrario, en el juicio de amparo directo el quejoso debe resentir los efectos perjudiciales de la norma hasta en tanto concluya el procedimiento y se interpongan todos los recursos o medios legales de defensa para revocar la determinación correspondiente, en virtud de que la norma tildada de inconstitucional no constituye acto reclamado destacado, por lo que es ilegal que el Juez A quo resuelva que, en todo caso, se debió promover juicio de amparo directo contra la resolución administrativa sancionadora, ya que

optaron por sujetarse al procedimiento del juicio de amparo indirecto.

Lo anterior se colige de esta manera ya que, efectivamente, es contrario a derecho el que el Juez de Distrito del conocimiento haya determinado en la sentencia recurrida que, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, cuando el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, debe operar la regla contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que establece que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva y que, por tanto, para que se actualice la procedencia de dicha instancia constitucional, es indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad, sin que ello hubiera acontecido en la especie.

Esto es así, ya que el artículo 170, de la Ley de Amparo, regula el juicio de amparo directo, y no así el juicio de



RA.-200/2019.

amparo indirecto, siendo que en la especie la parte quejosa promovió el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución recaída al procedimiento administrativo sancionador seguido en forma de juicio en su contra, el que, además, como se ha visto, se hizo valer plateando la inconstitucionalidad de preceptos legales aplicados en dicha resolución, lo que produce como consecuencia que se actualice una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías.

No obsta para concluir lo anterior, el que la Juez de Distrito haya sustentado la resolución recurrida, en este aspecto, en la jurisprudencia P./J. 78/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, materia común, página cinco, que dispone:

"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido

sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.”.

Lo anterior se determina así, toda vez que el citado criterio jurisprudencial hace referencia a actos dictados dentro de un procedimiento seguido ante órganos jurisdiccionales, como son los de naturaleza civil, y no así a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, por lo que dicha tesis no cobra aplicabilidad en la especie, máxime que, como se ha destacado, el juicio de amparo se promueve también contra preceptos legales aplicados en la resolución reclamada



RA.-200/2019.

por estimarlos inconstitucionales, lo que de suyo hace procedente la instancia constitucional sin necesidad de agotar en contra de esa resolución los medios ordinarios de defensa.

En otro orden de ideas, refiere la parte recurrente en el agravio **quinto**, que es contrario a derecho el que en la resolución recurrida se haya determinado sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a los quejosos Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Gleiber José de Faría, por considerar que se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo la conclusión de que no existió aplicación expresa o tácita de ese numeral en su perjuicio, en virtud de que ese numeral únicamente prevé la ejecutividad de los actos administrativos, sin que dicho precepto configure un sistema normativo junto con el diverso 27 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Agrega la parte quejosa recurrente, que lo anterior es incorrecto, toda vez que:

I.- No se hace una debida lectura de la causa de pedir.

II.- El pronunciamiento de la Juez de Distrito relativo a que el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no establece la imposibilidad o ineficacia de acceder a los medios legales de defensa, implica un pronunciamiento de fondo, lo que no es apto para determinar la actualización manifiesta e indudable de una causal de improcedencia.

III.- De la resolución administrativa reclamada se advierte una clara aplicación del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su perjuicio, ya que si bien dicho numeral no establece la imposibilidad de acceder a medios legales de defensa, sí transgrede el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en virtud de que permite que las sanciones que se imponen conforme al artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sean ejecutadas no obstante que no hayan transcurrido los plazos para interponer el medio de defensa legal que corresponda.



RA.-200/2019.

Lo anterior implica que, en caso de revocarse la resolución de la autoridad, las cosas no podrán ser restituidas al estado que guardaban, ya que el gobernado debe resentir los efectos negativos del acto, aun y cuando no se ha tenido la oportunidad de obtener una medida provisional en el procedimiento correspondiente y, por ende, dicho precepto reclamado sí produce una lesión en los derechos de los particulares, sobre todo si se toma en cuenta que conforme al último párrafo del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la sanción consistente en inhabilitación no puede ser materia de suspensión.

IV.- Atendiendo a la causa de pedir, puede apreciarse que la inconstitucionalidad que se argumenta en la demanda de amparo, se hace derivar de la inmediatez de las sanciones contempladas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Sin embargo, esta norma apreciada en forma aislada no prevé el momento a partir del cual entrarán en vigor las sanciones que contempla, por lo que es evidente que en su aplicación debe participar algún otro precepto.

DECIMO PRIMER TRIBUNAL
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL

Así, debe entenderse que este precepto legal en cita es de naturaleza sustantiva al establecer las sanciones de

multa e inhabilitación, pero para su aplicación debe atenderse a las normas adjetivas o procesales previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el artículo 9 de este último ordenamiento legal en cita es el que establece el inicio de la vigencia de los actos administrativos, al indicar que el acto administrativo será efectivo y exigible a partir de que surta efectos su notificación, por lo que sostener que este último precepto legal en comento no les fue aplicado, es pretender dotar de un sistema adjetivo de ejecución a una norma sustantiva.

V.- De lo anterior se advierte que los artículos 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sí constituyen un sistema normativo, toda vez que forman una verdadera unidad, por lo que su constitucionalidad debió haber sido analizada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que en el juicio de amparo pueden reclamarse disposiciones que guardan íntima relación entre sí (sistema normativo), no obstante que la parte quejosa sólo acredite la aplicación de uno solo de los dispositivos legales.



RA.-200/2019.

VI.- La inmediata ejecución de la resolución administrativa reclamada se corrobora con el hecho de que en su resolutivo quinto se ordena el cumplimiento inmediato de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "COMPRANET", lo que guarda identidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley procedimental en comento, por lo que si bien este precepto legal no fue invocado en dicha resolución, sí fue aplicado tácitamente.

Para resolver sobre lo fundado o infundado de las anteriores argumentaciones de la parte recurrente, resulta conveniente el tener presentes las consideraciones por las que la Juez constitucional determinó sobreseer en el juicio por lo que hace a los mencionados quejosos con relación al acto reclamado consistente en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el contenido de dicho numeral.

Así, se tiene que la Juez A quo determinó sobreseer en el juicio respecto de los mencionados quejosos con relación al aludido precepto, bajo las consideraciones que

medularmente consisten en que dicho numeral no fue aplicado de manera expresa o tácita por la autoridad responsable en la resolución reclamada; que el mismo simplemente contiene el elemento esencial de todo acto administrativo, consistente en su ejecutividad, que se basa en la presunción de validez de la que goza, lo que no genera perjuicio alguno.

Se resolvió también que, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no constituye con el diverso 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, un sistema normativo que pueda ser impugnado en su conjunto, ya que si bien ambos preceptos refieren a un tema similar (momento en el que son ejecutables las resoluciones administrativas), derivan de principios, causas y fuentes distintas, pues mientras en el primer numeral en cita subyace el principio de presunción de validez de los actos administrativos, en el artículo 27 de la diversa Ley Federal, rigen los principios consagrados en el artículo 134 constitucional, es decir, los relativos a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez aplicables a las contrataciones públicas; que, por lo anterior, no configuran un sistema que se pueda impugnar en forma conjunta, ya que la posible declaración de inconstitucionalidad de uno no afecta el



RA.-200/2019.

alcance y sentido del otro; y que, por tanto, toda vez que el citado precepto reclamado, por sí solo, no causa perjuicio alguno a los solicitantes del amparo, se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece:

“ART. 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe.”.

Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado considera esencialmente fundadas las argumentaciones de la parte quejosa recurrente que se sintetizaron en los puntos I, II y IV a VI, de párrafos anteriores.

Lo anterior se determina así, toda vez que, por una parte, es contrario a derecho el que la Juez A quo sustente la determinación de sobreseimiento que nos ocupa en la consideración relativa a que el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no establece la imposibilidad o ineficacia de acceder a los medios legales de defensa, sino que simplemente contiene el elemento esencial de todo acto administrativo, consistente en su ejecutividad, que se basa en la presunción de validez de la que goza, lo que, destacó la Juez del conocimiento, no genera perjuicio alguno en sí mismo.

Esto se considera así, ya que el determinar el verdadero alcance normativo del mencionado precepto legal, así como si, derivado de ello, produce o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, es una cuestión que se encuentra estrechamente vinculada con el fondo de la controversia y, por tanto, no es apta para declarar la improcedencia del juicio.

Con relación a lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial



RA.-200/2019.

de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de dos mil dos, materia común, página cinco, que dispone:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”

Aunado a lo anterior, como lo refiere la parte quejosa recurrente, al regular el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el momento a partir del cual se considera eficaz y exigible el acto de autoridad, que lo es cuando surte efectos su notificación, y constituir la resolución sancionadora reclamada un acto administrativo de esa naturaleza, en el que, incluso, se reconoce que en su contra procede el recurso de revisión previsto en dicho ordenamiento legal, además de que el procedimiento del que deriva se tramitó conforme a dicha Ley, es inconcuso que el citado precepto legal sí trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por tanto, se encuentra legitimada para controvertir su constitucionalidad.

Al respecto, es de precisar que, a criterio de este Tribunal Colegiado, la hipótesis que contempla este numeral en comento, se actualiza en la esfera jurídica de los particulares cuando un acto administrativo que trasciende a su esfera jurídica, como lo son las resoluciones sancionadoras reclamadas, es emitido y hecho de su conocimiento, ya que, precisamente, dispone la eficacia y exigibilidad del acto a partir de que surte efectos su notificación.

Ahora bien, como se observa de las demandas de amparo que dieron origen a la resolución recurrida, los quejosos reclaman las resoluciones emitidas en los procedimientos sancionadores que se les instauraron, y manifiestan que las mismas fueron hechas de su conocimiento a través de acto de notificación, por lo que es inconcuso que lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se ha actualizado en su esfera jurídica mediante la citada resolución que se les dio a conocer.

Lo anterior se determina también, tomando en cuenta que a pesar de que el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, establece los momentos a partir de los cuales debe comenzar el plazo de la sanción de inhabilitación, lo cierto es que no contempla

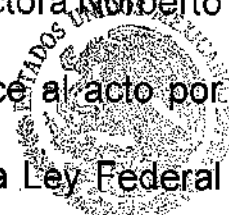


RA.-200/2019.

disposición alguna respecto del momento en que debe hacerse efectiva la diversa sanción de multa que también regula (y que de igual forma fue impuesta a la parte quejosa), por lo que, en esas condiciones, cobra aplicabilidad lo dispuesto por el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto señala el momento en el que acto administrativo es eficaz y exigible.

En las relatadas condiciones, este Tribunal Colegiado considera incorrecto el que la Juez de Distrito haya determinado sobreseer en el juicio de amparo por lo que hace al precepto legal en cita respecto de las quejas en comento, por considerar que por sí solo no les causa perjuicio alguno.

Establecido lo anterior, y al concluir este Tribunal Colegiado (con excepción de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima y por lo que hace al acto por ella reclamado consistente en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), que no se actualizan los supuestos de improcedencia y sobreseimiento determinados por la Juez de Distrito en la resolución recurrida en cuanto a las disposiciones de observancia general controvertidas, resulta innecesario el análisis de los restantes agravios por los



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

que se controvierten esas determinaciones de sobreseimiento, al haber quedado insubsistentes las mismas.

Asimismo, atento a las anteriores conclusiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las restantes causales de improcedencia y sobreseimiento al respecto hechas valer por las autoridades responsables y el Ministerio Público de la Federación.

QUINTO.- Refiere la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que por lo que hace a las disposiciones legales de ella reclamadas, son constitucionales, toda vez que se emitieron con estricto apego al procedimiento y facultades establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se causa agravio a las garantías individuales de la parte quejosa y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio.

Con relación a lo anterior, la Secretaría de la Función Pública refiere que en la especie se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo Primero del Acuerdo delegatorio de facultades que de ella se



RA.-200/2019.

reclama, no irroga agravio alguno en la esfera jurídica de los quejosos, en atención a que se llevó en un acto de supraordinación entre autoridades, con la finalidad de mejorar la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y, por tanto, no transgrede ningún derecho subjetivo de los impetrantes del amparo.

Al respecto, este Tribunal Colegiado considera que los referidos planteamientos de las mencionadas autoridades responsables no son aptos para demostrar la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, en virtud de que el hecho de que los actos reclamados hayan sido o no emitidos conforme a lo establecido por la Constitución Federal y demás disposiciones legales aplicables, es aspecto que corresponde al estudio del fondo del asunto, pero que no son útiles para resolver sobre la procedencia de juicio constitucional.

Por otra parte, argumenta la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en los informes justificados que rindió, que las disposiciones legales de ella reclamadas no causan afectación alguna al interés jurídico de la parte quejosa, ya que la culminación del proceso legislativo no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos de los quejosos, toda vez que el daño que reclaman se

atribuye a un acto de ejecución posterior, el cual no es propio de esa Cámara y es totalmente independiente del ámbito de sus facultades y atribuciones.

No asiste la razón a la referida responsable, ya que tal y como se advierte de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es procedente contra disposiciones de observancia general que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio a la parte quejosa.

En las relatadas condiciones, contrario a lo que refiere la Cámara de Senadores (con excepción hecha respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima por lo que hace al acto reclamado consistente en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), al haber demostrado la parte quejosa el acto concreto de aplicación de las disposiciones legales de ella reclamadas, ello es suficiente para tener por demostrado su interés jurídico para controvertir las mismas a través de la presente vía constitucional.

En otro orden de ideas, refiere el Agente del Ministerio Público de la Federación en oficio de quince de



RA.-200/2019.

octubre de dos mil dieciocho, que es improcedente el juicio de amparo en virtud de que no se atacan por vicios propios los actos de naturaleza legislativa reclamados al Presidente de la República, a las Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, y al Secretario de la Función Pública, por lo que se surte el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.

Son ineficaces las anteriores argumentaciones de la referida representación social, en virtud de que, precisamente, conforme a la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo, en caso de que en el juicio de garantías se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado encargados de su promulgación.

Ahora bien, en la especie, tal y como se advierte de las demandas de amparo que nos ocupan, sí se expresan las razones y motivos por lo que las normas generales reclamadas a las citadas autoridades se estiman contrarias a la Constitución Federal, y que en esencia se hacen consistir en que esas disposiciones transgreden los derechos

fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad en la aplicación de sanciones, lo que es suficiente para tener por combatidos por vicios propios los actos de emisión y promulgación atribuidos a las referidas responsables.

Finalmente, argumenta el Agente del Ministerio Público de la Federación, que por lo que hace al acto reclamado de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, se surte el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que dicho servidor público no ha actuado como autoridad formal, sino que sólo obra en cumplimiento a una orden, mas no por autoridad propia.

No asiste la razón al mencionado representante social, toda vez que en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.

En las relatadas condiciones, si como se indica en la sentencia recurrida, en la resolución administrativa



RA.-200/2019.

reclamada en la que se imponen diversas multas a las personas consideradas infractoras, en específico en el punto resolutivo cuarto, se ordena hacer del conocimiento dicha resolución al Servicio de Administración Tributaria para que, conforme sus atribuciones, se efectúe el cobro de las multas impuestas, resulta evidente que la unidad de dicho órgano a la que corresponde la recaudación de tales aprovechamientos reviste el carácter de autoridad ejecutora para efectos del amparo, al ser precisamente aquella que materializará la orden que trasciende a su esfera jurídica, lo anterior con independencia de que lo haga en acatamiento a lo determinado por la autoridad ordenadora.

Atento a las anteriores conclusiones, y en virtud de que este Tribunal Colegiado, inclusive en el ejercicio oficioso de sus atribuciones, advierte que no se actualiza supuesto alguno de improcedencia con relación a los preceptos legales reclamados por los que no se ha dejado firme la determinación de sobreseimiento decretada por la Juez de Distrito, se estima conducente dejar insubsistente el sobreseimiento decretado respecto de los mismos en la resolución recurrida.

SEXTO.- Resuelto el tema de procedencia por lo que hace a las normas generales reclamadas en los juicios de

amparo que nos ocupa, se procede al estudio de los agravios propuestos en contra del sobreseimiento decretado respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017.

Al respecto, argumenta la parte recurrente en el agravio **sexto** que, contrario a lo determinado en la resolución recurrida, en el caso, por lo que hace a la procedencia del juicio de garantías respecto de la mencionada resolución reclamada, sí se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consistente en que se controvierte la constitucionalidad de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", por lo que no se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Resultan fundadas las anteriores manifestaciones de la parte recurrente, toda vez que al haberse dejado insubsistente el sobreseimiento decretado en la resolución



RA.-200/2019.

recurrida respecto de las disposiciones de observancia general reclamadas, con la salvedad hecha de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al acto reclamado consistente en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, subsiste el problema de constitucionalidad planteado en las demandas de amparo y, ante tales condiciones se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que se contiene en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo.

En efecto, si bien conformera este precepto legal en cita es obligación de los gobernados agotar los medios ordinarios que procedan contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por medio de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, previo a intentar el juicio de amparo en su contra, lo cierto es que ese principio de definitividad acepta algunas excepciones, entre las que se encuentra, como se ha visto de criterios citados en consideraciones previas, la relativa a que en el juicio de garantías que se promueva contra este tipo de actos se controvierta la constitucionalidad de disposiciones de observancia general.

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

En las relatadas condiciones, si en las demandas de amparo que nos ocupa se controvierte, además de la resolución administrativa en comento, la constitucionalidad de diversas disposiciones de observancia general, contrario a lo determinado por la Juez de Distrito, la parte quejosa no se encontraba obligada a promover, previo al presente juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo.

Ahora bien, en virtud que de autos se advierte que las partes no proponen diversa causal de improcedencia que se configure con relación a este acto reclamado, ni este Tribunal Colegiado advierte de oficio que se surta alguna de esas hipótesis, lo conducente es dejar insubsistente el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida por lo que a este acto corresponde.

Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto



RA.-200/2019.

Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte.

Lo anterior se determina así, toda vez que en la especie se surten los supuestos de los puntos Cuarto, fracción I, inciso A) y Noveno fracciones I a III del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de ese Máximo Tribunal, en virtud de que en el juicio de garantías se controvierte la constitucionalidad de preceptos legales de carácter federal y han sido desestimados los supuestos de improcedencia y sobreseimiento del juicio que se hicieron valer con relación a los mismos, sin que se actualicen las hipótesis de los diversos incisos C) y D), del mencionado Acuerdo General, por lo que es necesario el estudio de tales cuestiones de constitucionalidad por ese Alto Tribunal.

En efecto, las mencionadas disposiciones establecen:

"CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: --- I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: --- A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. --- Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ... C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y --- D) Los amparos en revisión en

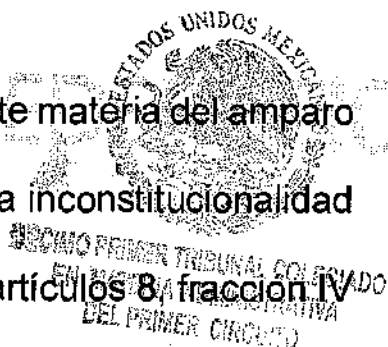


RA.-200/2019.

los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia; ... **NOVENO.** En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los términos siguientes: — I. Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su caso, sobre el desistimiento o la reposición del procedimiento; — II. Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio; — III. De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada previstos en el Punto Cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), de este Acuerdo General, el Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad;

...

Ahora bien, parte de la restante materia del amparo en revisión que nos ocupa, versa sobre la inconstitucionalidad de leyes federales, en específico de los artículos 8 fracción IV y 27 fracción II, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así



como del numeral 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Aunado a lo anterior, de las demandas de amparo, se advierte que por lo que hace al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en esencia se argumenta que transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad, en tanto somete al gobernado a un régimen punitivo en el que no se encuentran definidas de manera clara y precisa las infracciones administrativas que propician el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad, ya que no se especifican cuáles actos u omisiones configuran ese ilícito administrativo, por lo que es una remisión en blanco al universo de disposiciones y obligaciones genéricamente relacionadas con la contratación pública.

Por lo que refiere al artículo 27, fracción II, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de dicho ordenamiento legal, por una parte se aduce que es inconstitucional, toda vez que establece como únicas sanciones la multa y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal, lo que produce que, en contravención al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las



RA.-200/2019.

penas impuestas no sean proporcionales al hecho antijurídico y al grado de afectación del bien jurídico protegido.

Por otro lado, respecto de dicho precepto legal junto con el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los impetrantes del amparo sustancialmente refieren que son inconstitucionales por violar el derecho a la tutela judicial efectiva y su variante relativa a la tutela cautelar, al ordenar que la resolución dictada en la instancia sancionadora se ejecute aun antes de que cause estado, permitiendo que sus efectos se consumen en forma irreparable.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que no existe jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que resuelva al respecto, inclusive de manera temática; tampoco existe jurisprudencia integrada del Pleno o las Salas de dicho Máximo Tribunal pendiente de publicar con relación a esos tópicos; ni existen tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o Salas en cita, de manera ininterrumpida en el mismo sentido que resuelvan el tema de constitucionalidad en controversia, por tanto, no se actualizan los supuestos establecidos por los incisos C) y D), de la fracción I del punto

DECIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Cuarto, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así las cosas, este Tribunal Colegiado considera que procede dejar a salvo la jurisdicción de nuestro Máximo Tribunal y, por tanto, deben remitirse los presentes autos para que resuelva lo conducente en relación a su competencia originaria.

No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública, por lo que se surte el supuesto de competencia delegada a este Tribunal Colegiado previsto en el inciso B), de la fracción I, del punto Cuarto, del acuerdo 5/2013 en cita, que dispone:

"CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: --- I. Los recursos de



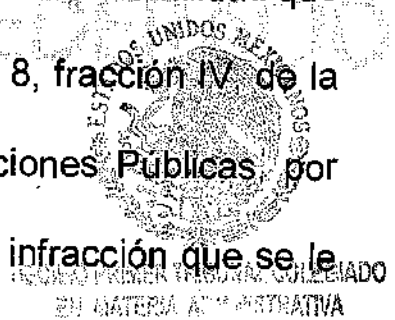
RA.-200/2019.

revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

...

B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; --- C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y - -- D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia; ...".

Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los



conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar 82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht,



RA.-200/2019.

Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión.

NOTIFÍQUESE; haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, infórmesele al Juez de Distrito de origen; remítanse los autos del presente recurso de revisión y de los juicios de amparo indirecto de los que deriva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la presente resolución vía formato electrónico a la cuenta sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx de la Subsecretaría General de Acuerdos de ese Alto Tribunal; fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de todo lo actuado y actuaciones subsecuentes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos de los señores
Magistrados Presidente Fernando Andrés Ortiz Cruz, Urbano
Martínez Hernández y Jesús Alfredo Silva García, lo resolvió



RA.-200/2019.

el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados. Firman los Magistrados ante el Secretario de Tribunal que autoriza y da fe.

EL LICENCIADO LUIS CARLOS VEGA MARGALLI, SECRETARIO DEL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, **CERTIFICA**: QUE LAS PRESENTES COPIAS CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN RA.-200/2019, INTERPUESTO POR GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y OTRAS, CONTRA ACTOS DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 526/2018-III Y SUS ACUMULADOS 569/2018 Y 571/2018, Y CONSTAN DE CIEN FOJAS, LAS CUALES SE CERTIFICAN PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, A QUE SE REFIERE LA SENTENCIA DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE - CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE - DOY FE.

EL SECRETARIO DE TRIBUNAL.

LIC. LUIS CARLOS VEGA MARGALLI.



Escrito de agravios.

Ocho Copias

OFICINA DE JEFES DE OFICINA
C O C U N
JUEGADOS DE DISTRITO

ORIGINAL

2019 APR 25 P 5:32

000307

EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

QUEJOSOS: GLEIBER JOSÉ DE FARIA, ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 526/2018 y acumulados 569/2018 y 571/2018.

CUADERNO PRINCIPAL

ASUNTO: Se interpone recurso de revisión con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

COLECCIÓN
ADMINISTRATIVA
JEFES DE OFICINA

009378

C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

RODRIGO ANTONIO GONZÁLEZ ALPUCHE HERRERIAS, abogado, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por las quejasas GLEIBER JOSÉ DE FARIA, ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en el juicio en que se actúa, ante Usted C. Juez, con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente:

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 83, 84, 86, 88 y demás aplicables de la Ley de Amparo, ocurro a presentar en tiempo y forma legales **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de marzo de 2019, notificada personalmente a mis mandantes el día 5 de abril de 2019, por virtud de la cual el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana, residencia en la Ciudad de México, en auxilio de ese H. Juzgado, resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.

En tal virtud, solicito a su Señoría remitir el escrito de agravios que al efecto se acompaña al presente escrito, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito que resulte competente para tramitar el recurso de revisión de mérito, a fin de que éste resuelva lo que en derecho corresponda.

Ocho Copias
5/4/19
JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

4

Por lo expuesto y fundado, **A USTED C. JUEZ**, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, presentando en tiempo y forma legales **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de marzo de 2019, por la que se sobreseyó el juicio de amparo al rubro citado.

SEGUNDO.- Remitir el escrito de agravios correspondiente para su estudio y resolución al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que resulte competente para tales efectos.

Ciudad de México, a 24 de abril de 2019


RODRIGO ANTONIO GONZALEZ ALPUCHE HERRERIAS

Autorizado

COLEGIADO
MATERIA
ADMINISTRATIVA
PRIMER
CIRCUITO

RA-200/2019.

ORIGINAL

QUEJOSOS Y RECURRENTES:
GLEIBER JOSÉ DE FARIA,
ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL
DE MÉXICO S.A. DE C.V., y
CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT, S.A.

ASUNTO: Se interpone recurso de
revisión con fundamento en el artículo
81. fracción I, inciso e) de la Ley de
Amparo.

**H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO, EN TURNO.**

RODRIGO ANTONIO GONZÁLEZ ALPUCHE HERRERIAS, abogado,
autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por las quejas
y recurrentes GLEIBER JOSÉ DE FARIA, ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (en adelante
"OICIMEX") y CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. (en adelante
"CNO") personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada en el juicio
de amparo indirecto 526/2018 y acumulados 569/2018 y 571/2018 del índice del
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, del
cual deriva el presente recurso, manifestando que el representante legal de los
recurrentes señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en

COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
PRIMER CÍRCULO

[REDACTED] así como que los mismos
representantes legales autorizaron en los más amplios términos del artículo 12 de
la Ley de Amparo, en adición al suscrito, a los licenciados en derecho Carlos
Malpica Hernández (con cédula profesional número 2258052), Juan José Iturbe
López (con cédula profesional número 2108825), Rodrigo Buj García (con cédula
profesional número 4494360), Horacio Paredes Vázquez (con cédula profesional
número 5192613), Álvaro Huerta González (con cédula profesional número
3677770), Rolando Zárate Guzmán (con cédula profesional número 5712956),
José Luis Vergara Estrada (con cédula profesional número 6557205), Alejandro
Agredano Zermeno (con cédula profesional número 8006477), Andrés
Hernández Carlsen (cédula profesional 11232223), Miguel Ángel García
Gutiérrez (cédula profesional 10239892) y Sebastián Humberto Zayaia González
(con cédula profesional número 10111252); asimismo, autorizaron para el efecto
de oír y recibir toda clase de notificaciones, recoger documentos y/o valores,
solicitar copias, tomar fotografías y apuntes, imponerse de los autos, así como para

reproducir las constancias del expediente a través de medios electrónicos, a los pasantes en derecho: Fernando Salinas Valdespino, Alonso Zepeda Gelis, Vanessa Alejandra Peña Mondragón, Alejandro Zúñiga Pastrana, Gonzalo Robles Gil Candás, Bertha Marisol Vélez Quintero, Roberta Mier y Terán Lagos y Daniela Martínez Alarcón; y por otra parte autorizaron para consultar vía electrónica el expediente electrónico al usuario: [REDACTED] el cual se encuentra debidamente registrado ante el Consejo de la Judicatura Federal, ante ese H. Tribunal Colegiado, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás aplicables de la Ley de Amparo, ocurro a interponer en tiempo y forma legales **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de marzo de 2019, notificada personalmente a mis mandantes el día 5 de abril de 2019, por virtud de la cual el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 promovidos por Gleiber José de Faria, OICIMEX y CNO (en adelante "**Sentencia Definitiva**").

COLEGIO
NATIVA
ITO

Previo a la exposición de los agravios correspondientes, se manifiestan los siguientes:

ANTECEDENTES

1. **Contrato de Obra Pública.** El día 12 de noviembre de 2015, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (anteriormente definido como "**CNO**") y Pemex Transformación Industrial, celebraron un Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, con número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 en la modalidad de obra a precio unitario, cuyo objeto sería la Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo (en adelante el "**Contrato de Obra Pública**").

2. **Solicitud de Cesión.** Con fecha 04 de febrero de 2016, CNO solicitó a Pemex Transformación Industrial, la autorización para formalizar la cesión total de derechos y obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública a Odebrecht

7

Ingeniería y Construcción Internacional de México S.A. de C.V. (anteriormente definido como "**OICIMEX**").

3. Autorización. Mediante oficio DGTRI-181-2016, de fecha 17 de junio de 2016, el Director General de Pemex Transformación Industrial, autorizó la cesión de derechos y obligaciones del Contrato de Obra Pública, por parte de CNO a OICIMEX, en términos de lo establecido en la cláusula 13 del Contrato de Obra Pública y lo dispuesto por el artículo 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

4. Dictamen. El día 21 de junio de 2016, Pemex Transformación Industrial, emitió en forma favorable el Dictamen para la Autorización de la Cesión de los Derechos y Obligaciones del Contrato de Obra Pública No. DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, de conformidad con lo establecido por la cláusula 13 del Contrato de Obra Pública y con lo dispuesto por el artículo 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

5. Acuerdo Privado. Con fecha 20 de octubre de 2016, con la comparecencia de Pemex Transformación Industrial, CNO y OICIMEX celebraron el Acuerdo de Voluntades Privado de Cesión de Derechos y Obligaciones, en virtud del cual CNO cedió a OICIMEX el Contrato de Obra Pública.

6. Garantía Corporativa. En esa misma fecha, 20 de octubre de 2016, CNO y OICIMEX, entregaron a Pemex Transformación Industrial la garantía corporativa (*parent company guarantee*) suscrita por Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A. de conformidad con lo establecido por la cláusula 13 y el anexo W del Contrato de Obra Pública y con lo dispuesto por el artículo 37 de las DAGS (en adelante "**Garantía Corporativa**").

7. Convenio Modificatorio. El día 05 de diciembre de 2016, CNO en su carácter de cedente, OICIMEX en su carácter de cesionaria y Pemex Transformación Industrial, celebraron el Primer Convenio Modificatorio de Formalización de la Cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 (en adelante "**Convenio Modificatorio**").

8. Oficio de Investigación. Por oficio No. UR-DPTI-AQDI-753-2017, de fecha 09 de junio de 2017, el Titular del Área de Quejas, Denuncias e

Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial hizo del conocimiento del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial (en adelante "Titular del Área de Responsabilidades"), que en términos de la investigación realizada en el expediente administrativo 2017/PTI/DE109, se desprendía una presunta irregularidad cometida por Gleiber José de Faria, OICIMEX y CNO, al advertir elementos que hacían presumir la actualización de la conducta prevista en la fracción IV del artículo 8º, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en haber realizado actos con el objeto de evadir y simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública.

9. Acuerdo de Inicio. El día 14 de junio de 2017, le fue notificado a las recurrentes los Oficios No. UR-DPTI-AR-081/2017, UR-DPTI-AR-082/2017 y UR-DPTI-AR-083/2017, de fechas 12 de junio de 2017, a través del cual el Titular del Área de Responsabilidades, entre otras cosas, dictó el acuerdo de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 instaurados en contra de OICIMEX, Gleiber José de Faria y CON, respectivamente, otorgándoles un plazo de 15 días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimare convenientes.

COLEGIO
ADMINISTRATIVO
CIVIL

10. Acuerdo de Acumulación. Por resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, contenida en el Oficio No. UR-DPTI-AR-0227-2017, de esa misma fecha, el Titular del Área de Responsabilidades ordenó la acumulación de los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 al expediente PTRI-S-001/2017.

Con motivo de la anterior acumulación, la autoridad responsable, decidió glosar los autos de los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, para su acumulación al más antiguo PTRI-S-001/2017, a fin de que se decidieran en una sola resolución todos los asuntos seguidos por una misma causa (en adelante el "Procedimientos Administrativos Sancionadores").

11. Cierre de Instrucción. Por acuerdo de fecha 05 de octubre de 2017, contenido en el Oficio No. UR-DPTI-AR-0282-2017, de esa misma fecha, el Titular del Área de Responsabilidades, tuvo por formulados los alegatos de OICIMEX, Gleiber Jose de Faria y CNO, declaró cerrada la instrucción del procedimiento y

9

turnó los autos a fin de que se emitiera la resolución definitiva en los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

12. Resolución Definitiva. Con fecha 17 de abril de 2018, se notificó a las recurrentes la resolución definitiva, de fecha 16 de abril de 2018, que resuelve los Procedimientos Administrativos Sancionadores en donde se declara que OICIMEX, Gleiber José de Faria y CNO se ubicaron en el supuesto establecido en el artículo 8º, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y en consecuencia, se les impone como sanción administrativa respectivamente a CNO y OICIMEX, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, seis meses para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de \$543'488,615.90 pesos (quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 m.p.) (en adelante la "**Resolución Administrativa**").

En cuanto a Gleiber José de Faria, el Titular del Área de Responsabilidades impuso como sanción administrativa, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, 3 meses y 12 días para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de \$1'262,222.60 (un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos veintidós pesos 60/100 M.N.).

JALCO
ADMINISTRATIVA
CUITO

13.- Juicio de Amparo Indirecto GJF. Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, Gleiber José de Faria promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "*ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican*", en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien la registró bajo el número de expediente 526/2018.

Por escrito de fecha 8 de mayo de 2018, Gleiber José de Faria amplió la demanda de amparo respecto a los conceptos de violación.

10

14.- **Juicio de Amparo Indirecto OICIMEX.** Mediante escrito de 8 de mayo de 2018, OICIMEX promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien la registró bajo el número de expediente 569/2018.

15.- **Juicio de Amparo Indirecto CNO.** Mediante escrito de 8 de mayo de 2018, CNO promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien la registró bajo el número de expediente 571/2018.

16.- **Acumulación de los Juicios de Amparo.** Mediante acuerdo de fecha 30 de mayo de 2018, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó de oficio la acumulación de los juicios de amparo 569/2018 y 571/2018 al diverso juicio de amparo 526/2018.

17.- **Juzgado Auxiliar.** En cumplimiento a lo ordenado en el oficio STCCMP/77/2019, de fecha 28 de enero de 2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México remitió el juicio de amparo 526/2018

y sus acumulados al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, para el dictado de la sentencia correspondiente.

Dicho Juzgado Auxiliar registró el asunto bajo el cuaderno auxiliar 82/2019.

18. **Sentencia Definitiva.** Mediante sentencia definitiva, de fecha 28 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.

Dicha Sentencia es la materia del presente recurso de revisión al causar a mis representadas los siguientes:

AGRAVIOS

PRIMERO. LA SENTENCIA RECURRIDA ES ILEGAL PUES EL SOBRESEIMIENTO FUE DECRETADO EXAMINANDO EL FONDO DEL ASUNTO

Es ilegal que el Juez de Distrito pretenda realizar el estudio sobre la procedencia de los juicios de amparos indirecto instaurados por Gleiber José de Faira, OICIMEX y CNO en contra de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de inconformidades y conciliaciones, así como de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, a los servidores públicos que se indican" (en adelante "Acuerdo Delegatorio") a la luz de los argumentos expuestos en las demandas de amparo.

Por tanto, en el caso concreto no resulta notorio e indudable que se actualice la causal de improcedencia invocada en la Sentencia Definitiva, a saber, la contemplada en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el Juez de Distrito emprendió el estudio de los conceptos de violación contenidos para sobreseer el juicio de amparo 526/2018 y acumulados 569/2018 y 571/2018.

En términos del artículo 65 de la Ley de Amparo, únicamente puede determinarse el sobreseimiento del juicio de amparo cuando no exista duda de su actualización. Así, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado puesto que no se aborda el análisis de la causa de pedir expuesta en el escrito de demanda sino más bien, la procedibilidad de la acción. Al respecto la disposición legal antes referida establece lo siguiente:

"Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización."

En ese tenor, cuando se actualiza cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, el juzgador no debe ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de derechos humanos por los actos reclamados de las autoridades responsables puesto que ello es el problema del fondo del asunto. Sobre el particular, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

Época: Octava Época
Registro: 226555
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989
Materia(s): Común
Tesis: VI. 1o. J/23
Página: 252

SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.

No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.

Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.

Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.

13

Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra.

Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra."

(Énfasis añadido)

Visto lo anterior, en la Sentencia Definitiva se argumenta que el primer acto de aplicación, en perjuicio de los quejosos, de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio se generó con los proveídos que dieron inicio a los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Así, el A quo expone que si las impetrantes de garantías estiman (i) que la conducta prevista en el artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas trasgrede el derecho de seguridad jurídica pues no hay certeza sobre los elementos del tipo al estar redactado en términos ambiguos y genéricos; (iii) que el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio permite la sanción de conductas que no se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y (ii) que el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas contraviene el artículo 22 de la Constitución General al no contemplar alternativa en la aplicación de penas; las quejas estuvieron en aptitud de controvertir la constitucionalidad de tales aspectos en los autos de inicio de los procedimientos de origen por lo que no debieron esperar a que éstos culminaran en todas sus etapas

Para mayor referencia, se transcribe a continuación la parte del fallo en la parte que interesa:

(...)
Como se advierte, faculten a Titular del Área de Responsabilidades de la en este juicio de amparo esencialmente la quejosa se duele de la inseguridad jurídica que a su consideración le genera que los artículos reclamados Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo de sanción y que éste los haya sujetado a un procedimiento por una conducta típica que contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos, cuya consecuencia será indefectiblemente la aplicación de las sanciones previstas (inhabilitación y multa), sin ninguna otra posibilidad.
(...)

Sobre esa base, si en los acuerdos de inicio la autoridad estimó procedente sujetar a los quejosos a un procedimiento de sanción por haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con base en los elementos que les dieron a conocer, es claro que el primer acto que concretó la individualización de las hipótesis jurídicas controvertidas en este juicio, se verificó a través de los referidos acuerdos que dieron inicio a los procedimientos.

(...)

De este modo, los quejosos no tenían que esperar hasta que se resolviera el procedimiento administrativo sancionatorio incoado en su contra, para saber que ésta tenía como finalidad sancionarlo conforme a los preceptos legales que ahora impugna; máxime que, como se apuntó con anterioridad, sus argumentos están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas, al considerar que no contienen una definición clara y precisa de las infracciones administrativas que propician el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad y que no existe alternativa en la aplicación de las penas; lo que, evidentemente, estuvo en aptitud de cuestionar desde el acuerdo de inicio, en el que se le informó la hipótesis normativa en la que se encuadró su conducta y las consecuencias jurídicas que ello ocasionaba.

(...)"

(Énfasis añadido)

Conforme a lo anterior, resulta evidente la ilegalidad con la que se condujo el juzgador en tanto decreta el sobreseimiento de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, efectuado un estudio de los conceptos de violación esgrimidos en contra de las normas reclamadas.

Así, en un claro afán por sobreseer el juicio de amparo, el Juez de Distrito se pronuncia sobre la causa de pedir expuesta en los escritos de demanda cuando existía un obstáculo jurídico insuperable para analizar tales aspectos pues si se estimaba que no había duda en la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no podía abordar el fondo del asunto.

Por tanto, si el juzgador examinó los conceptos de violación hechos valer por las quejosas, se concluye que en la especie no es notoria, indudable ni manifiesta la causal de improcedencia invocada en la Sentencia Definitiva, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación:

"Época, Novena Época

Registro: 167553
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIX, Abril de 2009
Materia(s): Común
Tesis: I.3o. C. J/57
Página: 1741

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE CON BASE EN SU EXAMEN EN EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

Este Tribunal Colegiado se aparta del criterio sustentado en la tesis I.3o. C. 18 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de dos mil dos, página 782, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN VÍA DE CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE SOBRESEERSE EN EL NUEVO JUICIO CUANDO EL EXAMEN DE LOS ASPECTOS EN QUE SE DEJÓ A LA AUTORIDAD PLENITUD DE JURISDICCIÓN DEPENDAN Estrictamente DEL EXAMEN DE LOS TOCANTES AL EXCESO O DEFECTO.", debido a que no puede supeditarse la procedencia del juicio de amparo al examen que realice el juzgador de los conceptos de violación en los términos indicados en dicho criterio, ya que para poder determinar que algunos conceptos de violación tienden a controvertir el cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, y otros se encuentran dirigidos a impugnar aspectos de fondo relacionados con ese supuesto incumplimiento, tendría que realizarse por lo menos un estudio somero del fondo de la litis constitucional, lo cual cobra singular relevancia, dado que el sobreseimiento da por concluido el juicio de amparo sin entrar al examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud de actualizarse una causa legalmente prevista que origina esa forma anormal de terminación del procedimiento constitucional, esto es, no puede abordarse el estudio del fondo de la controversia al existir un obstáculo jurídico para ello. Además, las causas de improcedencia deben probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que prevé el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso al estudio de fondo en el juicio de garantías; de ahí que la circunstancia de que para considerar actualizada la improcedencia mencionada en la tesis que se abandona, resulte necesario el examen de la naturaleza de los conceptos de violación, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requiere de un análisis más profundo, propio de la sentencia y no de la resolución de sobreseimiento, cuya naturaleza impide precisamente ese estudio de fondo. Lo anterior, además, armoniza con el principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la finalidad de obligar al juzgador a que decrete el sobreseimiento en el juicio de amparo sólo cuando se acredite plena y fehacientemente la actualización de alguna causa de improcedencia estriba precisamente en que los gobernados tengan certeza jurídica de en qué casos no procede el juicio de

COLECCIÓN
PRATICA
JURISPRUDENCIAL

16

garantías. En efecto, no se puede dejar al arbitrio del juzgador de amparo determinar si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos principales o accesorios, es decir, que estos últimos dependan del examen de los primeros que tienden a controvertir el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, y que, por tal motivo, sea necesario primero interponer el recurso de queja, y en su caso, posteriormente promover un nuevo juicio de garantías, como se establece en la tesis antes mencionada; pues independientemente de que ello no constituye propiamente una causa de inejecibilidad de la acción de amparo, podría dar margen a que la parte quejosa quede en estado de indefensión, ya que no se resolverían sus pretensiones sino hasta que interpusiera el citado medio de impugnación (queja), aun cuando no todos sus planteamientos se encuentren relacionados con el defecto o exceso en el cumplimiento a una sentencia de amparo, lo que, además, atentaría contra el principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional. En esa tesitura, es patente que el criterio que informa la tesis que se abandona no justifica establecer causas de improcedencia, ni de sobreseimiento que no se encuentren previstas en la ley, por lo que este tribunal considera que debe estarse a la regla general establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el juicio de amparo sólo procede cuando se controvierten cuestiones que con su propia jurisdicción emitió la autoridad responsable, en cumplimiento de una ejecutoria en que se concedió el amparo para efectos, por tratarse de actos nuevos de la autoridad responsable.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 132/2006. 13 de julio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Alfaro Telpalo, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 99/2008. Hipotecaria México, S.A. de C.V., S.F. de O.L. 28 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Amparo directo 155/2008. Irma Gómez Clemente. 10 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Amparo directo 542/2008. María de Jesús Garay Alvarado, su sucesión y otros. 31 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Amparo directo 17/2009. Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel. 9 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa."

(Énfasis añadido)

17

Época: Décima Época
Registro: 2017911
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: XXV.3o.1 A (10a.)
Página: 2385

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO QUE INVOLUCREN EL EXAMEN DE FONDO DEL ASUNTO DEBEN DESESTIMARSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO VIGENTE EN 2016).

De los artículos 169 a 171 de la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango vigente en 2016 –actualmente abrogada–, se advierten las causas de improcedencia y sobreseimiento que imperan en el juicio contencioso administrativo, cuyo estudio es de orden público y de oficio, razón por la cual, su análisis amerita un estudio preferente, sea o no alegado por las partes. Sin embargo, las causas de improcedencia o sobreseimiento cuya argumentación se encuentra intrínsecamente ligada con el fondo del asunto deben desestimarse, pues su examen implicaría el análisis de la propia cuestión sometida a la potestad de la autoridad jurisdiccional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 232/2017. Eleuterio Soto Mendoza. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez Bibiano. Secretario: David Heladio Flores García.

En consecuencia, si no está acreditado plena y fehacientemente la actualización de la causal de improcedencia referente al consentimiento tácito de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, sus Señorías deberán revocar la Sentencia Definitiva, a fin de reasumir jurisdicción y pronunciarse sobre los planteamientos de constitucionalidad expuestos por Gleiber José de Faria, OICIMEX y CNO.

SEGUNDO.- LA SENTENCIA DEFINITIVA ES ILEGAL EN ATENCIÓN A QUE LAS QUEJOSAS SI IMPUGNARON EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS.

La Sentencia Definitiva, resulta ilegal en agravio de mis representadas y en violación de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, ya que el Juez de Distrito, contrario a los precedentes judiciales, a la ley de la materia y a las constancias de autos, sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo

18

61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al estimar que el acuerdo de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores constituyeron el primer acto de aplicación en perjuicio de los recurrentes de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio, y en consecuencia, mis representadas combaten un ulterior acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales.

La determinación del Juez de Distrito en ese sentido resulta contraria a derecho, en primer lugar porque la simple cita de las disposiciones impugnadas no conlleva el primer acto de aplicación de las normas reclamadas que cause perjuicio a los quejosos.

En segundo lugar la Sentencia Definitiva es ilegal, ya que los acuerdos de inicio no producen afectación alguna en perjuicio de los quejosos, pues únicamente existe una presunción sobre la posible infracción, aunado a que se informa a los imputados del inicio de un procedimiento, así como los derechos que podrán ejercer a efecto de salvaguardar sus derechos.

En tercer lugar el fallo se encuentra indebidamente fundado y motivado pues el primer acto de aplicación, en perjuicio de los quejosos, de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio se concretó con la resolución definitiva que concluyó los procedimientos de origen.

Visto lo anterior, a fin de sobreseer los juicios de amparo respecto a las normas reclamadas contenidas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el Acuerdo Delegatorio, el juzgador sostuvo lo siguiente:

"Ahora, por lo que hace al artículo primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", así como respecto de los diversos 8°, fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, es también fundada la causa de improcedencia propuesta.

En efecto, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo dado que esas normas no son impugnadas en este juicio con motivo del primer acto de aplicación, sino de uno ulterior y, por tanto, deben estimarse consentidas tácitamente, como a continuación se expone.

(...)

Ahora, como se narró en el considerando de antecedentes de esta resolución, el doce de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dio inicio a los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001-2017, PTRI-S-003-2017 y PTRI-S-004-2017, con base en las siguientes consideraciones:

(...)

De la transcripción que antecede, se advierte que en los tres procedimientos abiertos en contra de cada uno de los aquí quejosos, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción, con fundamento, entre otros, en los artículos 1, 2, fracción II, 3, fracciones I, III, VI y VIII, 4, fracción I, 5, **8, fracción IV**, 10 y el Capítulo Cuarto, todos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como en el **"Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"**.

Del mismo modo, en los referidos acuerdos ordenó hacer del conocimiento de los quejosos las imputaciones de las conductas que, en consideración de la autoridad, actualizaban la infracción administrativa establecida en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las pruebas con las que se sustentaba esa acusación; por lo que, le informó que, **en caso de no desvirtuar tales imputaciones, se harían acreedores a las sanciones previstas en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, con lo que se actualizaron e individualizaron los supuestos normativos.**

(...)

Como se advierte, faculten a Titular del Área de Responsabilidades de la **en este juicio de amparo esencialmente la quejosa se duele de la inseguridad jurídica que a su consideración le genera que los artículos reclamados** Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo de sanción y que éste los haya sujetado a un procedimiento por una conducta típica que contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos, cuya consecuencia será indefectiblemente la aplicación de las sanciones previstas (inhabilitación y multa), sin ninguna otra posibilidad.

Entonces, si por una parte, como se dijo, la autoridad responsable en los acuerdos de inicio de procedimiento se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción, con fundamento, entre otros, en los artículos 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como en el "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", y formuló las imputaciones de las conductas que, en su consideración actualizaban la infracción administrativa establecida en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las pruebas con las que se sustentaba esa acusación y les informó que, **en caso de no desvirtuar tales imputaciones, se haría acreedores a las sanciones previstas en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, es claro que esas actuaciones constituyen el primer**

acto de aplicación de las referidas normas y no la resolución definitiva que ahora se combate.

Cierto es que en la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió en definitiva el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, también se aplicaron las referidas normas; sin embargo, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo reserva la procedencia del juicio constitucional al primer acto de aplicación; por lo que, en caso de ser el segundo o ulterior acto de aplicación, el juicio de amparo indirecto será improcedente en términos de la fracción XIV, del artículo 61, del mismo ordenamiento legal.

(...)

Sobre esa base, si en los acuerdos de inicio la autoridad estimó procedente sujetar a los quejosos a un procedimiento de sanción por haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con base en los elementos que les dieron a conocer, es claro que el primer acto que concretó la individualización de las hipótesis jurídicas controvertidas en este juicio, se verificó a través de los referidos acuerdos que dieron inicio a los procedimientos.

(...)

Sin que sea óbice a lo anterior, que la recurrente no solo reclame la hipótesis sancionadora prevista (sic) la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sino también en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, la cual considera inconstitucional, al ser contraria —según aduce— al principio de proporcionalidad de las penas, pues lo cierto es que la quejosa no puede negar que desde el acuerdo de inicio de procedimiento sabía:

- 1.Cuál era la conducta que se le atribuía.
2. El precepto normativo que la regula y por ende, la sanción que indefectiblemente habría de aplicar la autoridad.
3. Así como la facultad con que contaba la autoridad responsable para seguir en su contra el procedimiento respectivo hasta el dictado de la resolución definitiva.

(...)

De este modo, los quejosos no tenían que esperar hasta que se resolviera el procedimiento administrativo sancionatorio incoado en su contra, para saber que ésta tenía como finalidad sancionarlo conforme a los preceptos legales que ahora impugna; máxime que, como se apuntó con anterioridad, sus argumentos están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas, al considerar que no contienen una definición clara y precisa de las infracciones administrativas que propician el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad y que no existe alternatividad en la aplicación de las penas; lo que, evidentemente, estuvo en aptitud de cuestionar desde el acuerdo de inicio, en el que se le informó la hipótesis normativa en la que se encuadró su conducta y las consecuencias jurídicas que ello ocasionaba.

(...)

Entonces, si los referidos acuerdos de inicio de procedimiento de doce de junio de dos mil diecisiete (en que se aplicaron por primera vez las

21

normas reclamadas (sic) a la quejosa, se notificaron a los quejosos el catorce de junio de ese mismo año a la fecha en que se promovieron los juicios que se resuelven (veintisiete de abril y nueve de mayo de dos mil dieciocho), ha transcurrido en exceso el plazo de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, **se estiman consentidas tácitamente las normas impugnadas.**

No debe pasar inadvertido el hecho de que el **acuerdo de inicio de procedimiento sea un acto de naturaleza intraprocesal**; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, **constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente** (como en el caso acontecido), y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad.

(...)

Además, si bien el máximo tribunal también sostuvo que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley, con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, siempre que cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, sin que para ello exista obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes; lo cierto es, que cuando el acto de aplicación de la ley reclamada **no sea de los considerados como de imposible reparación, deberá operar la regla contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.**

Conforme a ese precepto: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva", por tanto, para que se actualice su procedencia, resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad, **sin que en la especie se hubiera hecho.**

Por todo lo expuesto, si el juicio constitucional es procedente únicamente cuando se controviertan normas generales con motivo del primer acto concreto de aplicación en perjuicio del gobernado, lo que en la especie **no aconteció con motivo de la resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho**, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, es evidente que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo, a través de un ulterior acto.

(...)

Portanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los artículos 8º, fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", respecto de las quejas Gleiber José de Faría, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima.

22

(...)"

(Énfasis añadido)

Con base en la anterior transcripción, se deduce que los puntos en los cuales se puede resumir lo argumentado por el Juez de Distrito para sostener que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, son los siguientes:

- Las quejas impugnaron las normas reclamadas no con motivo de su primer acto de aplicación, sino uno ulterior. En consecuencia, consintieron tácitamente las normas impugnadas.
- Desde los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, fueron citados los preceptos legales cuya constitucionalidad pretenden controvertir las quejas en el juicio de amparo biinstancial.
- Los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, son el primer acto de aplicación de las normas reclamadas puesto que las quejas conocieron las imputaciones en su contra, las pruebas que sustentaban la acusación y se les informó que en caso de no desvirtuar la acusación se harían acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
- A decir de las quejas, la inconstitucionalidad de las normas combatidas recae en que la conducta típica que se les atribuía contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos; además la sanción prevista en la Ley Federal Anticorrupción no prevé una alternatividad respecto del tipo de medida privativa que pueda aplicarse. Por lo tanto, desde los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores tomaron conocimiento de tales cuestiones ya que la autoridad invocó los preceptos legales aplicables.
- Si bien los acuerdos de inicio son actos intraprocesales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el amparo indirecto procede en contra del primer acto de aplicación, siempre que cause perjuicio al quejoso.

- En caso de que el primer acto de aplicación no sea de imposible reparación, los quejosos estaban en aptitud de promover juicio de amparo directo para controvertir las normas tildadas de inconstitucionales.

Todas las anteriores proposiciones del juzgador resultan intencionalmente equivocadas a fin de no abordar la cuestión efectivamente planteada, ya que como se demostrará en las líneas siguientes, conforme a la correcta técnica del juicio de garantías, mis representadas no consintieron tácitamente el contenido de las disposiciones legales impugnadas en tanto los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores no producen ningún tipo de afectación en su perjuicio.

A efecto de demostrar que el concepto de violación es procedente, siguiendo riguroso orden de exposición, se expondrá: (a) los estándares legales y jurisprudenciales para controvertir en juicio de amparo indirecto, una norma general de carácter heteroaplicativa dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio; (b) la naturaleza jurídica del acuerdo de inicio regulado bajo la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y (c) la indebida fundamentación y motivación de la Sentencia Definitiva.

(a) Reglas para el Juicio de Amparo Indirecto en contra de Normas Heteroaplicativas.

El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En estrecha relación a lo anterior, la fracción I, del artículo 107 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede en contra de normas generales que (i) por su sola entrada en vigor; o (ii) con motivo del primer acto de aplicación; **CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO**. Al respecto, se transcribe la disposición antes aludida:

***Artículo 107. El amparo indirecto procede:**

24

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. +
(...)

Conforme a lo anterior, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de normas generales está supeditado a que se combata en su carácter de autoaplicativa (sola entrada en vigor causa perjuicio) o heteroaplicativa (primer acto de aplicación causa perjuicio).

Así pues, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el que se controvierta la constitucionalidad de un precepto legal en su carácter de heteroaplicativa, deben converger de manera simultánea los siguientes elementos: (i) primer acto de aplicación; y (ii) perjuicio al quejoso.

De manera que, por ejemplo, si estamos frente a un caso en el que se aplique al gobernado alguna norma general pero ésta no le depare perjuicio o bien, sea un ulterior acto de aplicación, indefectiblemente el juicio de amparo biinstancial será improcedente.

Lo anterior, se corrobora con el contenido del párrafo segundo de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se promueve el juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación que causó un perjuicio al quejoso:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnada en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.
(...)"

(Énfasis añadido)

En ese contexto, para considerar que si se está frente al primer acto de aplicación que causa perjuicio al gobernado, es indispensable que los supuestos jurídicos plasmados en la norma se concreten con TODOS SUS EFECTOS, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia estén inmersas en el acto de aplicación.

25

Así pues, el hecho que la autoridad simplemente invoque la disposición legal no genera el acto de aplicación en perjuicio del pues debe verificarse que éste constituya el primigenio y que además irradie efectos negativos en la esfera jurídica del gobernado. De manera que no cualquier acto de aplicación de la norma puede impugnarse en el juicio de garantías, dado que resulta un requisito ineludible que ese primer acto de aplicación, impugnado por el gobernado, verdaderamente resienta una afectación de manera actual y real en su esfera jurídica y no meramente probable.

Sobre el particular, cobra aplicación los siguientes criterios jurisprudenciales:

"Época: Novena Época
Registro: 197247
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VI, Diciembre de 1997
Materia(s): Común
Tesis: P. /J. 95/97
Página: 7

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO.

De lo dispuesto en los artículos 4o. y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, deriva que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o el acto que se reclame y, en términos de la fracción XI del artículo 73 del propio ordenamiento, es improcedente el juicio de garantías promovido contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y que, tratándose del amparo contra leyes, debe derivar, en todo caso, del hecho de que teniendo el gobernado la posibilidad actualizada de acudir a dicho juicio, optó por someterse a los efectos perjudiciales de la ley o al acto de aplicación que le causen perjuicio. **Por ello, al celebrar un contrato y aceptar las partes las consecuencias jurídicas que de él emanan -lo cual acontece en una relación privada de coordinación-, el contenido de los preceptos legales en él aplicados no perjudica la esfera jurídica del gobernado y, consecuentemente, no se actualiza la causa de improcedencia por consentimiento expreso de la ley.**

Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla Cobián. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Disidente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1038/94. Construcciones Pesadas Toro, S.A. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Disidente: Mariano Azuela

Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana Alva Chimal.

Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes Carvajal. 24 de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Disidente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16 de mayo de 1996. Mayoría de ocho votos. Disidente: Mariano Azuela Güitrón. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.

Amparo en revisión 1974/96. Transtanques de Occidente, S.A. de C.V. 14 de octubre de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

"Época: Novena Época
Registro: 192976
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo X, Noviembre de 1999
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a. /J. 64/99
Página: 406

LEGISLATIVO
ACTIVA
TO

TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. PARA QUE PROCEDA SU IMPUGNACIÓN EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU ESFERA JURÍDICA.

El oficio girado por la autoridad responsable director de Recaudación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones constituye sólo un mero recordatorio de los pagos a que se encuentra sujeta la quejosa, no obstante que se hace una descripción de los conceptos de pago y determinadas cantidades, no significa requerimiento alguno que pudiera considerarse como acto de aplicación de las leyes impugnadas de inconstitucionales -Ley Federal de Derechos en sus artículos 91 y 92, en relación con el 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones- toda vez que, su impugnación se hace a partir del conocimiento que la quejosa tuvo del referido oficio, lo que es insuficiente para acreditar el interés jurídico para impugnar los ordenamientos legales, pues tal aplicación no le para perjuicio alguno al no afectarle en su esfera jurídica de manera actual y real, en virtud de que será hasta que realice alguno de esos pagos, cuando se autoaplique las normas impugnadas; y en este sentido ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede impugnarse en el juicio de garantías, siendo requisito ineludible que ese primer acto de aplicación, impugnado por el gobernado, verdaderamente le afecte en su esfera jurídica de manera actual y real; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta

de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73 fracción V y 74 fracción III de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 2228/97. Tele Cable de Ciudad del Carmen, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

Amparo en revisión 2256/97. Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. 28 de enero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Álvaro Tovilla León.

Amparo en revisión 2047/98. Radio Beep del Bajío, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 13 de enero de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado.

Amparo en revisión 515/99. Radio Beep del Pacífico, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio."

(Énfasis añadido)

Conforme a la jurisprudencia que a continuación se reproduce (MISMA QUE ABIERTAMENTE INOBSERVA EL JUEZ DE DISTRITO), para considerar que dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio se concrete un acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, es un requisito *sine qua non* que éste sea uno de aquellos catalogados como de ejecución irreparable, entendidos como aquellos que afectan un derecho sustantivo tutelado por la Constitución General; por el contrario, si se está frente a un acto que no es de ejecución irreparable, el gobernado podrá controvertir su constitucionalidad en el juicio de amparo directo, sin que éste sea considerado acto reclamado destacado:

"Época: Novena Época

Registro: 170866

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXVI, Diciembre de 2007

Materia(s): Común

Tesis: P. /J. 78/2007

Página: 5

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN

28

LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento **CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL QUEJOSO**, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

Contradicción de tesis 8/2006-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Décimo Primero, Octavo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de abril de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert."

(Énfasis añadido)

De igual manera, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal (MISMA QUE INOBSERVA EL JUZGADOR):

"Época: Novena Época
Registro: 196227
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VII, Mayo de 1998
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 29/98
Página: 150

AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.

29

Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final.

Amparo en revisión 2392/97. Salomón Cohen Beraun. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

Amparo en revisión 3403/97. Organización Gastronómica Inn, S.A. de C.V. y otro. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 2958/96. Edgar Ulrich Sass Von Heinsberg. 18 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 2671/97. Salomón Cohen Beraun. 29 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

(Énfasis añadido)

Como fue anteriormente adelantado, son actos de ejecución irreparable aquellos actos de autoridad cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, son actos de ejecución irreparable, aquellos cuyos efectos no se destruyan por obtener una sentencia definitiva en el proceso natural, favorable a la pretensión del gobernado. En ese tenor, no son considerados actos de ejecución irreparable cuando sus efectos se extingan por un acto posterior, como lo puede ser un acto terminal o una resolución definitiva.

30

Al respecto, cobra aplicación el siguiente criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Época: Octava Época
Registro: 205651
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Núm. 56, Agosto de 1992
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 24/92
Página: 11

EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.

El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las **personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.**

Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente, 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla.

(Énfasis añadido)

En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no se está frente a un acto de ejecución irreparable **CUANDO LA VIOLACIÓN PUEDE DESAPARECER CON MOTIVO DE UN FALLO FAVORABLE A LOS INTERESES DEL GOBERNADO**. Al respecto, se reproduce la siguiente jurisprudencia:

“Época: Décima Época
Registro: 2017117
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 55, Junio de 2018, Tomo I
Materia(s): Común

Tesis: P./J. 11/2018 (10a.)
Página: 8

DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. **El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses.** Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimitad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mea, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza."

(Énfasis añadido)

De igual manera, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

"Época: Décima Época
Registro: 2011338
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.)
Página: 1902

ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

32

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aides Pineda Núñez.

Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez."

(Énfasis añadido)

Finalmente, no debe perderse de vista que la valoración de si un acto es o no de imposible reparación no puede efectuarse a la luz de la causa de pedir expuesta por el quejoso en el escrito de demanda pues estimar lo contrario, tendría como consecuencia que sean los mismos impetrantes de garantías quienes decidan la procedencia del juicio de amparo indirecto. Además, ello implicaría el

análisis del estudio de fondo, lo que no es propio para determinar si un acto es o no de ejecución irreparable. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 220/2005, puntualmente precisó que:

"(...)

En primer término, esta Segunda Sala considera pertinente advertir que la definición de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe atenderse a la naturaleza propia del acto y a las consecuencias que éste produce, mas no así a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues lo contrario implicaría dejar en manos de los gobernados la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisibles.

Es decir, no puede considerarse que un acto de molestia, cualquiera que éste sea, es de imposible reparación por el hecho de que el gobernado argumente que fue emitido por autoridad incompetente y que por ello es violatorio del derecho individual que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Lo anterior porque bajo dicha perspectiva cualquier acto de autoridad podría ser considerado de imposible reparación, lo que quedaría a discreción del gobernado, pues bastaría con que le imputara al acto correspondiente tal violación para que procediera el juicio de amparo en su contra, con independencia de lo fundado o infundado de su planteamiento en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto.

"(...)"

(Énfasis añadido)

En conclusión, el juicio de amparo indirecto es procedente contra normas generales aplicadas dentro de un **procedimiento seguido en forma de juicio**, siempre que se combata el primer acto de aplicación que **cause un perjuicio al quejoso**, entendido como aquel en el que se surte tanto las hipótesis como las consecuencias de la norma; siendo menester que se trate de un **acto de ejecución irreparable** por afectar derechos sustantivos tutelados por la Constitución; es decir, que la afectación no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a los intereses del afectado.

(b) Naturaleza de los Acuerdos de Inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores Regulados bajo la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En seguimiento a las conclusiones alcanzadas en el apartado anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver Contradicción de

34

Tesis 188/2012, en sesión de fecha 08 de mayo de 2014, determinó que cuando se señala como acto reclamado en forma destacada la inconstitucionalidad de una ley o reglamento, en unión a un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no constituye la resolución definitiva con la que finaliza tal procedimiento, para que proceda el amparo indirecto, es necesario, además de que se denuncie la inconstitucionalidad de la norma, que ésta se haya aplicado en un acto que genere a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, principalmente por ser aplicable analógicamente al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el párrafo tercero del artículo 158 de la anterior Ley de Amparo¹, en relación con el diverso 114, fracción II, de ese mismo ordenamiento.

Este es el último asunto del ápice de la magistratura del que se tiene conocimiento, mismo que vino a confirmar la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema y la regla de procedencia -y por lo tanto de improcedencia- para reclamar la inconstitucionalidad de leyes en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio: **el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio procede en la vía indirecta siempre y cuando cause un perjuicio de imposible reparación².**

Como prueba de lo anterior, se citan las siguientes jurisprudencias de nuestro Alto Tribunal:

"Época: Novena Época
Registro: 196227
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
Tomo VII, Mayo de 1998
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 29/98
Página: 150

**AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY
APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE**

1

Artículo 158.- [...]

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio.

² Tesis: P. /J. 78/2007, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Número de Registro: 170866, Pleno, T.XXVI, diciembre de 2007, página 5. **"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."** Contradicción de Tesis 8/2006.

35

JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.

Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final.

Amparo en revisión 2392/97. Salomón Cohen Beraun. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

Amparo en revisión 3403/97. Organización Gastronómica Inn, S.A. de C.V. y otro. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 2958/96. Edgar Ulrich Sass Von Heinsberg. 18 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 2671/97. Salomón Cohen Beraun. 29 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

(Énfasis añadido)

Época: Novena Época

Registro: 165618

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Enero de 2010

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 215/2009

Página: 267

36

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 398/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 18 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas."

(Énfasis añadido).

Inclusive, en la Sentencia Definitiva, el juzgador manifiesta que "... el máximo tribunal también sostuvo que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley, con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, siempre que cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso...".

Ahora bien, de conformidad con los artículos 10, 11, 12, 13 y 17 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se obtiene que la fase de investigación tiene como objeto que la autoridad competente se allegue de elementos que demuestren la existencia de alguna infracción a esa ley. Esta etapa inicia de oficio o por denuncia formulada por instituciones públicas contratantes o cualquier otra autoridad, particulares, sujetos anónimos; o por una denuncia internacional formulada por un Estado extranjero u organismo u organización pública internacional.

Aclarado lo anterior, por lo que respecta al **procedimiento administrativo sancionador**, en términos de los artículos 17, 18 y 31 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, inicia **a)** con motivo de los elementos que obtenga la autoridad competente durante la fase de investigación; o **b)** a partir de la **confesión** que realice la persona por la comisión de una conducta sancionada por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Bajo esas consideraciones, el artículo 18 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas indica que si de la investigación realizada se advierten elementos que hagan **presumir**³ la existencia de infracciones, el **acuerdo de inicio** debe contener, entre otros requisitos, el nombre del **presunto** infractor o infractores:

*"Artículo 18. Si de la investigación realizada se advirtieren elementos suficientes que hagan **presumir** la existencia de las infracciones previstas en el Capítulo Segundo de la presente Ley, la autoridad competente dictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual deberá ser notificado en términos del artículo 19 de esta ley.*

El acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, por lo menos:

*1. Nombre del **presunto** infractor o infractores;
(...)"*

(Énfasis añadido)

Así pues, una vez cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento contempladas en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la legislación en análisis, la autoridad competente debe dictar resolución en la que **(i)** declare la **inexistencia** de **responsabilidad**; o **(ii)** decida la imposición de las sanciones. Ello, tal y como se desprende de la siguiente transcripción:

*"Artículo 23. La resolución que se dicte **decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre la imposición de las sanciones**, debiendo notificarse al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles."*

(Énfasis añadido)

³ Conforme al diccionario de la Real Academia Española, por el vocablo presumir debe entenderse "suposición o hipótesis" o "considerado real o verdadero sin la seguridad de que lo sea".

En ese tenor, el acuerdo que da inicio al procedimiento administrativo sancionador regulado en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas **NO CAUSA NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN.**

En efecto, los acuerdos de inicio no son actos de ejecución irreparable pues aún y cuando el mismo pueda contener vicios, existe la posibilidad de que la determinación que resuelva el procedimiento no depare perjuicio alguno al presunto infractor. Además, en ese acto, únicamente se informa al gobernado los elementos constitutivos del ilícito que se presume podría actualizar, concediéndosele un plazo de 15 días para que argumente y aporte las probanzas que estime necesarias.

Así, no es jurídicamente viable declarar que el acuerdo de inicio es un acto que cause algún tipo de afectación ya que atendiendo al estado procesal que hasta ese momento guarda el procedimiento, no se afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del presunto infractor, ni produce una afectación de grado predominante o superior pues aún y tal acto subsista, el imputado aún puede obtener una resolución favorable, de manera que sus efectos son meramente intraprocesales.

Lo anterior se corrobora, pues en ese mismo acto procesal (acuerdo de inicio), se le concede al presunto infractor la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, dando respuesta a todos los actos que se le imputan, así como para ofrecer y presentar las pruebas correspondientes a fin de que se continúe con las etapas siguientes al procedimiento correspondiente.

Así pues, los acuerdos de inicio deben entenderse como **actos intermedios** no definitivos dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, los cuales no gozan autonomía frente al procedimiento administrativo sancionador.

Al respecto, cobra aplicación el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que el inicio del procedimiento de infracciones previsto en el artículo 50 Bis, de la Ley de Mercado de Valores, por el cual se informa al gobernado que se le considera un presunto infractor, constituye un acto de molestia y no privativo pues no implica una privación de derechos ni tiene efectos definitivos, ya que únicamente se le emplaza para que alegue lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos:

UNAL COLECCIÓN ADMINISTRATIVA INFRACCIONES

"Época: Novena Época
Registro: 166623
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Agosto de 2009
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 1a. CVI/2009
Página: 68

MERCADO DE VALORES. LA DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELITOS Y SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN QUE SE INFORMA A UN PARTICULAR QUE SE LE CONSIDERA PRESUNTO INFRACTOR DE LA LEY RELATIVA CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA.

La determinación emitida por la Dirección General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en que se informa a un particular que se le considera presunto infractor de la Ley del Mercado de Valores **no es más que un emplazamiento** en el procedimiento de infracciones previsto en el artículo 50 Bis, primer párrafo, fracción I, de dicha Ley (abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005), para que aquél comparezca ante la Comisión aludida dentro de un plazo de diez días hábiles a manifestar lo que a su derecho convenga, a ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual **no representa un acto privativo sino uno de molestia en tanto que no implica la privación de un derecho ni tiene efectos definitivos**, pues aunque a través de tal determinación la autoridad administrativa ordena llevar a cabo un procedimiento de inspección, revisión y supervisión, **ello no tiene el efecto de disminuir, menoscabar o suprimir definitivamente derechos del particular**, lo cual sólo se autoriza a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo directo en revisión 453/2008. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 28 de mayo de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Rafael Vázquez-Mellado Mier y Terán."

(Énfasis añadido)

En similares términos, cobra aplicación lo sostenido en el juicio de amparo indirecto 1422/2018 por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al desechar la demanda de amparo promovida por CNO en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017 instaurado por el Titular del Área de Responsabilidades, expuso lo siguiente:

"(...)

Expuesto lo anterior, si los actos impugnados por la parte quejosa en el presente juicio, no constituyen la resolución definitiva en el procedimiento administrativo incoado en su contra, es claro que no se

40

actualiza la regla general de procedencia prevista en el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, **al tratarse de actos intraprocesales.**

En este orden de ideas, la suscrita concluye que en el presente juicio **no se está en presencia de actos de imposible reparación**, pues los actos reclamados consistentes en las resoluciones de diecinueve y veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, contenidas en los oficios No. UR-DPTI-AR-491-2018 y UR-DPTI-AR-512-2018, ambas derivadas del procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, con número de expediente PTRI-S005/2017, no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a la parte agraviada en grado predominante o superior; pues aun cuando tales actos subsistan, el quejoso aún puede obtener una resolución favorable, aunado a que la suscrita advierte que tales actos no traen como efecto o consecuencia la dilación del procedimiento y mucho menos su total paralización, pues como se advierte de la propia demanda a través del segundo de los actos citados, se otorgó a la parte quejosa el plazo correspondiente para formular manifestaciones y aporte pruebas, por lo que los actos que aquí reclama pueden ser combatidos como violaciones procesales en el supuesto de que la determinación que se emita en el procedimiento de origen sea contraria a sus intereses; en consecuencia, dichos actos no son impugnables mediante el juicio de amparo conforme al artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo.

En efecto, los actos precisados, **no tienen una ejecución irreparable en su perjuicio, en virtud de que no producen una afectación procesal a la parte quejosa**, ya que la autoridad responsable únicamente llevó a cabo actos procedimentales a fin de que se continúe con las etapas siguientes al procedimiento correspondiente; en consecuencia, los efectos jurídicos producidos por los actos impugnados son meramente intraprocesales.

(...)"

Ese mismo juzgador, dentro del juicio de amparo indirecto 1252/2017, al conocer de la demanda promovida por CNO en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005/2017 instaurado por el Titular del Área de Responsabilidades, manifestó lo siguiente:

"(...)"

En este orden de ideas, la suscrita concluye que en el presente juicio no se está en presencia de actos de imposible reparación, pues los actos reclamados consistentes en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-187-2017, dictada en el procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, con número de expediente PTRI-S-005/20174, en la que se otorga el plazo de quince días hábiles a la aquí quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de los hechos que se le imputan; la notificación de dicho acuerdo y la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-0217-2017, dictada en el procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y

41

contratistas, con número de expediente PTRI-S-005/20174, en el que se condiciona la entrega de copias al pago de derechos correspondiente, no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a la parte agraviada en grado predominante o superior; y en consecuencia, dichos actos no son impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo

En efecto, los actos precisados, no tienen una ejecución irreparable en su perjuicio, en virtud de que no producen una afectación procesal a la parte quejosa, ya que la autoridad responsable únicamente llevó a cabo actos procedimentales a fin de que se continúe con las etapas siguientes al procedimiento correspondiente; en consecuencia, los efectos jurídicos producidos por los actos impugnados son meramente intraprocesales.

De lo anterior se concluye que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción III, incisos a) y b), a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, pues el quejoso reclama determinaciones con las que se da inicio al procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, su notificación y se ordena la expedición de copias certificadas previo pago de derechos, no así la resolución definitiva emitida en ese procedimiento.

Asimismo, los actos que se han precisado no pueden considerarse como de "imposible reparación", porque ante una violación del procedimiento, que se alegue una vez que se resuelva en definitiva, generaría la reposición del procedimiento con motivo de la violación procesal advertida.

(...)"

(Énfasis añadido)

De igual manera, el Juez Octavo de Distrito en Materia en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo indirecto 1490/2018⁴, al desechar la demanda de amparo indirecto promovida por CNO en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-002/2018 instaurado por el Titular del Área de Responsabilidades, expuso lo siguiente:

"(...)

En la especie, el acto que se reclama es Resolución de 29 de octubre de 2018, contenida en el oficio UR-DPTI-AR-505-2018, dictada dentro del procedimiento administrativo PTRI-S-002/2018, a través del cual se da inicio al "procedimiento administrativo de Sanción a Licitantes, Proveedores y Contratistas, que contempla el artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos", y se requiere a la quejosa a efecto de que dentro de los siguientes 15 días manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

⁴ Esta determinación fue confirmada por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 2/2019.

Toda vez que la parte quejosa manifiesta que se viola su derecho a una defensa adecuada, toda vez que con el oficio reclamado no le corrieron traslado con el dictamen de contabilidad que sirvió como base para iniciar el procedimiento administrativo instaurado en su contra, sin embargo, se le dejó a su disposición en el domicilio de la autoridad responsable.

Es decir, dicho acto no es impugnabile mediante el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se trata únicamente de una resolución por medio de la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa el inicio de procedimiento administrativo instaurado en su contra y el derecho con el que cuenta para poder aportar pruebas dejando a su disposición en las oficinas de la responsable los autos que integran el expediente, los que contienen el dictamen al que el quejoso hace referencia.

Por lo tanto no tiene sobre la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación ya que, como se advierte de la propia resolución, el dictamen contable que sirvió como base para emitir el procedimiento administrativo instaurado en su contra, se encuentra a su disposición en las oficinas de la autoridad responsable a efecto de poder consultarlos, y por lo (sic) tanto, poder realizar una defensa adecuada."

(Énfasis añadido)

Finalmente, se destaca el fallo del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 237/2018 en el que manifestó que el acuerdo de inicio o citación a un procedimiento administrativo sancionador no constituye un acto de ejecución irreparable y que, en consecuencia, a pesar de que se promueva la demanda del juicio biinstancial en contra de tal acuerdo, alegando que se trata del primer acto de aplicación de una norma, el juicio de amparo resulta improcedente; tal y como se advierte de la siguiente transcripción:

"Son infundados los argumentos expuestos, ya que contrario a lo que aduce, los actos que reclama sí pueden ser reparados al momento de dictar la sentencia definitiva, como lo expuso el juez de Distrito en su acuerdo inicial al citar la jurisprudencia 2a. /J. 43/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE."

Para evidenciar lo anterior, es necesario destacar que el quejoso se presentó al juicio de amparo señalando la inconstitucionalidad del artículo 102 Bis 1 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su carácter de

norma heteroaplicativa, esto es, como consecuencia de su primer acto de aplicación.

El acto concreto de aplicación consistió en la emisión del oficio CIGAM/203/2018 de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por la Comisionada de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Delegación Gustavo A. Madero y por el que se le fija día y hora para que compareciera a desahogar una diligencia de investigación.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que en el juicio de constitucionalidad de las normas, con motivo de su primer acto de aplicación, no debe desvincularse el estudio de la norma con el del acto concreto de aplicación, es que en primer lugar, debe concretarse la procedencia de la demanda de amparo por el acto de aplicación, para estar en aptitud de dar trámite al juicio.

Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a. /J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto:

LEYES, AMPARO CONTRA REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.

Una vez precisado —como lo hizo el juzgador— que, en primer lugar, debe analizarse si el juicio de amparo es procedente en contra del acto concreto de aplicación de la norma reclamada, cobra relevancia lo expuesto por el juzgador en el auto recurrido, en el que dijo:

"En este sentido, el acto que por esta vía se impugna no determina de manera definitiva e ineludible el rumbo del procedimiento, toda vez que puede obtener una resolución favorable, pues tal cuestión no determina de manera necesaria, ineludible o forzosa que se emita una resolución contraria a sus intereses, sino que esto se encuentra sujeto

COLEGIO
TRABAJO
AUT

49

a lo que suceda en el expediente valorándolo en su integridad, de manera completa y no solo apreciándolo de forma parcial. Así, tenemos que cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, a fin de verificar si tales derechos se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y que por estos debe entenderse a los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Así, los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales —o de los dictados en procedimientos seguidos en forma de juicio— incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquellos pueden ejercerse".

Afirmaciones que sustentó en la, ya referida, jurisprudencia 2a. /J. 43/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto:

[...]

Con base en lo anterior, contrario a lo que aduce el recurrente, el juez de Distrito fundó y motivó su determinación, pues consideró que no era posible tramitar una demanda de amparo en la que se reclama la inconstitucionalidad de una norma general en su carácter de heteroaplicativa, sin previamente valorar la procedencia por cuanto hace al acto reclamado.

Acto que, se corrobora, no tiene el carácter de sustantivo ni mucho menos de irreparable, pues consiste en el oficio CIGAM/203/2018 de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por el que se le citó a comparecer en una investigación.

Lo anterior es así ya que, como lo expresa la Segunda Sala en el criterio citado, la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce.

En el caso particular, el acto que se combate, atendiendo a su naturaleza y efectos —citación a procedimiento administrativo sancionador—, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución.

Lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto.

Así, es evidente que el acto reclamado como primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, no satisface los requisitos de procedencia, al no revestir el carácter de sustantivo, ni afectar en grado preponderante los derechos consagrados a favor del quejoso.

Sin que sea un obstáculo para la decisión el hecho que en sus agravios cite la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.

Lo anterior es así pues el criterio que acompaña a sus agravios, no es aplicable al caso concreto, toda vez que en éste se analizó lo relativo al procedimiento de ejecución de sentencia en términos de lo expuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, que en nada se relaciona con lo que aquí se analiza.

Tampoco es relevante para la decisión el hecho que aduzca que la autoridad que lo cita a procedimiento carece de competencia legal, toda vez que, como se dijo, las violaciones procesales que pudiera hacer valer en contra del acto por el que se le llamó a procedimiento administrativo sancionador, serán analizadas al momento en que se dicte sentencia definitiva, o bien, en el recurso que al respecto pueda interponer, o bien en el juicio en el que pretenda alcanzar la nulidad del acto administrativo, que a su vez podrá ser revisado en amparo directo."

En términos de lo anterior, el acuerdo de inicio es un acto procesal tendientes a la iniciación y tramitación del procedimiento sancionador previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, mediante el cual se concede un plazo de 15 días para que el presunto infractor despliegue su defensa a fin de desestimar la acusación en su contra. De lo que se sigue que ese acto no causa afectación alguna ya que los efectos jurídicos producidos son meramente intraprocesales.

AL COLEGADO
ADMINISTRATIVA
ACUITO

(c) **ilegalidad de la Sentencia Definitiva.**

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se deduce la ilegalidad de la Sentencia Recurrída, pues las quejas si impugnaron los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio con motivo de su primer acto de aplicación, a saber, la resolución que puso fin a los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

La ilegalidad con la que se condujo el juzgador es evidente, pues parte de la premisa falsa consistente en que los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores configuraron el primer acto de aplicación de las normas reclamadas; sin embargo el hecho que en dichos actos el Titular del Área de Responsabilidades haya citado los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio no conlleva a su primer acto de aplicación en perjuicio de los quejosos, ya que no se actualizaron todas las hipótesis y consecuencias previstas por las normas.

En ese sentido, el simple hecho que el Titular del Área de Responsabilidades haya citado los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio y que se haya determinado que en caso de no desvirtuarse la imputación se impondrían las sanciones correspondientes, no significa per se que se genere el primer acto de aplicación que causa perjuicio a mis representadas, pues en el caso concreto, no fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativas, a saber, que estuviese plenamente acreditado que las quejas simulaban el cumplimiento de los requisitos o reglas previstas en la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública y por ende, que debían ser sancionados con multa económica e inhabilitación para participar en licitaciones de carácter federal.

Al respecto, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal:

"Época: Décima Época
Registro: 159929
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
Libro XII, Octubre de 2012, Tomo 2

47

Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 18/2012 (9a.)
Página: 812

LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.

Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley solo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. **En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.**

Amparo directo en revisión 1221/2007. Ford Motor Company, S. A. de C.V. 24 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.

Amparo directo en revisión 2163/2007. Grupo Exxonmobil, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo directo en revisión 1963/2011. Axa Seguros, S.A. de C.V., antes Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 1o. de febrero de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana Elena Torres Garibay.

Amparo directo en revisión 2361/2011. Operadora Canpessa, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo directo en revisión 829/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 9 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez."

(Énfasis añadido)

En ese contexto, si bien, desde los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores conocieron los preceptos legales que dotaban al Titular del Área de Responsabilidades de competencia y facultades para iniciar la imputación en contra de las quejas por la posible comisión de la conducta típica prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en

48

Contrataciones Públicas, así como las pruebas en que la responsable basaba su dicho, no implica un acto de aplicación en perjuicio de los quejosos.

Ello es así, dado que en tales actos, el Titular del Área de Responsabilidades únicamente llevó a cabo actos a fin de que se continúe con las etapas siguientes a los procedimientos correspondientes. Además, en esa etapa, las acusaciones son meras presunciones, pues no había certeza sobre si los quejosos iban a ser sancionados; es decir, si incurrían en responsabilidad por la falta de la emisión de la Garantía Corporativa que OICIMEX supuestamente debía suscribir para garantizar el cumplimiento del Contrato de Obra Pública, pues ello se verificaría hasta que concluyeran los procedimientos en todas sus etapas.

Lo anterior, es tan claro pues fue la propia autoridad responsable la que en los acuerdos de inicio determinó que las conductas desplegadas por las ahora recurrentes, "posiblemente" actualizaban el ilícito administrativo.

A mayor abundamiento, los acuerdos de inicio de los Procedimientos Sancionadores no pueden ser considerados como el primer acto de aplicación en perjuicio de CNO, OICIMEX y Gleiber José de Faria de las normas combatidas en los juicios de amparo 526/2018 y acumulados, toda vez que no se actualizó el elemento de perjuicio, es decir, el agravio personal y directo en la esfera jurídica de los quejosos ya que para ello era menester que el Titular del Área de Responsabilidades, en términos del artículo 23 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, decidiera sobre la responsabilidad de mis representadas y la imposición de las sanciones.

Ello se justifica tomando en cuenta los siguientes presupuestos: (i) el acuerdo inicial, tiene por objeto, notificar al sancionable el inicio de un procedimiento; (ii) en dicho procedimiento, podrá ejercer sus derechos inherentes a las formalidades del mismo con el objeto fundamental de acreditar que no se encuentra en el supuesto sancionable; (iii) bajo ese entendido, la consecuencia definitiva de la sustanciación podrá ser (a) condena; (b) absolución.

De esa forma, una norma jurídica se considera aplicada únicamente cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia de derecho que se sigue del cumplimiento de las condiciones de aplicación de dicha norma, por considerar, precisamente, que esas fueron

49

satisfechas. Dicha situación, por tanto, constituye el punto determinante para establecer si una norma jurídica fue o no aplicada en un caso particular.

Entonces, contrariamente a lo sostenido por el Juez, es claro que el inicio de un procedimiento por la presunta comisión de un tipo administrativo, no puede constituir el acto de aplicación del tipo administrativo presuntamente actualizado, simplemente porque la actualización o no, es el objeto del procedimiento. Máxime que en la resolución definitiva, los imputados pueden ser absueltos de toda responsabilidad.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Décima Época
Registro: 2004576
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 127/2013 (10a.)
Página: 1556

RENTA. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO PAGADO POR LA PERCEPCIÓN DE INTERESES, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 160, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009).

El precepto citado establece que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables por concepto de intereses, que no excedan de \$100,000.00, considerarán la retención que se les haya efectuado, en los términos que el propio numeral señala, como pago definitivo y, por tanto, no estarán obligadas a presentar la declaración anual del ejercicio. En ese tenor, el primer acto de aplicación de dicha hipótesis normativa susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de aquéllas, no se actualiza con la sola retención del impuesto causado por la percepción de intereses que realicen las instituciones financieras o demás sociedades no integrantes del sistema relativo, pues en ese momento no tienen la certeza de si habrán de subsumirse o no en los supuestos del artículo 160, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que será hasta que concluya ese periodo tributario cuando conocerán si excede o no la mencionada cantidad y, por ende, si los pagos provisionales retenidos deben considerarse como definitivos. Lo anterior no significa que la presentación de la declaración anual del ejercicio pueda considerarse como el primer acto de aplicación del dispositivo legal indicado, o que constituya el momento en que los causantes se ostentan sabedores del acto de individualización de la

AL COLEGADO
ISTRATIVA
RCUITO

50

norma, pues ésta no los obliga a presentarla, habida cuenta que los efectos negativos de esa disposición se materializarán en perjuicio de la esfera jurídica de dichos gobernados hasta que la autoridad exactora les niegue expresa y definitivamente la devolución de algún saldo a favor, por considerar que se ubican en el supuesto de excepción de considerar como definitivos los pagos provisionales, con base precisamente en la aplicación del citado artículo.

Contradicción de tesis 128/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Tesis de jurisprudencia 127/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de dos mil trece."

(Énfasis añadido)

Bajo esas consideraciones, es insensato que el Juez de Distrito considere que desde el acuerdo de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, es cuando la parte quejosa materializó en su esfera jurídica el perjuicio que aduce le ocasionan los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y PRIMERO del Acuerdo Delegatorio, pues de haberse resuelto el Procedimiento Administrativo Sancionador a su favor, ningún daño le hubiese ocasionado en su esfera jurídica y por ende EL ACTO DE APLICACIÓN HABRÍA QUEDADO SIN EFECTOS.

Afirmación que se robustece tomando en consideración el acuerdo de inicio no es un acto de imposible reparación, de manera que no puede constituir un acto de aplicación de las normas impugnadas al no tener inmerso un perjuicio, pues se insiste, solo tiene como efecto sujetar a las personas que participan en contrataciones públicas de carácter federal al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad. Amén que la resolución que culmine con el mismo pueda ser favorable a los intereses del imputado.

Lo anterior se fortalece con los siguientes criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 175221
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Abril de 2006

51

Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 43/2006
Página: 242

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.

La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio se concluye que **no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiese adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto.**

Contradicción de tesis 220/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Primero y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de marzo de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.

JNAL COLEGIADO
INSTRUMENTA
CIRCUITO

52

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot."

"Época: Novena Época
Registro: 164919
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Marzo de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 37/2010
Página: 1037

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS U OMISIONES IMPUTADOS, PARA VERIFICARSE EN UN LUGAR DISTINTO AL EN QUE SUCEDIERON Y LA CITACIÓN PARA ESA DILIGENCIA, NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

El señalamiento de la audiencia prevista en los artículos 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogado en materia federal pero aplicable a los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, y 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la cual inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, para verificarse en un lugar distinto al en que sucedieron los actos u omisiones imputados y, en vía de consecuencia, la citación a esa diligencia, no afectan el derecho sustantivo de audiencia del servidor público, por lo que no son actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto por no actualizarse el supuesto del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos no podrían paralizarse por esta razón, aunado a que no se limita el derecho del gobernado de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga.

Contradicción de tesis 425/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Quinto Circuito y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de enero de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado."

(Énfasis añadido)

Por ende, si en los acuerdos de inicio no se causó perjuicio a los quejosos, invariablemente dichos actos intraprocesales no podían ser reclamados en juicio de

53

amparo indirecto para impugnar la constitucionalidad de las normas generales. Al respecto, cobra aplicación la tesis cuyo rubro y contenido son los siguientes:

"Epoca: Novena Época
Registro: 200149
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo III, Abril de 1996
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P. LVII/96
Página: 124

**LEYES. EL ACTO DE APLICACION QUE DETERMINA LA
PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL
QUEJOSO.**

Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia.

Amparo en revisión 5483/95. Granja San Germán de Guaymas, S. de P. R. de R.I. 8 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega."

Estimar que el simple hecho que el Titular del Área de Responsabilidades, en los acuerdos de inicio son el primer acto de aplicación de las normas por informarles a las quejas que presumiblemente habían incurrido en responsabilidad por la comisión de conductas ilícitas y señalando las pruebas que sustentaban la acusación, conllevaría al absurdo de concluir que en todo caso, la investigación llevada a cabo por el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos en el expediente administrativo No. 2017/PTI/DE109 es aquel en donde se concretó el primer acto de aplicación, en perjuicio de mis representadas. Ello, ya que en dicha investigación es donde verdaderamente se sustenta la acusación y se presume la comisión de un hecho antijurídico sancionado por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

54

No obstante lo anterior, la Sentencia Definitiva es ilegal pues, como ha sido expuesto en el presente agravio, el auto de inicio no puede ser el primer acto de apelación de las disposiciones legales materia del juicio de amparo, debido a que no se actualizó el elemento de perjuicio puesto que no se concretaron todas las hipótesis y las consecuencias de las normas.

Es decir, las quejas no consintieron fácilmente los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, en tanto los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores había una mera expectativa en cuanto a que éstas actualizaron el supuesto hipotético sancionado que podría ser destruida al dictarse la resolución de fondo. De lo que se sigue que esos actos (acuerdos de inicio) no afectaban de manera cierta e inmediata, derecho alguno de mis mandantes.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que en caso de estimarse que el primer acto de aplicación, aun y cuando no es de imposible reparación, pueda combatirse a través del juicio de amparo directo, reclamando las normas aplicadas durante los Procedimientos Administrativos Sancionadores, en razón de que el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo, tratándose de la impugnación normas generales, son procedimientos constitucionales con requisitos de procedibilidad y efectos protectores distintos.

Así, el juicio de amparo indirecto tiene como excepción al principio de definitividad, que el impetrante de garantías controvierta la inconstitucionalidad de una disposición legal ya sea que por su vigencia (naturaleza autoaplicativa) o con motivo de su primer acto de aplicación (naturaleza heteroaplicativa) se cause un efecto perjudicial en su esfera jurídica. De manera que de obtenerse un fallo favorable, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, los efectos serán desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación presente y futura de la norma.

Por el contrario, tratándose del juicio de amparo directo, el quejoso debe resentir los efectos perjudiciales de la norma hasta en tanto concluya el procedimiento y se interpongan todos los recursos o medios legales para revocar la determinación, pues la norma no es el acto reclamado destacado aunado a que únicamente procedente en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Así, no existe el deber de combatir el primer acto de aplicación

de la norma, pues conforme a la estructura de ese tipo de juicio, el efecto del fallo protector es solamente en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución.

Ilustra lo anterior, el siguiente criterio judicial:

Época: Décima Época
Registro: 2002703
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 1/2013 (10a.)
Página: 5

**AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL
CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA
APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE
TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN.**

La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en que pueden impugnarse de manera destacada para no tener tal carácter, particularidad que la torna incompatible con el amparo directo, en el cual lo que se reclama como acto destacado no es la ley, sino la sentencia o resolución definitiva, por lo que en todo caso únicamente es aplicable a la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, mas no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta sólo es reclamada a través de los conceptos de violación, habida cuenta que una eventual concesión de la protección constitucional se limitaría al acto impugnado, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal contenida en la parte considerativa de una sentencia de amparo directo, a diferencia de lo que sucedería en el juicio de amparo indirecto, no tendría el efecto de impedir que al quejoso se le aplique la norma general respectiva tanto en el acto reclamado como en cualquier otro mientras permanezca vigente, sino que sólo dejaría insubsistente la resolución impugnada; de ahí que, cuando en la vía uniinstancial se controvierte la regularidad constitucional de una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado ni tampoco puede regirse por las mismas reglas de procedencia de la acción en la vía biinstancial, máxime que la mencionada causa se edifica en aspectos que rigen sólo para el amparo indirecto y que son incompatibles con el directo. En tal virtud, no deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, cuando la sentencia reclamada constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; sin embargo, en todo momento es preciso verificar si su aplicación perjudica al promovente y si no ha precluido su derecho a impugnarla.

UNAL DEL ESTADO
ADMINISTRATIVO
CIRCUITO

50

Contradicción de tesis 58/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de noviembre de 2012. Mayoría de nueve votos; votó en contra de la procedencia de la contradicción Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

(Énfasis añadido)

En ese contexto, resulta ilegal que el A quo pretenda que, en todo caso, mis representadas hubieren promovido juicio de amparo directo en contra de la Resolución Administrativa para impugnar el contenido de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, pues éstas optaron por sujetarse al procedimiento del juicio de amparo indirecto por los beneficios que éste produce como lo es el análisis de la suspensión del acto reclamado en la vía incidental, y la posibilidad de desincorporar la aplicación presente y futura de las normas, dejando sin efectos el acto de aplicación.

Así, resulta ilegal que el A quo pretenda desconocer la procedibilidad del juicio de amparo indirecto cuando se combate la constitucionalidad de una norma general con el único objeto de no estudiar el fondo del asunto, en franca violación al mandato contenido en el párrafo tercero del artículo 17 constitucional que dispone que "*Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.*". Ello es así, pues como ha sido demostrado, mis mandantes sí combatieron en tiempo y forma, el primer acto de aplicación de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, y por ende, colmaron todos los requisitos para la procedibilidad de las demandas de amparo indirecto.

Finalmente, es importante denunciar la ilegalidad de la Sentencia Definitiva, en la parte que considera que las hoy recurrentes, al conocer la conducta ilícita que se les atribuía y el precepto normativo que la regula también tomaron conocimiento de las sanciones que podrían ser decretadas en su contra, y por ende, en los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores también les fue aplicado el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

57

El Juez de Distrito se equivoca ya que de nueva cuenta, el auto de inicio no causa perjuicio alguno, perdiendo de vista que no es sino hasta la resolución que pone fin al procedimiento sancionador cuando la autoridad modula e individualiza la sanción.

En efecto, conforme a los artículos 23 y 28 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, es en la resolución que culmina el procedimiento cuando la autoridad debe tomar en cuenta (i) la gravedad de la infracción; (ii) las circunstancias económicas del infractor; (iii) los antecedentes del infractor; (iv) el grado de participación del infractor; (v) los medios de ejecución; (vi) la reincidencia en la comisión de infracciones; y (vii) el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción.

Para mayor claridad, se reproduce el contenido del artículo 28 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

"Artículo 28. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán en cuenta los elementos que a continuación se señalan:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra;

II. Las circunstancias económicas del infractor.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los contratos que el infractor tenga celebrados y estén registrados en CompraNet, o bien, si no se contara con esa información, se podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dé origen al procedimiento administrativo sancionador de que se trate;

III. Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácter federal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales;

IV. El grado de participación del infractor; **V.** Los medios de ejecución;

VI. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, y

VII. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente en una o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir de que surta efectos la notificación de la primera sanción."

TRIBUNAL Colegiado
Administrativo
del Circuito

53

Así, no puede desconocerse que, conforme a la jurisprudencia **"AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD."**⁵, el artículo 27 de la Ley Federal en Contrataciones Públicas y el diverso numeral 28 de esa legislación, conforman un **sistema normativo** en virtud de su íntima relación que existe entre éstas pues la primera contempla las sanciones que la autoridad puede imponer por incumplimiento a la ley, mientras que la segunda prevé los elementos que debe tomar en cuenta para individualizar la sanción.

En ese tenor, se está en presencia de un sistema normativo al estar íntimamente relacionadas, de manera que **ese sistema no puede operar sin alguna de ellas** pues por una parte, de prevalecer el artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas sin una disposición que prevea la sanción administrativa por su inobservancia, simplemente sería una norma imperfecta carente de coercibilidad.

Ante tal escenario, el solo hecho que en los acuerdos de inicio se exponga la causa de la imputación y por ende, las sanciones que podría haber determinarse, no lleva inmerso la aplicación del artículo 27 de la Ley Federal en Contrataciones Públicas dado que es menester que la misma sea modulada por la autoridad aplicadora y por ende, **conforman un sistema normativo que únicamente puede ser aplicado en la resolución que declare que el gobernado ha actualizado alguna de las conductas sancionables por esa ley.**

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se concluye que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, pues las quejas no consintieron tácitamente el acto de aplicación de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, en tanto promovieron sendas demandas de amparo dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación de la Resolución Administrativa.

Bajo esa línea de pensamiento, sus Señorías deberán revocar la sentencia que se recurre, pues ha sido acreditado que (i) la simple cita de las disposiciones legales en los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos

⁵ Semanario Judicial de la Federación. Registro 169558. Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Pág. 400. 2a. /J. 100/2008.

59

Sancionadores, jurisprudencialmente, no puede considerarse como actos de aplicación; (ii) los acuerdos de inicio no generan efectos negativos en las esferas jurídicas de las recurrentes; y (iii) no puede arbitrariamente desconocerse los requisitos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Amparo, ese Órgano Colegiado deberá desestimar la causal de improcedencia aducida por el *A quo* a fin de levantar el sobreseimiento y así, realizar el estudio de constitucionalidad de las normas generales materia de la demandas de amparo promovidas por Gleiber José de Faria, OICIMEX y CNO.

TERCERO.- LA SENTENCIA RECURRIDA ESTÁ INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA YA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ES EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO DE LAS NORMAS GENERALES COMBATIDAS.

La Sentencia Recurrída es ilegal en atención a que contrariamente a lo sostenido por el *A quo*, el primer acto de aplicación de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio, se generó en la Resolución Administrativa dictada en los Procedimientos Administrativos Sancionadores, ya que fue hasta ese acto que se materializaron todas las consecuencias y efectos de las hipótesis normativas en detrimento de las recurrentes.

El fallo argumentativo del *A quo*, según lo demostraremos puntualmente en párrafos subsiguientes, radicó fundamentalmente en considerar que el primer acto de aplicación de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y artículo Primero del Acuerdo Delegatorio se dio al momento en el que se notificó el acuerdo de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores y no en la Resolución Administrativa.

Por consiguiente —señala el Juez Federal— si fue en ese momento el supuesto acto de aplicación, y no en la Resolución Administrativa, debe de considerarse que las normas combatidas se encuentran tácitamente consentidas.

60

Ahora bien, tratándose de la aplicación concreta, para los efectos de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, debemos tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar precisamente que éstas fueron satisfechas, por lo que es relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, como se advierte de la tesis transcrita a continuación:

"Época: Novena Época
Registro: 200149
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo III, Abril de 1996
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P. LVII/96
Página: 124

LEYES. EL ACTO DE APLICACION QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO.

Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia.

Amparo en revisión 5483/85. Granja San Germán de Guaymas, S. de P. R. de R.I. 8 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega."

Con base a lo anterior, las ahora recurrentes consideran que no fue sino hasta la Resolución Administrativa que se determinó que la hipótesis fáctica de la norma (hechos) empataba con la hipótesis normativa (lege) y que, por tanto, se actualizaba la sanción. Cuestión que se deduce del simple análisis que sus Señorías efectúan de la Resolución Reclamada, mismo que se transcribe a continuación:

61

"Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

(...)

RESULTANDO

I. Que mediante oficio No. UR-DPTI-AQDI-753-2017, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete; el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, hizo del conocimiento de esta Área de Responsabilidades de la misma Delegación, que en términos de la investigación realizada en el expediente administrativo No. 2017/PTI/DE109, se desprenden actos cometidos por la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; por GLEIBER JOSÉ DE FARÍA en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; y CONSTRUCTORA NORBERO ODEBRECHT, S.A., quienes podrían actualizar el artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

(...)

Por todo lo considerado por esta autoridad y una vez atendidos los argumentos de defensa, pruebas y alegatos presentados por la empresa la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., se **acredita plenamente** que dicha persona moral simuló el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que mediante escritos de fechas tres de febrero y veinte de octubre, ambos de dos mil dieciséis, entregó a Pemex Transformación Industrial la garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual carece de validez y eficacia jurídica en virtud de no haber sido emitida en los términos precisados en dicha Cláusula 13, Apartado A del mismo, situación que cobró mayor relevancia ante la falta de capacidades técnicas y financieras de la empresa referida; **tal y como se acreditó** con los Considerandos Tercero y Quinto de la presente resolución, **por lo que su conducta se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se transcribe a continuación:**

(...)

Así mismo, **por todo lo considerado por esta autoridad y una vez atendidos los argumentos de defensa, pruebas y alegatos** presentados por Gleiber José de Faria en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., se **acredita plenamente** que dicha persona, en interés de la moral referida, simuló el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que mediante escrito veinte de octubre de dos mil dieciséis, entregó a Pemex Transformación Industrial la garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual carece de validez y eficacia jurídica en virtud de no haber sido emitida en los términos precisados en dicha Cláusula

62

13, Apartado A del mismo, situación que cobró mayor relevancia ante la falta de capacidades técnicas y financieras de la empresa referida; **tal y como se acreditó** con los Considerandos Tercero y Quinto de la presente resolución, **por lo que su conducta se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se transcribe a continuación:**

(...)

Por último, **por todo lo considerado por esta autoridad y una vez atendidos los argumentos de defensa, pruebas y alegatos presentados por Gleiber José de Faria en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., se acredita plenamente** que dicha persona, evadió el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que como CONTRATISTA no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., presentada para realizar el trámite de cesión de derechos del contrato referido, carece de validez y eficacia jurídica en virtud de no haber sido emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13, Apartado A del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15; **por lo que su conducta se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se transcribe a continuación:**

(...)

SÉPTIMO. Individualización de la sanción.

Para el efecto de imponer la sanción prevista en el artículo 27, fracciones I y II, incisos a) y b) de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que obliga a la Autoridad a considerar elementos tanto objetivos, como subjetivos, a efecto de cumplir con la garantía de legalidad y dar a conocer al particular con toda precisión las causas y motivos que originaron la determinación conducente.

(...)

OCTAVO. Consecuencias de la Resolución.

A. ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

a) MULTA. (...)

En virtud de lo anterior, esta autoridad determina imponer a la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., multa a razón de \$543'488,615.90 (Quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 M.N.), que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

63

b) **INHABILITACIÓN.** Se impone a la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., inhabilitación por un plazo de dos (2) años, seis (6) meses, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

B. GLEIBER JOSÉ DE FARIA.

a) **Multa.** El artículo 27, fracción I, incisos a) de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, establece la imposición de una multa de 1000 (mil) a 50,000 (cincuenta mil) veces el salario mínimo vigente; luego entonces, se impone a GLEIBER JOSÉ DE FARIA, multa a razón de \$1'262,222.60 (un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos veintidós pesos 60/100 M.N.) que es igual a 14,285 veces el salario vigente para dos mil dieciocho que es \$88.36 pesos (ochenta y ocho pesos 33/100 M.N.), de acuerdo con la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, multa que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

b) **INHABILITACIÓN.** Se impone a GLEIBER JOSÉ DE FARIA inhabilitación por un plazo dos (2) años, tres (3) meses y doce (12) días, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

C. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.

a) **Multa.** (...)

En virtud de lo anterior, esta autoridad determina imponer a la empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., multa a razón de \$543'488,615.90 (Quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 M.N.), que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

b) **INHABILITACIÓN.** Se impone a la empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., inhabilitación por un plazo de dos (2) años, seis (6) meses, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación.
(...)

RESUELVE

PRIMERO.- La empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., se ubicó en el supuesto del artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, motivo por el cual se impone:

Multa de \$543'488,615.90 (Quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 M.N.) que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

Inhabilitación por un plazo de dos (2) años, seis (6) meses, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación
(...)

SEGUNDO.- GLEIBER JOSÉ DE FARIA; se ubicó en el supuesto del artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, motivo por el cual se impone:

Multa de \$1'262,222.60 (un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos veintidós pesos 60/100 M.N.) que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

Inhabilitación por un plazo de dos (2) años, tres (3) meses y doce (12) días, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación

TERCERO.- La empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. se ubicó en el supuesto del artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, motivo por el cual se impone:

Multa de 543'488,615.90 (Quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 M.N.) que deberá pagarse en el Servicio de Administración Tributaria.

Inhabilitación por un plazo de dos (2) años, seis (6) meses, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación
(...)"

(Énfasis añadido)

Con base al contenido de la Resolución Administrativa, se deduce lo siguiente:

- a) El Titular del Área de Responsabilidades estudió la presunta infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas atribuida a los recurrentes.
- b) El Titular del Área de Responsabilidades examinó los argumentos de defensa, pruebas y alegatos presentados por CNO, OICIMEX y Gleiber José de Faria en los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

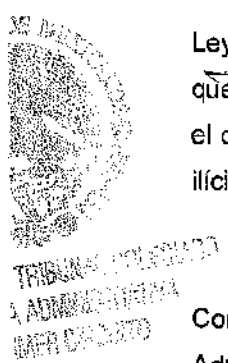
- c) El Titular del Área de Responsabilidades concluyó que estaba plenamente acreditado la comisión de la conducta típica prevista en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
- d) El Titular del Área de Responsabilidades, conforme al artículo 28 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, procedió a la individualización de las sanciones.
- e) El Titular del Área de Responsabilidades sancionó a mis mandantes con multa e inhabilitación.

En términos de lo anterior, resulta patente que el artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se aplicó en perjuicio de los quejosos, en la Resolución Administrativa precisamente porque en ese acto, según el dicho de la responsable, se acreditó plenamente la actualización de la conducta ilícita.

Además, es notorio que el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas fue aplicado en perjuicio de los quejosos en la Resolución Administrativa, ya que el Titular del Área de Responsabilidades individualizó las sanciones tomando en consideración, lo siguiente: (i) la gravedad de la infracción, (ii) las circunstancias económicas del infractor; (iii) los antecedentes del infractor; (iv) el grado de participación del infractor; (v) los medios de ejecución; (vi) la reincidencia en la comisión de infracciones; y (vii) el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción.

En conclusión, las hipótesis y consecuencias de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se concretizaron por primera vez en la Resolución Administrativa, circunstancia que provoca que sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto de aplicación de las disposiciones legales.

Afirmación que se robustece atendiendo a que en los amparos en revisión 1047/2018 resuelto por la Primera Sala; 487/2015, 668/2015 y 259/2015 resueltos por la Segunda Sala; y 1101/2015 resuelto por el Pleno, todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho tribunal constitucional precisamente abordó el estudio constitucional de las disposiciones legales reclamadas en los juicios de



66
amparo de origen, aplicadas con motivo de la emisión de resoluciones que dieron fin a procedimientos de responsabilidad administrativa.

Por tanto, al haber quedado evidenciado el fallo argumentativo en el que incurrió el Juez de Distrito, es claro que la Sentencia Recurrída es ilegal en tanto que es incorrecto que el primer acto de aplicación de los artículos reclamados de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Acuerdo Delegatorio hayan sido generados a través de los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en tanto que bien fue citado por la autoridad, sus efectos y consecuencias no fueron materializados sino hasta la resolución definitiva. En específico, en el encuadre de los hechos infractores, dentro de la conducta y la correspondiente aplicación de la sanción.

CUARTO. LA SENTENCIA DEFINITIVA ES ILEGAL PUES NO SE TRASGREDE LA COSA JUZGADA RESPECTO AL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 9° DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN PERJUICIO DE CNO.

En el presente agravio se acredita que la Sentencia Definitiva es ilegal por decretar el sobreseimiento de la acción intentada por CNO en contra del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con base en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que la determinación que se adopte en el presente asunto no afectará lo resuelto en el juicio de amparo indirecto 250/2018.

Lo anterior es así, toda vez que el aludido juicio de amparo apoya sus consideraciones en un diverso juicio de amparo (1252/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México), mismo que a la fecha no ha sido resuelto de manera definitiva.

Además, de analizarse la procedencia del amparo indirecto en contra del 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no tendría como consecuencia desconocer la autoridad de la cosa juzgada en atención a que la premisa en que se sustenta el fallo del juicio amparo indirecto 250/2018, es a partir de un acto que actualmente ha quedado sin efectos con motivo de otra ejecutoria de amparo, por lo cual resulta ilegal que se declare el sobreseimiento en términos del artículo XI, de la Ley de Amparo.

67

Con la finalidad de evidenciar lo anterior, resulta menester abordar en un primer momento, los argumentos esbozados por el juzgador para declarar que existe cosa juzgada respecto al primer acto de aplicación del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en perjuicio de CNO:

"En este sentido, es fundada la causa de improcedencia contenida en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la empresa quejosa Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima como enseguida se expone.

Obra en autos copia certificada de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio 1642/2017, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (fojas 456 a 499, del tomo 1); asimismo, se tiene a la vista la sentencia del juicio de amparo 250/2018, del índice del Juzgado Tercero de la misma especialidad y residencia, ambos promovidos por Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima, en contra de las siguientes autoridades responsables y actos reclamados:

(...)

De las transcripciones que anteceden, se advierte que la empresa quejosa Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima, promovió demanda de amparo, esencialmente contra las mismas autoridades y, entre otros, en contra del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también impugnado en este juicio.

(...)

De esta última resolución se extrae que el juez del conocimiento determinó decretar el sobreseimiento con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al considerar que el primer acto de aplicación en perjuicio de la gobernada respecto de la norma impugnada, se materializó a través de la emisión de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo de sanción PTRI-S-005-2017 (instaurado contra la aquí quejosa), cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del juicio de amparo 1642/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Cabe destacar que esa determinación fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 381/2018.

En ese contexto, es evidente que respecto del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que en un juicio previo que ha causado ejecutoria, se determinó claramente la inejercibilidad, por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima, de la acción de amparo en contra de ese acto, dado su impugnación, con motivo de su primer acto de aplicación, se verificó a través de actos que son ajenos a la litis de este juicio;

68

tema sobre el cual, este órgano de control de la constitucionalidad no puede volver a analizar.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con la empresa quejosa Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima.
(...)"

(Énfasis añadido)

De la anterior transcripción se deduce que el A quo estima que en la especie, debe sobreseerse el juicio de amparo promovido por CNO en contra del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con motivo de la ejecutoria que recae al juicio de amparo 250/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Así, el juzgador federal expone que en el referido juicio de amparo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que el primer acto de aplicación, en perjuicio de CNO, del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo constituyó la notificación que recayó a la resolución de 8 de diciembre de 2017, dictada por el Titular del Área de Responsabilidades en el procedimiento administrativo de sanción PTRI-S-005-2017, cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del diverso juicio de amparo 1642/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

En esos términos, el A quo concluye que en el presente asunto no puede analizarse la procedencia de la acción intentada por CNO en contra del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pues se atentaría en contra de la cosa juzgada que deriva de lo resuelto en el juicio de amparo indirecto 250/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, la Sentencia Definitiva es ilegal por encontrarse indebidamente fundada y motivada toda vez que la determinación alcanzada en el amparo indirecto 250/2018 no impide abordar en análisis de procedencia y de fondo respecto al acto reclamado consistente en el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Elo es así, pues en primer término, el juzgador perdió de vista un hecho notorio a saber, que si bien dentro del juicio de amparo indirecto 1642/2017, la Juez

Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia para el efecto de sobreseer el juicio de amparo en contra de la multitudada norma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la fecha esa determinación continúa sub iudice con motivo del recurso de revisión interpuesto por CNO.

En efecto, en términos de la jurisprudencia P. /J. 16/2018 (10a.) de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", es un hecho notorio que el pasado 17 de agosto de 2018, CNO interpuso recurso de revisión a fin de controvertir la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1642/2017. Lo anterior, tal y como se advierte de los datos que aparecen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal, y que a continuación se reproducen:

Sentencia Recurso contra Sentencia	
Fecha interposición recurso contra sentencia	17/08/2018
Tipo recurso contra sentencia	Revisión
Fecha remisión a tribunal colegiado de circuito recurso contra sentencia	24/08/2018
Número de toca	317/2018
Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso contra sentencia	Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de

Por tanto, la determinación alcanzada en el juicio de amparo indirecto 250/2018 no son vinculantes para el presente asunto, ya que en dicho juicio se construyó la argumentación en torno a un asunto que no ha sido resuelto en todas sus etapas, es decir, no se ha dictado sentencia ejecutoria.

De igual manera, constituye un hecho notorio que en sesión celebrada el 28 de febrero de 2019, los magistrados integrantes del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitir los autos del amparo en revisión 317/2018 al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que éste órgano colegiado sea quien en definitiva resuelva el juicio de amparo indirecto 1642/2017 del Índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad der México.

En ese contexto, el estado que actualmente guarda el juicio de amparo indirecto 1642/2017 es que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito debe resolver el amparo en revisión 116/2019 a fin de resolver en definitiva si el primer acto de aplicación en perjuicio de CNO del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo constituyó la notificación de la resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017, o bien, un diverso acto.

De lo que se sigue que en el caso que nos ocupa, no existe obstáculo jurídico alguno para abordar el estudio de fondo en contra de la norma tildada de inconstitucional, ya que no se contravendría la calidad de cosa juzgada, precisamente porque la sentencia definitiva del juicio de amparo indirecto 1642/2017 no ha constituido cosa juzgada en términos de los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento de sus Señorías otro hecho notorio, a saber, que el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 192/2018, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017; motivo por el cual, no puede actualizarse la figura de cosa juzgada sobre actos de autoridad que actualmente son inexistentes, como lo es el supuesto primer acto de aplicación en perjuicio de CNO del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo supuestamente concretado en la notificación de fecha 7 de febrero de 2018 en la que se informó de la resolución definitiva dictada en el aludido procedimiento de sanción.

Así pues, mediante resolución de 28 de septiembre de 2018, el citado Tribunal Colegiado resolvió en definitiva el diverso juicio de amparo indirecto 1252/2017 del Índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por con. En dicha ejecutoria de amparo se ordenó la reposición del procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017.

Para mayor referencia, a continuación se transcriben los efectos del fallo protector:

"(...)

En consecuencia, es claro que la juzgadora de amparo asumió una postura deficiente, por lo que se declara fundado el agravio que al respecto plantea la ahora recurrente y, este Tribunal Colegiado procede a modificar la sentencia recurrida y, conceder el amparo solicitado por la quejosa para los efectos siguientes:

I. Deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el procedimiento administrativo de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en el expediente PTRIS005/ 2017.

II. En el mismo acto, emita uno nuevo en el que provea la expedición de las copias solicitadas por la parte quejosa sin exigirle el pago a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, en la inteligencia de que sólo deberá cubrir el costo que se genere por su reproducción en el respectivo centro de fotocopiado, conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia recurrida.

Consecuentemente, al haber resultado fundado el agravio de cuyo estudio se ocupó este tribunal en el apartado anterior, se hace innecesario el análisis de los restantes argumentos hechos valer por la recurrente quejosa.

SÉPTIMO. Decisión. En las condiciones relatadas, toda vez que resultó fundado el agravio antes analizado, lo que conforme a derecho procede es modificar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los efectos ya señalados.

(...)
SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, sociedad anónima, en los términos precisados en el último considerando de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el mismo."

(Énfasis añadido)

Se hace notar que aun continúa en trámite el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005-2017 instaurado por el Titular del Área de Responsabilidades en contra de CNO.

Bajo las consideraciones antes expuestas, se deduce que la Sentencia Definitiva es ilegal por determinar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto los argumentos del juzgador no tienen cabida a la luz de los hechos notorios informados en el presente agravio, pues el A quo pretende hacer oponible la autoridad de la cosa juzgada respecto al primer acto de aplicación del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en torno a un acto de autoridad que actualmente es inexistente.

Finalmente, no se omite señalar que es jurídicamente inviable estimar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dado que a la fecha no se ha dictado ejecutoria alguna en la que se analice la constitucionalidad del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Así pues, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se combaten normas generales o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

(...)"

Ahora bien, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando se impugnan normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo promovido (I) por el mismo quejoso; (II) en contra de las mismas autoridades; y (III) en contra del mismo acto reclamado; aunque las violaciones aducidas sean distintas.

Además, existe una regla particular en contra de normas generales consistente en que únicamente operará la causal de improcedencia cuando se dicte sentencia firme en algún juicio de amparo en el que se analice la constitucionalidad de la norma general. En caso de que se actualice el supuesto, el juicio de amparo no será improcedente en contra de los actos de aplicación de la norma general, si éstos fueron impugnados por vicios propios.

Para mayor referencia, se transcribe el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se

73

actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...)"

(Énfasis añadido)

Con base al texto literal de las disposiciones legales antes reproducidas, se obtiene que no se actualiza la causal de improcedencia por los motivos razonados por el A quo debido a que ni en el juicio de amparo 1642/2017 ni en el diverso 250/2018 se realizó el estudio sobre la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Así pues, tal y como lo expuso el Juez de Distrito, en el juicio de amparo 1642/2017, la Juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concluyó que era improcedente el juicio en contra de la disposición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pues no se combatió su primer acto de aplicación sino uno distinto.

A su vez, en el juicio de amparo indirecto 250/2018 no se analizó la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pues se concluyó que el juicio era improcedente en su contra por los mismos motivos expuestos en el juicio de amparo indirecto 1642/2017.

En ese contexto, atendiendo a que los sobreseimientos declarados en los dos juicios de amparo no analizaron la inconstitucionalidad de la multicitada disposición legal de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es que no se colma el requisito previsto en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo para estimar que el acto reclamado fue materia de una ejecutoria de otro diverso amparo, concretamente debido a que no se estudió su constitucionalidad pues es de explorado derecho que el sobreseimiento no implica el estudio del fondo del negocio.

Por lo anterior, sus Señorías deberán revocar la Sentencia Definitiva a efecto de levantar el sobreseimiento decretado en perjuicio de CNO respecto a la improcedencia del juicio de amparo en contra del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a fin de abordar los argumentos de inconstitucionalidad expuestos en el escrito de demanda.

QUINTO. LA SENTENCIA DEFINITIVA ES ILEGAL POR HABER DECRETADO INDEBIDAMENTE EL SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

La Sentencia Definitiva es ilegal en tanto el A quo indebidamente decretó el sobreseimiento del juicio de derecho fundamentales intentado por Gleiber José de Faria y OICIMEX en contra del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con motivo de su aplicación a través de la Resolución Definitiva, por haberse actualizado (supuestamente) la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues a su considerar en la Resolución Administrativa no existió un acto de aplicación, ya sea en forma expresa o tácita, en la esfera jurídica de las quejas y por tanto carecían de interés jurídico para combatirla.

Sin embargo, las conclusiones anteriores resultan ilegales ya que, conforme a lo demostrado en líneas subsiguientes, las consideraciones que justificaron el fallo fueron construidas y desarrolladas sobre la base de una indebida lectura de la causa de pedir de las quejas, conllevando en forma implícita ciertas violaciones a los principios de congruencia y exhaustividad.

Así, la Sentencia Definitiva es contraria a derecho en tanto que con motivo del dictado de la Resolución Definitiva se colige una clara aplicación del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en perjuicio de mis mandantes.

Ahora bien, a efecto de demostrar lo anterior, conviene analizar el contenido de la Sentencia Definitiva, misma que en la parte que interesa para efectos del presente agravio, señala lo siguiente:

"Por otra parte. Este Juzgado Federal advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los diversos quejosos Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Gleiber José de Faria, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que ese precepto, por sí sólo, no causa perjuicio alguno a los solicitantes de amparo.

(...)

Precisado lo anterior, los ahora quejosos acuden al juicio constitucional a combatir el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece:

(...)

Sin embargo, por una parte, ese precepto **no fue aplicado de manera expresa o tácita por la autoridad responsable en la resolución reclamada**, dado que, contrariamente a lo expuesto por las accionantes, **ese precepto de manera específica no establece la imposibilidad o ineficacia de acceder a los medios legales de defensa**; simplemente, contiene un elemento esencial de todo acto administrativo (ejecutividad) que se basa en la presunción de validez de que goza, lo que no genera perjuicio alguno en sí mismo.

En su caso, el perjuicio derivará de la actualización de los diversos supuestos normativos que también se combaten en este juicio y no del precepto referido.

No pasa inadvertido que los solicitantes de amparo aseguren que el artículo 9°, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se impugnó como parte de un sistema normativo junto con el artículo 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de esta consideración, el primero de los preceptos se refiere al momento en el que se considera que un acto administrativo es válido y eficaz, mientras que el segundo, se refiere a las sanciones que serán procedentes en relación con las conductas sancionables previstas en los artículos 8 y 9, de la referida legislación, así como de las reglas que habrán de sujetarse dichas sanciones.

Lo anterior evidencia que **no se está en presencia de un sistema normativo**, entendido —de acuerdo al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a. /J. 91/2018 (10a.)— como el conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no puede operar sin alguna de ellas.

Así, para ser considerados como un sistema normativo, se requiere que esas normas en su conjunto formen una verdadera unidad, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o frente.

En el caso no acontece esa asociación indisoluble, dado que si bien ambos refieren a un tema similar (momento en el cual son ejecutables las resoluciones administrativas), derivan de principios, causas y fuentes distintas, pues mientras en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo subyace el principio de presunción de validez de los actos administrativos; en el 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, subyacen los principios consagrados en el artículo 134 constitucional aplicables a las contrataciones públicas, es decir, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda vez que los actos de corrupción hacen que se torne inviable que el Estado asegure las mejores condiciones de contratación, así como el manejo de los recursos públicos.

Lo anterior hace evidente que ambos preceptos no forman parte de un sistema normativo que legitime al quejoso a impugnarlos de manera conjunta; pues, en el supuesto hipotético de la declaración

76

de inconstitucionalidad de uno, no afecta en nada el alcance, sentido y aplicación del otro. Visto de ese modo, es claro que el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no causa perjuicio alguno a los quejosos en este juicio.

Por lo anterior, toda vez que la parte quejosa no acreditó el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo y ofensa de los derechos de que son titulares y ante la falta de elementos objetivos que permitan establecer de manera fehaciente que ese perjuicio deriva de la aplicación del precepto impugnado, es improcedente el presente juicio de amparo.

En relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, en relación con el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los quejosos Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Gleiber José de Faria. (...)"

(Énfasis añadido)

De la anterior transcripción se advierte que en la Sentencia Definitiva se concluye que el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no afecta la esfera jurídica de Gleiber José de Faria y OICIMEX al no haber sido aplicada, de manera expresa o tácita, en la Resolución Administrativa.

Así, arguye que el precepto normativo no imposibilita ni impide a los quejosos para acceder a los medios legales de defensa tendientes a combatir la Resolución Administrativa, pues simplemente prevé la ejecutividad de los actos administrativos.

Finalmente agrega que no puede considerarse que los artículos 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas no pueden considerarse como un sistema normativo y por ende, no puede aducirse que la norma general tildada de inconstitucional afecte el interés jurídico o legítimo de Gleiber José de Faria y OICIMEX.

Sin embargo, las conclusiones anteriores resultan ilegales ya que, conforme a lo demostrado en líneas subsiguientes, las consideraciones que justificaron el fallo fueron construidas y desarrolladas sobre la base de una indebida lectura de la causa de pedir de la quejosa en la demanda de amparo, conllevando en forma implícita ciertas violaciones a los principios de congruencia y exhaustividad.

En específico, la Sentencia Definitiva es contraria a derecho en tanto que con motivo del dictado de la Resolución Definitiva se colige una clara aplicación del

artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en perjuicio de las recurrentes.

En primer término se destaca que el pronunciamiento relativo a que el del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo "... no establece la imposibilidad o ineficacia de acceder a los medios legales de defensa..." conlleva implícitamente un **PRONUNCIAMIENTO DE FONDO** por lo cual es evidente que no quedó fehacientemente comprobada la causal de improcedencia a que alude el Juez de Distrito. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en el Agravio Primero del presente recurso, mismas que se solicitan a su Señorías tengan por reproducidas como si a la letra se insertasen, dicho pronunciamiento es motivo suficiente para revocar la Sentencia Definitiva.

Ahora bien, con el objeto de hacer aún más evidente la ilegalidad de la Sentencia Definitiva, conviene analizar el contenido del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe"

Así pues, en términos de la anterior norma legal, como lo refiere el A quo, tiene inmerso el principio de ejecutividad de los actos administrativos y presunción de validez, pues éstos son eficaces y exigibles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, salvo que que la determinación conceda un beneficio al particular, caso en el que su cumplimiento es exigible desde la fecha en que se dictó o se establezca la fecha para su efectividad.

En ese contexto, si bien el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece la imposibilidad de acceder a medios legales de defensa, si trasgrede el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva de los gobernados dado que permite que las sanciones que se impongan en términos del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas sean

78

ejecutadas aún y cuando no han transcurrido los plazos para interponer medio de defensa alguno, como podría ser, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo tanto, en caso de revocarse la determinación de la autoridad sancionadora, las cosas no podrán ser restituidas al estado que guardaban precisamente porque el gobernado debe resentir los efectos negativos del acto aún y cuando no ha estado en posibilidades de obtener una medida provisional en el procedimiento correspondiente.

Así, el artículo tildado de inconstitucional le resta eficacia de manera injustificada en tanto que obliga al particular a soportar las consecuencias perniciosas de un acto administrativo cuya legalidad está *sub judice*.

Por ende, contrario a lo manifestando por el Juez de Distrito, el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo si es apto para producir una lesión en los derechos de los gobernados, precisamente porque que la resolución dictada en la instancia sancionatoria se ejecute aun antes de que cause estado, permitiendo con ello que sus efectos se consumen en forma irreparable. Máxime que en términos del último párrafo del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la sanción consistente en inhabilitación no puede ser materia de suspensión.

Aclarado lo anterior, en el caso que nos ocupa, la Resolución Administrativa que concluyó los Procedimientos Administrativos Sancionadores si constituye el primer acto de aplicación del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ello es así, dado que contrario a lo alegado por el juzgador de amparo, tanto el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas como artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son un sistema normativo.

Así pues, si bien el artículo 27 de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas establece las sanciones por incumplimiento a esa legislación en aras de salvaguardar los principios consagrados en el artículo 134 constitucional, mientras que el 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo consagra el principio de ejecutividad y presunción de validez de los actos administrativos; lo cierto es que ambos forman una verdadera unidad.

Bajo esa tesitura, en la Sentencia Definitiva se debió de estudiar el artículo tildado de inconstitucional como parte integrante del sistema normativo, en tanto que los motivos que acarrear su inconstitucionalidad no podían ser comprendidos sino a través de sus efectos finales, que en el caso referían a su ejecución.

En ese tenor, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido a través de jurisprudencia que en el juicio de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guardan íntima relación entre sí no obstante que el quejoso sólo acredite la aplicación de uno solo de los dispositivos legales, siempre que el sistema normativo guarde una verdadera unidad normativa de manera que en caso de declararse la inconstitucionalidad de una, invariablemente las demás también se vean afectadas.

Para mayor claridad, se transcribe el criterio jurisprudencial en comento:

“Época: Novena Época
Registro: 169558
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Junio de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 2a. /J. 100/2008
Página: 400

AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnabile a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones

SE
CIRCUITO

TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
CIRCUITO

80

generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas.

Amparo en revisión 1834/2004. El Florido California, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1207/2006. Inmuebles Gómez, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1260/2006. Eduser Inmobiliaria, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1351/2006. Metalmec, S.A. de C.V. y otras. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1700/2006. Integración de Servicios en Salud, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez."

(Énfasis añadido)

Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que los órganos constitucionales cuentan con facultades para estudiar todas las disposiciones legales que integran un sistema normativo aun cuando no hayan sido expresamente señaladas por el impetrante de garantías, en razón de que el artículo 76 de la Ley de Amparo mandata que el juzgador debe corregir errores u omisiones en la cita de preceptos legales que se estimen violados, y por mayoría de razón, se encuentra facultado para analizar todas las disposiciones que integran el sistema normativo reclamado:

"Época: Décima Época
 Registro: 2016504
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Tipo de Tesis: Aislada
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV
 Materia(s): Común
 Tesis: (XI Región) 2o.10 A (10a.)
 Página: 3343

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. CUANDO DE LA DEMANDA DE AMPARO SE ADVIERTA QUE SE IMPUGNA EL MECANISMO IMPLEMENTADO PARA SU REGISTRO Y CONTROL, EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR TODAS LAS DISPOSICIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NORMATIVO RELATIVO, AUN CUANDO NO SE RECLAMEN PARTICULARIZADAMENTE, MÁXIME SI ALGUNA DE ÉSTAS SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

De acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 134/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 17-K, 28, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación -así como las diversas disposiciones que desarrollan su contenido- integran un sistema normativo para efectos de su impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; de ahí que en los casos en los que del análisis integral de la demanda se advierta que lo que fundamentalmente se impugnó es el mecanismo implementado para el registro y control de la contabilidad electrónica de los contribuyentes, incluido el envío mensual de la información respectiva al Servicio de Administración Tributaria, debe entenderse que dicho reclamo se dirige al sistema normativo en su totalidad, que establece y regula ese mecanismo, aun cuando no se haya señalado expresa y específicamente como acto reclamado cada una de las disposiciones que lo constituyen, pues ello no resulta indispensable para emprender el estudio conducente. Esto es así, además, porque si el artículo 76 de la Ley de Amparo impone la ineludible obligación de corregir el error u omisión en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, por mayoría de razón, el órgano constitucional se encuentra facultado para analizar todas las disposiciones que integran el sistema normativo reclamado, aun cuando no hubiere sido debidamente expuesta la denominación de cada una de éstas, máxime cuando alguna se declaró inconstitucional mediante jurisprudencia del Más Alto Tribunal del País, pues en esa hipótesis, el Juez de amparo está constreñido a hacer prevalecer la Constitución, en términos de la jurisprudencia, de manera que, en ese supuesto, tiene el deber, además de suplir la queja deficiente -aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios-, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, de evitar la subsistencia de la aplicación de disposiciones declaradas inconstitucionales, así como de ejercer un prudente juicio de analogía, con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del criterio definido por la jurisprudencia al caso, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de éste, ya que ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados por el orden jurídico. Estimarlo en forma contraria, conllevaría que el juzgador permitiera la subsistencia de la aplicación



82

de una disposición declarada inconstitucional por el Alto Tribunal, bajo el único argumento de que no debe tenerla como acto reclamado por no haberse señalado expresa y particularizadamente su denominación en la demanda, pese a que a través de esta última se impugnó el sistema normativo al que aquella pertenece.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Amparo en revisión 358/2017 (cuaderno auxiliar 1056/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Secretario de Hacienda y Crédito.

(Énfasis añadido)

Bajo esas consideraciones, atendiendo a que la causa de pedir del quejoso se hizo depender en la inconstitucionalidad de la inmediatez de las sanciones contempladas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y que dicha norma interpretada en forma aislada no prevé el momento a partir del cual entrarán en vigor las sanciones que en ella se fundan, es que resultaba evidente que en su aplicación debe participar algún otro precepto.

Para pronta referencia, se transcribe el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

"Artículo 27. Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años;

II. Cuando se trate de personas morales:

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.

El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema.

Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicará tratándose de transacciones comerciales internacionales.



AL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
RECUENTO

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.

(Énfasis añadido)

En ese tenor, la disposición legal anteriormente transcrita debe concebirse de la forma siguiente: el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas es de naturaleza sustantiva, esto es, delimita las hipótesis a sancionar con multa e inhabilitación en tanto que, para efectos de su aplicación ha de atenderse a las normas de carácter adjetivo o procesal previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En ese orden de ideas, la ley que establece el inicio de vigencia de los actos administrativos es la Ley de Procedimiento Administrativo (norma adjetiva), conforme con la cual se sustanciaron los Procedimientos Administrativos Sancionadores en que se emitió la Resolución Administrativa; específicamente, el artículo 9º de dicha ley es de donde advierte que el acto administrativo será efectiva y exigible a partir de que surta efectos su notificación legalmente efectuada, por lo que es precisamente esa norma la que dispone el momento en que se inician los efectos de los actos administrativos.

Afirmación que se robustece tomando en cuenta en resolutivo "QUINTO" de la Resolución Administrativa se manda el cumplimiento inmediato de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas "COMPRANET" sobre las sanciones impuestas a las recurrentes; es decir, de dicho resolutivo se advierte que el acto reclamado debe ejecutarse de manera inmediata, lo cual guarda identidad con el contenido del artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

QUINTO: Solicitese la publicación de las respectivas Circulares en el Diario Oficial de la Federación, y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas COMPRANET, con lo que se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como de las Entidades Federativas, el impedimento decretado en la presente resolución.

Máxime que los efectos de la Resolución Administrativa no solo surtieron efectos con motivo de la notificación de la misma, sino que con motivo de la publicación practicada el pasado 17 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la

Federación consistente en la "CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como a las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona ...", así como derivado de la correspondiente publicación en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas en COMPRANET.

Entonces negar, como lo hizo el Juez de Distrito, que el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no fue aplicada a las ahora recurrentes sería pretender dotar de un sistema adjetivo de ejecución a una norma sustantiva que, además, no prevé tal sistema ni en forma implícita.

Así pues, contrario a lo alegado por la *A quo*, el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo sí fue aplicado en perjuicio de Gleiber José de Faria y OICIMEX con motivo de la emisión de la resolución que resolvió los Procedimientos Administrativos Sancionadores instaurado en su contra, pues si bien, la autoridad responsable no lo invoca textualmente, su Señorías deben considerar que dicho precepto fue tácitamente aplicado.

Es decir, no existe invocación expresa del dispositivo en el acto reclamado, sin embargo, la hipótesis están implícitamente contenidas en la Resolución Administrativa pues se insiste, no obstante que dicha determinación no había causado estado (por continuar transcurriendo los plazos para promover juicio contenciosos administrativo o juicio de amparo indirecto), el Titular del Área de Responsabilidades procedió a publicar la Circular en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Al respecto, cobra aplicación el siguiente criterio jurisprudencial cuyo rubro y cuyo texto son los siguientes:

*Época: Noveña Época
Registro: 162657
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**

Fuente: **Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta**

Tomo XXXIII, Marzo de 2011

Materia(s): **Común**

Tesis: **I.15o.A. J/12**

Página: **2071**

AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO.

En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. **Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido;** y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. **En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita.** Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 18/2009. Víctor Hugo Contreras González. 28 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo en revisión 112/2010. Héctor Eugenio González Rivera. 25 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 170/2010. Consorcio Industrial, S.A. de C.V. 28 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo en revisión 398/2010. Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. 8 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo en revisión 431/2010. Arinpa Desarrollos Inmobiliarios, S. de R.L. de C.V. y otra. 19 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López."

(Énfasis añadido)

Atento a las consideraciones anteriores es que la recurrente considera que ha quedado cabalmente demostrado que en la especie la Sentencia Definitiva ilegal por encontrarse indebidamente fundada y motivada, ya que la introducción de las consecuencias de la resolución reclamada a la esfera jurídica de las quejas únicamente se explica a través de la aplicación del sistema normativo en su conjunto.

Es por lo anterior que la Sentencia Definitiva resulta ilegal toda vez que no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 61, fracción XII de la Ley de Amparo en contra del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que sus Señorías deberán de levantar el sobreseimiento decretado y en su lugar, abordar la causa de pedir esbozada en los escritos de demanda de Gleiber José de Faria y OICIMEX.

SEXTO. LA SENTENCIA DEFINITIVA ES ILEGAL POR ENCONTRARSE INDEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA PUESTO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA IMPUGNAR LOS VICIOS DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.

A lo largo del presente agravio se acredita que la Sentencia Definitiva contraviene lo dispuesto por los artículos los artículos 74 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por los artículos 219, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia toda vez que las quejas actualizaron la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

Lo anterior es así, pues CNO, OICIMEX y Gleiber José de Faria optaron por acudir al juicio de amparo indirecto a combatir la inconstitucionalidad de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo PRIMERO del Acuerdo Delegatorio, con motivo de su primer acto de aplicación, a saber, la Resolución Definitiva.

Por lo tanto, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales promovido no actualiza la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en tanto operó una excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional.

Ahora bien, a lo largo de la Sentencia Definitiva, el A quo sostiene lo siguiente:

"(...)

Finalmente, atendiendo a la improcedencia decretada en este considerando en relación con las normas impugnadas y toda vez que se determinó que la resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, no es el primer acto de aplicación de ellas; en relación con esa actuación se debe sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que propone la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado auxiliado. El precepto referido dispone:

(...)

Precisado lo anterior, se procede a verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio.

Respecto al requisito marcado con el inciso a) consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado fue emitido por el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial, por lo que, es evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo

Por lo que hace al inciso b), también se actualiza, en la medida que el acto impugnado, puede ser analizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos del artículo 3, fracción XII, de la ley orgánica que lo rige.

(...)

Así pues, como se vio y en razón de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, **se concluye que los accionantes del amparo debieron acudir al juicio contencioso administrativo a deducir sus derechos.**

Consecuentemente, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley, por lo que hace a la resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 (...)"

(Énfasis añadido)

De la anterior transcripción, se advierte que las manifestaciones de hecho y de derecho expuestas por el juzgador de amparo para concluir que el juicio de amparo indirecto en contra de la Resolución Definitiva es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, consisten en que atendiendo a que no se reclama con motivo del primer acto de aplicación de las normas impugnadas, los vicios propios de esa determinación deben ser examinados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Máxime que no se surte ningún otro supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

Sin embargo, el juzgador de amparo pierde de vista en el caso concreto, se surte la excepción al principio de definitividad contemplado en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, **las recurrentes decidieron impugnar el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales en el juicio de amparo indirecto, haciendo valer conceptos de violación en su contra.**

Como sus Señorías lo podrán corroborar, en el caso concreto opera una excepción al principio de definitividad por lo cual no es necesario que mis representadas interpongan el recurso o medio ordinario de defensa tendiente a revocar, modificar o nulificar el acto reclamado que se le atribuye al Titular del Área de Responsabilidades.

Así pues, es de explorado derecho que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo conlleva a que el amparo sea la última instancia impugnativa de actos de autoridad, los cuales, para poder ser materia de aquél, deben ser previamente combatidos a través de los medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que los regulan.

90

Así, el principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente⁶.

De manera que, el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera como una regla de procedencia del juicio constitucional que obliga al gobernado a agotar previamente los medios de defensa ordinarios por los cuales se puedan modificar, anular o revocar los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

No obstante lo anterior, existen diversas excepciones al principio de definitividad, entre ellas, la prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que **es optativo para el gobernado agotar o no los medios ordinarios de defensa** que en su caso procedan contra el primer acto de aplicación de la norma que estima contraria a sus derechos humanos, lo cual encuentra plena justificación en el hecho de que la inconstitucionalidad de la norma no podrá ser abordada por la autoridad ordinaria, pues se trata de una cuestión cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al control concentrado de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial de la Federación.

Sobre el particular, el párrafo tercero de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

(...)

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, **SERÁ OPTATIVO PARA EL INTERESADO HACERLO VALER O IMPUGNAR DESDE LUEGO LA NORMA GENERAL EN JUICIO DE AMPARO.** En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley

⁶ Burgoa, Ignacio, "El juicio de amparo", Porrúa, México, 42ª Ed, p. 283.

91

contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (...)"

(Énfasis añadido)

De lo que se sigue que la Ley de Amparo utiliza el verbo optar, que entre sus significados tiene el de "escoger una cosa entre varias"; así, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso secundario, debe estimarse que escogió, de entre ambos, el primero⁷.

Conforme a lo anterior, se obtiene que en aquellos casos en los que se genere un acto de aplicación de una norma de carácter general, **es optativo para el gobernado recurrir a los medios de defensa previstos** para modificar, revocar o nulificar el acto de aplicación que se estima inconstitucional. Por lo que, si el impetrante de garantías decide acudir al juicio de amparo, se sujetará a las reglas de la Ley de Amparo para controvertir la inconstitucionalidad tanto de la norma general como de su acto de aplicación.

Inclusive, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸ ha señalado que:

"...es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, NO HAY OBLIGACIÓN DE AGOTAR TALES RECURSOS, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto..."

(Énfasis añadido)

⁷ Véase "LEYES, AMPARO CONTRA RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCIÓN QUE LO HACE IMPROCEDENTE POR ATACAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO." Localización: [TA]; 7a. Época; Pleno; Ap. 2000; Tomo I, Const., P.F. SCJN; Pág. 1185. 1705.

⁸ "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 5. P. /J. 78/2007.

Sin embargo, no debe perderse de vista que si el gobernado decide interponer el recurso o medio de defensa correspondiente, deberá agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes previamente a recurrir al amparo⁹.

Conforme a lo antes expuesto, es evidente la ilegalidad de la Sentencia Definitiva, ya que no obstante que las recurrentes eligieron acudir a la instancia constitucional para controvertir la constitucionalidad de diversas normas de carácter general, el juzgador de amparo resolvió sobreseer el juicio de amparo promovido en contra de la Resolución Definitiva.

Por lo anterior, es que se estima que la Sentencia Definitiva es contraria a derecho ya que no obstante que mis mandantes decidieron acudir a la instancia constitucional a combatir los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo Primero Acuerdo Delegatorio, el A quo resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto intentado en su contra.

En conclusión, la Sentencia Definitiva es ilegal ya que en la especie se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que como ha quedado acreditado, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, las quejas decidieron no interponer al recurso o medio ordinario de defensa para impugnar los actos de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, sino por el contrario, OPTARON POR PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO A FIN DE QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, LAS NORMAS TILDADAS DE INCONSTITUCIONALES SEAN DESINCORPORADAS DE SU ESFERA JURÍDICA, INCLUIDOS AQUELLOS ACTOS CUYA VALIDEZ DEPENDAN DE LA PROPIA NORMA INVALIDADA.

Al respecto, cobran aplicación las siguientes tesis jurisprudenciales sustentadas por el Máximo Tribunal del país:

"Época: Séptima Época
Registro: 232362

⁹ Véase "AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LO RIGE, CUANDO SE RECLAME LA ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL QUEJOSO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYA INICIADO LA VÍA ORDINARIA DE IMPUGNACIÓN." Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 3103. I.13o.A.42 K.

Instancia: Pleno
 Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Volumen 181-186, Primera Parte
 Materia(s): Constitucional, Común
 Tesis:
 Página: 252

LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.

De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses.

Séptima Época, Primera Parte:

"Época: Novena Época
 Registro: 170866
 Instancia: Pleno
 Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Tomo XXVI, Diciembre de 2007
 Materia(s): Común
 Tesis: P. /J. 78/2007
 Página: 5

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de

aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

Contradicción de tesis 8/2006-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Décimo Primero, Octavo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de abril de 2007. Unanimitad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

Época: Novena Época
 Registro: 190707
 Instancia: Primera Sala
 Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Tomo XII, Diciembre de 2000
 Materia(s): Constitucional, Común
 Tesis: 1a. /J. 35/2000
 Página: 133

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al

principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio.

En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados.

Amparo en revisión 163/97. Ruperto Antonio Torres Valencia. 28 de enero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro. Integró Sala el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 3403/97. Organización Gastronómica Inn, S.A. de C.V. y otro. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo en revisión 378/98. Francisco Javier Soto González. 10 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera.

Amparo en revisión 3577/97. Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Pescadores de la Bahía de Baradito y Altamura", S.C.L. de C.V. 7 de julio de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado.

Amparo en revisión 833/99. Televisa, S.A. de C.V. 7 de julio de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Tesis de jurisprudencia 35/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y Castro.

(Énfasis añadido)

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que sus Señorías determinen que el juicio de amparo indirecto 526/2018 y acumulados 569/2018 y 571/2018 en efecto resultan improcedentes en contra de las normas generales reclamadas, ello no es impedimento para abordar los conceptos de violación enderezados por vicios propios en contra de la Resolución Administrativa.

Bajo esa consideración, de confirmarse la improcedencia respecto de las normas generales reclamadas, en plena obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, se deberán estudiar los conceptos de violación de los escritos de demanda

en los que se evidencia la inconstitucionalidad de la resolución que puso fin a los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Afirmación que se corrobora de conformidad con lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y que sustenta la siguiente tesis:

"Época: Décima Época
Registro: 2004641
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3
Materia(s): Común
Tesis: IV.2o.A.36 K (10a.)
Página: 1732

AMPARO CONTRA LEYES. EN LOS CASOS EN QUE SE PROMUEVA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN AL QUE SE ATRIBUYEN VICIOS PROPIOS, PUEDE DESVINCULARSE EL ESTUDIO DE ÉSTE DEL DE LA NORMA RECLAMADA SI EL JUICIO RESULTA IMPROCEDENTE RESPECTO DE ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Por regla general, cuando en amparo indirecto se reclama una ley con motivo de un acto de aplicación, el señalamiento de éste en la demanda cumple con la función primordial de demostrar que el quejoso está legitimado para impugnar también la ley, en razón de que ésta ha sido aplicada en su esfera jurídica, ocasionándole un perjuicio que no es sino reflejo de aquel acto, con lo cual el quejoso se excluye preliminarmente de los supuestos de improcedencia previstos en las fracciones VI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, que interpretados a contrario sensu, indican que el juicio de amparo promovido contra una ley con motivo de su aplicación es, por lo general, procedente sólo cuando se acredita que ésta ha sido efectivamente aplicada y que se presentó la demanda oportunamente en relación con el primer acto de aplicación. En este contexto, al reclamar el acto de aplicación, no es indispensable que, a su vez, se formulen conceptos de violación en su contra -al atribuirle vicios propios-, pues se asume que su inconstitucionalidad deriva de la ley, porque al concretar los perjuicios atribuidos a ésta su señalamiento sólo tiene como propósito cumplir un requisito de procedencia de la acción, al resultar sumamente relevante el análisis de la naturaleza y alcances del acto de aplicación para determinar si el juicio procede respecto de la norma, es decir, el análisis preciso y limitado de la naturaleza del acto de aplicación y sus alcances puede condicionar la procedencia del amparo contra ésta, de suerte que si, por ejemplo, en relación con el acto de aplicación el juicio resulta extemporáneo, ese resultado se reflejará en un sobreseimiento respecto de la ley, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 251, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO

DE SU APLICACIÓN.". No obstante, atento al origen, naturaleza y alcance del acto, el quejoso puede impugnarlo por vicios propios, con independencia de que en la misma demanda controvierta el perjuicio atribuido a la norma general, cuando dicho acto, per se, está sujeto al cumplimiento de diversas condicionantes, como son: fundamentación, motivación, principio de autoridad competente, entre otras, en cuyo caso, no puede afirmarse que el estudio de la constitucionalidad de la ley tenga la misma estrecha relación que en el caso en que no se atribuyen al acto de aplicación vicios propios, pues al proceder el juicio respecto de la ley, si analizados los conceptos enderezados en su contra resultan infundados, no podrá negarse el amparo en cuanto al acto si antes no se analizan también los vicios que se le atribuyen directamente, que no se relacionan con la norma que lo funda, pues se vulnerarían los principios de congruencia y exhaustividad propios de toda sentencia y se haría nugatorio el derecho del quejoso a la tutela judicial efectiva, lo cual ocurre también en cuanto a la procedencia del juicio, pues existen supuestos en que, siendo improcedente respecto de la disposición general, por una causa que afecte directamente dicha impugnación, por ejemplo, la existencia de cosa juzgada por haberse controvertido previamente la misma disposición, aquella no alcance al acto de aplicación por no haberse integrado éste y sus vicios propios al juicio previamente tramitado, lo cual justifica plenamente que se analicen los conceptos de violación enderezados en su contra, en plena observancia de la obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 12/2013. Priscila Aguirre Puga. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez."

(Énfasis añadido)

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a sus Señorías declaren que la Sentencia Definitiva es ilegal por contravenir los artículos 74 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por los artículos 219, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

En consecuencia, ese H. Tribunal Colegiado deberá el sobreseimiento decretado por el juzgador de amparo y deberá de actuar como tribunal de pleno derecho a fin de abordar la totalidad de los conceptos de violación esgrimidos en contra de la Resolución Administrativa, y así, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en los términos precisados en el juicio de amparo indirecto 526/2018 y acumulados 569/2018 y 571/2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. TRIBUNAL COLEGIADO, atentamente solicito se sirva:

98

BUENA COLECTOR
MINISTERIA
CIRCUITO

Ciudad de México, a 24 de abril de 2019

94



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO FEDERAL

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES EN PETRÓLEOS MEXICANOS
DELEGACIÓN EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS
MEXICANOS

EXPEDIENTE INTERNO: JA 07/2018 y acumulados JA 08/2018 y JA
09/2018

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PTRI-S-001/2017 Y ACUMULADOS
PTRI-S-003/2017 Y PTRI-S-004/2017

RA-200/2019

113

Oficio número: URPM-AR-CO-0007-2019

Quejosos: GLEIBER JOSÉ DE FARIA, ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.

Autoridad responsable: Titular del Área de Responsabilidades en
la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos
Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex
Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado,
Subsidiaria de Petróleos Mexicanos.

Juicios de amparo: 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y
571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México.

Amparo de revisión: **RA.-200/2019**

ASUNTO: Se interpone revisión adhesiva

Ciudad de México a 17 de mayo de 2019

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO**

LIC. JAVIER RAMÍREZ GARCÍA, Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la
Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en
Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos
Mexicanos, **en mi carácter de autoridad señalada como responsable en los juicios de
amparo indirecto acumulados citados al rubro**, con el debido respeto, comparezco para:

Designación de domicilio para oír y recibir notificaciones:

Bahía del Espíritu Santo s/n, acera Sur-Oriente, P.B. Col. Verónica Anzures (entre Bahía de San
Hipólito y Bahía de Ballenas), alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México.

Designación de delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo:

Licenciados en Derecho: José Rubén Echeverría Rivera, Lizbeth Cruz Bermúdez, Gerardo
Sánchez Durand, José Antonio García Ochoa, Víctor Manuel Ríos García, Carlos Alberto Rojas
Sifuentes, Jesús Clorio Carmona, Adela Savi Nuño, Luis Arturo Villaverde Shaar y Héctor López
Lara.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, en atención al oficio número
6901/2019, mediante el cual se notifica el acuerdo del Magistrado Presidente, con el que admite
a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos, interpongo **RECURSO DE
REVISIÓN ADHESIVA** en contra de la sentencia emitida el 28 de marzo de 2019 por el Juzgado
Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de
Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana y Residencia en la Ciudad de
México, en auxilio de las labores del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la



Ciudad de México, en los juicios de amparo **526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III.**

Al respecto, conviene precisar que el presente recurso de revisión adhesiva se formula con la finalidad de robustecer el sobreseimiento en el juicio dictado por el Juez A quo.

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes:

"Época: Novena Época
Registro: 176834
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Octubre de 2005
Materia(s): Común
Tesis: I.7o.A. J/30
Página: 2264

REVISIÓN ADHESIVA. SU NATURALEZA Y FINALIDAD. En términos de lo establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, por su naturaleza y finalidad, la revisión adhesiva es un recurso que permite a quien lo interpone, no obstante haber obtenido un fallo favorable, expresar argumentos en contra de determinados pronunciamientos hechos por el juzgador de primera instancia que le afectan, los cuales sólo serán examinados si el recurso principal prospera, evitando así generar un estado de indefensión al quejoso y confirmando su carácter subsidiario o accesorio. También puede servir este recurso, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para robustecer las conclusiones alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aún cuando no es la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, viene sin embargo a reforzar un sistema integral de argumentación plena en el esquema del juicio de amparo. Sobre estas premisas, en la revisión adhesiva es ocioso estudiar argumentos que busquen destacar omisiones en el estudio de los conceptos de violación cometidas por el Juez de Distrito, pues, indudablemente, si la revisión principal es fundada en cuanto al motivo del otorgamiento de la protección constitucional, es la propia Ley de Amparo la que establece y ordena que el tribunal revisor deberá considerar todas aquellas defensas cuyo estudio no realizó el Juez de la causa, de ahí que no es válido a través de esta instancia adhesiva impugnar las aludidas omisiones, pues ello implicaría que en el aspecto formal se pierda el carácter subordinado del recurso, para darle una naturaleza distinta, es decir, transformándolo en un medio de defensa principal, rompiendo la igualdad procesal de las partes de ser oídas y vencidas en la instancia correspondiente, otorgando a una de ellas mayor tiempo que el establecido en ley para formular sus agravios."

(énfasis añadido)

"Época: Novena Época
Registro: 196785
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VII, Febrero de 1998
Materia(s): Común



Tesis: XIX.1a.10 K
Página: 542

REVISIÓN ADHESIVA, AGRAVIOS EN LA. *La axiología de la adhesión a un recurso de revisión presupone que los agravios deben ser sólo tendientes a robustecer los argumentos vertidos por el Juez de amparo en lo que resultó favorable, sin que sea válido impugnar los adversos, pues ello implicaría que en el aspecto formal se pierda ese carácter adhesivo, para ubicarse en un trámite diverso.*

(énfasis añadido)

Al respecto, se formula el siguiente:

AGRAVIO

ÚNICO. Si bien es cierto que, como acertadamente lo resolvió el Juez Federal, en el juicio de garantías interpuesto por los quejosos, resulta fundada la causa de improcedencia propuesta por esta autoridad señalada como responsable prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo pues no se agotó, previo a instar el juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se acató al principio de definitividad.

A ese respecto, debe decirse que también existen elementos suficientes para, en su caso, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión impetrado por los peticionarios de amparo, respecto de los actos reclamados a esta autoridad.

Efectivamente, respecto al argumento en el cual los quejosos se duelen de que el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, en tanto somete al gobernado a un régimen punitivo en el que no se encuentran definidas de manera clara y precisa las infracciones administrativas que propician el ejercicio de la potestad sancionadora estatal, pues deja la configuración del ilícito al completo arbitrio de lo que la autoridad aplicadora del mismo considere un incumplimiento por parte de los contratantes a sus obligaciones contractuales, aunado a lo anterior también se duelen de si que bien es cierto la obligación genérica, abstracta y carente de definición de no engañar y no simular se encuentra en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y que según dicha Ley su incumplimiento da lugar a la comisión de una infracción administrativa, lo es también que dicha obligación no establece de manera clara, precisa e inteligible las conductas u omisiones concretas que deben cumplir los contratistas.

El anterior argumento de violación deberá desestimarse por ineficaz.

Para demostrar la ineficacia del anterior concepto de violación, es menester acudir al principio de tipicidad que rige en el derecho penal recogido en el artículo 14 constitucional, el cual resulta aplicable también al derecho administrativo disciplinario, en tanto que, ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, como se explica en la tesis de jurisprudencia P./J. 100/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo



XXIV, correspondiente a agosto de 2006, visible en la página 1667, cuyo rubro es el siguiente:

"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS."

Debe señalarse que la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aún el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho.

Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones la taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir que se hagan complementos a base de analogía o mayoría de razón para tipificar la conducta de la infracción administrativa.

De esta forma, la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación, pues de suceder eso, el tipo se desbordaría dando lugar a múltiples y variados elementos surgidos de la imaginación del intérprete, que no vendrían descritos literalmente en la infracción legal de que se trate, ya sea penal o administrativa.

Una vez explicado en qué consiste el principio de tipicidad que es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas, del artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se advierte que el legislador estableció que (i) las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos; o (ii) aquellas que en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés de las personas antes mencionadas; o (iii) las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales en los términos previstos en la presente Ley, y/o los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas de carácter federal comete infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas cuando realiza actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos.

Se estima que el dispositivo normativo cumple con el principio de tipicidad, en tanto que no requiere de la pormenorización de mayores elementos, ya que, si se toma en cuenta su contexto normativo, resulta evidente que basta con que alguno de los sujetos activos realice actos u omisiones que tengan como finalidad evadir o simular el cumplimiento de los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal, pues es



claro que aquellos necesariamente conocen las obligaciones derivadas y expresamente que generan los procedimientos de contratación en que participan y, en todo caso, la sanción se aplica a quien las incumpla.

En efecto, el tipo infractor sanciona a los sujetos que pretendan evadir o simular el cumplimiento de los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas, lo que por sí mismo, permite concluir que establece con claridad cuál es la conducta materia de reproche.

En este sentido, es claro que la evasión o simulación del cumplimiento de estas reglas o requisitos dentro de los procedimientos configura el tipo infractor, de que se trata, de ahí que se deba estimar que cumple con el principio de tipicidad y, por tanto, que resulta ineficaz el concepto de violación enderezado por los quejosos.

En este punto, cabe agregar que tampoco es exigible que el legislador prevea todos los supuestos y condicionantes en que se pudiere actualizar el tipo infractor previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de ahí que carezca de sustento jurídico la afirmación de los amparistas, en el sentido de que en el artículo en comento, no se prevé como conducta típica la desplegada por la empresa, pues, contrario a este posicionamiento, basta que la conducta así desarrollada encuadre en el tipo infractor en comento, como quedó acreditado en la especie.

A guisa de abundamiento, debe decirse que, en la resolución reclamada, el tema quedó superado, en la medida en que se establecieron los elementos normativos y de convicción que conducen a establecer, de manera indubitable, que los quejosos se ubicaron en el supuesto de infracción, al desplegar las conductas consistentes en que la empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., evadió el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que como CONTRATISTA no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., presentada para realizar el trámite de cesión de derechos del contrato referido, carece de validez y eficacia jurídica, toda vez que no fue emitida por la **empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15; por lo que se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En ese orden de ideas, **GLEIBER JOSÉ DE FARIA** en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la Empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en interés de dicha persona moral, simuló el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho contrato, específicamente la Cláusula 13, apartado A, segundo párrafo del mismo, toda vez que mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, entregó a Pemex Transformación Industrial, una supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., la cual carece de validez y eficacia jurídica en razón de que: la supuesta garantía corporativa no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y



CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15; simulando así, en interés de la empresa referida, el cumplimiento de dicha cláusula contractual y poniendo en riesgo los intereses del Estado siendo que este último confía de buena fe en las personas físicas o morales que ejecutan un contrato, derivado del **principio constitucional de honradez** consagrado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dejó de garantizar con ello el debido cumplimiento del contrato citado, poniendo en riesgo a la entidad.

Conforme a lo anterior es claro que la conducta se adecua a la norma que prevé la infracción, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de ahí que la conducta desplegada por los impetrantes de amparo no resulte atípica.

Con apoyo en estas mismas consideraciones, también debe considerarse que la resolución reclamada no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley, como principio aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

Por estas razones, resulta ineficaz el concepto de violación.

Por otro lado, los quejosos también expusieron los siguientes argumentos a manera de concepto de violación:

- El artículo 27, fracción II de la *Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas* es inconstitucional por contravenir el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 constitucional al establecer un régimen desproporcional por cuanto hace a la naturaleza de la pena, en tanto que establece como únicas sanciones la multa económica y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por la comisión de cualquiera de las conductas previstas en sus artículos 8 y 9, ocasionando que a las personas a las que se les impute una infracción de distinta gravedad se les aplique sanciones de igual afectación.
- El artículo 27, fracción II de la *Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas* es contrario al mandamiento de proporcionalidad de las penas que impone el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al establecer la misma modalidad de sanción para todas las infracciones previstas en dicho cuerpo normativo, genera que las penas no sean proporcionales al hecho antijurídico y al grado de afectación de bien jurídico protegido.
- El Juez constitucional, al examinar la validez de las leyes punitivas, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la naturaleza de la pena, su cuantía y la gravedad del ilícito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.



- La pena es excesiva cuando la ley no señala bases suficientes para que la autoridad judicial pueda tener elementos para individualizarla; especialmente, cuando la ley no permite establecer su cuantía en relación con la responsabilidad del sujeto infractor.
- La culpabilidad para la medición de la pena atañe al supuesto de hecho o tipo de conexión para la medición judicial de la pena y, por tanto, al conjunto de los factores que poseen relevancia para la magnitud de la pena en el caso concreto; nadie puede ser castigado más duramente que lo que le es reprochable. En tal sentido, la conducta del sujeto es un elemento central para la medición de la pena y el parámetro de su limitación.
- El principio de proporcionalidad de la pena se proclama como una relación de equivalencia entre el hecho antijurídico, el grado de afectación al bien jurídico protegido que este ocasiona y la gravedad de la pena misma.

Debe de existir una relación de equivalencia entre la pena, el ilícito y el daño causado al bien jurídicamente tutelado. Es decir, este principio exige que exista un equilibrio justo entre la gravedad de una conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. En ese sentido, cuando se habla de La pena *per se* o del *tipo* o *clase* de pena, se refiere precisamente a la elección que ha hecho el legislador dentro del universo de sanciones existentes en el mundo de lo jurídico para castigar un injusto determinado y por otro lado se encuentra propiamente al *quantum* de la pena, es decir, una vez definida qué pena es la que procede en su imposición, debe definirse un rango de gradualidad.

Los únicos tipos de sanción previstos en la *Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas* son la inhabilitación y la multa; lo que implica que todos y cualquier incumplimiento a dicha ley, será indefectiblemente sancionados con inhabilitación y multa, de manera que atendiendo a las particularidades de cada caso, el aplicador de la norma individualizará el monto de la multa y la temporalidad de la inhabilitación para participar en contrataciones públicas.

Los anteriores argumentos resultan inoperantes e infundados para que se determine otorgarles el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Para mayor comprensión de lo anterior, es menester destacar los antecedentes que obran en los procedimientos administrativos:

- ✓ Mediante oficio No. UR-DPTI-AQDI-753-2017, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete; el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, hizo del conocimiento del Área de Responsabilidades de la misma Delegación, que en términos de la investigación realizada en el expediente administrativo No. 2017/PTI/DE109, se desprenden actos cometidos por la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**; por **GLEIBER JOSÉ DE FARIA** en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa



ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; y, **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, quienes podrían actualizar el artículo 8, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

- ✓ Por acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, el Área de Responsabilidades dictó acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador, el cual fue hecho de conocimiento a **Gleiber José de Faria** en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante oficio UR-DPTI-AR-085/2017, de la misma fecha, notificado el día catorce siguiente, previo citatorio del día anterior, a fin de que compareciera dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al que surtiera efectos su notificación, y expusiera lo que a su derecho conviniera, así como aportara las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar la presunta infracción que le fue imputada.
- ✓ Por escrito OICIMEX-JUR-SFP-023-2017 de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, el Sr. **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., realizó argumentos de defensa y presentó pruebas, motivo por el cual el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos con fecha diecisiete del mismo mes y año, emitió acuerdo en el que determinó, entre otros puntos, el de prevenir a la persona referida a efecto de que presentara el interrogatorio para desahogar la prueba testimonial ofrecida en el acervo probatorio de su escrito de defensa a cargo de André Arthur Glorieux González y Armando Hiram Hinojosa González, así como acordó llevar a cabo acciones para efecto de mejor proveer respecto de las pruebas ofrecidas por el sancionable en los anexos 5 y 6 de su escrito de defensa, haciendo de conocimiento dicho proveído a **Gleiber José de Faria** en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante oficio UR-DPTI-AR-0126-2017 de fecha diecisiete de julio del año en curso, notificado a dicha persona el día veintisiete siguiente.
- ✓ Mediante oficios UR-DPTI-AR-0130-2017 y UR-DPTI-AR-0131-2017 ambos de fecha dieciocho de julio del año en curso, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, a fin de mejor proveer en el presente asunto, solicitó al Gerente de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Proveedores y Contratistas de la Coordinación de Desarrollo y Relación de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos y al Gerente de Proyectos 1 de la Subdirección de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, respectivamente, rindieran informes respecto de las pruebas ofrecidas por el sancionable, en los anexos 5 y 6 de su escrito de defensa.



- ✓ Por oficio DCAS-DOPA-CDRPC-GEVDPC-119-2017, de tres de agosto del año en curso, el S.P.A. del Titular de la Gerencia de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Proveedores y Contratistas, de la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, en atención al diverso número UR-DPTI-AR-0130-2017, referido en el numeral que antecede, remitió informe pormenorizado respecto de la prueba presentada por **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- ✓ Mediante oficio DGTRI-SPI-GPI-409-2017 de fecha cuatro de agosto del año en curso, el Gerente de Proyectos 1 de la Subdirección de Proyectos Industriales, de Pemex Transformación Industrial, en atención al diverso número UR-DPTI-AR-0131-2017, referido en el numeral 3 que antecede, remitió informe pormenorizado respecto de la prueba presentada por **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- ✓ Por oficio número UR-DPTI-AR-0154-2017 de fecha siete de agosto del año en curso, dirigido a **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., notificado el día catorce siguiente, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos hizo de conocimiento de dicha persona física, el proveído de la misma fecha, mediante el cual se tuvo por desechada la prueba testimonial ofrecida a cargo de André Arthur Glorieux González y Armando Hiram Hinojosa González, en virtud de no haber desahogado la prevención realizada por esta autoridad mediante oficio UR-DPTI-AR-0126-2017 de fecha diecisiete de julio del año en curso, así mismo se ordenó dar vista a la persona física sancionable a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de los informes contenidos en los oficios DCAS-DOPA-CDRPC-GEVDPC-119-2017 y DGTRI-SPI-GPI-409-2017.
- ✓ Mediante escrito OICMEX-JUR-SFP-029-2017 de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., autorizó en términos más amplios del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la C. Montserrat Serafín Negrín para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias en el expediente PTRI-S-003/2017, a quién el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos tuvo por autorizada en los términos solicitados por el promovente mediante proveído de fecha dieciséis de agosto del año en curso.



- ✓ Por escrito OICIMEX-JUR-SFP-031-2017 de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., desahogó la vista dada por el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos mediante oficio número UR-DPTI-AR-0154-2017, referido en el numeral 6 de este apartado, adjuntando a su escrito un legajo identificado como "ANEXO1" el cual contiene copia simple de los documentos denominados: (i) "MODELO DE CONTRATACIÓN APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO" y (ii) "JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES PARA EJERCER LA OPCIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA."; motivo por el cual mediante proveído de fecha veintitrés de agosto del año en curso, esta autoridad tuvo por desahogada en tiempo y forma la vista dada por esta autoridad a **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V..
- ✓ La conducta a estudio en el procedimiento administrativo seguido en contra de Gleiber José de Faria, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. consistió en Simular el cumplimiento de los requisitos o reglas establecidos en dicho contrato, específicamente la Clausula 13 apartado A, del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para obtener la cesión de derechos y obligaciones del contrato referido a favor de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; Mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, puso a disposición de Pemex Transformación Industrial Empresa Productiva del Estado, una supuesta Garantía Corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual carece de validez y eficacia jurídica, en razón de que: a) La supuesta garantía corporativa no fue emitida por la empresa Cesionaria **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15. b) La supuesta garantía corporativa refiere a la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., representada para efecto de su emisión, a saber por los señores Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José De Faria, quienes no contaban con facultades para ello. c) El documento denominado "GARANTIA CORPORATIVA", debía presentarse legalizada por las autoridades consulares mexicanas competentes. d) La falta de capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato por parte de la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, ya que durante la cesión de derechos y obligaciones del contrato que nos ocupa, no se tenía elemento alguno que demostrara sus capacidades técnica y financieras, antes bien, del Sistema de Registro y Evaluación de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos, referido por la contratante en el Dictamen de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, no se acreditan aspectos técnicos o económicos de dicha persona moral.



- ✓ Atendiendo lo anterior, en el procedimiento administrativo PTRI-S-001/2017, y sus acumulados, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, una vez desahogadas y analizadas las pruebas y los argumentos esgrimidos por el ahora quejoso se determinó en la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho que **GLEIBER JOSÉ DE FARIA**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, en interés de dicha persona moral, entregó una supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis expedida por Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., la cual carece de validez y eficacia jurídica, ya que la supuesta garantía corporativa no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, sino por la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., aparentando así el cumplimiento de dicha cláusula contractual. Lo anterior toma mayor relevancia toda vez que, no se acreditaron las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato por parte de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., como ya se ha mencionado a lo largo de la presente resolución. **Gleiber José de Faria**, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., llevó a cabo un acto volitivo para efecto de simular el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13 apartado A del mismo, toda vez que mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, vuelve a externar su voluntad entregando una supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., la cual, como ya se mencionó, carece de validez y eficacia jurídica al no haber sido emitida por la empresa cesionaria Gleiber José de Faria, en su carácter de Representante como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., llevó a cabo un acto aparente con la finalidad de engañar a Pemex Transformación Industrial ya que, en interés de dicha persona moral, entregó la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio del año en curso, para efecto de llevar a cabo la Cesión de los derechos y obligaciones del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, situación que se concretizó con la celebración del Primer Convenio Modificador de Formalización de la Cesión de Derechos y Obligaciones de dicho contrato celebrado el día cinco de diciembre de dos mil dieciséis, lo cual representó un beneficio para la **empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, ya que sin contar con las capacidades técnicas y financieras para garantizar el mismo, obtuvo la cesión de dicho contrato.

- ✓ Por lo anterior, se acredita plenamente que la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.** evadió el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que como CONTRATISTA no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO,



S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., presentada para realizar el trámite de cesión de derechos del contrato referido, carece de validez y eficacia jurídica, toda vez que no fue emitida por la **empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-CCP-DGTRI-A-3-15; por lo que se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

- ✓ Asimismo, para el efecto de imponer la sanción prevista en el artículo 27 fracciones I y II, incisos a) y b) de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que obliga a la Autoridad a considerar elementos tanto objetivos, como subjetivos, a efecto de cumplir con la garantía de legalidad y dar a conocer al particular con toda precisión las causas y motivos que originaron la determinación conducente.
- ✓ En esa tesitura, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el artículo 28, dispone que para la imposición de las sanciones administrativas previstas en el artículo 27, del mismo ordenamiento legal, se tomarán en cuenta los siguientes elementos, la Autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando:
I.- La gravedad de la infracción en que se incurra; **II.-** Las circunstancias económicas del infractor; **III.-** Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácter federal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales; **IV.-** El grado de participación del infractor; **V.-** Los medios de ejecución; **VI.-** La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; y, **VII.-** El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.
- ✓ Resulta necesario destacar que la imposición de sanciones dentro de un mínimo y un máximo regulado en una norma, permite al juzgador utilizar su arbitrio para el efecto de graduar la sanción, considerando las cuestiones particulares de cada caso, atendiendo a la propia infracción la conducta y sus consecuencias, y al ser un acto discrecional, teniendo como límite el dique construido por la garantía de legalidad que le permita al sancionable saber con toda exactitud las causas que originaron la determinación de la Autoridad.
- ✓ En ese orden de ideas, se tiene que los elementos a valorar por la Autoridad participan de dos naturalezas distintas, es decir, objetivas y subjetivas, en tanto que atienden a la valoración concreta de las condiciones y efectos de la **comisión de la infracción**, así como a las circunstancias propias de la conducta reprochable, por lo que se tiene que, la totalidad de los elementos se deben de valorar en lo que atenúe o agrave la conducta a efecto de imponer una sanción equitativa, proporcional y no excesiva.
- ✓ Por lo anterior, la Autoridad administrativa, con base en la facultad discrecional que le asiste para realizar la valoración de cada uno de los anteriores elementos, y con el objeto de realizar la individualización de la sanción, dentro del límite de sanciones mínimas y



máximas que establece el artículo 27 fracciones I y II, incisos a) y b), de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, siendo para las personas físicas multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, así como inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años; y para personas morales establece multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, así como inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años, en estas condiciones, se establece un sistema flexible para la imposición de sanciones, debido a que contempla parámetros como "hasta" "no menor" "ni mayor" a efecto de que la autoridad haga uso de su arbitrio sancionador en la individualización de las sanciones correspondientes lo más razonable posible, propiciando que dicha determinación sea justa, proporcional y no excesiva, dado que es un acto discrecional, teniendo como límite la garantía de legalidad que le permita al sancionable conocer con toda exactitud las causas que originaron la determinación de la autoridad.

Atendiendo los elementos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se determinó que: **I.- En relación con la gravedad de la infracción en que se incurra**, debemos considerar que la conducta sancionable no atienda los principios que rigen las contrataciones públicas, previstos en el artículo 134 Constitucional consistentes en la **eficiencia y eficacia** que deben observarse para que así el Estado esté en posibilidad de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, durante la ejecución de los contratos adjudicados, atendiendo al principio constitucional que rige las contrataciones públicas, consistentes en la honradez con que deben conducirse las empresas, para que así el Estado esté en posibilidad de garantizar la obtención de las mejores condiciones de contratación y en apego al marco normativo que las regula. En este orden de ideas, en aras de imponer una sanción apegada a derecho, es menester valorar, en cuanto a la gravedad, lo siguiente: a) El daño del bien jurídico tutelado. El Estado por conducto de las áreas contratantes que lo representan y con el ánimo de cumplir con sus fines y funciones, se ve en la necesidad de contratar con los particulares sean personas físicas o morales, para que éstos provean al Estado de todos aquellos bienes y servicios que este último no produce o no cuenta con ellos, razón por la que en aras de proteger los intereses de la colectividad, realizan contrataciones públicas con el fin de asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, relacionado con el principio de honradez que deben observar las personas físicas y morales, durante la ejecución de los contratos adjudicados, por lo que en el presente caso, el hecho de que la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, haya realizado actos que tuvieran como efectos evadir los requisitos señalados en las cláusulas contractuales en particular la Cláusula 13, apartado A, segundo párrafo del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-CCP-DGTRI-A-3-15, tiende a provocar un daño al interés público. b) El riesgo producido con el actuar de la sancionable. Es necesario referir que el Estado persigue obtener los servicios que requiere para atender el interés público, los cuales deben ser prestados por particulares que acrediten tener la solvencia tanto técnica



como económica para prestar en forma adecuada el servicio contratado. En ese orden de ideas, la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, en su carácter de contratista del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, evadió el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho contrato, específicamente la Cláusula 13, apartado A, segundo párrafo del mismo, toda vez que en su carácter de CONTRATISTA no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, carecía de validez y eficacia jurídica, en razón que no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, evadiendo así, el cumplimiento de dicha cláusula contractual y poniendo en riesgo los intereses del Estado, siendo que este último confía de buena fe en las personas físicas o morales que ejecutan un contrato, derivado del **principio constitucional de honradez** consagrado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dejó de garantizar con ello el debido cumplimiento del contrato citado, poniendo en riesgo a Pemex Transformación Industrial, por lo que este tipo de conductas se deben inhibir en aras de crear un sistema de contrataciones ajustado a las normas que lo crearon, por lo que el elemento que se valora no le beneficia a la sancionable. II.- En relación con las **circunstancias económicas del infractor**, dispone la fracción II del artículo 28 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que, se podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dio origen al procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, razón por la cual, en el caso que nos ocupa, se considerará el monto del **Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15**, el cual asciende a la cantidad de **\$1,811 628,719.69 M.N.** (un mil ochocientos once millones seiscientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 69/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., con el cual se acredita que la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, cuenta con capacidad económica que permite solventar, la sanción económica que, en su caso, imponga esta autoridad, motivo por el cual el elemento que se valora no le beneficia a la sancionable. III.- En relación con los **antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácter federal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales**, al respecto del Registro Histórico de Proveedores y Contratistas Sancionados que administra la Secretaría de la Función Pública, no se tiene antecedentes negativos de la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, al momento de iniciar el procedimiento citado al rubro, motivo por el cual el presente elemento le beneficia a la sancionable. IV.- En relación con el **grado de participación del infractor**, es de señalar que la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, participó de manera directa para evadir del cumplimiento de los requisitos establecidas en el **Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15**, específicamente la Cláusula 13, apartado A, segundo párrafo del mismo, toda vez que le correspondía a la misma, acreditar que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía



corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, carecía de validez y eficacia jurídica, en razón que no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, situación que en el presente caso, no acreditó, motivo por el cual este elemento no le beneficia a la sancionable. **V.-** En relación con los **medios de ejecución**, de las constancias de autos se desprende que la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, utilizó como medio para consumar la infracción que se le imputó en el presente procedimiento administrativo sancionador, el hecho mismo de que no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultaran necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, en virtud de que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, carecía de validez y eficacia jurídica, en razón que no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, motivo por el cual el elemento que se valora no le beneficia a la sancionable. **VI.-** En relación con la **reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**, es de señalarse que esta Autoridad consultó el Registro Histórico y el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, impedidos para presentar propuestas o celebrar contrato con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados, a fin de poder determinar si a la persona moral **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, le había sido impuesta alguna sanción en los términos del artículo 27, fracción II, incisos a) y b) de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; apreciándose que la citada persona moral no cuenta con antecedentes de sanción, motivo por el cual este elemento le beneficia a la sancionable. **VII.-** En relación con **el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado**, a la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, se le adjudicó de manera directa el Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para la "Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo", por un monto de \$1,811'628,719.69 (un mil ochocientos once millones seiscientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 69/100 M.N.), obteniendo como beneficio la adjudicación misma de dicho contrato, aun cuando posteriormente lo haya cedido a la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., de acuerdo al Primer Convenio Modificatorio, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, de Formalización de la Cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, motivo por el cual este elemento no le beneficia a la sancionable.

- ✓ Finalmente atendiendo los elementos antes enlistados esta autoridad señalada como responsable estableció que resultaba justo y apegado a derecho imponer a la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, multa a razón de **\$543'488,615.90** (Quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos quince pesos 90/100 M.N.), que deberá pagarse en el Servicio de Administración



Tributaria, y, **b) INHABILITACIÓN.-** Se impone a la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, inhabilitación por un plazo de **dos (2) dos años, seis (6) meses**, para participar en contrataciones públicas de carácter federal, a partir del día siguiente a aquél en que se publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

Precisados lo antecedentes que informan la imposición de las sanciones combatidas, es menester señalar que en la exposición de motivos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se estableció que el monto de los recursos públicos que se emplean en las contrataciones públicas representa un porcentaje importante del presupuesto público y en buena medida se utiliza como instrumento para impulsar el desarrollo de la economía nacional; la corrupción en las compras y contrataciones del sector público tiene altos costos económicos políticos y sociales, por lo que surgió la necesidad de que nuestro país implemente medidas legislativas eficaces que permitan abatir las prácticas de corrupción por parte de personas físicas y morales.

En ese tenor, el autor de la norma que consideró indispensable complementar el sistema de sanciones administrativas en el campo de contrataciones gubernamentales mediante un sistema que establezca sanciones disuasivas, eficientes y proporcionales para evitar la comisión de conductas irregulares orientado a la prevención y combate a la corrupción.

Sentado lo anterior, también debe tenerse presente que el artículo 134 Constitucional tutela los principios a que se encuentra sujeta la administración de los recursos económicos federales al disponer que para ello se atenderá a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados, así como sienta las bases de los procedimientos de contratación pública.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, el autor de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas consideró, como sanciones previstas para los infractores a la ley, se contemplan la imposición de multas y la inhabilitación aplicables a los infractores de dicho cuerpo normativo la multa y la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación de carácter federal, estableciéndose rangos mínimos y máximos para graduar la imposición de una y otra sanción.

En este punto, es importante destacar que, por lo que hace a la sanción de inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal, su justificación jurídica deriva de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los recursos económicos de que dispongan la Federación, Estados, Municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados; aunado a que los procedimientos de licitación para la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, representan, en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, de ahí que la sociedad se encuentra interesada en que se eliminen y sancionen los actos de corrupción



en los que participan particulares, en detrimento del patrimonio de la Administración Pública, pues éste se integra, entre otros conceptos, con las contribuciones de los propios gobernados.

En suma, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas contiene disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que las acciones relativas a la adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra por parte de la Administración Pública, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, por lo que el interés particular se subordina al general, como en el caso, tratándose de los procedimientos administrativos previstos en el ordenamiento legal en cita, en la medida en que su implementación tienden a evitar que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona respecto de la cual se determine su plena responsabilidad en la comisión de una infracción a la esa ley, pues en este supuesto se confirma la duda sobre su honradez.

En ese sentido, las sanciones establecidas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas no resultan desproporcionales, pues para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", "punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", con independencia del ámbito de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que se impone en los casos concretos. En ese sentido, la pena es la conminación de una sanción económica o inhabilitación para participar en contrataciones públicas formulada por el legislador para la prevención general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de las infracciones administrativas de manera coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las personas que sean condenadas por irregulares similares, reciban sanciones de gravedad comparable, y que las personas sancionadas por infracciones de distinta gravedad sufran penas acordes con la propia graduación del marco legal. Por lo tanto, dicho principio se transgrede o infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables, lo que en la especie no acontece.

Así por cuanto hace a la proporcionalidad de una sanción económica se exige razonabilidad en la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, al permitir la individualización de la sanción en cada caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior se advierte que las manifestaciones mencionadas con antelación vertidas a manera de concepto de violación devienen en infundadas e inoperantes.



Asimismo, los amparistas refieren, en resumen, que los artículos 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son inconstitucionales por violar el derecho a la tutela judicial efectiva y su variante relativa a la tutela cautelar, al ordenar que la resolución dictada en la instancia sancionatoria se ejecute aun antes de que cause estado, permitiendo con ello que sus efectos se consumen en forma irreparable, lo cual conlleva a la absoluta ineficacia del medio de impugnación que se promueva en su contra al no poder restituirse las cosas al estado que guardaban previo a la emisión del acto privativo.

El anterior argumento resulta infundado, ya que en el supuesto no concedido de que el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas limita el principio de presunción de inocencia como regla de trato, al disponer la inmediatez de la ejecución de la sanción de inhabilitación sin que esté firme la responsabilidad en la comisión de la infracción que se atribuye, por estar pendiente de resolver un recurso ordinario que pueda modificarla o revocarla, también lo es que dicha limitación se justifica conforme al test de proporcionalidad en derechos fundamentales implementado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver cuestiones que en apariencia, pudieran parecer viciadas, pero que están debidamente justificadas porque su regulación obedece a la protección del interés social.

Para demostrar la certeza de la anterior consideración, es menester señalar que el test de proporcionalidad consiste en el análisis de una relación entre principios, entendidos como mandatos de optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes); esto es, los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de meta-principio o el principio último del ordenamiento jurídico.

Ese sistema consta, a su vez, de tres sub-principios:

- a) El de idoneidad, que consiste en que, si una ley limita un derecho de importancia para satisfacer otro, debe ser la adecuada para obtener esa finalidad.
- b) El de necesidad, que consiste en que no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo menor.
- c) El de proporcionalidad, que tiene que ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas, esto es, no es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional.

Apoya lo expuesto en lo conducente, la tesis 1a. CCCIX/2014, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que se localiza en la página 590 del libro 10, septiembre de 2014, tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: **"PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES."**

Así como la diversa tesis 1a. CCCXII/2013, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 1052 del libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: **"INTENSIDAD DEL**



ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS."

En el presente caso está justificada la limitación que al principio de presunción de inocencia implica el artículo 27, fracción II, inciso b), antepenúltimo y último párrafos, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, pues de acuerdo con el test de proporcionalidad, se cumple con los principios para ello:

En primer lugar, es preciso señalar que la disposición combatida, acorde a su artículo 1º, es de orden público y de interés general (reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Federal), y tiene como objetivo establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales que incurran en alguna infracción con motivo de su participación en las Contrataciones Públicas de Carácter Federal, y en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta ley; regular el procedimiento para determinar tal responsabilidad y aplicar la sanción respectiva, así como establecer las autoridades federales competentes para su interpretación y aplicación.

Sobre el particular es pertinente mencionar que los procedimientos de licitación inician con la convocatoria respectiva y culminan con la emisión del fallo correspondiente, para después realizar la firma del contrato público, es decir, que la licitación es concerniente al procedimiento y, a su vez, el contrato público es el acto en virtud del cual se pactan definitivamente con el licitante ganador los términos de la obra, adquisición, arrendamiento o servicio licitado, debiendo este último garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

De donde se deriva que la sanción de inhabilitación para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos públicos federales, se funda en una cuestión de orden público e interés social predeterminado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a la infracción en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal y transacciones comerciales internacionales previstas en la ley de mérito; siendo su finalidad lograr que cualquier contratación de esa naturaleza llevada a cabo por la Federación y los órganos político administrativos federales se ajusten y cumplan conforme a las políticas, bases y lineamientos aprobados y establecidos en los contratos para satisfacer los objetivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se proteja.

Por lo que, permitir la ejecución de una sanción de inhabilitación estando pendiente aún un recurso ordinario que pueda modificarla o revocarla, se estima justificado, al tratarse de una cuestión de interés general, pues con tal actuar se pretende evitar que el Estado otorgue una licitación a favor de alguna persona respecto de la cual existe sospecha sobre su falta de honradez ante la infracción cometida prevista en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Esto es, la ejecución de la sanción tiende fundamentalmente a salvaguardar la honradez en los procedimientos de contratación, previniendo que en casos futuros los mismos participantes puedan infringir nuevamente el principio sustancial de honradez que rige en los procedimientos de contratación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución



Federal, que establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados; que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que cuando tales licitaciones no sean idóneas para esos efectos, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

De lo anterior puede concluirse, en principio, que en congruencia con el señalado artículo 134 Constitucional, cuyo fin es el de asegurar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, sean idóneas para conseguir las mejores condiciones posibles para el Estado, el legislador ordinario se encuentra obligado a establecer en las leyes las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren dichas condiciones, por tanto, el precepto impugnado al permitir que la inhabilitación se ejecute aun antes de obtener una resolución definitiva, cumple con el citado fin, pues asegura que la contratación aprobada llegue a buen término mediante su exacto cumplimiento, tutelando así el interés colectivo, destacando que en la contratación en sí el particular tiene un simple interés económico y la Administración Pública tiene la representación del interés público que el contrato compromete o pueda comprometer, por lo que en ese tenor, este último no puede subordinarse al primero, sino por el contrario, ese particular debe subordinarse a la segunda.

En otro contexto, también es menester considerar las características que distinguen el acto administrativo, pues la resolución que sanciona con una inhabilitación se traduce en uno de ellos.

Se ha concebido al acto administrativo como la declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e inmediatos; así por acto administrativo se entiende toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva en virtud de la cual, la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas.

A diferencia del derecho privado, el Estado impone unilateralmente obligaciones y cargas a los particulares; además, dispone de los medios efectivos para cumplirlas, al mismo tiempo que es un creador de derechos. La función administrativa se concreta en actos jurídicos, consistentes en una declaración de voluntad del ejercicio de la potestad pública, en beneficio del interés público.

Las características del acto administrativo son: a) es un acto jurídico; b) de derecho público; c) lo emite la administración pública, o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, y d) persigue, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público.

Es importante destacar que para que exista el acto administrativo, la declaración de voluntad debe provenir de un órgano formalmente administrativo, pues se trata de actos que integran



la función administrativa, formal y materialmente considerada; ello, porque si el acto, aunque sea materialmente administrativo, es generado por un órgano perteneciente a un poder distinto, ya sea legislativo o judicial, no entra en la clasificación de los actos administrativos y, por tanto, no será materia del derecho administrativo.

Los elementos descritos se observan en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del cual se desprende que una característica del acto administrativo es que tiene la presunción de legalidad y validez *iuris tantum*, que opera hasta en tanto no se declare, por determinación firme de autoridad competente, la invalidez del acto; ya que se presume legítimo en la medida en que emana de una autoridad que también lo es; tal como se desprende del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Presunción de legalidad y validez del acto administrativo que es la base de sustento de su ejecutoriedad; tal previsión normativa deviene indispensable pues, de no consignarse expresamente esa posibilidad, el ente administrativo no podrá ejecutarlo sino hasta después de haber obtenido resolución judicial favorable que se lo permita; ejecutividad que deriva de su carácter público que le permite producir efectos a partir del momento en que ha quedado formado y una vez que se cumplan ciertos requisitos que las leyes pueden establecer para que el propio acto sea exigible.

Por lo que dada su naturaleza es posible que aun no siendo firmes se puedan ejecutar.

En ese tenor, queda de manifiesto primero que la disposición de permitir la ejecución de la sanción de inhabilitación es necesaria pues con dicha limitación se evita que las personas físicas y morales lleven a cabo contrataciones públicas de carácter federal, que infrinjan la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en los términos previstos por ella, participen en nuevas licitaciones y obtengan, de satisfacer los requisitos, alguna contratación no obstante la posibilidad de haber incurrido en una infracción prevista en dicha ley.

Se estima también que es idóneo, pues si el propósito de la ley es cuidar que las contrataciones federales se cumplan en sus términos, a fin de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; lo adecuado es sancionar inhabilitando para participar en una contratación de ese tipo, a quien incurra en una infracción a la ley, y que ello sea inmediato, pues solo así se puede evitar que el Estado otorgue una nueva contratación con esa persona posiblemente infractora.

Por último, se estima proporcional, cuenta habida que, si se sanciona una infracción al cumplimiento de un contrato público federal, lo equitativo es que atendiendo a la gravedad de dicha infracción se impida (temporal o definitivamente) nuevas contrataciones públicas de carácter federal dentro de los parámetros mínimo y máximo establecidos por la ley para ese efecto.

Lo cual, además, no se podría lograr con la sola imposición de una multa, dado que pudiera ser que incluso el contratante infractor encontrara un beneficio al pagar una multa frente a la ganancia económica que le representara infringir la ley en cuestión mediante la actualización de alguno de los supuestos en ella previstos.



Limitación que alcanza un objetivo constitucionalmente legítimo de un modo proporcional, ya que lo único que no se permite es que la persona física o moral celebre contratos públicos federales, durante el tiempo que se encuentre inhabilitado, esto es, opera respecto de contrataciones en las que habrían de participar los quejosos, de orden público federal y a partir de la emisión de la resolución mediante la cual se sancione a las personas, esto es, opera respecto de contrataciones futuras sobre las cuales no se le afecta ningún derecho adquirido, pues solo tiene una expectativa sobre ellas, ya que aún debe obtener la licitación.

Además, no debe perderse de vista que independientemente de que con la ejecución de la sanción de inhabilitación, se pudiera causar a los infractores daños y perjuicios de difícil reparación, esa afectación particular se subordina al interés general consistente en garantizar a la sociedad el cumplimiento de los fines públicos conforme las bases establecidas en el artículo 134 de la Constitución Federal, en el entendido de que el particular tiene un simple interés económico, a diferencia del Estado que tiene la representación del interés público que la licitación o contrato comprometa o pueda comprometer.

Conforme a lo anterior, es necesario permitirse la ejecución de la sanción de inhabilitación de manera inmediata, pues evita que las personas físicas y morales lleven a cabo contrataciones públicas de carácter federal que infrinjan el ordenamiento mencionado, participen en nuevas licitaciones y obtengan, de satisfacer los requisitos, algún contrato, no obstante la posibilidad de haber incurrido en una infracción prevista en dicha ley; la ejecución de dicha sanción también es idónea, ya que si el propósito de la ley indicada es cuidar que las contrataciones se cumplan en sus términos, a fin de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, lo adecuado es sancionar inhabilitando para participar en una contratación de ese tipo a quien infrinja la ley referida, y que ello sea inmediato, pues sólo así puede evitarse que el Estado contrate nuevamente con esa persona posiblemente infractora; por último, también es proporcional, al considerarse, por una parte, que si se sanciona una infracción al cumplimiento de un contrato público federal, lo equitativo es que, atento a la gravedad de dicha infracción se impidan (temporal o definitivamente), nuevas contrataciones públicas dentro de los parámetros mínimo y máximo establecidos por la ley para ese efecto y, por otra, se atiende a que sólo opera respecto de contrataciones futuras lo cual, además, no se podría lograr con la sola imposición de una multa, dado que pudiera ser que incluso el contratante infractor encontrara un beneficio al pagarla, frente a la ganancia económica que le representara infringir la ley. Por tanto, si la inmediatez en la ejecución de la sanción tiende fundamentalmente a salvaguardar los procedimientos de contratación previniendo que en casos futuros, los mismos participantes puedan infringir nuevamente el principio sustancial de honradez que rige en los procedimientos de contratación, acorde con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y evitar que se otorgue un contrato a alguna persona respecto de la cual existe sospecha sobre su falta de honradez ante la infracción cometida, dicha disposición está plenamente justificada y no viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Atento a lo anterior deben de calificarse de infundados los argumentos que se debaten

Por otro lado, los quejosos señalan que el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS



SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince, es inconstitucional porque esta autoridad efectúa una aplicación ultra-activa de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, máxime que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevé como antijurídica la conducta por la que se le sancionó.

Con la finalidad de establecer la ineficacia del concepto de violación antes sintetizado, es conveniente realizar algunas reflexiones sobre la aplicación retroactiva y ultra-activa de las disposiciones de carácter general.

En tal sentido se considera conveniente, en primer término, tener presente que el artículo 14 constitucional, en uno de sus fragmentos indica lo siguiente: *"a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna"*.

Precisado lo anterior, resulta relevante distinguir entre la cuestión de retroactividad de las leyes y el problema de la aplicación retroactiva de estas, vicios en que pueden incurrir los actos de autoridad respecto de los cuales, si bien el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución General de la República, protege a los gobernados; sin embargo, presentan diferencias sustanciales que trascienden al estudio del caso.

Respecto, se destaca que el análisis de retroactividad de las leyes conlleva al estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurídica tiene sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose que la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos. Es decir, ante un planteamiento de esta naturaleza el órgano de control de constitucionalidad se avoca a determinar si una disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo las mencionadas situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo, a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, constitucional, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas.

A diferencia de lo anterior, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley no implica el estudio de las consecuencias de esta sobre lo sucedido en el pasado, sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis normativa realiza una autoridad, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional, se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición aplicada. En este caso, entonces, el tribunal de amparo deberá limitarse a constatar si un específico acto de autoridad de efectos particulares respeta las situaciones jurídicas que se concretaron o los derechos que el quejoso adquirió antes de la entrada en vigor de la norma aplicada; para lo cual, será necesario analizar, respecto del peticionario de garantías, qué situaciones se concretaron y qué derechos adquirió con anterioridad a la vigencia del precepto aplicado, lo que permitirá concluir si el acto concreto obra sobre el pasado.

Así pues, la garantía de irretroactividad en la aplicación de las leyes en perjuicio de persona alguna consiste, básicamente, en que no pueden darse efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra



en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien alterando o afectando un estado jurídico preexistente a falta de ésta.

Por tanto, esta garantía constitucional, impide que una norma se aplique en perjuicio de un hecho simple y ya consumado con anterioridad que conforme a otra ley creó un derecho definido a favor del gobernado.

Ahora bien, es menester indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que las disposiciones que autorizan la aplicación retroactiva de normas procesales no violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, porque toda ley desde el momento en que entra en vigor, rige para el futuro, esto es, está dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, actos o situaciones que sucedan con posterioridad al momento de su vigencia, ya que estos quedan sujetos al imperio de la ley anterior, porque una norma tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo, esto es, desde que se crea, momento que se determina de acuerdo con las prescripciones constitucionales relativas, hasta que se deroga o abroga expresa o tácitamente por una norma nueva, por lo cual está destinada a regular todos los hechos, actos, situaciones, estados y fenómenos, que tienen lugar durante ese lapso de tiempo limitado por esos dos instantes.

En este orden de ideas, cabe señalar que en tratándose de normas procesales, las partes en litigio no adquieren derecho alguno para la contienda judicial en la que intervienen, pues estas sólo rigen la particular diligencia de que se trata en el momento de su desarrollo, y el juicio debe tramitarse al tenor de las reglas del procedimiento vigentes, pues los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último, por lo que cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla, salvo que el legislador prevea expresamente otra cosa.

Lo anterior, ya que una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y, por ende, al estar regidas dichas etapas por las disposiciones vigentes en que van naciendo, es evidente que no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con la que ya se contaba.

Lo expuesto, porque si antes de que se realice una etapa del procedimiento el legislador cambia la tramitación, modificando la valoración de las pruebas, suprimiendo un recurso, etcétera, las facultades de referencia no se ven afectadas porque aún no se actualizan; y por tanto, no se priva de alguna facultad con la que ya se contaba, ni tampoco se puede reconocer respecto de las que no se tenían al momento de efectuarse los actos procesales; esto es, que las leyes procesales son de aplicación inmediata, pero de naturaleza rigurosamente irretroactiva.

Una vez hecha la anterior precisión, cabe señalar que, en el presente caso, **la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad**; lejos de ello, lo que el legislador contempla es el establecimiento del ámbito temporal de aplicación de la nueva ley, sin modificar de manera alguna el de la ley anterior.



125

En razón de lo anterior, el análisis de constitucionalidad propuesto deberá centrarse en analizar si la nueva previsión legislativa constituye una violación al artículo 14 constitucional por el hecho de que la misma impide que sea aplicada a los procedimientos de contratación de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios que hubieren iniciado conforme a la anterior Ley, en tanto que prescribe que estos continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones de dichos ordenamientos, hasta su total conclusión, pues también se afirma que el hecho de que no se permita la aplicación retroactiva en su beneficio vicia de inconstitucional el acto reclamado.

En este orden de ideas, deberá considerarse que, si bien el artículo 14 de la Constitución Federal establece el derecho humano de "no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna", lo cierto es, que no instituye lo contrario; esto es, que cuando la nueva ley sea más benéfica exista la obligación de aplicarla en lugar de aquella que se encontraba vigente con anterioridad.

En este punto, es exacto que la previsión que señalan los artículos décimo y décimo segundo transitorios de la Ley de Petróleos Mexicanos, en realidad, actualizan la figura de ultra actividad de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores a la iniciación de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, aun tratándose de normas procesales, pues la interpretación realizada en párrafos precedentes, en el sentido de que el juicio o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio debe tramitarse al tenor de las reglas del procedimiento vigentes, pues los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último sólo es aplicable en caso de que el legislador no haya previsto un sistema concreto de vigencia.

Así pues, para que los supuestos de ultra-actividad fueran inconstitucionales, el artículo 14 de la Carta Magna tendría que decir *'a nadie se aplicará una ley retroactivamente en su perjuicio y siempre se aplicarán, aún a casos sucedidos con anterioridad, las leyes que resulten benéficas'*. Entonces, podría decirse que se vulneraría ese artículo constitucional porque las disposiciones transitorias en que esta autoridad fundó su decisión de iniciar en contra de los quejosos el procedimiento administrativo de sanción por infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas impediría que se produjera el beneficio previsto en la Constitución, pero no hay ningún dispositivo constitucional que establezca ese derecho; siendo que lo que si encuentra fundamento constitucional es la potestad del poder legislativo de establecer la vigencia de una ley, en tanto que es un acto de soberanía que ejerce de acuerdo a sus facultades.

Sumado a lo anterior, cabe señalar que si bien las normas en que esta autoridad responsable apoyó su competencia para emitir el acto reclamado son fundamentalmente de naturaleza procesal o adjetivo, lo definitivo es que atender a la naturaleza de tales disposiciones no es un criterio útil para decidir sobre la retroactividad en su aplicación, pues si bien es cierto que, por regla general, este tipo de normas no producen retroactividad de la ley, también lo es que en el caso específico esa circunstancia carece de relevancia.



En ese tenor, la aplicación de las disposiciones en que esta autoridad responsable fundó su competencia para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, esto es, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las disposiciones transitorias de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, **no constituyen una violación al derecho humano de no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado**, pues dichas disposiciones de carácter general precisan el momento a partir del cual se aplicará la norma; de manera que la pretendida aplicación ultra activa de la ley, en su perjuicio, es consecuencia lógica de las disposiciones de tránsito que el autor de la norma estableció de manera expresa para regular los procedimientos de contratación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico; de ahí que no sea dable pretender que el particular debe ser eximido de cualquier conducta infractora cometida durante el procedimiento de contratación en que participó al amparo de la legislación vigente antes de la entrada en vigor de la actual Ley.

Lo anterior queda aún más de manifiesto, **si se considera que la convocatoria la realizó el organismo subsidiario conocido como Pemex-Refinación, al tenor de la Ley de Petróleos Mexicanos, recientemente abrogada, y durante la vigencia de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**, lo que de suyo implica que ese procedimiento de contratación debía concluirse conforme a las normas de ese ordenamiento legal, vigente al momento de su inicio, y que los procedimientos para sancionar las presuntas infracciones que se hubieren cometido durante el desarrollo de ese procedimiento deban ser tramitados y resueltos conforme a esa misma normatividad.

Aunado a lo anterior, también debe decirse que **desde el momento en que presentó su propuesta, los quejosos consintieron la aplicación de las disposiciones que rigen al procedimiento de contratación pública en cuestión, lo que de suyo implica que deben soportar las consecuencias jurídicas que de esa aplicación se generen, como lo es el inicio del procedimiento administrativo de presunta infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**, en la inteligencia de que esa normatividad fue la que rigió el procedimiento de contratación en que participaron.

En efecto, **los impetrantes de garantías no pueden desconocer que se sometieron al imperio de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**, desde el momento en que se presentó su propuesta para participar en el procedimiento de contratación, pues desde ese momento fue de su conocimiento que ese ordenamiento legal era el que rigió.

En este contexto, si la irregularidad que se imputó a los quejosos se cometió bajo el imperio de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, es claro que, conforme a las disposiciones transitorias de la actual Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, aquella ley es aplicable al procedimiento administrativo de presunta infracción a la Ley de Petróleos Mexicanos instaurado en contra de los quejosos.

Por estas razones, **deberán desestimarse los conceptos de violación encaminados a combatir la constitucionalidad del acuerdo delegatorio** en que esta autoridad responsable fundó su competencia para emitir la resolución reclamada.



Por otra parte, una vez determinada la constitucionalidad del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado en el diario oficial de la federación el ocho de julio de dos mil quince, también conviene, a mayor abundamiento, realizar algunas manifestaciones en relación con la competencia que asiste a esta autoridad responsable para, mediante dicho acuerdo, iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de sanción a empresas y proveedores con apoyo en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Con tal finalidad es pertinente, en primer lugar, señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar de manera armónica las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado que los actos de molestia precisan, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe.

También debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad administrativa en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permite la garantía en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Tal criterio orientador se desprende del contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 115/2005, cuyo es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."

De dicho criterio se desprende que, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte



correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora del acto de molestia.

De esta manera, la Segunda Sala del Alto Tribunal concluyó que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades administrativas, al emitir una orden que redunde en acto de molestia, están obligadas en cualquier caso a fundar correctamente su competencia, puesto que si bien una correcta técnica legislativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud, su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio.

Precisada la forma en que las autoridades debemos satisfacer la exigencia de fundar y motivar nuestra competencia al emitir actos de molestia o privación a los gobernados, también debe tenerse presente que el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, al emitir el oficio citatorio UR-DPTI-AR-086/2017 y en la resolución reclamada, fundó su competencia en los términos siguientes:

"PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, es competente, para resolver el presente procedimiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, 25 párrafo quinto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º fracciones I y II, 3º fracciones I, III, VI y VIII, 4 fracción I, 5, 8 fracción IV, y Capítulos Cuarto y Quinto de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; Cuarto párrafo del Tercer Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 37, fracciones XII y XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 86 y 90, de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto del dos mil catorce; 53, fracción II, y Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; artículo 18 y 19 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil quince; Declaratoria de entrada en vigor del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil quince; 215, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos; así como el numeral 102, del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial; ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince, en relación con el Sexto Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete."



De esta reproducción, se advierte que el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, invocó diversos normativos para justificar su competencia, entre otros, los artículos 3, fracción I, y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,¹ 18 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil quince;² 102 del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis;³ y primero, párrafo primero, del **"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN"** publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince.⁴

Tales preceptos legales establecen, concretamente, lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. **Autoridades competentes:** La Secretaría, los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de sus respectivas áreas de quejas y de responsabilidades, así como los órganos que al efecto determinen las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México y demás órganos públicos, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley.

Artículo 5. La Secretaría, así como los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades de dichos Órganos, serán autoridades competentes para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recurso establecidos en esta Ley.

La Secretaría será la única autoridad competente encargada de investigar la posible comisión de la infracción a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de la misma y aplicar las sanciones correspondientes.

La Secretaría podrá solicitar a un Estado Extranjero la información que requiera para la investigación y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador a que se refieren los Capítulos Tercero y Cuarto de esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos Estados sean parte y demás ordenamientos aplicables."

Artículo 18. La Unidad de Responsabilidades de PEMEX podrá contar con un delegado en Pemex Transformación Industrial."

Artículo 102. El Titular de la Unidad de Responsabilidades de Pemex podrá contar con un delegado y titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades en Pemex Transformación Industrial, en los términos señalados en el Reglamento, el Acuerdo de Creación, así como en las disposiciones aplicables."

"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN.

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. Se delega en el Titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en los titulares de área de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dicha Unidad, en los delegados de esa Unidad en cada una de las empresas productivas subsidiarias y en los titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de las delegaciones de la citada Unidad; así como en los Titulares de las Unidades de Responsabilidades y titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dichas Unidades de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias, las facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la Secretaría de la Función Pública para recibir las denuncias y tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan los sujetos de la citada Ley; iniciar de oficio o por denuncia y llevar hasta su conclusión la etapa de investigación prevista en el propio ordenamiento, así como para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en el referido ordenamiento e imponer las sanciones administrativas que procedan, incluyendo las facultades de imponer medidas de apremio, salvo la reservada a esta Secretaría en términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafos segundo y tercero, de la citada Ley. Asimismo, también se delega en los citados servidores públicos, la facultad para tramitar y resolver el recurso establecido en dicha Ley."



- La Secretaría de la Función Pública es autoridad competente para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recursos establecidos en dicha ley (numerales 3, fracción I y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas).
- La Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, podrá contar con un delegado en la empresa productiva subsidiaria denominada Pemex Transformación Industrial (artículos 18 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil quince; y 102 del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis).
- El Secretario de la Función Pública, con apoyo, entre otras disposiciones, en los artículos 14, párrafo primero, y 16, párrafos primero y tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, décimo transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos y 48 de su reglamento; y 3, fracción I y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigentes al seis de julio de dos mil quince, delegó, entre otras autoridades, en los Delegados de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos **y sus respectivos titulares de sus áreas de responsabilidades**, las facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la Secretaría de la Función Pública para recibir las denuncias y tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan los sujetos de la citada ley; iniciar de oficio o por denuncia y llevar hasta su conclusión la etapa de investigación prevista en el propio ordenamiento, así como para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en el referido ordenamiento e imponer las sanciones administrativas que procedan (artículo primero, párrafo primero, del **"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN"** publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince).

De lo hasta aquí expuesto, se advierte que el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, acreditó su existencia legal, así como su competencia, tanto material como territorial y por grado, para emitir el oficio citatorio que contiene el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 Y PTRI-S-004/2017, seguido en contra de los quejosos, así como para pronunciar la resolución con que finalizó ese procedimiento, la cual constituye uno de los actos reclamados destacados por los amparistas.

En tal virtud, contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, deberá considerarse que el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, tiene competencia para emitir el oficio citatorio que contiene el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo



sancionador seguido en su contra, así como para pronunciar la resolución con que finalizó dicho procedimiento, y que fundó adecuadamente su competencia para emitir dichos actos, habida cuenta que así se desprende -específicamente- de los artículos 3, fracción I y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; 18 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil quince; 102 del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis; y primero, párrafo primero, del **"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE INDICAN"** publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince.

En este orden de ideas, es claro que en términos del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, esta autoridad responsable, tiene conferidas plenas facultades para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas seguido en contra de los quejosos y, en consecuencia, **su cita en la resolución impugnada es suficiente para estimar satisfecha la obligación que pesa sobre esta autoridad de fundar su competencia.**

Por estas razones, se solicita a su señoría declare infundado el argumento de violación que se refuta.

A guisa de abundamiento, debe decirse que esta autoridad cumplió cabalmente con la obligación de fundar su competencia para emitir la resolución impugnada, pues, además de otras disposiciones de carácter general, invocó para tal efecto el **Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican**, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, del cual se advierte, con total claridad, que el Secretario de la Función Pública, con apoyo, entre otras disposiciones, en los artículos 1, 3, 5, 79 y 80, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigentes en la fecha de expedición del referido acuerdo, esto es, el seis de julio de dos mil quince, delegó, entre otras autoridades, en los Delegados de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos y de sus respectivas áreas de responsabilidades, las facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la Secretaría de la Función Pública para recibir las denuncias y tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan los sujetos de la citada ley; iniciar de oficio o por denuncia y llevar hasta su conclusión la etapa de investigación prevista en el propio ordenamiento, así como para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en el referido ordenamiento e imponer las sanciones administrativas que procedan.

En este orden de ideas, es claro que en términos del **Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican**, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, esta autoridad señalada como responsable, se reitera, tiene



conferidas plenas facultades para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas seguido en contra de la actora y, en consecuencia, **su cita en la resolución impugnada es suficiente para estimar satisfecha la obligación que pesa sobre esta autoridad de fundar su competencia.**

Asimismo, debe señalarse que esta autoridad responsable tiene conferidas atribuciones para iniciar, instruir y resolver el procedimiento administrativo que le fue instaurado a los amparistas, pues el ejercicio de tal prerrogativa se fundó en el **Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación**, cuya validez deriva de que el Secretario de la Función Pública, autoridad delegante, tiene conferidas facultades para imponer sanciones en materia de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Para poner de manifiesto la ineficacia del argumento esgrimido por los solicitantes de amparo, debe tenerse presente que, como lo han determinado los Tribunales de la Federación en diversas ejecutorias, la delegación de facultades es una técnica de transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública a favor de un órgano inferior, que persigue como propósito facilitar los fines del primero, cuya justificación y alcance se encuentran en la ley orgánica, reglamento interior o acuerdo del titular, cuyo perfeccionamiento requiere la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de dos órganos, el delegante y delegado, la titularidad por parte del primero de dos facultades, una que será transferida y otra la de delegar y la aptitud del segundo para recibir una competencia por la vía de la delegación.

Como ese órgano colegiado podrá observar, tales requisitos, necesarios para la emisión del acuerdo delegatorio, se cumplen en relación con el Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, como se explica a continuación:

- a) Existencia de dos órganos de la administración pública, uno superior y otro inferior: En términos de lo dispuesto por el artículo 86 y décimo primero transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos y 48 de su reglamento, la Unidad de Responsabilidades y sus delegaciones, así como los titulares de sus respectivas áreas de responsabilidades y de quejas, denuncias e investigaciones, se hallan subordinados jerárquicamente a la Secretaría de la Función Pública, de ahí que se acredite la existencia de los dos órganos de la administración pública, uno superior (Secretario de la Función Pública) y otro inferior (titulares de áreas de responsabilidades de las Delegaciones de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en sus empresas productivas subsidiarias);
- b) La titularidad del superior de dos facultades, la de delegar y la que será transferida: En términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo primero, y 16, párrafos primero y tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente en la época de emisión del acuerdo, corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, quienes, para la mejor organización del trabajo, podrán delegar en los servidores públicos subalternos, cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por



disposición de ley o del reglamento interior respectivo deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares, mediante la expedición de los acuerdos correspondientes; mientras que en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y Décimo Primero Transitorios de la Ley de Petróleos Mexicanos; 48 y Séptimo Transitorios del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 3, fracción I y 5 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente en la época de emisión del acuerdo delegatorio, la Secretaría de la Función Pública es autoridad competente para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recursos establecidos en la propia Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sin que se precise que esa facultad sea de ejercicio exclusivo del titular de la Secretaría de la Función Pública, lo que de suyo implica que el Secretario de la Función Pública tiene conferida la facultad de delegar, así como la de investigar, tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos y recursos establecidos en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

- c) La aptitud del inferior jerárquico para recibir la facultad delegada. Los artículos 86 y decimoprimer transitorio de la actual Ley de Petróleos Mexicanos establece que en tanto sobre aplicación lo señalado en el párrafo primero del Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Unidad de Responsabilidades a que se refiere el artículo 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos dependerá jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública, su titular será nombrado por dicha dependencia y se regirá para su organización, operación y funcionamiento conforme a las disposiciones aplicables a las áreas de responsabilidades de los órganos internos de control; y que las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, entre otros ordenamientos. Al efecto, la Secretaría de la Función Pública será autoridad competente, lo que de suyo implica que la titular de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, sus Delegados y **los titulares de sus respectivas áreas de responsabilidades** y de quejas, denuncias e investigaciones **están capacitados para recibir la facultad delegada.**

Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que el Secretario de la Función Pública tiene facultades para delegar en la titular de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y sus delegaciones en las empresas productivas subsidiarias, así como en sus respectivas áreas de responsabilidades y de quejas, denuncias e investigaciones, la atribución de investigar, tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos y recursos establecidos, entre otros ordenamientos legales, en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En este contexto, esa autoridad podrá concluir que el **Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican, publicado el ocho de julio de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación**, con apoyo en el cual se fundó la competencia para emitir la resolución reclamada, goza de plena validez, en la medida en que fue emitido por el Secretario de la Función Pública, quien, como se explicó en líneas anteriores, tiene conferidas plenas facultades para delegar a esta autoridad responsable la atribución de tramitar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de los quejosos por la presunta comisión de infracciones previstas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.



En este contexto, ante la ineficacia de los argumentos de violación en estudio, se solicita se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal.

N relación a los argumentos en los que se refiere substancialmente que la resolución definitiva es inconstitucional ya que la hipótesis sancionadora no incluye cláusulas de contratos y, por lo tanto, la conducta perseguida por la autoridad responsable es atípica; además, la resolución definitiva es inconstitucional por encontrarse indebidamente fundada y motivada, puesto que resulta jurídicamente inviable que la garantía corporativa fuera emitida por el cesionario del contrato de obra pública, lo anterior, ya que se considera que dentro del elemento normativo del tipo administrativo "requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal" se incluyen los acuerdos entre la contratante y la contratista, cuando lo cierto es que los contratos celebrados por Pemex Transformación Industrial, todos los actos y aspectos que derivan de los mismos, así como su cumplimiento e interpretación son de naturaleza privada, se rigen por la legislación mercantil o común y son competencia del Poder Judicial de la Federación.

El anterior argumento se aprecia inoperante, pues, como se ha sostenido con antelación, en la resolución reclamada, el tema de tipicidad de la conducta quedó superado, en la medida en que se establecieron los elementos normativos y de convicción que conducen a establecer, de manera indubitable, que los quejosos se ubicaron en el supuesto de infracción.

Asimismo, resulta de primordial relevancia precisar que, contrario a lo que señalan los impetrantes de amparo, la conducta que esta autoridad les imputó en el procedimiento administrativo sancionador, **no fue por incumplimiento** de la Cláusula 13 del Contrato DCPA-OP-GCP-DGRI-A-3-15, como lo pretenden hacer valer, si no **por haber simulado** el cumplimiento de los requisitos o reglas del contrato número DCPA-OP-GCP-DGRI-A-3-15, específicamente la Cláusula 13, apartado A, segundo párrafo del mismo, en razón de que, mediante escrito de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó la autorización para formalizar la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas del contrato que nos ocupa, haciendo referencia que se entregaba una supuesta garantía corporativa la cual se comprometió a sustituir por una debidamente legalizada y protocolizada en un plazo no mayor de 20 días naturales, lo cual no aconteció, antes bien, mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, entregó una supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis emitida por Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., y no por la cesionaria **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, careciendo por ello de validez y eficacia jurídica para respaldar el Contrato DCPA-OP-GCP-DGRI-A-3-15, aparentando así el debido cumplimiento de la Cláusula 13 del Contrato DCPA-OP-GCP-DGRI-A-3-15.

Por otro lado, cabe precisar lo siguiente en cuanto a los requisitos de la garantía corporativa que debía otorgarse por el cesionario del contrato de obra pública:

Con fecha doce de noviembre de dos mil quince, **PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL**, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos y la empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, celebraron el **Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción número DCPA-OP-GCP-DGRI-A-3-15** para ejecutar la "Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la

Marina Nacional número 329, Torre Ejecutiva Piso 19, colonia Verónica Anzures, C.P. 11311, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México www.pemex.com



Refinería Miguel Hidalgo", con un plazo de 530 (quinientos treinta) días, contados a partir del diecisiete de noviembre de dos mil quince y con fecha de terminación el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, por un monto que asciende a \$1,811'628,719.69 (un mil ochocientos once millones seiscientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 69/100 M.N.), sin incluir IVA, más un monto de \$128'000,000.00 (ciento veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de Costos Reembolsables, estableciendo en su Cláusula 13 referente a la cesión de derechos y obligaciones del contrato que nos ocupa, en el que se estableció que cuando la cesión del contrato referida fuera otorgada a una empresa que formara parte del mismo Grupo Corporativo de la Contratista, bastaría que el cesionario emitiera una garantía corporativa de acuerdo al modelo establecido dicho contrato, como se transcribe a continuación:

"13.- CESIÓN

A. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO

El CONTRATISTA podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del presente Contrato, siempre y cuando obtenga la autorización previa y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, la cual se deberá obtener con la intervención del Área Jurídica, misma que no podrá ser negada y/o retrasada injustificadamente.

El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que se pretende ceder a transferir los derechos y obligaciones del presente contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás que resulten necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones objeto del presente contrato. Se entiende que cuando la cesión a que se refiere la presente Cláusula sea otorgada a una empresa que forme parte del mismo Grupo Corporativo de la CONTRATISTA, bastará que dicho cesionario emita una garantía corporativa de acuerdo al modelo que se refiere el Anexo "W". Las consecuencias de dicha cesión, se deberán formalizar mediante convenio modificatorio correspondiente."

Con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis se llevó a cabo el Acuerdo de Voluntades Privado de Cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, que celebraron las sociedades CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., representada por los señores Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José De Faria, en su carácter de "CEDENTE"; ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., representada por los señores Helder Antonio Campomizzi y Luiz Cesar Coelho Borges, en su carácter de "CESIONARIO", con la comparecencia de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, representada por el Ingeniero Andrés Arthur Glorieux González, y los señores Loreley Monterrubio Ojeda y Alan Birch Chiver, en su carácter de testigos, en la misma fecha, Gleiber José de Faria, quien se ostentó como Director de Administración y Finanzas de la empresa ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., remitió al Ing. Andre Arthur Glorieux González, entonces Gerente de Proyectos 2, de Pemex Transformación Industrial, un documento de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, denominado "GARANTIA CORPORATIVA", la cual no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato que nos ocupa, antes bien, fue emitida supuestamente por la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., a través de sus representantes, Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José De Faria, documento que pudiera ser válido en la República Federativa de Brasil, en virtud de su emisor pero para ser un documento válido en los Estados Unidos Mexicanos,



debía presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes, situación a la que además se obligó la empresa Cesionaria mediante escrito de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, así mismo tampoco se acreditan las facultades de quienes actuaron a nombre y representación de la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., a saber Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José De Faria; no obstante todo lo mencionado, con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, fue celebrado el Primer Convenio Modificatorio de Formalización de la Cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, entre Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos y la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con la comparecencia de la empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., asentándose en el mismo que el CESIONARIO se obligaba a entregar a Pemex Transformación Industrial a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la formalización del Convenio Modificatorio, la Garantía Corporativa, debidamente legalizada y protocolizada, lo cual en la especie, no aconteció.

Así, si existe disconformidad entre la voluntad real a que se refiere la Cláusula 13 del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 y lo declarado externamente por los quejosos.

Lo anterior es así, en virtud de que en el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, de fecha doce de noviembre de dos mil quince, celebrado entre **PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL**, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos y la empresa **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, para ejecutar la "Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo", se estableció en su Cláusula 13 referente a la cesión de derechos y obligaciones del contrato que nos ocupa, que cuando la cesión del contrato referida fuera otorgada a una empresa que formara parte del mismo Grupo Corporativo de la Contratista, bastaría que el **cesionario** emitiera una garantía corporativa de acuerdo al modelo establecido dicho contrato, como se transcribe a continuación:

"13.- CESIÓN

A. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO

El CONTRATISTA podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del presente Contrato, siempre y cuando obtenga la autorización previa y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, la cual se deberá obtener con la intervención del Área Jurídica, misma que no podrá ser negada y/o retrasada injustificadamente.

El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que se pretende ceder o transferir los derechos y obligaciones del presente contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás que resulten necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones objeto del presente contrato. Se entiende que cuando la cesión a que se refiere la presente Cláusula sea otorgada a una empresa que forme parte del mismo Grupo Corporativo de la CONTRATISTA, bastará que dicho cesionario emita una garantía corporativa de acuerdo al modelo que se refiere el Anexo "W". Las consecuencias de dicha cesión, se deberán formalizar mediante convenio modificatorio correspondiente.



En disconformidad con lo anterior, la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, solicitó la autorización para formalizar la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas del contrato que nos ocupa, haciendo referencia que entregaba una supuesta garantía corporativa la cual se comprometió a sustituir por una debidamente legalizada y protocolizada, lo cual no aconteció, antes bien, mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, entregó una supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., la cual carece de validez y eficacia jurídica en razón de que:

- La supuesta garantía corporativa no fue emitida por la empresa Cesionaria **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, sino por la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., como se aprecia de la supuesta Garantía Corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

La supuesta garantía corporativa se emite a la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., representada para efecto de su emisión, por los señores Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José De Faria, quienes no contaban con facultades para ello, lo que se acreditó con el Instrumento público número 118,827, y con el que se protocolizó el poder otorgado por la empresa matriz Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., a partir del dieciséis de noviembre de dos mil quince, a favor de Luis Alberto de Meneses Weyll y Guillermo Antonio Suárez Solís, quienes debían actuar de manera conjunta para ejercer las siguientes facultades:

- a) Comparezcan ante el notario público de su elección en la República Mexicana, para firmar el acta constitutiva, de una sociedad anónima bajo la denominación de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A.;
- b) Suscriban y paguen, total o parcialmente, en el acta de la constitución o posteriormente, conforme sea el caso, las acciones por partes sociales representativas del capital social que crean conveniente.
- c) Celebren, con la Secretaría de Relaciones Exteriores el convenio que se refiere el artículo 15 de la Ley de Inversiones Extranjeras con relación a la Sociedad correspondiente a ser constituida y a las acciones o partes sociales que suscriban en su nombre.
- d) Otorguen todos los demás términos y condiciones del instrumento constitutivo de estatutos, y designen a los consejeros y o directores administradores y apoderados que sean necesarios para el funcionamiento de la sociedad correspondiente y para que fijen las atribuciones y obligaciones de las personas antes mencionadas.
- e) Firmen cualquier tipo de documentos que consideren necesarios para presentar ante la Comisión de Inversiones Extranjeras o ante cualquier Secretaría o Dependencia gubernamental, en virtud de la constitución, registro y cualquier otra autorización, consultas o acuerdos que sean necesarios para la organización de la sociedad correspondiente.
- f) Reciban los respectivos certificados provisionales y/o títulos definitivos de acciones que sean emitidos a favor de la poderdante, si fuera el caso.
- g) Comparezcan a la asamblea de accionistas o socios constitutiva de la sociedad, para designar a un administrador único o los consejeros o directores, titulares y/o suplentes, Director general o gerente general, gerentes, funcionarios,



representantes principales y suplentes, delegados y apoderados, determinando las facultades y obligaciones de dichas personas.

- h) Preparen, firmen y representen cualquier información o documentos requeridos por las autoridades fiscales mexicanas en relación con la poderdante como accionista o socio de la sociedad a ser constituida.
- i) Para comparecer ante el notario público de su preferencia en México, a fin de protocolizar el presente documento para su uso en los estados unidos mexicanos.
- j) Practiquen todos los demás actos para el fiel e integral cumplimiento de presente mandato, que tendrá vigencia de tres meses, no pudiendo ser transferido, siéndoles prohibido, sin embargo, el otorgamiento de aval, fianza o cualquier otra garantía de terceros.

Apreciándose de lo anterior, un poder limitado en cuanto a objeto y temporalidad (tres meses de vigencia contados a partir del dieciséis de noviembre de dos mil quince, fecha en que se emitió el poder) a favor de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien debía actuar para efecto de representación de dicha persona moral en conjunto con Guillermo Antonio Suárez Solís, sin tener facultades para el otorgamiento de aval, fianza o cualquier otra garantía de terceros, así mismo el Señor Gleiber José De Faria, en conclusión, no contaba con facultades de representación a nombre de la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A.

Motivos por los cuales los quejosos tenían la obligación de presentar la garantía corporativa, derivado de la cesión de derechos efectuada en favor de la empresa Cesionaria **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, motivo por el cual, evidentemente resultan inoperantes los agravios en estudio.

Por cuanto hace a los argumentos que, en resumen, establecen que la resolución definitiva es inconstitucional por contravenir el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.** no estaban obligadas a acreditar las capacidades técnicas, financieras y demás necesarias para cumplir con las obligaciones del contrato de obra pública, puesto que en el caso concreto se emitió la Garantía Corporativa, y en consecuencia, OCIMEX quedaba relegado de la carga de acreditar sus capacidades técnicas, financieras, y demás necesarias para el cumplimiento del Contrato de Obra Pública.

El anterior argumento se estima infundado, ya que como se ha mencionado, con fecha doce de noviembre de dos mil quince, **PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL**, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos y la empresa **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, celebraron el **Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15** para ejecutar la "Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo", con un plazo de 530 (quinientos treinta) días, contados a partir del diecisiete de noviembre de dos mil quince y con fecha de terminación el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, por un monto que asciende a \$1,811'628,719.69 (un mil ochocientos once millones seiscientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 69/100 M.N.), sin incluir IVA, más un monto de \$128'000,000.00 (ciento veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de Costos Reembolsables, estableciendo en su Cláusula 13 referente a la cesión de derechos y



obligaciones del contrato que nos ocupa, en el que se estableció que cuando la cesión del contrato referida fuera otorgada a una empresa que formara parte del mismo Grupo Corporativo de la Contratista, bastaría que el cesionario emitiera una garantía corporativa de acuerdo al modelo establecido dicho contrato, además de que se debía acreditar que era obligatorio preservar las capacidades técnicas, financieras y demás que resulten necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones objeto del presente contrato, como se transcribe a continuación:

"13.- CESIÓN

A. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO

El CONTRATISTA podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del presente Contrato, siempre y cuando obtenga la autorización previa y por escrito de TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, la cual se deberá obtener con la intervención del Área Jurídica, misma que no podrá ser negada y/o retrasada injustificadamente.

El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que se pretende ceder o transferir los derechos y obligaciones del presente contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás que resulten necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones objeto del presente contrato. Se entiende que cuando la cesión a que se refiere la presente Cláusula sea otorgada a una empresa que forme parte del mismo Grupo Corporativo de la CONTRATISTA, bastará que dicho cesionario emita una garantía corporativa de acuerdo al modelo que se refiere el Anexo "W". Las consecuencias de dicha cesión, se deberán formalizar mediante convenio modificatorio correspondiente.

Atendiendo lo anterior, la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** en el procedimiento administrativo refirió:

A. "A fin de acreditar la capacidad técnica y financiera de OECI en su calidad de garante de las obligaciones contractuales de su subsidiaria directa frente a Pemex Transformación Industrial; en febrero y junio de 2016, el Grupo Odebrecht hizo entrega a la misma de (i) los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2014 de OECI (entonces Constructora Norberto Odebrecht Brasil, S.A.), (ii) el organigrama societario de la operación de Ingeniería y construcción de Odebrecht México y (iii) el curriculum vitae, una relación de las obras ejecutadas y sus correspondientes certificados de obra (Anexo 6)."

En relación a lo anterior, la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, aportó en el procedimiento administrativo las siguientes pruebas:

Anexo 6.- En el presente anexo, la promovente agregó las siguientes documentales:

- Copia simple del escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al Ing. José Aarón Marrufo Ruiz, Gerente de Proyectos de Pemex Refinación, signado por el Ing. Marcelo Neves Ferreira, Director de Proyectos Nueva Salamanca, Odebrecht e Ica Fluor, el cual refiere la entrega de información financiera y Curriculum vitae de la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional,



S.A, relacionado al contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14.

- b) Impresión de correo electrónico de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis de las 2:29 p.m., enviado por Guillermo Solís, para: Monterrubio Ojeda Loreley; Glorieux González Andre Arthur, Hinojosa González Hiram, (armando.hiram.hinojosa@pemex.com) (armando.hiram.hinojosa@pemex.com); Bravo Betancourt Larrañaga Ignacio, José Aarón Marrufo Ruiz, (jose.aaron.marrufo@pemex.com); con copia para Helder Antonio Campomizzi; Carmen Lucia López Pérez; Alan Birch Chiver, el cual señala como asunto: "Cesión de Derechos Tula II." Enviando vínculo de Drop Box.
- c) Copia simple de estados contables de la empresa Constructora Norberto Odebrecht Brasil, S.A, al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce e informe de los auditores independientes.
- d) Impresión con Organigrama Societario denominado "INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - ODEBRECHT MÉXICO".
- e) Impresión de "LISTADO DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE MAYOR RELEVANCIA EN OBRA DE INFRAESTRUCTURA".
- f) Impresión de "LISTADO DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE MAYOR RELEVANCIA EN OBRA INDUSTRIAL".
- g) Copia simple de documento correspondiente a una traducción al idioma español y su correspondiente documento en idioma portugués.
- h) Documentos en idioma extranjero, los cuales se identifican al rubro con la leyenda "TERMO DE ENCERRAMIENTO DE CONTRATO" y "Cintra".
- i) Documento en idioma extranjero, el cual se identifica al rubro con la leyenda "ATESTADO".
- j) Copia simple del instrumento notarial número 24,874 del día veinte de marzo de dos mil trece, emitido por el Notario Público número 171 del entonces Distrito Federal, por medio se llevó a cabo la ratificación de firmas que otorgan los señores Stefan Lanna Lepecki y Paulo Hugó Silva Ramos Junior en su carácter de Apoderados Generales de la sociedad denominada "BRASKEM IDESA", Sociedad Anónima Promotora de Inversión.
- k) Copia simple del "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DONDE SERA CONSTRUIDA LA PLANTA DE COQUIZACION RETARDADA." ACTA.ROAS-001-2014 de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, en relación al contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 referente al "Acondicionamiento de sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo".
- l) Documento en idioma extranjero, el cual se identifica al rubro con la leyenda "PETROBRAS".
- m) Documento en idioma portugués y su traducción al idioma español.



- n) Documento en idioma extranjero el cual se identifica al rubro con la leyenda "PETROBRAS".
- o) Documentos en idioma extranjero los cuales se identifican al rubro con la leyenda: "SAULO VINICIO ROCHA SILVEIRA", "DS-006/2010", "PetroquímicaSuape", "José Gilberto Mariano Costa", "PetroquímicaSuape", "CREA-PE", "DS-006/2010", "PetroquímicaSuape", "CREA-PE", "PetroquímicaSuape", "CREA-PE", "PetroquímicaSuape", y "TERMO DE RECEBIMIENTO DEFINITIVO".
- p) Documento en idioma extranjero, que se identifica al rubro con la leyenda "PETROBRAS".
- q) Documento en idioma extranjero que se identifica al rubro con la leyenda "COPESUL".
- r) Copia simple del "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, EJECUTADOS DEL CONTRATO No. PR-OP-L-002/05P, fecha cuatro de octubre de dos mil trece, referente al "DESARROLLO DE LA INGENIERÍA, PROCURA DE EQUIPO Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, CAPACITACIÓN, PREPARATIVOS DE ARRANQUE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO PARA LAS UNIDADES: PLANTA HIDRODESULFURADORA DE GASÓLEOS, PLANTA DE HIDROGENO Y PLANTA RECUPERADORA DE AZÚFRE, QUE INCUYE SECCIÓN CLAUS Y SECCIÓN DE TRATAMIENTO DE GAS DE COLA, EN LA REFINERÍA "GENERAL LAZARO CARDENAS", EN MINATITLAN, VERACRUZ".
- s) Copia simple del "ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN-FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO, EJECUTADOS DEL CONTRATO No. PR-OP-L-001/05P, de fecha once de octubre de dos mil trece, referente al "DESARROLLO DE LA INGENIERÍA, PROCURA DE EQUIPO Y MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, CAPACITACIÓN, PREPARATIVOS DE ARRANQUE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES DE: PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y PLANTA DE GAS ASOCIADA; PLANTA REGENERADORA DE AMINA Y PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS DE COQUIZACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", UBICADA EN MINATITLAN, VERACRUZ".

Las pruebas referidas en los incisos h), i), l), n), o) p), q), fueron desechadas en términos del acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por estar presentadas contrarias a derecho en virtud de que no se presentaron en español y no adjuntaron traducción al idioma castellano de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 81 y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con los artículos 2 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 21 y 26 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Así las cosas, la probanza referida en el inciso b), referente a la Impresión de correo electrónico de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, el cual señala como asunto: "Cesión de Derechos Tula II." Enviando vínculo de Drop Box, en el que se encontraba cabe señalar que esta autoridad, a fin de mejor proveer en el expediente de cuenta, de conformidad con el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 21 de la Ley Federal



Anticorrupción en Contrataciones Públicas, esta autoridad giró el oficio número UR-DPTI-AR-0129-2017 de fecha dieciocho de julio del año en curso, a la Gerencia de Proyectos 2, de Pemex Transformación Industrial, a fin de que rindiera un informe pormenorizado, respecto de la información que refiere el correo electrónico que se acuerda, solicitud que fue atendida mediante oficio DGTRI-SPI-GPI-408-2017 de fecha cuatro de agosto del año en curso, el cual se puso a la vista de la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, mediante oficio UR-DPTI-AR-0153-2017 siendo atendido por dicha persona moral mediante escrito OLCMEX-JUR-SFP-030-2017 de fecha dieciocho de agosto del año en curso, solicitando re realizara nuevamente Informe pormenorizado, lo cual esta autoridad tuvo por improcedente, por considerar que el oficio DGTRI-SPI-GPI-408-2017, cubre los extremos de lo requerido por esta autoridad a dicha Gerencia. Al respecto cabe señalar que el correo mencionado en el inciso b) administrado con el oficio DGTRI-SPI-GPI-408-2017, referido, que se valoran en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa del artículo 21 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, acreditan que mediante vínculo de Drop Box se puso a disposición de personal de Pemex Transformación Industrial la versión limpia del convenio modificatorio de cesión de los derechos y obligaciones del contrato de obra pública No. DCA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, versión limpia del acuerdo de voluntades privado de cesión de derechos y obligaciones del contrato, el poder notarial otorgado por Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., en favor de los señores Helder Antonio Campomizzi y Luiz Cesar Coelho Borges, el poder notarial otorgado por Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., para la emisión de la garantía corporativa.

En relación a las probanzas identificadas en los incisos a), c) y d), con dicha documentación acreditan la capacidad técnica y financiera en su calidad de garante de las obligaciones contractuales de su subsidiaria directa frente a Pemex Transformación Industrial; no se acredita en virtud de que, dichas documentales fueron presentadas en un procedimiento diverso, pues como lo señala del propio escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue dirigido al Ing. José Aaron Marrufo Ruiz, Gerente de Proyectos de Pemex Refinación, signado por el Ing. Marcelo Neves Ferreira, Director de Proyectos Nueva Salamanca, Odebrecht e Ica Fluor, el cual refiere la entrega de información financiera y Curriculum vitae de la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., fue entregada para requisito el **contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14**, para el "Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería d Salamanca", y el contrato en estudio es DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 para la "Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo".

En suma, la manifestación esgrimida por los quejosos, en el sentido de que a fin de acreditar la capacidad técnica y financiera de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., en su calidad de garante de las obligaciones contractuales de su subsidiaria directa frente a Pemex Transformación Industrial; en febrero y junio de dos mil dieciséis, el "Grupo Odebrecht" hizo entrega a la misma de (i) los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A. (entonces Constructora Norberto Odebrecht Brasil, S.A.), (ii) el organigrama societario de la operación de ingeniería y construcción de Odebrecht México y (iii) el curriculum vitae, una relación de las obras ejecutadas y sus correspondientes certificados de obra, se reitera no acredita su dicho con las probanzas referidas en los incisos a), c), d), e), f),



g), j), k), m), r), y s), del Anexo 6 referido, así como las documentales anexas al escrito OICMEX-JUR-SFP-030-2017 de fecha dieciocho de agosto del año en curso, consistentes en las documentales referentes a (i) "MODELO DE CONTRATACIÓN, APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO" y (ii) "JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES PARA EJERCER LA OPCIÓN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.", las cuales fueron admitidas por esta autoridad en términos del proveído de fecha diecisiete de julio y veintitrés de agosto del mismo año, y que se valoran por esta autoridad de conformidad con los artículos 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, toda vez que en dichas probanzas no se aprecia que ostenten algún sello de recepción o leyenda por parte de Pemex Transformación Industrial de que conste que las mismas hayan sido recibidas para efecto de acreditar la capacidad técnica y financiera de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., ni de Construtora Norberto Odebrecht, S.A.

A mayor abundamiento, los estados contables individuales que se presentaron con el objeto de acreditar la capacidad financiera, al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce e informe de los auditores independientes, fue para acreditar la capacidad técnica y financiera de la empresa Construtora Norberto Odebrecht Brasil, S.A., cuando la capacidad técnica y financiera a acreditarse lo era la de la sancionable **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos de lo requerido en la cláusula 13 inciso A) del contrato de mérito.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en el procedimiento no resulta ser motivo de controversia el hecho de que la empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A. y Construtora Norberto Odebrecht, S.A., haya acreditado o no sus capacidades técnicas y financieras delante de Pemex Transformación Industrial, ni que "Grupo Corporativo Odebrecht" haya entregado la documentación referida por la sancionable en su aseveración, toda vez que de acuerdo con la Cláusula 13 del contrato número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, de quien se debían acreditar las capacidades técnicas y financieras era en este caso de la empresa **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, toda vez que la garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, carecía de validez y eficacia jurídica, tal como se imputó en el oficio citatorio número UR-DPTI-AR-083/2017.

Por lo anterior, resulta inoperante el concepto de violación en estudio.

Por otra parte, respecto al argumento en el que se refiere sustancialmente que la resolución es inconstitucional en tanto que la conducta desplegada por Construtora Norberto Odebrecht, S.A. resulta atípica.

El anterior argumento resulta infundado, pues como se ha sustentado con antelación, el principio de tipicidad que rige en el derecho penal es recogido en el artículo 14 constitucional, el cual resulta aplicable también al derecho administrativo disciplinario, en tanto que ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, así, debe señalarse que la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aún el reproche posible a su autor, y constituye la base



fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho.

En ese orden de ideas, del propio principio podemos encontrar como derivaciones la taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir que se hagan complementos a base de analogía o mayoría de razón para tipificar la conducta de la infracción administrativa.

De esta forma, la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación, pues de suceder eso, el tipo se desbordaría dando lugar a múltiples y variados elementos surgidos de la imaginación del interprete, que no vendrían descritos literalmente en la infracción legal de que se trate, ya sea penal o administrativa.

Sentado lo anterior, debe decirse que, en la resolución reclamada, el tema quedó superado, en la medida en que se establecieron los elementos normativos y de convicción que conducen a establecer, de manera indubitable, que los ahora recurrentes se ubicaron en el supuesto de infracción previsto en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, al desplegar las conductas consistentes en:

La empresa **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.**, evadió el cumplimiento de los requisitos o reglas del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, en específico de la Cláusula 13, apartado A, del mismo, toda vez que como **CONTRATISTA** no acreditó que la empresa cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., preservara las capacidades técnicas, financieras y demás que resultarían necesarias que le permitieran cumplir con las obligaciones del mismo, ya que la supuesta garantía corporativa de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., presentada para realizar el trámite de cesión de derechos del contrato referido, carece de validez y eficacia jurídica, toda vez que no fue emitida por la empresa Cesionaria ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en términos de la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15; por lo que se ubica en la hipótesis de infracción contenida en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Conforme a lo anterior es claro que la conducta se adecua a la norma que prevé la infracción, esto es, la descrita en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de ahí que la conducta desplegada no resulte atípica.

Con apoyo en estas mismas consideraciones, también debe considerarse que la resolución reclamada no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley, como principio aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

A guisa de abundamiento, tampoco es exigible que el legislador prevea todos los supuestos y condicionantes en que se pudiese actualizar el tipo infractor previsto en la fracción IV, del



artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de ahí que carezca de sustento jurídico la afirmación en el sentido de que en el artículo en comento, no se prevé como conducta típica la desplegada por la empresa, pues, contrario a este posicionamiento, basta que la conducta así desarrollada encuadre en el tipo infractor en comento, como quedó acreditado en la especie.

Por los motivos expuestos deviene en infundado el agravio que se atiende.

En atención a los conceptos de violación en los que se afirma que la resolución por la que se desechó el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena es contrario al principio de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del inculpado, previsto en el artículo 14 constitucional por lo siguiente:

- El desechamiento del incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, le niega el derecho a beneficiarse de la aplicación retroactiva de la norma posterior más benéfica y presupone la subsistencia de la pretensión punitiva del Estado y la potestad para ejecutar las sanciones que no continúan vigentes.
- Esta autoridad responsable desechó el incidente de traslación de tipo y adecuación de la pena, al considerar -indebidamente- que su promoción fue inoportuna, siendo que este tipo de incidente puede ser promovido en cualquier etapa del procedimiento, en la medida en que es la manifestación de un ejercicio fundamental y, por consiguiente, no puede estar sujeto a un plazo.
- El incidente de traslación de tipo y adecuación de la pena constituye un derecho que tiene todo individuo en contra de quien se ejercitó acción penal, para exigir a la autoridad que determine si la conducta que fue estimada como delictiva conforme a la legislación vigente en la fecha de su comisión, continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, de ahí que resulte evidente que su promoción puede realizarse en cualquier momento del procedimiento, esto es, su presentación ante la autoridad no se encuentra sujeta a plazo alguno.
- El ámbito temporal del principio de retroactividad benigna en materia penal federal es el lapso comprendido entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, por lo que no hay inconveniente alguno en aplicar una ley posterior si es más benigna, aun cuando el hecho que motiva el proceso haya sido juzgado, ni tampoco puede haber inconveniente en que si el legislador ha declarado inocente el hecho sancionado por una ley anterior, se exima de toda pena a su autor, cuando ya hubiere sido condenado y esté purgando una condena, como se explica en el tesis de jurisprudencia 1ª/J. 4/2013 que lleva por rubro: **"TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYE UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE."**
- El incidente de traslación de tipo y adecuación de la pena constituye un derecho que tiene todo individuo en contra de quien se ejercitó acción penal, para exigir a la autoridad que determine si la conducta que fue estimada como delictiva conforme a la legislación vigente en la fecha de su comisión, continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, de ahí que resulte evidente que su promoción puede realizarse en cualquier momento del procedimiento, esto es, su presentación ante la autoridad no se encuentra sujeta a plazo alguno.



- Esta autoridad responsable, de manera indebida, computó el plazo para promover el incidente de traslación de tipo y adecuación de la pena a partir de la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, no obstante que el acto que motiva la incidencia lo constituye la existencia de un régimen más favorable, en relación con la legislación aplicable al momento de acontecer los hechos, de ahí que sea la propia vigencia del nuevo ordenamiento, la que delimite la posibilidad de realizar dicha petición; lo de que suyo se traduce en que tenga como único plazo para formular la incidencia que la ley benigna siga siendo vigente para poder aplicarla.
- La naturaleza atemporal del acto que motiva la aplicación retroactiva en beneficio del inculpado, que es precisamente la condición que permite que una ley pueda ser aplicada a un número indeterminado de casos y de sujetos sin agotar su objeto, es la razón que por la que es indiscutido que mientras haya acto legislativo, puede haber incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, es decir, mientras continúe vigente la Ley de Petróleos Mexicanos vigente, está en aptitud legal de pedir el beneficio que irroga su aplicación retroactiva.
- Esta autoridad debió proceder, por mandato expreso de los artículos 14 constitucional y 56 del Código Federal Penal, a aplicar, incluso de oficio, la norma más favorable al inculpado o sentenciado.

Deben **declare ineficaces los argumentos** antes esgrimidos por las razones siguientes:

En principio, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto que los motive.

En efecto, conforme a la disposición en comento, la promoción de las incidencias dentro del procedimiento administrativo sancionador, como lo es el previsto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, deberá realizarse dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación del acto que los motive.

Así, pues para efecto del cómputo del plazo con que se cuenta para hacer valer una incidencia dentro de un procedimiento sancionador, en primer término, debe establecerse cuál es el acto que la motiva, y, en segundo aspecto, su notificación.

En este punto, es menester señalar que por acto que motive la incidencia debe entenderse la condición que da nacimiento a la prerrogativa o pretensión que se deducirá a través de la vía incidental.

En este sentido, es claro que tratándose del incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, el hecho que motivó su promoción es, precisamente, el inicio del procedimiento administrativo sancionador a que se le sujetó, en tanto que es el acto a través del cual se hizo de su conocimiento la presunta irregularidad que se le atribuye y el plazo con que cuenta para formular manifestaciones y exhibir pruebas, lo que de suyo supone el conocimiento de los ordenamientos legales aplicables, tanto de carácter sustantivo, como adjetivo.



Conforme a lo anterior, **es exacto que** esta autoridad señalada como responsable, **para efectos del cómputo del plazo** con que contaban **para promover el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena** **hubiere considerado la notificación del inicio del procedimiento administrativo** a que se encontraban sujetos los ahora peticionarios de la protección constitucional, pues este último es el acto que los motiva, **en tanto que constituye la condición que da nacimiento a la prerrogativa o pretensión que se deducirá a través de la vía incidental**, puesto que, se reitera, a través de la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador tomaron conocimiento de las irregularidades que se les atribuyó, precisándole las disposiciones sustantivas de carácter general que se estimaron infringidas, así como las que rigieron el procedimiento administrativo en que se dictó la resolución reclamada, lo que de suyo permite concluir que tuvieron pleno conocimiento de la disposición de carácter general, a cuyo beneficio pretenden acogerse de manera retroactiva, mediante el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena.

En esta línea de pensamiento, **resulta inexacta su apreciación**, en el sentido de que el incidente de traslación del tipo y a adecuación de la pena no está sujeto a plazo alguno para su interposición, pues, se reitera, la oportunidad en la interposición de este tipo de incidentes se rige por el inicio del procedimiento administrativo sancionador a que se encuentra sujeta.

Ciertamente, la oportunidad en la interposición del incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, se encuentra regido por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en tanto que, de manera expresa y sin distinción alguna, señala que cualquier incidencia, expresión que, desde luego, incluye al incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, por no tener señalada una tramitación especial, deberá ser promovida dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto que la motive.

En este punto, debe invocarse el principio general de derecho que establece que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, que de suyo se traduce en que si la ley no hace diferenciación alguna no está autorizado al operador de la norma hacerlo.

Conforme a lo anterior, en aplicación del principio general de derecho antes Invocado, debe decirse que si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece de manera expresa y limitativa que todas las incidencias deberán promoverse dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación del acto que las motive, sin excepción alguna, es claro que la afirmación en el sentido de que el incidente que le fue desechado puede promoverse en cualquier momento, carece de sustento jurídico a la luz de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Además, como se estableció en líneas atrás, en el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, el acto que motiva esa incidencia es plenamente identificable en el procedimiento administrativo sancionador en que se verificó su promoción fuera del plazo concedido para tal efecto, razón por la cual debe declararse ineficaz el concepto de violación que se atiende.

A guisa de abundamiento, debe decirse que también resulta ineficaz el concepto de violación por el que se refiere que la actuación de esta autoridad responsable, en el sentido de desechar por extemporáneo el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, constituye una violación al derecho fundamental de traslación del tipo y adecuación de la pena; sin embargo,



tal argumento se solicita sea desestimado, en tanto que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses no constituye, en sí mismo, una violación de derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, debe decirse que el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, tampoco constituye, en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales como el de acceso a la justicia o bien al derecho fundamental de traslación del tipo y adecuación de la pena.

Por lo anterior, deben calificarse de infundados e ineficaces los conceptos de violación vertidos por los quejosos en sus demandas de garantías.

Por lo expuesto y fundado, a ustedes MAGISTRADOS DE CIRCUITO atentamente pido se sirvan:

PRIMERO.- Tener por presentado en los términos planteados el presente recurso de revisión adhesivo.

SEGUNDO.- En su oportunidad confirmar la sentencia definitiva recurrida y, en caso de que no se estime ello, se declare fundado el agravio vertido en esta revisión adhesiva para efectos de negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos.

PROTESTO LO NECESARIO
EL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES EN LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE
RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL
ESTADO, EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA DEL
ESTADO, SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS

LIC. JAVIER RAMÍREZ GARCÍA

JA.- 07/2018 y acumulados JA.- 08/2018 y JA.- 09/2018

AOL/JREP/ASD

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 2931957

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000000000000017fa	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T20:00:05Z / 31/10/2019T14:00:05-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	12 d9 54 24 44 df 1a 95 04 79 9a c3 c7 de 91 8c 53 b4 ae 00 bf 4f 22 a0 b9 44 37 52 c2 c7 36 35 75 34 6c 76 82 7a cd ea 6e af 50 9e 31 45 f7 7b 7d 0d a1 64 e5 c4 a4 ca e1 1b e7 3a e1 a4 fd 4c 74 6e cd de 76 9b 09 f2 8c ee ec 72 74 83 01 ba 70 22 31 29 51 6f ab 33 f6 80 79 57 79 1f 99 6b 92 f6 71 f1 82 10 bd c5 36 2b 6b bf 92 10 ea b7 db 43 33 00 fd 01 22 21 95 15 7a fd ec ce 1f a0 1d f4 6e 7e e3 9b e9 52 52 07 cf ae 68 3b 63 ff a7 ad 4c b7 f2 0d 41 c4 39 93 c6 a9 bf 8b ec 81 9e b7 a1 c5 c5 57 51 4d f2 37 ea 45 aa ae 85 7c f3 d3 eb 73 a4 a7 9a 50 4e e0 e7 84 53 58 4f 3d 9a ed d6 29 4c e4 28 de e7 dc 0f ed 32 14 ff 9e 9f 77 d7 b2 d5 52 c3 af 6c 64 1a 31 e7 a9 cd 0b 9d 94 95 3d bb ba da a6 3a 5e 14 95 2c 5a 15 1f 14 c3 50 3a de 55 5f 4e 41 b5 82 85 e2 59 e6 53			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T20:00:06Z / 31/10/2019T14:00:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000000000000017fa			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	31/10/2019T20:00:05Z / 31/10/2019T14:00:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2935774			
	Datos estampillados:	A30C796E943ECBA756B3482A1F25628A3A222DB6			

BOLETA DE RADICACIÓN Y TURNO

AMPARO EN REVISIÓN

970/2019

05/11/2019

Asunto

Numero

dd/mm/aa

1) TIPO DE TURNO.

DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO, ÉSTE DEBE TURNARSE EN¹:

PLENO	<input type="radio"/>	PRIMERA SALA	<input type="radio"/>	SEGUNDA SALA	<input checked="" type="radio"/>
-------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------------------

NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

Adscrito al Tribunal Colegiado	<input type="radio"/>	Remite copia para el adscrito a la SCJN	<input type="radio"/>	De autos o del oficio no se desprende	<input checked="" type="radio"/>
--------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---------------------------------------	----------------------------------



2) MATERIA DEL TURNO.

ADEMÁS, EL TURNO CORRESPONDE A LA INSTANCIA SEÑALADA EN:

- 2.1 ADMINISTRATIVA²..... ()
- 2.2 PENAL Y CIVIL (PRIMERA SALA)..... ()
- 2.3 LABORAL, AGRARIA Y ADMINISTRATIVA³ (SEGUNDA SALA) (xxx)
- 2.4 TURNO CRONOLÓGICO:..... ()
- 2.5 TURNO RELACIONADO.....
- 2.6 TURNO POR DETERMINACIÓN DEL PLENO O SALA.. ()
- 2.7 EL ASUNTO PERTENECE A ALGUNA COMISIÓN ()

Tema de la Comisión:

OBSERVACIONES constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 27,,de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"

SECRETARIO AUXILIAR	SUPERVISOR
	
LIC. MARICRUZ LUCERO MORA TREJO	LIC. MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ

3) TURNO.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTES PRECISADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS, EL TURNO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE ASUNTO, CONSIDERANDO EL QUE SE ASIGNÓ A LOS DOS ANTERIORES DEL MISMO TIPO DE ASUNTO, ES EL SIGUIENTE:

ANTERIORES	INSTANCIA	MINISTRO
968/2019	2da. Sala	Laynez
969/2019	2da. Sala	Esquivel Hossa

TURNO QUE SE OTORGA	INSTANCIA	MINISTRO
970/2019	2da. Sala	Franco.

LIC. MONICA FERNANDA ESTEVANÉ NÚÑEZ

¹ MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA.² SE TURNARÁN EN PLENO LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES FEDERALES E INCLUSO DE LOCALES CUANDO EL PLENO HAYA REASUMIDO COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS MISMOS.³ SE TURNARÁN EN SEGUNDA SALA LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES GENERALES CON RANGO INFERIOR A LEY O EN ESA MATERIA SEA NECESARIO REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE CONTENGAN NORMAS DE DERECHOS HUMANOS. EN EL SUPUESTO DE QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD TANTO DE LEYES FEDERALES COMO DE DISPOSICIONES DE RANGO INFERIOR A ÉSTAS, EL TURNO RESPECTIVO DEBERÁ ASIGNARSE EN SEGUNDA SALA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-54

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, **contra actos del Congreso de la Unión y de otras**

autoridades. Acúsesse recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. **Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar**, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: “...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos...”; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído



de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número **526/2018-III** y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: **“(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del “ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante “Acuerdo Delegatorio”)” y,** mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: **“...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en**

el Diario Oficial de la Federación (en adelante “Norma Reclamada”); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el “Sistema Normativo”). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del “ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante “Acuerdo Delegatorio”)...”; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: “...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “Norma Reclamada”); particularmente las porciones normativas



que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9° de la **Ley Federal de Procedimiento Administrativo**, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el **Diario Oficial de la Federación** y 27 de la **Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**, publicada el día 11 de junio de 2012 en el **Diario Oficial de la Federación**, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el “**Sistema Normativo**”). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del “**ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican**”, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 08 de julio de 2015 (en adelante “**Acuerdo Delegatorio**”...”; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio **STCCNO/77/2019**, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual, ordenó la formación del cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: ***“Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...”***.

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: ***“...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo***



que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.”, emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de

marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar 82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión...”.

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”, por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y, en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general **infralegal**, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de



ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

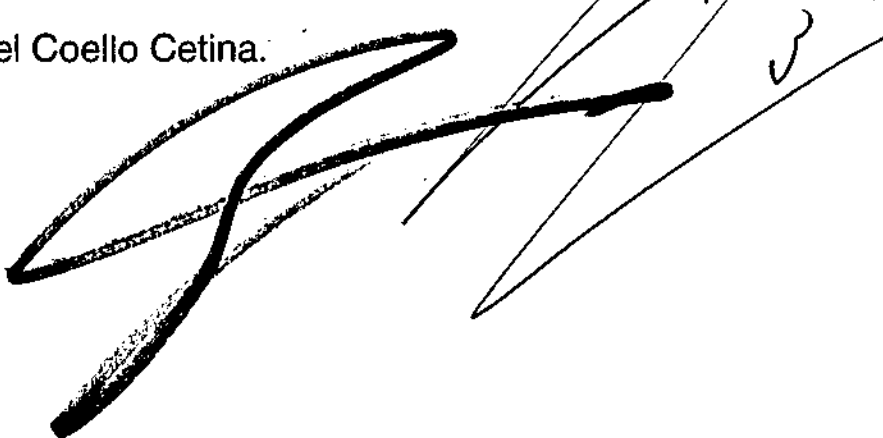
VI. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del *Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal*, los documentos originales que **hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes** no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el **cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar** con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. **Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables** y, con fundamento en los

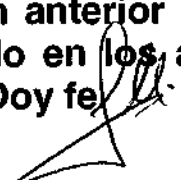
artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al **Agente del Ministerio Público de la Federación** adscrito a este **Alto Tribunal**, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el **Tribunal Colegiado del conocimiento** le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el **Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



6 RCC/DDV/MMT

En 10 DIC 2019 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuerdoDigital_325414_933131_265066.pdf
Secuencia: 3002823

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	09/12/2019T21:29:35Z / 09/12/2019T15:29:35-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8a 34 9e 6f dd 9d 28 be 80 7f a9 0a 1f 16 0b f3 b7 81 5f aa 4e 75 61 2d 59 22 52 d7 7a aa 03 82 d2 cd a3 cd 2f 65 09 c6 24 34 2a d1 13 fd c1 d0 16 67 2a 61 bb e8 a6 43 2b 02 ad 96 56 7f 7e 69 65 f4 17 0b 6f 70 23 ec 6b 3a 21 4b c8 0a 3e 50 d2 39 9f 13 c1 35 7c 99 c2 31 61 dc 5e 7f 67 aa dd 3d fd 39 fc 43 77 c3 b2 77 02 54 2e 07 c9 f7 c2 fe fc 98 e0 0b f2 e3 61 b4 ed bf 91 e4 b7 86 b4 2f f1 0a 11 c5 97 5d c9 be 0c f3 53 c9 e1 b6 ae d6 16 52 91 5a d1 19 5d cf 56 d4 64 b8 40 f0 e4 1e 88 ec f5 20 6e 90 15 0a fa 15 88 bd 5a 68 ac e3 a5 9d 70 1d 02 72 83 01 03 4f ea ad ac 6e 69 a3 cc 29 71 e3 47 ce ad e8 a3 17 d1 6f a6 40 a4 c2 1f 06 87 a1 86 cf 83 a9 cb ae b6 57 fc d2 7e c8 2c 43 e1 03 e0 68 1f d6 57 95 57 18 0b a4 92 a2 3e 78 e8 55 7f 20 c5 de d7 05 e3 4b b9 6f			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	09/12/2019T21:29:36Z / 09/12/2019T15:29:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OSCP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OSCP:	706a6673636a6e0000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	09/12/2019T21:29:35Z / 09/12/2019T15:29:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3006680			
	Datos estampillados:	DBB0CFCA32461A74E1AD46F4D5F73A5FE280D172			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío: 10/12/2019 7:14:40

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/PL/SSGA/23/186/2019

Fecha de ingreso de acuerdo: 05/12/2019 16:30:17

Fecha de acuerdo: 22/11/2019

Tipo de acuerdo: ACUSE DE RECIBO, ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en

cada uno de ellos.

VI. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 22/11/2019	200/2019 AMPARO EN REVISIÓN		(14) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:46Z / 10/12/2019T07:14:46-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7f f5 a5 74 37 cf 21 50 b3 eb d0 b2 a2 33 a6 5c 11 35 89 1b 3d 1a 64 11 91 fc 7d 70 59 c6 7b c1 eb 84 c6 f2 57 38 09 61 b6 75 25 cf f4 9c c7 27 6b e0 1a 1e 51 c7 f3 b5 30 06 a6 62 98 55 75 1b 41 1c 5b 0e cc 7e bc ae ea cc 93 91 19 1a 30 0c d1 03 55 17 d7 4f 87 43 d3 f5 46 b6 d6 a7 5a d3 01 5a bc 73 08 61 3a f2 98 cb 64 df 75 19 1c 38 33 45 84 4b e8 3a be dd 05 a7 40 c6 c7 ba a3 cd ed 83 5f 81 51 7f 9b 22 6b 45 e8 f5 5f 1e 32 83 4b e5 b1 e6 43 1b 49 0a 9f a3 39 ce 8a 7b 7f 1a 65 b6 69 40 41 b6 4f 95 ae a6 e0 a4 f4 56 ae 30 a8 45 7e 2d ae 38 de e3 d4 1d 79 af 34 1a 02 74 31 35 01 05 c5 2c a1 6e e0 ea 48 5e 96 99 0f 03 87 34 8b 6e 77 0b 47 1e c0 13 c1 9d 60 dd a1 43 dc 0f 45 ce 62 95 a0 4a e1 cb 15 c6 77 c0 ab bd 57 7e fe 34 61 53 9c 5f 5c 46 88 1a 70 d3 3a 10			
OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:47Z / 10/12/2019T07:14:47-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSF FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000014d3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:46Z / 10/12/2019T07:14:46-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3007585			
	Datos estampillados:	C1EB49C5A3B1905E8A425C2718D378C1411AD50B			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de envío: 10/12/2019 7:14:41

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/PL/SSGA/23/187/2019

Fecha de ingreso de acuerdo: 05/12/2019 16:30:17

Fecha de acuerdo: 22/11/2019

Tipo de acuerdo: ACUSE DE RECIBO, ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en

cada uno de ellos.

VI. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 22/11/2019	526/2018 AMPARO INDIRECTO		(14) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:53Z / 10/12/2019T07:14:53-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	67 6d 9e db 4e 65 4d a6 56 fe b7 c2 7e ae 5a 09 5a f7 17 2f 32 e2 56 b1 f3 1d 6d 15 ff 74 8a 7d c8 21 91 00 af 76 ed aa b5 c6 0c 9d 51 08 7c de cc db 55 84 46 24 80 c2 00 03 12 db 5c 91 45 9e 91 93 52 6c 6d da 79 d8 74 f4 4f 9d 6b eb 0e 21 f0 1b 89 e6 27 93 32 90 a3 c1 90 df b1 ca 01 a0 1a 17 de 24 0c 80 f2 be 2a b1 99 43 18 18 33 99 d2 f8 23 79 d1 01 53 91 63 f7 29 7b d3 4e 51 59 4a 7f 92 39 5c a5 78 77 6f db 31 9b 8d 3f f5 71 0f 48 6d 10 32 2e e0 c4 d8 41 98 8e 0f ef cb 06 70 b8 cb 2f 65 57 03 70 3f 7a 4e 1f 41 b7 4b 64 87 76 cd b3 64 31 34 77 a8 39 9e 0e 45 2d c1 ae 15 cd f2 4e 22 d8 8e 65 5e 46 af 2a cf 24 06 57 3c da 9a a1 b5 7e 03 b9 26 c3 f2 43 2d 42 ff 02 e3 fa 68 d5 11 b4 0c e1 4c 4e ba 2c a3 5d e3 d2 9b 9e cc 3e 14 24 05 2c cb b9 dd c2 80 86 a6 f4			
OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:54Z / 10/12/2019T07:14:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSF FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000014d3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T13:14:53Z / 10/12/2019T07:14:53-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3007586			
	Datos estampillados:	BE2A8DE4DC036ECB2B42E9FAEC9630C89ECF1A7A			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ DE
FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que
antecede se giraron los siguientes oficios:

OF. SSGA-XXIII-30248/2019. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30249/2019. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30250/2019. SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN REPRESENTACIÓN DEL
ADMINISTRADOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30251/2019. TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE
RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO, EN PEMEX TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

OF. SSGA-XXIII-30252/2019. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN
REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.

OF. SSGA-XXIII-30253/2019. TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN
REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

OF. SSGA-XXIII-30254/2019. SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En la Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

MARIA TERESITA PRADÓN LANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3057459

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:29:59Z / 22/01/2020T12:29:59-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	49 4a 6c 33 0c f0 5c 14 f4 84 4b 56 f4 6e 0d 02 da 54 72 25 1e bf fa 26 d5 df 95 b7 87 2c e4 c6 dc f3 39 38 f0 f5 af fa 0b bc 02 25 60 d8 8a 8e a0 00 7e bf 8d bd 9b a6 2a dc bd 15 4f 20 7e a9 fe 19 fb 8e e5 41 0d 37 cf 43 f1 cc c8 b2 62 f5 61 a5 4b c0 e6 f1 bc ff d7 08 7b a1 e4 52 f6 37 fd 69 4b 34 f1 b0 a8 41 05 3c b7 8a f7 c3 67 2e 18 a2 6c 20 10 08 44 ad 23 f3 b0 13 1c 0c 2a b6 46 8d f1 9e b4 03 51 71 c5 27 0c 48 b5 a5 e2 7a 4a fe 9f 69 10 0e eb a6 40 c2 d4 86 ec 6a 0f 72 9f 43 a6 0b 83 06 71 f4 6f 0d a8 96 8f 72 cf 54 cc 2d 69 e6 02 7b 3b 5c 03 bf 79 fc 9e 31 32 01 b8 a7 ac 50 61 49 29 89 ac 43 37 04 97 4a 6d 2e 83 6b 9c 30 c5 1c 60 06 05 cb e5 1a ad 81 c4 97 91 ea 9b d1 21 59 ab 7a 20 b9 37 64 43 cd 24 75 0a 6b 7a 1b 70 c9 43 b1 45 d6 06 2c 68 c8 59 f7			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:30:00Z / 22/01/2020T12:30:00-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:29:59Z / 22/01/2020T12:29:59-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061388			
	Datos estampillados:	F62906143E0FC9B50F5E56A61A84495A2966A671			



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019

AMPARO EN REVISIÓN
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE RECAUDACIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES:

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO 526/2018, III y

OF. SSGA-XXIII-30253/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SUS ACUMULADOS

569/2018 Y 571/2018

OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN

200/2019

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguense para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994, en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." La cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de Julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STOS/NO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remittieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Haría, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa Inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión."

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Primero del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, Inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y sufrirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

FIRMADO

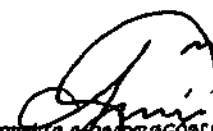
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS


JUDICIAL TERESA MONDRAGÓN LANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3057546

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:49Z / 22/01/2020T12:46:49-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	6c a4 2f fb ae e6 f6 b2 d3 54 ab 1a d2 74 c6 4e 68 02 bb 53 cf 22 19 59 47 36 8e 5c cc 25 3c 46 3a 3e ca 6e 4b 34 31 96 a2 33 e9 cd b5 1e c3 ed 93 ac ea 7d 78 f1 e1 1d fd 2f 41 3d f1 4f 3b 62 a9 7e 7f f1 ff 77 4e ac ed 61 aa a8 e3 4b 7c 2b 53 b8 58 37 3a d1 51 1f db 15 af 50 b1 02 e8 fc 30 eb 8f bd e9 38 23 97 50 b4 57 fb 13 29 ec 2a 3c b8 1d 2a 8e 94 e8 47 ef da 51 57 ac a5 9b c9 cb 08 15 ab 18 a3 30 f5 82 f3 50 1b 8d d8 26 b9 b5 2d fc 7e 39 9e b0 c3 d0 8f 35 11 91 4b 08 c4 f8 ff d0 38 b2 37 3d a3 19 8a 0f cf e2 f3 24 b2 1f 05 d6 fe f5 37 98 6f b9 da 5a cc 05 7f 1b 9d e7 1a 37 b7 dc 87 7b 18 63 a3 21 e5 3b bb 45 67 e0 95 03 da b8 ad 31 bd ff eb 7a 08 51 ee 56 31 df 98 da f5 a1 0d 8d 02 96 0e 85 a2 38 68 96 d1 54 4a 06 55 2c 75 64 9d 1c ea a3 cd 76 8f 1b 13			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:50Z / 22/01/2020T12:46:50-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:49Z / 22/01/2020T12:46:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061475			
	Datos estampillados:	91F3245FBF848D41EC00650BEB5F6A2769F0FF18			



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE RECAUDACIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES:

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO 526/2018, III Y

SUS ACUMULADOS

569/2018 Y 571/2018

OF. SSGA-XXIII-30253/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN
200/2019



En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
RECIBIÓ
0291 20
DIRECCIÓN DE AMPAROS
Y CONTRADICCIONES
CONSTITUCIONALES

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
------------	----------------

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso

23 SEP 07 2019 10:50

001



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA-A - 5

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONAR
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." La cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STGCNO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitiéron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Fariá Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión."

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 21, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A - 2

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONAR
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.


Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.


ROSA BERTA MONDRAGÓN LLANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect2.pdf
Secuencia: 3057547

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:56Z / 22/01/2020T12:46:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	52 55 c3 d7 ae ba ec f6 0f 5f 42 7a 10 b5 22 c6 cf c7 53 36 0b e5 11 e8 c9 4c 89 2e 9c 56 9f 4c d6 1b e6 e9 aa 53 f0 39 09 5a 7d 86 35 05 2a 84 71 b5 13 f5 0e 96 fc 8d 30 4f 95 59 ad 23 85 73 63 f3 8a 95 37 58 d6 c5 99 6c 4e f9 b6 3a c7 fa bb 1a c3 51 98 12 5c 60 5d d4 f9 0c 55 16 7e 02 01 ca e8 40 4a bb 39 53 b5 74 05 a4 95 5e ab 9a 51 cf 0f 47 85 72 17 a7 36 b3 20 fd cb 08 62 a6 55 b5 e5 f2 a9 27 4b 10 82 8d 39 bc 3c 47 19 0d 62 d9 d8 63 5d 0a 97 a3 46 14 e0 9c 85 ae a1 aa a4 d7 8d 89 dc b1 61 2f b8 57 d2 ca 7e d5 28 ab ee 37 cc 4f e4 3d 46 7c 8f a8 23 d2 87 a5 b4 3e 28 76 0c 30 44 ed 3a 1d 36 a6 80 24 d0 52 07 9f 57 36 48 46 64 fe a8 d0 b8 e3 05 83 ee 3c ff 19 53 d1 6e 10 d7 0f 9c d2 ca 25 1d 7a 5a d8 cd ab 5d 11 24 86 24 9a 65 9e 32 65 22 f9 e5 a6 0c 5a			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:57Z / 22/01/2020T12:46:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:46:56Z / 22/01/2020T12:46:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061476			
	Datos estampillados:	8741120A810BBAF0F9ABB060BF10C47FC14D07EA			

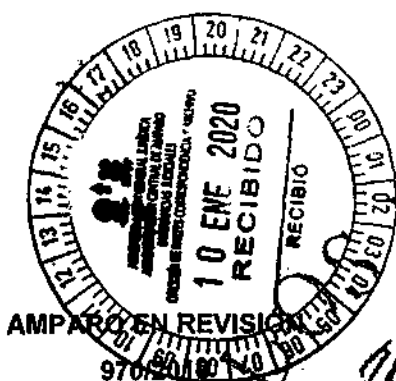


AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

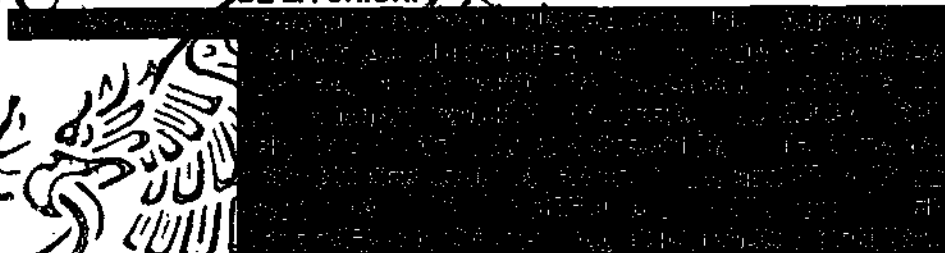
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019



OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.
OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.



OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES:

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO 526/2018-III Y

SUS ACUMULADOS

569/2018 Y 571/2018

OF. SSGA-XXIII-30253/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN

200/2019



En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994, en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, le registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STCCNO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remittieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faría, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo-Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión."

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas a los servidores públicos que se indican", por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto,

atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales

infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto

Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo General de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.


Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

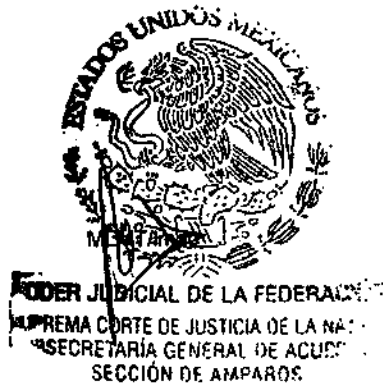
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.


ARTURO ZALDÍVAR LOPEZ
ACTUARIO JUDICIAL
ADSCRITO A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect3.pdf
Secuencia: 3057548

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]

FUNCIÓN
PÚBLICAFEMEX
UNIDAD DE DESARROLLO
RÍOSAL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

2009 NOV 10 AM 11:30

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECIBIDO

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019AMPARO EN REVISIÓN
970/2019OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE REDAUCACIÓN.

ANTECEDENTES:

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO 526/2018, JULY
SUS ACUMULADOS
569/2018 Y 571/2018OF. SSGA-XXIII-30253/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.AMPARO EN REVISIÓN
200/2019OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOSEn la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Hörst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STC/NO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remittieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión.

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 21, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Primero del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas a los servidores públicos que se indican, por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtir efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieran agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, Inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

FIRMADO


Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS


JOSÉ BETANCIA MORA LAGÓN LANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect4.pdf
Secuencia: 3057549

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:11Z / 22/01/2020T12:47:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	41 6f 34 6b ae f7 88 68 6b a5 5d f5 30 ed 3d bc d8 20 f4 e5 1d 41 df 6d 95 73 9a 24 60 cf d7 de 29 df 5c 2d 35 dc 1f 00 d6 8e 3c 2e 0d ef 3f 2a 3c b9 a5 6b 1e 21 1f bb e9 9b 09 8e cb bd dc 96 b7 ff ca 82 2d 2c a1 58 54 e5 f3 f5 34 65 e5 cc c5 16 1e fa c5 e1 1a d1 3a 25 5e 47 e3 b4 1a f4 34 c0 ff 26 66 f0 75 ba 92 aa fb 00 7e a2 3a 28 c6 d0 6e 8d b3 5f 3e 32 17 c3 7b 3d ba c4 08 5c 7a 1a 2c 67 9a 6c b9 46 c3 1d 30 12 8a 5c f9 19 21 85 a8 9f fe 53 e1 80 0f 1e 20 d0 45 bb fd 43 1d df 10 f7 18 32 8d f3 66 98 1a 3b eb 5c 25 f0 7d a0 e9 2b 56 39 97 bd d4 c2 c7 13 04 bf 7f b2 a0 12 65 1c 65 49 3c 60 92 74 d8 4f 6a 57 53 1a 1b 96 be 0a a5 57 66 6a 8f c8 7a 72 03 d7 85 88 bf c2 9f 6b 56 40 a2 d3 d8 a9 bf ca fb 66 32 4d 75 d1 bd 7b 39 2f 3d be a0 d0 90 58 de 64 b7 d8			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:13Z / 22/01/2020T12:47:13-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:11Z / 22/01/2020T12:47:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061478			
	Datos estampillados:	9E8F7F1AEBBC322CDEF94ABB092BFDB177FA19C7			



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

15 ENE. 2020

Hora: _____ Recibo: _____
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
Oficialía de Partes
RECIBIDO

AMPARO EN REVISIÓN
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE RECAUDACIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES:

JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO 526/2018, JULY
SUS ACUMULADOS
569/2018 Y 571/2018

AMPARO EN REVISIÓN
200/2019

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguense para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." La cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STC/NO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remittieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo

Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión.

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 24, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Primero del Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas a los servidores públicos que se indican, por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y erratación a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que la subsistir en esa instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y sufrirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto, quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo General de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieran agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

[Firma]
JULIA BERTHA MONTEAGÓN LANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect5.pdf
Secuencia: 3057551

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

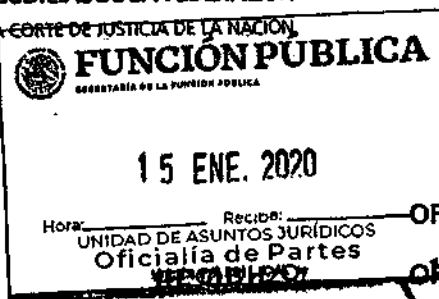
[illegible]



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



15 ENE. 2020

Hora: Recibo:
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
Oficialía de Partes
RECIBIDO

PARTÉ QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019

AMPARO EN REVISIÓN
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE RECAUDACIÓN.

OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

ANTECEDENTES:

OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO 526/2018, III Y

SUS ACUMULADOS

569/2018 Y 571/2018

AMPARO EN REVISIÓN
200/2019

OF. SSGA-XXIII-30254/2019.-SERVIDOR PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADSCRITO A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

acuerdos siguientes

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faria por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994, en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." La cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STC6NO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitiéron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente Identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión."

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción V, 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas a los servidores públicos que se indican", por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte, en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto, quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, estos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."

FIRMADO


Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS


ACTUARIA JUDICIAL
ADSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect6.pdf
Secuencia: 3057552

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:30Z / 22/01/2020T12:47:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	62 b3 27 80 92 7c 2f 01 a9 8b 6b b2 8e 54 0c 4a 9f 27 3f df 61 5e 9b b4 b9 05 02 93 93 36 a5 34 84 37 b5 97 42 23 3d 51 b9 3e 60 ce c7 08 02 33 6e a1 41 19 41 bf 8a a3 6a 94 7c fe a7 98 85 06 0b 01 57 40 75 e7 dd ce 9c 9c f0 da 9b 02 b8 c5 af 54 e4 88 5a 12 a9 8f 5f 76 2d da 1e 21 2e 38 79 f6 38 19 bb c0 56 f2 ca 6e f6 c0 17 fb 00 63 55 b1 3f 0f 67 91 59 90 13 e1 cc 7a 2a 46 f9 27 39 f6 38 6e 03 26 3a e0 32 4f db 9f 1e ba d5 97 b9 0a aa c8 a4 4f 33 ff e7 71 22 41 40 7d 92 ed 6d cd 69 12 7c a0 dd 17 9c 3a 65 0b 89 a1 8b 4d f2 80 13 b0 86 b9 7c 53 5b 08 e1 28 af cc 21 83 1c b8 2d 5f 70 1f 7b b3 52 a2 3e d0 03 16 f2 c7 e3 2b d6 84 48 03 b6 19 00 d5 2b 1b cd be 5e bd 5c 34 06 af c9 2c a7 10 d1 ba 1c 9c 5e 54 6e f2 75 13 b4 dd 6a 13 fc dd 0d 38 20 4a e2 5d 07 d2			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:31Z / 22/01/2020T12:47:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:30Z / 22/01/2020T12:47:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061481			
	Datos estampillados:	5DD1AC77C32BB295FE50CD675DFE53A42DF917F4			



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SÚPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PARTE QUEJOSAS: GLEIBER JOSÉ
DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
970/2019

OF. SSGA-XXIII-30248/2019.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.
OF. SSGA-XXIII-30249/2019.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN.
OF. SSGA-XXIII-30250/2019.-SUBADMINISTRADOR DE AMPARO E
INSTANCIAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES, DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL
DE RECAUDACIÓN.
OF. SSGA-XXIII-30251/2019.-TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA
UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO,
EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL,
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA
DE PETRÓLEOS MEXICANOS.
OF. SSGA-XXIII-30252/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
OF. SSGA-XXIII-30253/2019.-TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AMPARO EN REVISIÓN
970/2019

ANTECEDENTES:

JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO 526/2018

SUS ACUMULADOS

569/2018 Y 571/2018

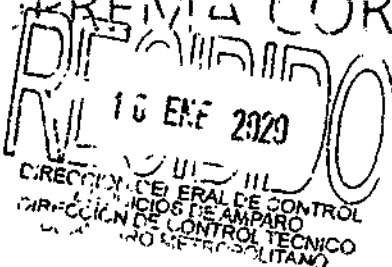
AMPARO EN REVISIÓN
200/2019

En el expediente que se menciona al margen, el

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SI SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



"PARTE QUEJOSAS: GLEIBER
JOSÉ DE FARIA Y OTRAS
AMPARO EN REVISIÓN
NÚMERO: 970/2019
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre
de dos mil diecinueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:

Presentado en:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

1. Oficio 0984-C, de veinticinco de octubre del año en curso, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 037845.	Original
2. Resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de revisión 200/2019 por el Tribunal Colegiado antes referido	Copia certificada
3. Amparo en revisión 200/2019.	Un cuaderno
4. Juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.	Tres cuadernos
5. Legajos de pruebas.	Quince legajos
6. Diversas constancias que no resultan indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto.	Legajo
Contiene acuse de recibo a OJPJF.	

Las constancias antes relacionadas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de octubre del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por la parte quejosa citada al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

Obténganse y agréguense para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica tanto del escrito de expresión de agravios, así como del pliego de agravios de la revisión adhesiva, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión 200/2019.

Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, importa destacar los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, Gleiber José de Faría por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: a) 1. La expedición y promulgación del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. 2. La expedición y promulgación del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 04 de agosto de 1994, en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos..." la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de dos de mayo del año dos mil dieciocho, la registró con el número 526/2018-III y lo previno.

2. En desahogo a tal requerimiento, mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso precisó que la demanda de amparo la promovió por propio derecho y por auto de siete siguiente, el juez la admitió a trámite; por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso formuló ampliación a la demanda de amparo, señalando como acto reclamado lo siguiente: "(1) El artículo 8º fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")" y, mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación de demanda.

3. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal João Henrique Andrade Araujo Horst, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamó 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas,

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio")..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 569/2018-I.

4. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Guillermo Antonio Suárez Solís, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, en la que se planteó, como acto reclamado entre otros lo siguiente: "...A. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamo: 1. Los artículos 8º fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "Norma Reclamada"); particularmente las porciones normativas que establecen: (transcribe). 2. Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el día 04 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada el día 11 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, como sistema normativo para la ejecución de actos administrativos (en adelante el "Sistema Normativo"). B. Del Secretario de la Función Pública reclamo: 1. El artículo PRIMERO del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la Federación el 08 de julio de 2015 (en adelante "Acuerdo Delegatorio"..."; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, la registró con el número 571/2018-III.

5. Por acuerdos de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictados en los juicios de amparo 596/2018-I y 571/2018-III, se ordenó acumular dichos juicios al diverso 526/2018-III. Asimismo, en auto de quince de junio de la referida anualidad, dictado en el juicio de garantías 526/2018-III, se ordenó la concentración de los juicios de amparo antes referidos.

6. Por oficio STCCNO/77/2019, dictado por la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, se remittieron los autos del juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, el cual ordenó la formación del Cuaderno auxiliar 82/2019.

7. Mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: "Único. Se sobresee en el juicio de amparo 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, promovidos por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia...".

8. Inconforme con la anterior sentencia, Rodrigo Antonio González Alpuche Herrerías, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de las quejas mencionadas, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que admitió mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 200/2019; asimismo, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpuso adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas citadas en líneas precedentes, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo y, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el aludido órgano colegiado la tuvo por admitida.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

9. Posteriormente, el Tribunal Colegiado citado en el punto que antecede, en la resolución diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, señaló en lo conducente que: "...Atento a las conclusiones alcanzadas en el presente considerando y en los dos anteriores, lo que procede es, en la materia competencia de este órgano jurisdiccional, modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo respecto de la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dejar insubsistentes los diversos sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito respecto de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; y reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie del tema de constitucionalidad que se controvierte [...] No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que también subsiste en la materia de este amparo en revisión, el tema de constitucionalidad respecto del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", emitido por el Secretario de la Función Pública [...] Sin embargo, este Órgano Colegiado considera que es de estudio preferente el tema de constitucionalidad que persiste en la litis con relación al artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por ser la disposición legal que contempla la infracción que se le imputa a la parte quejosa, por lo que de resultar fundados los conceptos de violación que expresa en contra de dicho precepto obtendría un mayor beneficio al desaparecer la disposición que establece la conducta irregular que se le atribuye, lo que justifica el que se ordene la remisión del recurso y de la revisión adhesiva al mencionado Alto Tribunal, sin realizar mayor pronunciamiento con relación a la citada disposición de observancia general [...] PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2018-III y sus acumulados 569/2018-I y 571/2018-III, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a la quejosa Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. TERCERO.- Se deja a salvo la Jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión..".

En ese contexto se advierte que en la materia de la revisión subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos los artículos 8, fracción IV, 21, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas a los servidores públicos que se indican", por lo que se impone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su competencia.

Ante ello, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por quien goza de capacidad procesal para ello, procede asumir la competencia originaria para conocer del recurso de referencia y en atención a lo dispuesto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, así como en lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Máximo Tribunal, radíquese el presente asunto, atendiendo a la materia en la que incide, en la Segunda Sala de esta Suprema Corte; en la inteligencia de que al subsistir en esta instancia el problema de constitucionalidad de normas generales infralegales, la competencia para conocer de este recurso corresponde a esa Sala atendiendo a lo previsto en el punto Primero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que a dicha Sala corresponde determinar si se pronuncia sobre la constitucionalidad de la respectiva norma general infralegal, o bien, si se actualiza la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado de las quejas, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hacen valer las quejas al rubro mencionadas, por conducto de su autorizado, así como de la adhesión del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

II. Con fundamento en los artículos 37 y 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este último modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente para su estudio, al Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Segunda Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad, en la Inteligencia de que el expediente electrónico, será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Hagase del conocimiento de las partes que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto, y si dentro de los treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo

anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

VIII. Notifíquese por lista; haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables y, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañarse copia

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

Sec.

de los pliegos de expresión de agravios y revisión adhesiva, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega de los mismos; y al Tribunal Colegiado y al Juzgado de Distrito del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN,, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina."


FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.




SALA TERCECA JONDRAGÓN LANGARICA
ACTUARIA JUDICIAL
EDSCRITA A LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect7.pdf
Secuencia: 3057554

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:37Z / 22/01/2020T12:47:37-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	56 ea 75 63 7e 00 74 a4 1d 4f bc 2f fb 0b be c0 6e e9 da 15 7d 4d 47 ef 9d 93 11 ab 65 59 f7 93 75 6c 66 34 68 0b f9 76 96 d2 41 a5 2a 44 b1 45 d6 d8 8b 61 94 dc d0 f4 28 f8 a9 c8 66 65 92 9d 2e f3 fe ed e0 c1 0d cc 56 f4 9e 00 e7 ca 0d 78 7d 89 58 19 90 6c 54 c3 6e b9 df a7 af dd fd c3 ba 37 67 80 05 e3 cd 8f a0 5d f8 27 9a 72 6e 66 41 45 76 ee d8 81 c7 b5 d8 a2 4f 2c 4a f2 06 60 cd 5a 5f 96 3f 64 68 f0 ed 4a 31 7d 61 f8 ef fb d7 a4 e4 00 f7 4e 19 42 ec 85 f5 af 59 9f cf 64 f1 46 d1 44 85 3e d6 ed b6 e2 20 81 1f 2e b0 ad 6a cf 12 c7 4c 34 20 de 6b 84 29 91 39 69 a9 7d 66 b3 e4 54 4d 8c 7b 03 4e 90 b3 da 87 07 06 83 33 a4 5d 03 b5 2e 70 87 22 f4 69 68 c7 ba 80 0c 97 b8 8c b2 bb 81 ba 19 dd 12 60 90 d3 a5 73 e0 4f c9 ff 15 ca f5 9e 53 5f 05 2b 86 37 37 3c fb			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:39Z / 22/01/2020T12:47:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000014d3			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/01/2020T18:47:37Z / 22/01/2020T12:47:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3061483			
	Datos estampillados:	40B4D86B2AF5169D83B2A775C28513D880E42953			

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE
INGRESAN A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN, PARA SU RADICACIÓN.

OFICINA QUE REMITE:

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TIPO DE ASUNTO

AMPARO EN REVISIÓN

No. DE EXPEDIENTE

970/2019

FOJAS:

220

AUTOS Y/O ANEXOS

A.F. 200/2019

J.A. 526/2018 Y SUS ACUMULADOS 569/2018 Y 574/2018

15 LEGAJOS EN COPIA CERTIFICADA

CUADERNO AUXILIAR

SRIO. AUX. A QUIEN SE LE TURNA.

LIC. MIRIAM PALMA LARA (C)

SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE EN LA MESA DE INFORMES

LIC. GERARDO MARTÍN HERNÁNDEZ ESPINOZA.

OBSERVACIONES:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SELLO DE LA RECEPCIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Vo. Bto. MTRA. ESTELA HERRERA CHÁVEZ

ENCARGADA DE LA MESA DE INFORMES
DE LA SEGUNDA SALA.

SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA

2019 FEB 24 PM 12:32

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

SIN TEXTO

REPUBLICA DE LA AMERICA
CENTRAL

2001 EN 54 60 15 35

DE LA SEGURIDAD CIVIL
SECRETARIA DE VENEROS

folio A 39291

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3071569

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 87064/2019

Fecha de envío de la SCJN: 10/12/2019 07:14

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/23/186/2019

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO EN REVISIÓN 200/2019

Fecha de recepción del órgano remitente: 10/12/2019 11:25

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 22/11/2019	(14) ORIGINAL	recibí acuerdo en 14 hojas

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion141292.pdf
Secuencia: 3004702

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	PATRICIA CARIDAD MORALES PENAGOS	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MOPP791106MCSRNT05			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000070ee	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T17:26:01Z / 10/12/2019T11:26:01-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 f7 2d 82 49 ef b7 99 c3 80 4d 34 98 60 b8 a0 e2 4f 91 12 9f c4 b0 59 95 81 bf 54 c6 28 09 c8 b2 b6 30 cd 9c c8 96 62 1c 38 92 cc 7e ec aa 63 3f 5b 3d 5b 08 dd 42 a3 2a 49 f3 f8 b9 3c d4 0f 9d a9 1f b2 cd 16 cc e5 05 6e c0 ce 7f a7 27 2a 74 ed 68 95 f5 9c 8f 41 9f 0c 0e ff dd ae 63 9b b3 07 e7 05 79 81 76 4a 48 82 b1 d5 75 d7 00 06 ba 89 fe 9e 3b f5 57 b4 ec 48 92 0f dc 03 b3 05 1e 75 d5 e3 9d e2 20 f8 15 6d 51 37 03 ad e2 4e a3 7b 24 05 40 cd 2b ca 4d c8 c3 f2 a1 ae 28 51 f8 4e 4f 31 c1 d6 0e d8 32 ec fb 9d 06 e6 46 51 24 c1 29 26 f6 36 43 03 c1 57 3b 77 82 c4 e8 98 d3 b6 df 83 37 7e 96 12 47 50 3b 19 ed 75 d4 38 17 9f e0 e5 9a 3f a8 0c 0f b3 3b fb 95 d1 b5 2f f2 d1 3e 4f 7e a4 f8 c7 e0 e3 a7 79 02 20 c0 85 d7 16 37 fe 43 5a ca e2 f4 29 a1 62 22 99 dd e7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T17:26:02Z / 10/12/2019T11:26:02-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000000070ee			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/12/2019T17:26:01Z / 10/12/2019T11:26:01-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3008559			
	Datos estampillados:	F25530084AABF6545E24AF7660DD62BC38C3570F			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente	DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO		
Fecha de envío a la SCJN:	10/12/2019 11:25:00		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	970/2019	

Ciudad de México, a 24/01/2020 SEGUNDA SALA

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 81250-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionAcuseRecepcionPeticion127858-1317.pdf
Secuencia: 3064233

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JAZMÍN BONILLA GARCÍA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BOGJ840704MDFNRZ07			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000be9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	24/01/2020T19:18:30Z / 24/01/2020T13:18:30-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	66 70 6f 8e 92 c8 74 2b ce d6 9f 2f f8 69 2b cf f7 39 bb fb 7d 79 43 69 5c e9 ab b1 ab 62 97 4e 46 94 4c f1 4b 79 3d 74 70 bf 5e 20 5f 2a bc bf fa bd 31 8e bf df 89 7e 7b 02 5d ea 00 83 52 15 9a 8a b6 a5 99 17 af 50 ea 5a 8a d3 45 4c d7 f1 7c f2 91 b8 73 9c 11 43 bf fc cf 83 eb 42 24 2f fa 9d af c4 f2 34 97 00 aa 6f ab a9 11 33 8d a3 98 00 c4 04 9f 21 d5 44 58 9b f2 3f e7 ad 85 33 e0 0f 61 f5 73 b6 ce 61 6e 12 5b fc e7 d5 ff 6f 81 b9 4a 43 36 c2 d9 cc 4d 37 74 c7 38 d5 1b f5 ce 30 88 db 30 15 7f 2d 58 3f d1 e1 ea 04 e5 6c b8 f1 fb 81 30 8e 28 cc 79 95 05 86 58 ce 2b 76 99 c5 ab 9c 7d 0c 60 1d 33 92 23 1c 7b 62 de 54 14 20 d5 cb bf c7 36 cd f8 22 e1 d8 7f fb 73 32 ab 4b 41 2f c8 d3 05 f0 40 45 66 59 f2 f8 fb 58 eb c3 13 db f1 bb 83 6f 46 63 5e 77 e4 a1 5c 6f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	24/01/2020T19:18:28Z / 24/01/2020T13:18:28-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000be9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	24/01/2020T19:18:30Z / 24/01/2020T13:18:30-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3068169			
	Datos estampillados:	15FCC1402E580B04B6AC0AA171125A6A272503A0			

**SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN 970/2019****PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

En **veintiocho de enero del dos mil veinte**, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el proveído de **veintidós de noviembre del dos mil diecinueve** del Presidente de este Alto Tribunal y anexos. Conste.

Ciudad de México, **veintiocho de enero del dos mil veinte**.

Vistos, ténganse por recibidos el proveído de cuenta a través del que el Presidente de este Alto Tribunal admite a trámite el recurso de revisión 970/2019 interpuesto por **GLEIBER JOSÉ DE FARIA Y OTRAS**, contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México con apoyo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México en el juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (cuaderno auxiliar 62/2019) de su índice, así como sus anexos y la adhesión de revisión interpuesta por el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 21, fracción XI, 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Segunda Sala **SE AVOCA** a su conocimiento. En consecuencia, hágase el registro como corresponda.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Cabe precisar que de la lectura del pliego de agravios se advierte que los recurrentes señalaron domicilios para oír y recibir notificaciones, designan autorizados y delegados, aspectos respecto de los que no existe pronunciamiento en el acuerdo presidencial de cuenta; por tanto, se subsana esa omisión y con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo,

SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

ténganse como domicilios para oír y recibir notificaciones los señalados en esta ciudad.

Con apoyo en los artículos 12, última parte del párrafo segundo, y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, **se tiene como autorizadas** para oír y recibir notificaciones a las personas mencionadas por la parte quejosa, en el entendido de que si acreditan fehacientemente encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal, sin embargo, si tienen reconocida expresa o implícitamente, dentro del amparo en revisión o juicio de amparo el aludido carácter en los términos amplios antes descritos, esa autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia.

Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo; téngase como **delegados** los que indica la autoridad responsable.

Como está ordenado en el proveído de cuenta, remítanse los autos a la ponencia del **Ministro José Fernando Franco González Salas**.

Finalmente, se instruye a la **Secretaría de Acuerdos** para que hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, mediante la certificación respectiva en la que se haga constar esa circunstancia y agregando, en su caso, las constancias y acuses de recibo respectivos, sin dar nueva cuenta lo remita al archivo excepción hecha de los casos en que exista algún documento original respecto del que se deba proveer en términos del artículo 12, fracción IV, del **Acuerdo General 8/2019** relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, la Secretaría habrá de tomar en cuenta que, en caso que el expediente en que se actúa cuente con cuadernillo auxiliar, de conformidad con el diverso artículo 23 del referido **Acuerdo General 8/2019** se deberá hacer constar esa circunstancia en la certificación respectiva para que se proceda a su destrucción.

Notifíquese.



SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lo acuerda y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**,
Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, asistido de la Secretaría de Acuerdos, Jazmín Bonilla García,
quien autoriza y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Esta foja corresponde al acuerdo dictado por el Presidente de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el **veintiocho de enero del
dos mil diecinueve**, en el amparo en revisión **970/2019**. Conste.

MPL

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 12426/2020

Fecha de envío de la SCJN: 10/12/2019 07:14

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/23/187/2019

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO INDIRECTO 526/2018

Fecha de recepción del órgano remitente: 15/02/2020 16:06

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 22/11/2019	(14) ORIGINAL	se recibió documento legible en 14 páginas.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion141293.pdf
Secuencia: 3107731

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alonso Antonio Hernández Flores	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	HEFA881212HTLRLL09			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000de4d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/02/2020T22:06:53Z / 15/02/2020T16:06:53-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	86 76 ab ff 36 ed 0b 56 80 b7 f6 5c be 0b 8e a9 b2 ac 7c 98 3d d2 6a 60 46 85 20 40 39 3b 05 01 a7 69 39 98 5d d3 7b 74 af 1d c9 45 62 d5 e4 fa 70 aa 71 76 25 16 75 0e d7 cc 4f 93 e0 61 d8 e6 a2 4e f2 f4 1e c6 72 65 21 7c a6 0b f6 b6 47 ff ed 8b 62 c1 d9 05 6d d7 b6 0a ca ac 78 a1 d7 ee 00 66 8f 99 67 c4 ee b4 2e e4 30 88 18 30 b9 e7 80 79 9f f1 92 ee f1 9b 6e bd ab bc 75 6c 8e 8a 17 a5 a2 7c c5 11 22 da 89 a5 e2 f2 a3 a2 58 87 ff db 50 04 3c 58 aa 40 6d 13 d4 6f 81 31 9f db 1b 07 b6 88 ff f9 32 c7 9a f4 00 18 df b1 6d 59 50 f9 c5 4d 3a 06 8b 5f cd d3 7e d4 6c ec b6 e9 11 64 c0 5a 5f 21 e7 85 21 c9 7a 98 e2 f5 01 28 80 21 ea 22 c3 86 11 cd 5e 11 7e 05 e9 f2 49 62 3d 20 73 05 20 90 11 ac 16 28 fd ab 52 29 3c 3f d3 ff 86 eb f2 6b 10 86 2f 57 d9 c1 46 30 e6 f5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/02/2020T22:06:54Z / 15/02/2020T16:06:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000de4d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	15/02/2020T22:06:53Z / 15/02/2020T16:06:53-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3111674			
	Datos estampillados:	B7FEF210A1AA1E1A8A9E39E9E0411006052542D7			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de envío a la SCJN:

15/02/2020 16:06:00

Tipo y núm de exp. en SCJN:

AMPARO EN REVISIÓN

970/2019

Ciudad de México, a 17/02/2020 SEGUNDA SALA

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 11452-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionAcuseRecepcionPeticion132168-1227.pdf
Secuencia: 3108725

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JAZMÍN BONILLA GARCÍA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BOGJ840704MDFNRZ07			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000be9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/02/2020T18:30:50Z / 17/02/2020T12:30:50-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0c a5 0a d3 45 0f 2e 28 43 6d c7 bf 1e 14 f9 ac 6f 9e 05 85 41 0c e6 c9 4c ea de ff 68 c6 5e 5f cc 4f c2 37 ce ad ae d4 12 cf 42 0b 3c b5 86 8c ba a5 d9 60 11 9e 4b 19 33 80 c8 c5 66 c2 b7 76 9b f7 d8 e9 99 82 e9 e6 9a b5 c2 b0 19 3f 7c 28 f5 fe d8 83 21 c4 e5 3e 1e 8a 34 f0 d4 de 10 74 02 ad 82 1d 3a 26 05 eb ed 2e 3f 39 c0 d5 cb 70 12 01 a9 f9 bc 07 df 95 e1 db 2e a2 43 70 a2 cf 4c a2 ee 6a a0 a2 2e b3 98 9d 6f 2c d8 0f 95 d8 4d 14 f2 74 22 a3 41 6b 65 3c 30 aa dd a0 f4 e6 78 e5 7b 51 d9 c4 14 cc 3c 81 94 17 8b 11 d2 bd 22 d5 b9 70 42 b5 6f a5 2c 5b 13 6b 1c 26 78 dd e0 aa fd db 53 2b ae dd b7 22 d7 0b ee 39 a5 4f 91 24 b6 03 ab 63 e3 50 60 24 d8 8a 57 f1 8e 45 84 5d 8a 56 e5 6a 03 09 c4 14 e2 54 3f 0f f1 19 12 4c b9 98 dd e6 35 41 fc 75 6e 8d b1 27 3a 27			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/02/2020T18:30:39Z / 17/02/2020T12:30:39-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000be9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/02/2020T18:30:50Z / 17/02/2020T12:30:50-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3112668			
	Datos estampillados:	006D521E54998E0CB890AB547C6F0AB4F32DE69E			



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérito Madre de la Patria"

**SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE JUICIOS DE AMPARO

Amparo en Revisión 970/2019,
promovido por: Gleiber José de Faria y
Otras

**H. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E**

La suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el C. Fiscal General de la República, para intervenir en el presente asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XV constitucional, 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; 9 fracción XXI y 19, fracción, XXIV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ante usted con debido respeto expongo:

Que con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al tenor del artículo 2º de la Ley de Amparo, vengo a solicitar de la manera más atenta, se expida a mi favor copia simple de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, pronunciadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 200/2019, y la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 526/2018; así como la demanda de amparo; toda vez, que son necesarios para que esta Representación Social de la Federación emita la opinión correspondiente.

Y de no existir inconveniente, autorizo indistintamente a los C.C. Semiramis Arroyo Sanchez, Araceli Cortés Ramírez y Luz Javier Estrada Granados para recibir las copias de mérito.

Por lo antes expuesto y fundado, a usted C. Presidente atentamente pido:

Único.- Acordar de conformidad lo solicitado.

Ciudad de México, a 6 de marzo del 2020

**ATENTAMENTE
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA**


LIC. MA. ANA LILIA MARTINEZ HERNANDEZ

007444

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2020 MAR 6 PM 5 52

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO
En 1 folio

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3154360

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

INTERV. MINISTERIAL NO. 14/2020

A.R. 970/2019

FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR GLEIBER JOSÉ DE FARIAS CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. DE C.V., ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 569/2018.

**C. PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA DE LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

La suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el C. Fiscal General de la República, para intervenir en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XV Constitucional, 5º, fracción IV y 89 de la Ley de Amparo; 9, fracciones XXI y 19 fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República atentamente expone:

GLEIBER JOSÉ DE FARIAS CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. DE C.V., ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, interpusieron por conducto de su representante y apoderados, recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 569/2018.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Por acuerdo de veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve el C. Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el presente recurso de revisión, y ordenó, entre otros se diera a conocer dicho acuerdo al Fiscal General de la República.

ANTECEDENTES

1.- Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, **GLEIBER JOSÉ DE FARIAS CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. DE C.V., ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO**, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES

1. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores)
2. Presidente de la República Mexicana.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

3. Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex, Transformación Industrial.

4. La Administración Regional de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.

ACTOS RECLAMADOS.

La respectiva participación que tuvieron para la **discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación** de la Ley Federal Anticorrupción de Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio del dos mil doce, respecto de los artículos 8 fracción IV y 27 párrafo Primero, fracción II.

Así como el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3.-. Mediante acuerdo, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite las demandas de amparo, la cual quedó registrada con el número 569/2018, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

4.- Una vez celebrada la audiencia constitucional el veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en el siguiente sentido de sobreseer el presente juicio de amparo.

5.- Inconforme con la resolución anterior, **GLEIBER JOSÉ DE FARIAS CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. DE C.V., ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO** interpusieron recurso de revisión, ante el Juzgado correspondiente.

Así como el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en Pemex Transformación Industrial Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado.

Correspondió conocer de los señalados recursos de revisión al Décimo Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya Presidente lo admitió a trámite el cinco de julio del dos mil diecinueve y lo registró con el número de toca R.P. 200/2019 y ordenó turnar el asunto al Magistrado respectivo, para la elaboración del proyecto de resolución.

6.- Mediante resolución de diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió:



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PRIMERO.- En la materia competencia de este Tribunal Colegiado, se MODIFICA la resolución recurrida de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en el expediente identificado con el número auxiliar 82/2019, correspondiente los juicios de amparo indirecto 526/2019 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo (...), por lo que hace al artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TERCERO.- Se deja a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución que en derecho corresponda respecto del presente recurso de revisión.

7.- Por auto de veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, el Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó asumir la competencia originaria para que este Alto Tribunal conociera del recurso de revisión, el cual fue registrado como amparo en revisión 970/2019 y ordenó turnar los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de esta Segunda Sala y la radicación en la misma, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

OPORTUNIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

No obstante de que se trata de un presupuesto procesal cuyo análisis es de estudio preferente u oficio, en esta instancia resulta innecesario su análisis, toda vez, que dicho tópico ya fue estudiado por el Tribunal Colegiado de origen al momento de admitir a trámite los referidos medios de impugnación constitucional.

En lo que es materia de esta instancia la quejosa, en síntesis hizo valer en los siguientes:

AGRAVIOS

Refiere la parte recurrente quejosa en síntesis lo siguiente: Que es incorrecto que se haya determinado sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a la quejosa(...) bajo la consideración de que el primer acto de aplicación de ese precepto en su perjuicio se dio en la notificación relativa a la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo de sanción, cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del diverso juicio de amparo indirecto, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que, por tanto, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Al efecto, señaló la Juez constitucional que la causal de improcedencia que se contempla en ese numeral, se basa en la observancia a la figura de la cosa juzgada que se identifica con el carácter inmutable de la decisión jurídica, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio; que las resoluciones de amparo que sobreseer en el juicio, por su propia naturaleza, no analizan el fondo del asunto, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que un fallo de sobreseimiento no constituye cosa juzgada que impida la promoción de un nuevo juicio; que no obstante lo anterior, atendiendo a que la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrefutable o inmodificable de la decisión jurisdiccional, esta regla acepta excepciones, ya que existen



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

determinaciones que, sin entrar al fondo de la violación reclamada, es decir, sin resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos controvertidos, hacen imposible combatir el acto a través de un nuevo juicio de amparo, por resultar inejercible la acción constitucional de modo absoluto, como sucede, por ejemplo, cuando se declara por sentencia ejecutoria que el acto reclamado fue consentido, toda vez que estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo.

Manifiesta que el Juez A quo, que en autos obra copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo (...), del Índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y que tuvo a la vista también, como hecho notorio, la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo (...), correspondiente al Juzgado Tercero de Distrito de la misma materia y residencia, de las que advirtió que ambos juicios de garantías fueron promovidos por la mencionada quejosa, en los que señaló como acto reclamado, entre otros, el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento administrativo.

Agrego, que el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo (...), por lo que hace al numeral en cita, determino sobreseer en el juicio al considerar que no se estaba reclamando el primer acto de aplicación del mismo, porque dicho precepto se materializo en un acto diverso a la resolución ahí reclamada y que, por tanto, la sola emisión de esa resolución del procedimiento administrativo (...), no actualizaba el supuesto previsto en ese numeral.

Señaló en la sentencia recurrida, que en el juicio de amparo (...), por lo que hace al mencionado precepto legal reclamado, se resolvió que su aplicación se surte en el momento en que se notifica la resolución sancionadora y no con el mero dictado de la misma; que, en el caso, el primer acto de aplicación de dicho artículo pudiera considerarse la notificación de siete de febrero de dos mil dieciocho, correspondiente al oficio que contiene la resolución dictada en el procedimiento 2017/PTI/DE109 pero que, sin embargo, el primer acto en el que ese numeral fue aplicado en perjuicio de la referida quejosa, fue en la diversa notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo señalado, cuyo análisis de constitucionalidad fue materia del juicio de amparo, se agregó, que constituye hecho notorio que esa resolución del juicio de amparo fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión.

Ahora, como se determinó en la sentencia recurrida, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que si bien es cierto que, por regla general, la figura jurídica de la cosa juzgada se actualiza cuando se emite una sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto, como lo es la que se pronuncia respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por lo que, en principio, una resolución de sobreseimiento en el juicio de amparo no puede configurar la cosa juzgada, lo cierto es también que existen supuestos de excepción, en donde, con motivo de la determinación de sobreseimiento, se concluye la inatacabilidad de un acto a través de un diverso juicio de garantías,



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

siempre cuando los motivos de ese sobreseimiento se basen en razones o circunstancias que hagan inejercitable una nueva acción de amparo de modo absoluto, por no poderse desconocer en un posterior juicio constitucional.

Asimismo, como se determinó en la sentencia que ahora se revisa, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por contenerse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la resolución correspondiente al amparo en revisión del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la que se advierte que, como lo considero la Juez de Distrito, fue confirmado el motivo de sobreseimiento determinado en ese juicio de amparo respecto del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento administrativo, bajo el supuesto de que el primer acto de aplicación de ese numeral se dio con motivo de la notificación de la resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento.

(...)

En efecto, de la mencionada resolución de recurso de revisión, se advierte que se señala que en los agravios la parte quejosa recurrente argumento, entre otras cosas, que era inexacto que el primer acto de aplicación del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento administrativo, se hubiera materializado en la notificación de la resolución administrativa de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento sancionador que fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; que no se podía negar que el artículo 9 de la Ley de Procedimiento administrativo si le fue aplicado en su perjuicio con motivo de la resolución dictada en el Procedimiento administrativo Sancionador instaurado en su contra, pues aun cuando la responsable no lo invocó expresamente en el acto reclamado, lo cierto es que fue tácitamente aplicado, ya que no obstante que tal determinación no había causado estado, el Titular del Área de Responsabilidades procedió a publicar la "Circular en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios *Relacionados con las mismas*"; que contrariamente a lo señalado por el a quo, la aplicación del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento administrativo no se materializó en un acto posterior a la resolución definitiva, pues es evidente que fue esta última la que la vínculo con la sanción impuesta; que, en todo caso, el acta de notificación del acto reclamado, por sí sola, no tiene relevancia para efectos del juicio de amparo, pues no incide de manera alguna en la aplicación del multicitado precepto legal; que no es óbice que el juzgador haya sostenido que el primer acto de aplicación de dicho numeral lo constituyera la notificación personal de la resolución definitiva dictada en un diverso procedimiento administrativo sancionador, el cual se controvertió mediante el diverso juicio de amparo, seguido ante la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues lo cierto es que en la ejecutoria relativa a dicho asunto, se dejó



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

insubsistente tal resolución, incluyendo su notificación, lo que es un hecho notorio; y que, suponiendo sin conceder, que efectivamente la notificación de la diversa resolución definitiva dictada en el Procedimiento administrativo Sancionador, constituyera el primer acto de aplicación del artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe considerarse que tal diligencia dejó de tener efectos en el mundo jurídico.

Con relación a tales argumentos, se observa también de la mencionada resolución de recurso de revisión, que el Tribunal Colegiado del conocimiento los considero inoperantes porque no desestiman, en modo alguno, lo aseverado por el Juez de Distrito en torno a que la emisión de la resolución definitiva de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas (acto reclamado en ese juicio), no actualiza la hipótesis contenida en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En otras palabras, que la circunstancia de que la diligencia practicada en el diverso procedimiento administrativo, haya quedado insubsistente con motivo del amparo otorgado, no significaba que, por ese solo hecho, se debiera considerar que la resolución reclamada en ese juicio de amparo, es la que actualiza -por primera ocasión- el supuesto normativo que prevé el aludido artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues para ello era necesario que la impetrante demostrara -por ejemplo- porque si el aludido precepto se refiere a la práctica de la notificación de los actos administrativos, no debe considerarse dicha diligencia para la actualización del supuesto normativo que prevé, contrariamente a lo señalado por el a quo.

Señala la quejosa que se desestimaron agravios similares a los que ahora se hacen valer en el sentido de que la premisa en que se sustenta la resolución del juicio de garantías, parte de un acto que actualmente ha quedado sin efectos con motivo de otra ejecutoria de amparo, debido a que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión, derivado del juicio de garantías, dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador, al ordenar su reposición, y que, por tanto, no puede actualizarse la figura de cosa juzgada respecto de actos de autoridad que actualmente son inexistentes.

En las relatadas condiciones, tales planteamientos no pueden ser objeto de nuevo estudio y pronunciamiento por parte de este Tribunal Colegiado en el presente recurso de revisión, al revestir, como se ha dicho, el carácter de cosa juzgada.

Argumenta la parte quejosa recurrente en los agravios **primero a tercero**, que es incorrecto que en la resolución recurrida se haya determinado el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y numeral Primero del Acuerdo delegatorio controvertido, por estimar que el primer acto de aplicación de dichos numerales se dio en los acuerdos de inicio de los procedimientos que se les instauraron y,



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

que por tanto, el juicio de amparo con relación a tales preceptos se debió de promover cuando se tuvo conocimiento de dichos acuerdos, y al no haberse hecho así, se actualizó el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que:

1.- El sobreseimiento decretado se sustenta indebidamente en argumentos relacionados con el fondo del asunto al hacer referencia al contenido de los conceptos de violación que se hicieron valer en contra de esos numerales.

2.- La simple cita de las disposiciones impugnadas en los acuerdos de inicio de procedimiento no conlleva el primer acto de aplicación en su perjuicio, ya que para estimar que una norma causa afectación al gobernado, es necesario que los supuestos jurídicos contenidos en la misma se concreten con todos sus efectos, es decir, hipótesis y consecuencias, por lo que deben producir una afectación actual y real, y no meramente probable, lo que en la especie no acontece porque el acuerdo de inicio de procedimiento no produce afectación alguna en su esfera jurídica, toda vez que únicamente establece la presunción de la comisión de infracciones.

3.- Se inobserva jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se ha establecido que para que proceda el juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de una disposición de observancia general emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es necesario que dicho acto tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que transgreda un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, sus efectos no se destruyan por el dictado de una resolución favorable, lo que en la especie no sucede porque el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador regulado por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

Únicamente informa al gobernado los elementos constitutivos del ilícito que se presume se podría actualizar y concede un plazo de quince días para argumentar y aportar las probanzas que estime necesarias.

En caso de contener vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad, existe la posibilidad de que la resolución del respectivo procedimiento no cause afectación al presunto infractor, por lo que sus efectos son meramente intraprocesales.

4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actos de inicio de procedimiento, como lo es el relativo a infracciones al artículo 50 Bis, de la Ley de Mercado de Valores, constituyen únicamente actos de molestia que no tienen efectos definitivos.

5.- En el acuerdo de inicio no se aplican las consecuencias jurídicas de las normas reclamadas, ya que en el no queda acreditado que las quejas simularen el no queda acreditado que las quejas simularen el cumplimiento de los requisitos o reglas previstas en la cláusula 13 del contrato de obra pública y, por ende, que debían ser sancionadas con multa e inhabilitación para participar en licitaciones de carácter federal, en virtud de que las



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

acusaciones que contiene son meras presunciones, sin que en esos provistos se decida sobre su responsabilidad.

6.- El primer acto de aplicación de las referidas normas reclamadas se da en la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador, ya que es en ese acto en el que se materializan todas las consecuencias y efectos de las hipótesis normativas contenidas en los preceptos reclamados, en virtud de que ahí se tuvo por acreditada plenamente la conducta irregular que se les imputo, y se individualizo la sanción impuesta.

7.- No obsta para considerar lo anterior, el que la aplicación de las disposiciones reclamadas pueda controvertirse también a través del juicio de amparo directo, combatiendo las normas aplicadas durante los procedimientos administrativos sancionadores, toda vez que el juicio de amparo indirecto y el tramitado en vía uninstitucional, tienen requisitos de procedibilidad y efectos protectores distintos, siendo que en la especie se optó por la vía indirecta.

8.- El juicio de amparo indirecto tiene como excepción al principio de definitividad, que la parte quejosa controvierta la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general y, por el contrario, en el juicio de amparo directo el quejoso debe resentir los efectos perjudiciales de la norma hasta en tanto concluya el procedimiento y se interpongan todos los recursos o medios legales de defensa para revocar la determinación correspondiente, toda vez que la norma tildada de inconstitucional no constituye acto reclamado destacado, por lo que es ilegal que el Juez A quo resuelva que, en todo caso, se debió promover juicio de amparo directo contra la resolución administrativa sancionadora, ya que optaron por sujetarse al procedimiento del juicio de amparo indirecto.

9.- Por todo lo anterior, no es dable el considerar que hubieran consentido las referidas normas reclamadas.

En otro orden de ideas, refiere la parte recurrente, que es contrario a derecho el que en la resolución recurrida se haya determinado sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a los quejosos, por considerar que se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo la conclusión de que no existió aplicación expresa o tácita de ese numeral en su perjuicio, en virtud de que ese numeral únicamente prevé la ejecutividad de los actos administrativos, sin que dicho precepto configure un sistema normativo junto con el diverso 27 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Agrega la parte quejosa recurrente, que lo anterior es incorrecto, toda vez que:

I.- No se hace una debida lectura de la causa de pedir.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

II.- El pronunciamiento de la Juez de Distrito relativo a que el artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento administrativo, no establece la imposibilidad o ineficacia de acceder a los medios legales de defensa, implica un pronunciamiento de fondo, lo que no es apto para determinar la actualización manifiesta e indudable de una causal de improcedencia.

III.- De la resolución administrativa reclamada se advierte una clara aplicación del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su perjuicio, ya que si bien dicho numeral no establece la imposibilidad de acceder a medios legales de defensa, si transgrede el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en virtud de que permite que las sanciones que se imponen conforme al artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sean ejecutadas no obstante que no hayan transcurrido los plazos para interponer el medio de defensa legal que corresponda.

Lo anterior implica que, en caso de revocarse la resolución de la autoridad, las cosas no podrán ser restituidas al estado que guardaban, ya que el gobernado debe resentir los efectos negativos del acto, aun y cuando no se ha tenido la oportunidad de obtener una medida provisional en el procedimiento correspondiente y, por ende, dicho precepto reclamado si produce una lesión en los derechos de los particulares, sobre todo si se toma en cuenta que conforme al último párrafo del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la sanción consistente en inhabilitación no puede ser materia de suspensión.

IV.- Atendiendo a la causa de pedir, puede apreciarse que la inconstitucionalidad que se argumenta en la demanda de amparo, se hace derivar de la inmediatez de las sanciones contempladas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Sin embargo, esta norma apreciada en forma aislada no prevé el momento a partir del cual entraran en vigor las sanciones que contempla, por lo que es evidente que en su aplicación debe participar algún otro precepto.

Así, debe entenderse que este precepto legal en cita es de naturaleza sustantiva al establecer las sanciones de multa e inhabilitación, pero para su aplicación debe atenderse a las normas adjetivas o procesales previstas en la Ley Federal de Procedimiento administrativo, y el artículo 9 de este último ordenamiento legal en cita es el que establece el inicio de la vigencia de los actos administrativos, al indicar que el acto administrativo será efectivo y exigible a partir de que surta efectos su notificación, por lo que sostener que este último precepto legal en comento no les fue aplicado, es pretender dotar de un sistema adjetivo de ejecución a una norma sustantiva.

En los recursos de revisión adhesiva señalan:

Refiere la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que por lo que hace a las disposiciones legales de ella reclamadas, son constitucionales, toda vez que se emitieron con estricto apego al procedimiento y facultades establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

que no se causa agravio a las garantías individuales de la parte quejosa y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio.

La **Secretaría de la Función Pública** refiere que en la especie se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo Primero del Acuerdo delegatorio de facultades que de ella se reclama, no irroga agravio alguno en la esfera jurídica de los quejosos, en atención a que se llevó en un acto de supraordinación entre autoridades, con la finalidad de mejorar la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y, por tanto, no transgrede ningún derecho subjetivo de los impetrantes del amparo.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión señala que las disposiciones legales de ella reclamadas no causan afectación alguna al interés jurídico de la parte quejosa, ya que la culminación del proceso legislativo no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos de los quejosos, toda vez que el daño que reclaman se atribuye a un acto de ejecución posterior, el cual no es propio de esa Cámara y es totalmente independiente del ámbito de sus facultades y atribuciones.

Al respecto, argumenta la parte recurrente en el agravio **sexto** que, contrario a lo determinado en la resolución recurrida, en el caso, por lo que hace a la procedencia del juicio de garantías respecto de la mencionada resolución reclamada, si se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consistente en que se controvierte la constitucionalidad de los artículo 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y Primero del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", por lo que no se surte el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Las revisiones adhesivas en síntesis señalan que fue correcto el sobreseimiento decretado

OPINIÓN MINISTERIAL

Una vez analizados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, en lo que a este H. Suprema Corte de



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Justicia de la Nación compete y que es la inconstitucionalidad de los artículos 8 fracción IV y 27 párrafo Primero Fracción II y párrafos Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como el diverso 9 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, esta Representación Social considera que resultan infundados, por las siguientes razones:

Tenemos como antecedentes que el día 12 de noviembre de 2015, Constructora Norberto Odebrecht S.A. de CV. Y Pemex Transformación Industrial celebraron un contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, con número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 en la modalidad de obra a precio unitario, cuyo objeto sería la Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, por lo que con fecha 4 de febrero de 2016 solicito la autorización para formalizar la cesión total de los derechos derivadas del Contrato de Obra pública, misma que se llevó a cabo mediante oficio DGTRI-181-2016, de fecha 17 de junio de 2016.

Por oficio de Investigación UR-DPTI-AQDI-753-2017, de 9 de junio de 2017, el titular de quejas y denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidad de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial hizo del conocimiento del Titular del Área de Responsabilidades que en razón de las investigaciones realizadas en el expediente 2017/PTI/DE109, se desprendía una presunta irregularidad cometida por Gleiber José de Faria, OICIMEX Y CON al advertir elementos que hacían presumir la actualización de la conducta prevista en la fracción IV del artículo 8° de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en haber realizado actos con el objeto de evadir y simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 13 del Contrato de Obra Pública.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Ante tales situaciones la parte quejosa promovió juicio de amparo el cual recurre al ser sobreseído el mismo como se señaló en líneas precedentes

Por lo anterior, se tiene que los preceptos reclamados en cita, establecen:

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

“Artículo 8. Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa o indirecta mente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:

IV.- Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de estos;

“Artículo 27. Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:

Cuando se trate de personas morales:

A).- Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima pre vista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, e Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijaran en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, solo resultara aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.

El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contara a partir de la fecha de su difusión en ese sistema.

Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicaran en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzara la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicara tratándose de transacciones comerciales internacionales.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aun cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.”.

■ez establecido lo anterior, se tiene que, de las transcripciones llevadas a cabo en párrafos previos, el artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se ubica en el capítulo segundo de ese ordenamiento legal, denominado “De las Infracciones”, en esencia contempla uno de los varios supuestos de responsabilidad que establece con relación a contrataciones públicas de carácter federal, y que consiste en que el sujeto, directa o indirectamente, realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de estos.

Asimismo, el numeral 27, fracción II, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la referida Ley, lo que medularmente establece es las sanciones a aplicar a las personas morales por las infracciones que prevén los artículos 8 y 9 de dicho ordenamiento, las cuales consisten en multa e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal; indica que el plazo de la sanción de inhabilitación se computara a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas federales, cuyos actos deben difundirse en “CompraNet”, en cuyo caso dicho plazo se contara a partir de la fecha de su difusión en ese sistema; que cuando se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicaran en forma sucesiva; y que en ningún suspensión de la inhabilitación, aun cuando el



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.

Derivado de los numerales transcrito y en virtud de la exposición de motivos tenemos que:

La corrupción es un fenómeno corrosivo para las naciones y México no es ajeno a sus efectos, por el contrario, se ha convertido en una problemática creciente y extendida, que se encuentra arraigada desde el plano individual hasta el familiar, desde lo comunitario y lo local hasta el ámbito nacional y transnacional. Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

Por lo que al ser una Ley que regula y faculta a los funcionarios para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos, que en la práctica, por la falta de claridad en los mandatos presupuestales, cuyas facultades dispersas entre poderes y los distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción, de actos de tanto de servidores públicos como de particulares, haciendo del sistema de procuración de justicia, existente para el caso, algo completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Es por tanto que los artículos tildados de inconstitucionales al ser una respuesta a acabar con la corrupción y estar debidamente fundados y motivados ya que establece un sistema de composición, atribuciones, herramientas, objetivos, funcionamiento y administración pública.

Por tanto los artículos 18° y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, se emitieron con estricto apego al procedimiento y facultades establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se causa agravio a las garantías individuales ni a los derechos humanos de la parte quejosa.

Ahora bien al respecto del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el cual señala:

Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

El artículo transcrito establece el término por el cual el acto administrativo válido será eficaz y exigible, esto es, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.

Dicho artículo no entraña inconstitucionalidad ya que el artículo 1º Constitucional, señala lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo que al el artículo 9 en mención al determinar sobre la procedencia y término de la notificación no implica violación a derecho alguno a la parte quejosa por lo que no resulta inconstitucional.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Ante las consideraciones vertidas esta Representación Social de la Federación considera que en lo que atañe a la inconstitucionalidad de los artículo 8° y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y se debe Negar el Amparo y Protección de la Justicia, en razón de resultar constitucionales..

En cuanto a los recursos de revisión adhesivos, por las consideraciones señaladas en la presente opinión, son procedentes pero infundados en cuanto a que se apegan al sobreseimiento decretado por el A quo, por lo que se estima innecesario su análisis ya que están encaminados a reforzar las consideraciones de la juez al negar el amparo contra los preceptos reclamados.

Al respecto, resulta aplicable como criterio orientador la tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:

Novena Época

Registro: 201980

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo III, Junio de 1996

Materia(s): Común

Tesis: XI.2o.11 K



AGRAVIOS EN LA REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.

El artículo 83, párrafo final, de la Ley de Amparo, autoriza a la parte que obtuvo sentencia favorable a adherirse al recurso de revisión interpuesto por su contraparte, empero, prevé categóricamente que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, lo que se traduce en que quien se adhiere al recurso no persigue la modificación ni la revocación de la parte dispositiva de la resolución reclamada, sino que se mejoren, amplíen o precisen las motivaciones o consideraciones del fallo recurrido, por considerarlas omisas, erróneas e insuficientes, a efecto de reforzar las razones en que se fundó el fallo que le es favorable; pero sin que tal adhesión pueda alterar las proposiciones, o parte resolutive de la sentencia a revisión; por ende, si el fallo recurrido debe confirmarse en sus términos, es claro que la omisión del estudio de los agravios expuestos en la adhesión, no irroga perjuicio alguno al inconforme, debido a que el fallo que le es favorable ya es inatacable.

Por lo antes expuesto a esa H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido:

PRIMERO.- Teneme por presentada en tiempo y forma con la intervención ministerial que en derecho me corresponde.



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

SEGUNDO.- Por las razones expuestas, en lo que es materia y competencia de la presente instancia, negar el juicio de amparo a la parte quejosa.

TERCERO.- Expedir a esta Representación Social de la Federación copia autorizada de la resolución que se pronuncie en el presente asunto.

ATENTAMENTE
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN/ADSCRITA.


LIC. MA. ANA LILIA MARTINEZ HERNANDEZ.

007458

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2020 MAR 6 PM 10 49

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CONCORDANCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
~~SIN ANEXO~~

Ca 23 fojas

A handwritten signature, possibly "J. L.", is written over the text "Ca 23 fojas".

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3154262

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En **diez de marzo del dos mil veinte**, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los oficios registrados con los números de folio **007444 y 007458**. Conste.

Ciudad de México, **diez de marzo del dos mil veinte**.

Vistos; con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del que la **Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita**, solicita **copia simple** de la resolución dictada el diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, en el amparo en revisión **200/2019** del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de la resolución del veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, emitida en el juicio de amparo 526/2018; de la demanda de amparo, y **designa autorizados** para recibirlas.

Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, **expídanse las copias simples** que se indica, previa toma de razón y recibo que al efecto se da en autos para constancia, autorizando para recibirla a la persona que señala.

Del mismo modo, téngase por recibida la intervención ministerial 14/2020, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante la cual **emite opinión** en el sentido que indica, solicita copia de la resolución que se dicte en este asunto.

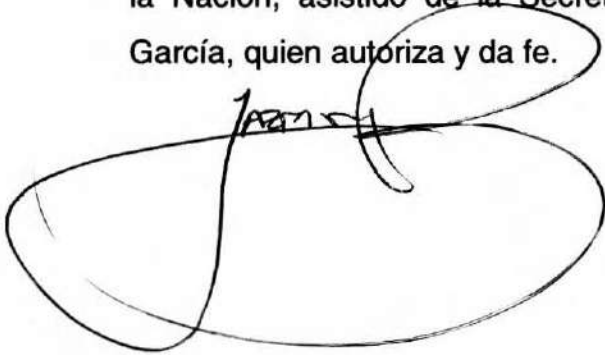
En atención a su contenido, esta Segunda Sala toma conocimiento de sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar y, en relación con la solicitud de copias que realiza, infórmesele que queda expedito su derecho a solicitarlo una vez que se dicte la sentencia que resuelva el recurso en que se actúa.

Devuélvase este toca a la ponencia del **Ministro José Fernando Franco González Salas** para lo que conforme a derecho corresponda.

Notifíquese.

SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Lo acuerda y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**,
Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, asistido de la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla
García, quien autoriza y da fe.



*MPL/jgma**

EN 11 MAR 2020 SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AR 970-2019.pdf
Secuencia: 3156872

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	GABRIELA CAPETILLO MEDINA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	CAMG720110MDFPDB05			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000f3a	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T20:45:30Z / 10/03/2020T14:45:30-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	88 14 1d 0f 40 67 2c 50 cc 2f b8 78 30 01 e9 15 59 ef 65 1a 3b 69 5f 1c f2 82 be 16 62 58 58 35 83 77 20 00 21 d3 63 5d a8 bb e0 47 d4 85 f3 84 94 62 08 e0 31 8e 59 23 78 77 7b 4e 30 2f 77 5f f1 6f 94 c0 c6 0c ff c7 bd df fc b9 49 1f 02 75 c0 b2 4e 44 f6 80 d3 03 91 8d 77 90 bb 3d 22 d7 45 04 8d c9 c0 8d 68 41 6f e3 75 c4 2c e0 89 20 0e 1e 5b 49 ae 24 f0 d7 95 da 08 78 a4 07 97 43 ad eb 78 35 41 3b 2f 1c 86 b4 cc be a0 be a8 1b aa 2c 69 16 d4 a3 dd 5d 82 bd 79 bc 38 79 d7 af 65 24 03 4f 49 24 64 49 a3 da f5 56 f3 17 22 ef 47 03 54 56 69 6b 3d 25 67 d2 cd 1f 29 77 89 a2 c5 f7 6e 07 14 ea e9 dd 63 ee 69 7c 12 bf 1d c9 36 61 42 2a f6 2d 36 51 74 85 b2 52 ae 24 3d 60 78 3f b7 0f 59 20 47 c2 68 69 16 50 33 c3 bd fa 1f d7 5d b0 f7 85 cd f8 44 7b 65 1e 49 27 ea dc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T20:45:31Z / 10/03/2020T14:45:31-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000f3a			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T20:45:30Z / 10/03/2020T14:45:30-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3160819			
	Datos estampillados:	5EBA52F4869082D6A722E551DA0033BB8F1CD12E			



SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN 970/2019.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS TRECE HORAS CON
VEITIDOS MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE,
PRESENTE EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA DE ESTA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE
CONSTITUYE EL C. LUZ JAVIER ESTRADA GRANADOS, EN SU
CARÁCTER DE AUTORIZADO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE ALTO TRIBUNAL, QUIEN SE
IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO
[REDACTED] EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, DOCUMENTO QUE EL SUSCRITO TIENE A LA VISTA
Y QUE EN ESTE MOMENTO SE LE DEVUELVE AL INTERESADO
PARA SU DEBIDO RESGUARDO, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE
DE CONFORMIDAD COPIA SIMPLE DE DIVERSAS CONSTANCIAS
QUE OBRAN EN EL PRESENTE TOCA, EN CUMPLIMIENTO AL
PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON LO QUE
SE DA POR TERMINADA LA DILIGENCIA, FIRMANDO LA
PRESENTE RAZÓN LA PERSONA INDICADA, EN UNIÓN DEL
SUSCRITO ACTUARIO QUE DA FE.

RECIBIÓ: COPIA SIMPLE [REDACTED]

C. LUZ JAVIER ESTRADA GRANADOS,

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL ACTUARIO.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LICENCIADO HUGO ALTAMIRANO GÓMEZ.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ESTRADA
GRANADOS
LUZ JAVIER
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA



INE



SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUA
SECRETARÍA DE CLIMA
SECRETARÍA DE OCEANÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUA
SECRETARÍA DE CLIMA
SECRETARÍA DE OCEANÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA

IDMEX

ESTRADA<GRANADOS<<LUZ<JAVIER<<

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 3159789

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/03/2020T20:33:19Z / 11/03/2020T14:33:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	38 0a 06 b4 9e e9 93 99 62 2e b5 70 8a f7 9f 7b 63 14 b5 f5 fc 08 91 9d 5c a4 6d b1 59 f7 d1 1f b3 08 11 62 d5 d0 84 b7 28 4b 84 ab 61 9c d0 52 2b a3 3f 5a 3f a5 a5 38 ea 15 e2 40 28 e0 75 0d 68 21 df 0b b6 45 e2 66 87 df e3 17 8a 20 9c d9 c9 e2 fc ad 27 e0 51 f4 3c 06 ad 19 12 2b 95 a4 b3 06 52 bc fb 5e a4 0b d8 98 a1 91 9a c3 9c fd c2 05 c2 5c 63 46 d5 ed 08 60 5e 36 6b 16 f0 ee 93 d7 d3 d2 68 e5 ff 38 47 66 67 4a d3 a7 ba 80 1b fa f2 c4 a0 f5 bb 38 0a b9 6a cc a5 dc 66 21 83 07 8f f0 47 aa 23 b4 9e 2a 16 1d c6 88 6f 05 ad 61 82 79 45 bd 6e 86 12 74 8d 02 96 13 ea 74 32 12 90 d1 59 c8 e8 5c 00 2d 08 72 36 4f 27 33 70 1b 5c 65 42 de 21 fc fd 44 11 7e 21 ce 12 f8 cf 7a a0 ec 04 f5 ba ad 9e 1f 01 e2 98 a2 dd b3 bc 99 48 ce e1 29 8e 10 d0 5a 69 62 4d be 3a 58			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/03/2020T20:33:21Z / 11/03/2020T14:33:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/03/2020T20:33:19Z / 11/03/2020T14:33:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3163736			
	Datos estampillados:	0221B8DF19436DD9A70220C109B0257C522C2D4D			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JAZMÍN BONILLA GARCÍA, -

-----**C E R T I F I C A**-----

QUE CONCLUIDA LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA **TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE**, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO, SE FIJÓ LA LISTA EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO CON EL RESULTADO DEL FALLO DICTADO EN ESTE EXPEDIENTE RELATIVO AL **AMPARO EN REVISIÓN 970/2019**, MISMO QUE FUE LISTADO OPORTUNAMENTE Y CON LA ANTICIPACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 184 DEL CITADO ORDENAMIENTO. **DOY FE.**

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

Identificador de proceso de firma: 10250

Firmante	Nombre	JAZMÍN BONILLA GARCÍA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	BOGJ840704MDFNRZ07			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e0000000000000000000000000019c2	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2020T16:40:18Z / 05/08/2020T11:40:18-05:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		6e bd 68 f5 45 46 2d aa b0 ca 35 3a b4 9e 4f 78 2a f9 55 09 c2 fa 44 d0 dc 84 73 0c bf c9 2b 0b 2d 97 f5 1b 53 e7 e5 23 a0 ea 45 0b 1c 21 56 6c f3 28 b9 e7 5b c8 4a 11 ee 3e a6 6f c4 01 6f c3 0b a0 b1 ab e3 ec 37 e5 1b c1 72 4a f8 21 c6 d4 f8 87 79 6e fe 33 d2 66 cf 16 1f 17 20 1b fa 65 0f 2c b8 9b f1 2b a7 d6 f7 17 06 cd 93 c1 68 54 72 30 79 fe e3 b8 b0 c3 a3 dc 2b c0 2a 87 15 38 0b 6d 82 48 67 38 cd ef 35 5e 83 1e 66 ea 21 73 a1 5b f5 29 5c fa ae 81 20 7f 58 2b 07 df b5 91 f3 bd 01 3f d1 88 ea 88 71 2a 29 43 22 e6 f7 fa 87 3b 5d 04 f8 05 3d 02 c1 df c8 91 33 bb fb b8 e7 20 29 aa 3d 3a af b9 b5 2b f4 91 80 ae 73 cd e6 fa a5 d4 9b 9b 85 c6 8d 1d a9 11 03 fc ec 2f c7 1f ba 73 10 27 84 8e c1 d9 39 7a d0 fc 54 3b 7f 52 8c 4f c7 66 8d fa 8d 4b 61 2b 37 48 8e 02			
Validación OSCP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2020T16:40:19Z / 05/08/2020T11:40:19-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OSCP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OSCP	706a6673636a6e0000000000000000000000000019c2			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2020T16:40:18Z / 05/08/2020T11:40:18-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	3257234			
	Datos estampillados	736712DA6472F96BB523A0F0E766FAA8339BE4B4			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE SEGUNDA SALA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE TRECE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE, EN EL AMPARO EN REVISIÓN 970/2019.

EN TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE SE PASÓ ESTE EXPEDIENTE PARA FIRMA DEL ENGROSE.

EN CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE Y POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LAS PARTES.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada**Nombre del documento firmado: 760005.pdf****Secuencia: 3250345**

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	13/08/2020T22:47:41Z / 13/08/2020T17:47:41-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	05 f5 2f 3f 78 a0 19 d2 88 e4 c2 16 3f 00 e6 7e 85 33 5e be c2 98 3f 0d bd 34 50 4b 69 ea 82 db e0 62 59 dd d2 71 f5 fc 13 67 d4 d1 5e 0a 70 0c 51 e6 1d db 6a bd 1b 0a ec 85 0a 66 9a 10 40 09 13 92 9c 98 6f 0d 81 ca a2 ac 79 82 e6 32 d7 0e 4b 49 57 3c e3 d7 24 e5 ec 9f 0a 30 4a 23 11 62 40 05 7c 3d 0f 27 78 94 3e 28 b4 b1 4e 6c 14 b6 a4 00 05 0a ad 6c 8f 60 79 ba 65 3f 21 f8 40 73 29 a2 55 6f f0 81 aa fc c6 3a 97 78 0c 80 29 8d 72 e7 b4 2b 15 1a 83 84 cb 03 26 0b 48 bb 43 7e f1 29 f3 e3 57 8d 88 93 bb f5 bf a3 0f e2 54 c9 de a1 5f 78 5b 07 b0 bd 4a 4c ad 97 a5 2b 64 c4 01 8a da 1b 57 05 64 fe 37 95 50 82 e2 58 1c 43 dd c0 9d cb 16 08 b1 d4 66 60 75 6b 1c f6 dc 48 89 95 73 16 b1 54 90 7a e5 51 ee 15 57 c7 0d 1f 8a 0d 5f e0 58 d5 3c 81 c6 82 c2 12 24 ef 79 ac			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	13/08/2020T22:47:42Z / 13/08/2020T17:47:42-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	13/08/2020T22:47:41Z / 13/08/2020T17:47:41-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3270307			
	Datos estampillados:	54C5FEDF8330F4C841688E33663DAD09AAA8C6D8			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de envío: 11/09/2020 8:42:56

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/SS/C/9241/2020

Fecha de ingreso de acuerdo: 13/08/2020 12:39:05

Fecha de acuerdo: 13/05/2020

Tipo de acuerdo: FALLO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

SE DEJA PARCIALMENTE SIN MATERIA LA REVISIÓN ADHESIVA.

SE RESERVA JURISDICCIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL CONOCIMIENTO.

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 13/05/2020	526/2018 AMPARO INDIRECTO		(49) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Generico150371_-310_984240.pdf
Secuencia: 3294010

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:00Z / 11/09/2020T08:43:00-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	66 b9 0e 94 8e c2 42 87 98 5a e9 f6 ae 94 32 7c a6 78 f0 c3 b2 84 73 b1 4c f9 9b 7a fa 74 bd e6 58 16 07 e9 e2 51 d8 61 ea 76 85 85 4a 47 02 27 94 bc 56 a6 34 6f 17 d5 03 b5 ea 3e b7 b6 68 f2 09 ff e7 3f 47 dd 80 41 bf 37 db 88 a7 91 60 b3 c4 28 87 79 9e 84 7d 3f 6d 00 03 2c c2 d7 8d 34 1d 84 40 8d 21 92 bf d4 5d 1b 21 b2 d3 57 92 36 6e ce 7b 3e cf 33 1e 51 c0 73 11 1a b0 eb 7f 92 a5 8a 59 89 86 c4 29 03 b8 60 a1 e6 55 42 48 3f 8c 6c 99 53 30 a5 d7 8b 02 86 5c 1f 7a 63 a6 ca c4 b9 8d ee 17 c6 f0 f7 0c bd 0e a7 cd 90 7f e4 a0 c6 e0 05 34 58 d7 7e 5d f5 bf 99 9e 96 9e cc ae eb 79 34 ae 6b 30 d6 1e 85 43 14 9f 5a 42 f0 0f 16 22 1c bb 4c f0 34 d3 0e a7 86 af b7 bb 80 ea e5 d1 aa 8a b0 21 5e 34 9b 54 42 48 7a b3 03 e6 b9 ab 40 97 02 5b bf 9a ef 25 e6 69 6e d0 7c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:01Z / 11/09/2020T08:43:01-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:00Z / 11/09/2020T08:43:00-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3321451			
	Datos estampillados:	265491DEDAB22C7E1B5BBEE1BBFC92E40AAE1243			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío: 11/09/2020 8:42:57

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/SS/C/9242/2020

Fecha de ingreso de acuerdo: 13/08/2020 12:39:05

Fecha de acuerdo: 13/05/2020

Tipo de acuerdo: FALLO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

SE DEJA PARCIALMENTE SIN MATERIA LA REVISIÓN ADHESIVA.

SE RESERVA JURISDICCIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL CONOCIMIENTO.

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 13/05/2020	200/2019 AMPARO EN REVISIÓN		(49) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Generico150372_-465_984240.pdf
Secuencia: 3294011

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:07Z / 11/09/2020T08:43:07-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 89 2c a3 f6 ad 0f 25 b3 df ae 5b aa 9a a0 5e 19 64 06 ba 7d 2c 1f d3 9f fe 66 ac f5 6d b6 81 fa 45 84 74 6a 6a ab 38 92 22 a7 49 03 ba 9c 93 08 5e d4 6d b1 31 58 4b 3c 3f d2 93 ad e0 64 c1 af 37 b7 d6 93 da b9 08 f1 0b 0d 92 5d 40 0d 90 82 95 69 96 40 df e8 bb bc 9c 6f 1a aa fc 0b ec cb 1e 4d 2f 08 81 f1 5e f8 de b3 91 a4 e0 1d b9 52 98 27 e8 9c ae 41 05 18 c4 c7 2b 56 2b ac 03 13 b8 a3 a5 4f 72 27 cf 1b 30 c9 47 dc 9c b5 89 b9 dc db 4a bf 00 e1 ce 77 80 02 5f 61 7f e6 b8 b9 d0 8e 95 d5 c2 dc 16 96 fc 14 6a d2 ed d2 cb 7f 31 ce 43 73 3f 6f c3 cd b7 66 ec bb c9 06 36 db 68 b1 f5 0e 37 e9 e8 cd 19 11 a5 f6 d6 84 9c f4 b8 11 5c 56 69 c3 c2 11 8c 5d e9 75 14 8e 84 61 e2 24 8f 1c 95 2e 6a 67 7c 48 96 2b 36 34 f8 40 c8 5e 46 ab 53 a9 9d ff fd e7 6d a1 57 25 f2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:08Z / 11/09/2020T08:43:08-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	11/09/2020T13:43:07Z / 11/09/2020T08:43:07-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3321452			
	Datos estampillados:	0ED10BD949607BDD23AA2583D8636CE4913029F0			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

PRESIDENTE DEL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
PRESENTE.

SEGUNDA SALA

A.R. 970/2019

Of. No. CT-646/2020

Con 19 anexos

En relación con el amparo en revisión 970/2019, interpuesto por GLEIBER JOSE DE FARIA Y OTRAS, remito el amparo en revisión 200/2019, el juicio de amparo indirecto 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres cuadernos), así como quince legajos de pruebas en copia certificada, sin que se requiera acuse de recibo cada vez que este oficio hará las veces del mismo previo sello que se recabe de recepción.

Me da agradecer se sirva ordenar que en auxilio a las labores de este Alto Tribunal se realicen las notificaciones pertinentes con la impresión de la resolución que se obtenga vía MINTERSCJN, adjuntando las copias certificadas o simples de traslado que correspondan. Hecho lo anterior, dé aviso a esta Sala remitiendo las constancias vía MINTERSCJN.

Sin más por el momento y reitero mi consideración.

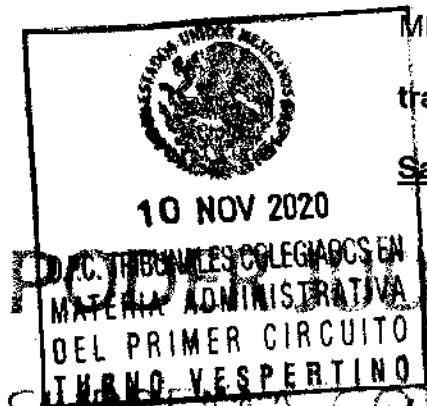
Ciudad de México, diez de noviembre del dos mil veinte.

Atentamente

MELVA IDALIA PRIEGO JIMÉNEZ.

SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA.

JVB



15:30 PM
C/4EXPER
Y 15 LEGASU

7e9f0043afdc2517eec1f225762a552f2a794117b525bed5e7f97736391e3a12

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Evidencia criptográfica.



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 34421/2020

Fecha de envío de la SCJN: 11/09/2020 08:42

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Tipo de acuerdo: FALLO, PARA CONOCIMIENTO

Núm. oficio de la SCJN: MI/SS/C/9242/2020

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO EN REVISIÓN 200/2019

Fecha de recepción del órgano remitente: 17/09/2020 09:26

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 13/05/2020	(49) ORIGINAL	recibí acuerdo en 49 hojas

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion150372.pdf
Secuencia: 3296842

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

[illegible]



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente	DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO		
Fecha de envío a la SCJN:	17/09/2020 9:26:00		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	970/2019	

Ciudad de México, a 21/09/2020 SEGUNDA SALA

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31433-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 46053/2020

Fecha de envío de la
SCJN: 11/09/2020 08:42

Tipo y núm. de exp.
de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 970/2019

Tipo de acuerdo: FALLO, PARA CONOCIMIENTO

Núm. oficio de la
SCJN: MI/SS/C/9241/2020

Tipo y núm. de exp.
del órgano remitente: AMPARO INDIRECTO 526/2018

Fecha de recepción
del órgano remitente: 12/11/2020 17:25

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 13/05/2020	(49) ORIGINAL	SE RECIBIO DOCUMENTO LEGIBLE EN CUARENTA Y NUEVE FOJAS

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion150371.pdf
Secuencia: 3407399

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Juan de Dios García Munguía	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GAMJ741225HDFRNN08			
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000008689	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/11/2020T23:26:02Z / 12/11/2020T17:26:02-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7c f7 3c b5 45 2f 4d d0 ed 90 0e 1f b2 c2 49 7f f6 8a db 3b 0d 09 eb c1 49 71 8a df 4f 56 78 12 84 82 15 22 24 34 62 8c ab a0 44 ae 18 06 04 80 1e 18 f0 82 5d dc 6c 71 be 7d 5e 5a c3 d5 c6 d8 e9 57 3f 57 9c 70 b2 5f 4c a3 1e ae 5a 45 d2 de d4 6f 46 ac 78 7e 74 e3 46 92 3b 31 a9 7a 95 a9 98 6f 03 f2 e7 8c 5f ca 7c 65 44 16 76 34 11 8a 5b b6 fc eb 93 c1 d3 6d 4d 6f fc dd ea 8a ff 73 4d 97 50 67 e3 d5 53 c1 35 57 0a 7f 53 10 a1 78 99 da 99 48 f3 a4 27 95 31 e4 73 de ae 46 16 10 b2 80 2d ea e2 1c a6 c3 7a c5 56 3f 74 c0 54 7c 1e 1f 22 e7 ca a7 cd c6 c0 c0 f0 e3 a0 9c 86 34 d1 43 4d 9d a5 62 b3 b8 ce 60 81 fb 27 2d 6e 0d 7a e3 ac 2b 7f 8e 92 ed 4a d2 88 e5 70 94 32 cc 4c 02 db c6 fe b9 73 8b 1e d1 c9 00 f9 dd 84 14 33 ed 50 ba fa 5b be e8 a2 bc 1c fd 32 57 49 9d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/11/2020T23:26:03Z / 12/11/2020T17:26:03-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000008689			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	12/11/2020T23:26:02Z / 12/11/2020T17:26:02-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3453662			
	Datos estampillados:	D999993D1EF72AC41616EFFF19F17BF354D4E682			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO		
Fecha de envío a la SCJN:	12/11/2020 17:25:00		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	970/2019	

Ciudad de México, a 17/11/2020 SEGUNDA SALA

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 41892-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JAZMÍN BONILLA GARCÍA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BOGJ840704MDFNZRZ07			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000019c2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/11/2020T23:19:57Z / 17/11/2020T17:19:57-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5c 34 9b 22 44 ad d2 ff c8 18 49 1d cc bf 1a bb bb 0e 8c eb bf b2 8b 2b 8a 9f 8f 9d 7d 3e 62 8f c7 9b 21 0d 3c 44 ad 0b 52 c3 2f 8f fe cd 78 85 b3 a6 03 af d7 04 7d 93 02 33 61 bd 0c 47 8b df 83 33 04 2e a0 3b bf ec e8 55 19 4a aa 08 76 b6 6b 1f e6 5d c0 28 9b 3c cf 5f cb c2 f9 7f 46 3f 92 bc 6c b1 3c ce fd 06 79 9f 3c 03 b6 a0 3b fd 15 bc db 2f 1d 85 cd 7c 78 66 cb df 2a d5 3e f5 16 e4 7e 5c 58 a7 90 a9 28 c5 7a d2 ea 12 30 d7 23 d2 39 d2 8a d2 17 55 c6 7d 28 cd ea fc 23 9c 5c c7 24 9c a5 6c 79 17 c0 c6 d7 59 54 65 8c d3 d5 f1 d7 df 6f 98 90 9c 80 02 94 17 c8 53 4e 8c 56 75 1c 7d 2f 69 2b a4 0f 33 dc 5a bb a8 a8 dd 94 49 d9 bd 9c 68 c2 af 40 bd 72 e0 6d 33 38 8f 33 b1 c3 b5 7e 81 ce 10 c3 fa 90 72 fb 56 06 48 00 d7 5d 80 b9 dc e4 51 fc e8 fb 09 d7 87 ca 16			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/11/2020T23:19:58Z / 17/11/2020T17:19:58-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000019c2			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/11/2020T23:19:57Z / 17/11/2020T17:19:57-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	3460288			
	Datos estampillados:	275CD9B2565C17C1E4697AC182671570BFE80502			



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Acuse de envío y anexos relacionados con el folio electrónico 12187/2021 del
MINTER-SCJN

Folio electrónico: 12187/2021

Fecha de envío a la SCJN: 09/03/2021 18:57

Tipo y núm. de exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019

Fecha de acuerdo de requerimiento u oficio del órgano jurisdiccional: 02/12/2020

Número de oficio: 5248/2020

Síntesis del acuerdo u oficio: SE REMITEN CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN

Detalle de requerimiento y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio(en su caso documentos)	Tipo de clasificación o documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 02/12/2020	CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN	(3) ORIGINAL	SE REMITEN CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN
DOCUMENTO 1	CONSTANCIAS DE NOTIFICACION	(15) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN
DOCUMENTO 2	NOTIFICACION PORSONAL	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	NOTIFICACIÓN PERSONAL

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Secuencia: 3588971

bf122048ce05995dcb76c6ed27e0daca61681ed2c74f7f6bfba01d1dedb75a4

Evidencia Criptográfica.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019)

En el expediente/toca, **R.A.-200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión R.A.-200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejosa.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.



fc03a6eefcfeb00bc15d3f8b06db9197213bb9bb74437c6f63f2d4c229ae74c

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil y veinty tres.

LA. C. ACTUARIA.

LIC. Patricia C. Morales *[Signature]*



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

fc03a6ee1cfcb00bc15d3f8b06db9197213bb9bb74437c6f63f24d4c229ae74

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

fc03a6ee1cfcb00bc15d3f8b06db9197213bb9bb74437c6f63f24d4c229ae74



**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO-SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019).

En el expediente/toca, **R.A. 200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión R.A. 200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.

ESTADO

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
2020 DIC -4 AM 11:49

SECRETARÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN



988120-672000-7

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

IC. PATRICIA L. MORALES PARRA



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019).

En el expediente/toca, **R.A. 200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión, R.A. 200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.



988120 672000 4

3ba4b3741359eff7bc5da1170b112f4dbcb29989b95e25dcf6cf6c73cea455da

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

ic. Patricia C. Morales *Penain*



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)
5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)
5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)
5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019)

En el expediente/toca, **R.A. 200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión, R.A. - 200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

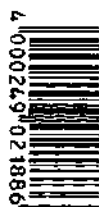
Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.



Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

LIC. Patricia C. Morales Ponce



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019).

En el expediente/toca **R.A. 200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión R.A. 200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.

05 MAR. 2021

[Firma manuscrita]

RECIBIDO



988120 672000 7

3ba4b3741359ef7bc5da1170b112f4dbc29989b95e25dcf6cf6c73cea455da

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

Lic. Marcela N Alcántara C



SECRETARÍA DE ACUERDOS
PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
R 5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019).

En el expediente/toca **R.A.-200/2019**, el Magistrado Presidente de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del recurso de revisión R.A.-200/2019, el juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia certificada.

Agréguese a este toca el oficio de cuenta y las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad, este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.

2020 DIC -4 AM 11:21

ESTADO

FUNCTION
PÚBLICA

PEML



9881206720007


3ba4b3741359eef7bc5da1170b112f4dbc29989b95e25dcf6c73cea455da

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.


LIC. Patricia C. Morales Ponce



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019).

En el expediente/toca, **R.A. 200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión R.A.- 200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguese a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.



Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

Lic. Patricia C. Moraleda *Pennac*



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAB-1

**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria."

**Referencia: 526/2018 y sus acumulados
569/2018 y 571/2018**

5241/2020 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5242/2020 CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5243/2020 SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5244/2020 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR
CONDUCTO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5245/2020 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS EN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, EMPRESA
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

5246/2020 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AUTORIDAD
RESPONSABLE)

5247/2020 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)

5248/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
(AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)
(REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 97/2019)

En el expediente/toca **R.A.-200/2019**, el Magistrado Presidente
de este Tribunal dictó un acuerdo que a la letra dice:

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil
veinte.

Visto el oficio de cuenta, firmado por la Subsecretaria
de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante el cual remite los autos del
recurso de revisión R.A.-200/2019, el juicio de amparo
526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (en tres
cuadernos) así como quince legajos de pruebas en copia
certificada.

Agréguense a este toca el oficio de cuenta y las
constancias originales que obran en el cuaderno de
antecedentes que se formó con motivo de la remisión del
recurso de revisión.

Hágase del conocimiento de las partes la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el amparo en revisión 97/2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad,
este Tribunal se avoca al conocimiento del recurso de
revisión interpuesto por las quejas.

Por otra parte, una vez que obren agregadas las
constancias de notificación de este acuerdo, remítanse vía
MINTERSCJN, asimismo, devuélvanse los autos a la
ponencia del Magistrado Fernando Andrés Ortiz Cruz, para
los efectos legales procedentes.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y
mediante oficio a las autoridades señaladas como
responsables y al Juez de Distrito del conocimiento.



988120 672000 7


3ba4b3741359eff7bc5da1170b112f4dbc29989b95e25dcf6c73cea455da

Así lo proveyó José Luis Cruz Álvarez, Magistrado Presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante Patricia Hermelinda Ortega Chávez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.

LA. C. ACTUARIA.

LIC. PATRICIA C.  Martínez Ponce



**DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO**

3ba4b3741359ef7bc5da1170b112f4dbc29989b95e25dcf648f6c73cea455da

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

3ba4b3741359ef7bc5da1170b112f4dbc29989b95e25dcf648f6c73cea455da



NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con veinte minutos del día tres de diciembre de dos mil veinte, la suscrita licenciada Noemí Ramírez Mendoza, Actuaría Judicial adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, manifiesto que en cumplimiento a las formalidades que prevé el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, me encuentro constituida en el domicilio ubicado en:

en busca de la parte

quejosa y reconviente Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima por conducto de quien legalmente y/o en su defecto a sus autorizados para oír y recibir notificaciones y, las represente.
encontrándose presente

Andrés Hernández Carlsen

en su carácter de autorizado

quien se identifica con

Credencial para votar con número IJUEX
[redacted] expedida por el Instituto
Nacional Electoral

que doy fe de tener a la vista y que en este acto devuelvo a su titular, a quien procedí a notificar personalmente la determinación judicial dictada el dos de diciembre de dos mil veinte

en el expediente R.A 200/2019 del índice de este Tribunal, quien la oyó y dijo quedar enterado de su contenido, que al efecto recibe una copia autorizada y firma para constancia en unión de la suscrita Actuaría. DOY FE.----

Recibo Acuerdo de 2 de diciembre
2020 de copia autorizada
y copia autorizada de la
resolución de la SCJN
Avonil Hernández Calles B/14

[Signature]
LIC. NOEMÍ RAMÍREZ MENDOZA

15edcbad91f6059fc6bb5cc8df4ae38a8cc12547dbf60a863f62992f7264468

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

15edcbad91f6059fc6bb5cc8df4ae38a8cc12547dbf60a863f62992f7264468



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Requerimientos de diversos órganos PJF a la SCJN

Remitente (órgano requirente):	DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO		
Destinatario (órgano requerido):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN		
Fecha de envío a la SCJN:	09/03/2021 18:57:44		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	97/2019	
Tipo de recepción:	CONFORME		
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano jurisdiccional:	02/12/2020		
Síntesis del acuerdo del órgano jurisdiccional:	SE REMITEN CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN		

Detalle de requerimiento y en su caso documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO U OFICIO	AMPARO EN REVISIÓN 97/2019	CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN	(3) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
CONSTANCIA 1	AMPARO EN REVISIÓN 97/2019	CONSTANCIAS DE NOTIFICACION	(15) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 14 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
CONSTANCIA 2	AMPARO EN REVISIÓN 97/2019	NOTIFICACION PORSONAL	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

3d496a47b5518d58d5b6e2ddd02d425c050b422b07a0a25aa96eb866dbb96eb8

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]

Ciudad de México, **once de marzo del dos mil veintiuno.**

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en proveído de **veintiocho de enero del dos mil veinte**, la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García -----

----- **C E R T I F I C A:** -----
que en esta fecha, para la adecuada integración del expediente, se agrega la promoción con el número de folio **11189-MINTER** del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito a través de la que **acusa recibo** del amparo en revisión **200/2019**, el juicio de amparo **526/2018** y sus acumulados **569/2018 y 571/2018** en tres cuadernos así como quince legajos de pruebas en copia certificada y **remite las constancias de notificación** realizadas a la partes de **la resolución** dictada en el expediente señalado al rubro. **Doy fe.**

Identificador de proceso de firma: 45166

[illegible]

**SEGUNDA SALA
AMPARO EN REVISIÓN
970/2019**

La suscrita Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Mendoza Polanco, en estricto acatamiento a lo instruido en proveído de **veintiocho de enero del dos mil veinte** hace constar que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado y concluido -----

-----**CERTIFICA**-----
que se cierra en **trescientas catorce** fojas útiles debidamente foliadas, selladas, rubricadas y cotejadas para ser remitido al archivo, haciéndose constar que **al contar con cuadernillo auxiliar, éste debe ser destruido** en términos del artículo 23 del Acuerdo General 8/2019 relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Doy fe.

Ciudad de México, diecisiete de junio del dos mil veintiuno.

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

MPL/Jfcv*

[illegible]